

ANÁLISIS

investigaciones

**FACTORES DETERMINANTES
PARA UN DESARROLLO INTEGRAL,
SUSTENTABLE Y DEMOCRÁTICO**



NOVIEMBRE 2023

Impulsar el desarrollo democrático
Carlos Toranzo Roca

Bolivia 2023: modelos de
desarrollo en la práctica
Roger Cortez Hurtado

Repensando el desarrollo
desde conceptos básicos
J. Enrique Velazco Reckling

Desarrollo económico integral,
sustentable y democrático:
Una perspectiva desde el liberalismo
y el capitalismo popular
Jaime Dunn De Avila

Franklin Pareja Aliaga, Editor



ANALISIS 
investigaciones

ANALISIS

investigaciones



Factores determinantes para un desarrollo integral, sustentable y democrático



Revista Análisis e Investigaciones N° 17

Director Fundación Hanns Seidel

Victor Hagemann

Director Carrera Ciencia Política y Gestión Pública - UMSA

Gualberto Torrico

Editor de la revista

Franklin Pareja

Coordinadora general

Danea Vacaflor

Consejo Editorial

PhD Ariel Benavides Gisbert

PhD Andrés Santana Leitner

PhD Karina Medinaceli Diaz

PhD Gustavo Camacho Perez

PhD Marco Antonio Saavedra Mogro

PhD Boris Arias López

Diseño de tapa:

3K kamaleon Impresión Gráfica

Diagramación e impresión:

Plural editores

Depósito Legal:

4-3-326-2022 P.O.

La Paz - Bolivia, 2023

Esta publicación se distribuye sin fines de lucro, en el marco de la cooperación internacional de la Hanns Seidel Stiftung con la UMSA.

Los artículos que se publican a continuación son de exclusiva responsabilidad de los autores y no expresan necesariamente el pensamiento de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la UMSA y de la Hanns Seidel Stiftung.

Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido con la inclusión de las fuentes, siempre y cuando su utilización sea sin fines de lucro.

Índice

Presentación	7
Introducción <i>Franklin Pareja</i>	16
Impulsar el desarrollo democrático <i>Carlos Toranzo Roca</i>	17
Bolivia 2023: modelos de desarrollo en la práctica <i>Roger Cortez Hurtado</i>	49
Repensando el desarrollo desde conceptos básicos <i>J. Enrique Velazco Reckling</i>	83
Desarrollo económico integral, sustentable y democrático: Una perspectiva desde el liberalismo y el capitalismo popular <i>Jaime Dunn de Avila</i>	145

Presentación

Es un gran honor introducir el decimoséptimo ejemplar de la revista académica “Análisis e Investigaciones”, un logro derivado de la colaboración entre la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés y la Hanns-Seidel-Stiftung en Bolivia, una fundación política alemana. Este trabajo editorial es resultado de una fructífera colaboración de larga data entre ambas instituciones, que comparten el propósito de contribuir al debate a través de documentos y eventos de corte académico científico.

Para esta edición, se ha preparado un número con el título: “Factores determinantes para un desarrollo integral, sustentable y democrático”. Tenemos el agrado de contar con los siguientes expertos distinguidos: El reconocido magister en Economía Carlos Toranzo Roca, investigador y reconocido autor de varios libros; el doctor Enrique Velazco Reckling, investigador, autor de libros y Fundador y Director de la Fundación INASET; Roger Cortez Hurtado, investigador, docente universitario y analista; y el magister en administración de empresas Jaime Dunn, exprefecto interino del Departamento de La Paz, escritor, columnista y analista financiero. Todos ellos son expertos con gran trayectoria, renovadas ideas y propuestas aplicables a la realidad.

En esta versión de la Revista que cuenta con cuatro artículos de análisis, se emprende una perspicaz revisión de la trayectoria

histórica del desarrollo en Bolivia. Se enfoca en la intersección de factores determinantes y experiencias propias relatadas por uno de los autores, revelando las piezas fundamentales para la consecución de un desarrollo económico integral y sostenible. Estos elementos primordiales, abordados con una perspectiva basada en las contribuciones de la Escuela Austriaca de Economía, adquieren singular relevancia en el discernimiento de crecimiento inclusivo, sostenibilidad medioambiental y participación democrática en la toma de decisiones, persiguiendo la consolidación de una sociedad próspera y equitativa.

Según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que valora factores como el ingreso per cápita, la esperanza de vida y la educación, Bolivia actualmente ocupa el 118 de 191 plazas. Al nivel mundial no parece tan negativo. Sin embargo, siempre hay que compararse con sus vecinos. En Sudamérica eso significa la penúltima plaza, apenas mejor que Venezuela (plazo 120). Ante este contexto, es necesario entender que los factores determinantes para el desarrollo integral, sustentable y democrático en países como Bolivia son varios. En primer lugar, es esencial fomentar la diversificación de la economía, reduciendo la dependencia de sectores extractivos y promoviendo una mayor productividad y creatividad en otros ámbitos económicos. Este enfoque se debe acompañar con una inversión significativa en educación, salud e infraestructura para empoderar a la población y reducir las desigualdades. La sostenibilidad medioambiental, con la transición hacia fuentes de energía limpias y la preservación de los recursos naturales, constituye una pieza clave. Además, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la participación ciudadana son fundamentales para garantizar una gobernanza efectiva y una distribución equitativa de los beneficios del desarrollo.

Como Fundación política de la República Federal de Alemania, extendemos nuestro compromiso y apoyo a Bolivia en su búsqueda de un desarrollo integral, sustentable y democrático desde hace más de 35 años. Valoramos los avances logrados en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza, a su vez también compartimos la visión de que un enfoque holístico es esencial para el futuro del país. A medida que miramos hacia el futuro, es imperativo que dejemos

atrás viejas narrativas y prejuicios que han limitado el avance del país. Bolivia tiene la oportunidad de redefinir su historia y avanzar hacia un camino de desarrollo que respete sus raíces culturales, pero que también se oriente hacia una visión más inclusiva y sostenible. Juntos, trabajaremos para construir un camino hacia un desarrollo que enriquezca la calidad de vida y promueva una sociedad inclusiva y equitativa en Bolivia.

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por la maravillosa acogida que nuestra revista ha recibido del público en diversos ámbitos donde se ha difundido. También queremos agradecer a todas las personas e instituciones que han sido parte de este emocionante desafío, el cual nos ha brindado una gran satisfacción al contribuir científicamente al debate y la generación de nuevos conocimientos a través de análisis rigurosos.

Al igual que en cada número de nuestra revista, esperamos que este tema en particular sea del agrado del lector, enriquezca su comprensión sobre este tema y aporte a un diálogo comprendido en Bolivia.

Victor Hagemann

Representante Bolivia / Hanns Seidel Stiftung

Introducción

Eiertamente, un debate ineludible desde la academia es el relacionado al desarrollo y todos los desafíos que conllevan su construcción. Bolivia está catalogada como uno de los Estados más pobres de la región (Latinoamérica), sus indicadores de desarrollo son muy exiguos y nada alentadores a la hora de verificar la posición que ocupa en el *ranking* de prestaciones en salud, calidad de la educación, nivel de transparencia, tasa de formalidad del empleo y estabilidad laboral, por citar algunos.

Sin embargo, dado que los bolivianos escuchamos recurrentemente, y con mucho entusiasmo, que hemos alcanzado grandes logros en cuanto a desarrollo, particularmente en los últimos años, es necesario indagar un poco más para plantearnos con cierta objetividad y visión crítica cuáles podrían ser no solamente las razones de nuestro estado de situación actual, sino los avances que podríamos lograr en términos de aprovechar mejor nuestras potencialidades y oportunidades.

El crecimiento económico y el desarrollo son dos conceptos relacionados pero distintos en el ámbito de la economía. El crecimiento económico se refiere al aumento en la producción de bienes y servicios de un país, medido generalmente a través del producto interno bruto (PIB). Por otro lado, el desarrollo implica una mejora en la calidad de vida de la población, incluyendo aspectos como la educación, la salud, la igualdad de género y el acceso a servicios básicos.

Es importante destacar que el crecimiento económico no siempre conduce automáticamente al desarrollo. Un país puede experimentar un crecimiento económico significativo, pero si este crecimiento no se traduce en mejoras sustanciales en la calidad de vida de la población, no se puede considerar como un desarrollo integral. Por eso, para lograr que un país no sólo crezca económicamente, sino que también alcance un desarrollo integral, sostenible y democrático, existen algunos aspectos clave a considerar:

Institucionalidad y buena gobernanza: Un entorno político estable, instituciones sólidas y una buena gobernanza son fundamentales para garantizar un genuino desarrollo, sostenible y democrático. La independencia de poderes (órganos, en la actualidad), la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos y libertades son aspectos clave para contar, en principio, con los fundamentos estructurales básicos que permitan a la ciudadanía transitar en un clima de paz, estabilidad y seguridad en todos los sentidos.

Inversión en capital humano: Los países que han trabajado arduamente en este acápite han logrado resultados extraordinarios en poco tiempo (30 años en promedio), luego de décadas de postración y aparente subdesarrollo crónico. No es magia, tampoco romanticismo, el desarrollo requiere una determinación (voluntad política) clara y decidida en el diseño de políticas públicas que apunten a contar con un capital humano altamente capacitado y educado, con estándares elevados de productividad y competitividad. Por tanto, como es natural, es fundamental e ineludible invertir en educación de calidad, programas de capacitación y acceso a servicios de salud, para garantizar el desarrollo de habilidades y capacidades de la población.

Participación ciudadana: Mucho se habla de inclusión, sin embargo, en diversas circunstancias se confunde este concepto con visibilización. Ser visible no significa estar incluido. Más mujeres, campesinos, indígenas o jóvenes en la vida orgánica de las instituciones no siempre significa que estén incluidos; en realidad, son visibles, pero no necesariamente están incluidos. Entonces, ¿qué es estar incluido? Pues la diferencia radica en la cuota de poder de la que disponen todos los actores a la hora de tomar decisiones. Si

las decisiones están centralizadas, la inclusión es una fachada meramente estética; empero, si los agentes incluidos también toman decisiones y sus voces son escuchadas, recién se puede afirmar que la concepción de inclusión está presente. La participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones es esencial para lograr un desarrollo democrático. Promover la participación ciudadana, el diálogo y la inclusión de diferentes perspectivas en la elaboración de políticas públicas contribuye a un desarrollo más integral y sostenible.

Sostenibilidad ambiental: Indudablemente, si no existe conciencia para preservar el medio ambiente, ningún modelo de desarrollo será viable y sostenible en el tiempo. El desarrollo debe ser compatible con la preservación del medio ambiente. Es necesario adoptar prácticas sostenibles en la producción y el consumo, promover energías renovables y proteger los recursos naturales para garantizar un desarrollo a largo plazo, lo contrario es una condena para los pueblos, que satisfacen sus necesidades en el corto plazo a costa de la depredación conducente a la ruina.

Por otra parte, es imperativo identificar las principales barreras existentes para lograr un desarrollo integral, sostenible y democrático en un país. Al respecto, veamos algunos de los factores críticos más graves que podemos mencionar:

Deficiente educación: La falta de acceso a una educación de calidad limita, en gran medida, las oportunidades para el desarrollo de un país. En definitiva, la falta de una educación adecuada constituye la principal barrera para el desarrollo.

Corrupción: La corrupción debilita las instituciones y socava la confianza ciudadana. La falta de transparencia y rendición de cuentas dificulta el logro de un desarrollo sostenible y democrático.

Desigualdad: La desigualdad económica y social obstaculiza el desarrollo integral de un país. La falta de acceso equitativo a oportunidades limita las posibilidades de progreso para amplios sectores de la población.

Inestabilidad social: La inestabilidad social y los conflictos internos, ya sean políticos, sociales, económicos o étnicos, pueden socavar el

desarrollo de un país. La inestabilidad social dificulta la implementación de políticas efectivas y reduce el interés de potenciales inversores.

Dependencia económica: La dependencia excesiva de un sector o de un tipo de recurso constituye un modelo monoprodutor extractivista arcaico, propio de las economías de principios del siglo XX. Un entorno tan rudimentario limita el potencial de desarrollo de un país. Por eso, diversificar la economía y promover la innovación son factores clave para superar esta barrera.

Como se puede apreciar, el debate acerca de los factores determinantes para el desarrollo es amplio, complejo, multifactorial, multinivel y multidisciplinario; además, es ineludible para la academia, considerando que desde hace un tiempo, en términos de crecimiento económico, el país ha logrado altos niveles de desempeño y baja tasa de inflación, sin embargo, la pregunta obligada es: ¿cómo andamos en desarrollo? Y es que lograr un desarrollo integral, sostenible y democrático implica abordar múltiples aspectos, incluyendo la inversión en capital humano, la equidad social, la sostenibilidad ambiental, las instituciones sólidas, la participación ciudadana y superar barreras como la corrupción, la desigualdad y los conflictos internos.

Para abordar tan compleja temática, en esta oportunidad, cuatro destacados académicos, con dilatada trayectoria en el mundo de la investigación y amplia experticia en temas de desarrollo, nos plantearán sus visiones desde perspectivas distintas y sólidamente desarrolladas.

El economista Carlos Toranzo realiza una amplia explicación de los factores socioculturales y sociopolíticos del país para asociar las debilidades estructurales de un sistema de baja institucionalidad como vector de los problemas vinculados al desarrollo. Para Toranzo, la debilidad de una democracia con instituciones endebles repercute, medularmente, en la incapacidad de poner en funcionamiento el carácter sistémico de las políticas orientadas al desarrollo. A manera de corolario, nos propone un desafiante ingreso al mundo de lo digital y la inteligencia artificial, como medios efectivos insertos en la educación y en todos los ámbitos. Asimismo, sugiere el tema del cuidado del medio ambiente y la incorporación de las mujeres como factores clave del desarrollo.

El investigador Enrique Velazco Reckling aborda el tema del empleo como base central de su análisis, en este sentido, a través de una generosa cantidad de datos nos describe el panorama a detalle, para recalcar en la asociación empleo-desarrollo. Concluye señalando que “la ruta crítica para construir la institucional ‘pro-producción con empleo digno’ como la base conceptual del deseado desarrollo integral, sustentable y democrático requiere, como condición necesaria, desmontar los cimientos estructurales del extractivismo y abandonar las bases conceptuales del neoliberalismo”.

Roger Cortez nos hace una entrega basada en un profundo conocimiento práctico e investigativo acerca de los modelos de desarrollo en el país y sus características desde una visión crítica. Asimismo, resalta la importancia del I+D y los tipos de experiencias implementados en diferentes sectores. Sin ambages ni concesiones, Cortez identifica las grandes y dramáticas prácticas que forman parte de nuestro arcaico y nada amigable modelo de explotación, carente de los más mínimos estándares de sostenibilidad, situando a nuestro país entre los más nocivos en sus formas y efectos medioambientales. En síntesis, Cortez hace un detallado punteo de observaciones y sugerencias que dan para todo un tratado de desarrollo si se busca ampliar cada uno de los temas abordados, un trabajo de esta naturaleza es simplemente un aporte valioso a todos los interesados en una visión panorámica de la forma de desempeño de los últimos años, que concluye en que se hizo cosas importantes en el plano social, no obstante, se pudo hacer mucho más y, sobre todo, de manera sostenible.

Finalmente, el financista Jaime Dunn nos brinda una propuesta innovadora desde una visión liberal capaz de fusionarse con las complejas dinámicas locales. Con un desarrollo escolástico y muy pulcro, Dunn aborda la idea de un capitalismo popular desde una perspectiva liberal sólidamente fundamentada y desprendida de ideas altamente ideologizadas, o extremadamente radicales. Una verdadera propuesta de carácter institucionalista de matriz liberal.

En conclusión, estamos seguros de que esta nueva entrega será del agrado total de todos los lectores de la revista. El tema seleccionado

es probablemente uno de los más pertinentes para el debate actual, por tanto, nos sentimos profundamente satisfechos de realizar un gran aporte a la comunidad científica y universitaria y, una vez más, con la calidad y excelencia de siempre.

Franklin Pareja
EDITOR

Impulsar el desarrollo democrático

*Carlos Toranzo Roca*¹

Resumen

El ensayo trata de establecer los factores determinantes para un desarrollo integral, democrático y sustentable. Para tal efecto, a partir de la descripción analítica, ubica los problemas económicos y sociales y pone atención en la existencia de una democracia débil, desprovista de instituciones, e identifica las trabas de la cultura política. En cada caso da pistas de cómo solucionar esos problemas. El corolario propone jerarquizar algunas temáticas para avanzar hacia un desarrollo integral y democrático.

¹ Carlos Toranzo Roca es economista por la UNAM y también tiene una Maestría en Economía por la misma universidad. Es exprofesor de la Universidad de Chile, de la Católica de Chile, de la UNAM y de la UAM-Xochimilco de México; también profesor visitante en Saint Antony's College, The Latin American Centre, en Oxford, Inglaterra. Fue investigador asociado del IPPG Program, London School of Economics, y de la Universidad de Manchester. Fue investigador asociado de la Universidad de Manchester. Fue director por 26 años de las áreas económica y política de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Bolivia. Es autor de varios libros.

1. Introducción

Para pensar en los factores determinantes para un desarrollo integral, sustentable y democrático, que es el reto que nos proponen los editores de la revista, es necesario mirar hacia el futuro desde una perspectiva estratégica y no quedar en las reflexiones de la coyuntura; empero, mirar hacia adelante no implica hacer dibujo libre ni razonar en abstracto, antes, bien, requiere conocer de manera concreta las ventajas y desventajas que posee el país, ubicar los obstáculos que no nos han permitido alcanzar el desarrollo. Todo eso implica mirar la historia para recuperar esos datos, pero no hacerlo con pesimismo ni acudiendo a la lógica del lamento boliviano de la cual somos seguidores, simplemente se trata de describir nuestra realidad. La descripción tampoco debe pecar de optimismo, pero debe marcar una mirada de futuro; es necesario construir un relato de lo viable, de aquello que es posible alcanzar valorando los activos que poseemos sin hundirnos solamente en las desventajas que nos han conducido a estar muy atrasados. Claro que otro desarrollo es posible (Wanderley, 2011), pero no se podrá alcanzar repitiendo lo que hicimos en el pasado; mirar otros horizontes de progreso es posible liberándonos de muchos prejuicios que son ataduras culturales que no nos permiten mirar la realidad con libertad. Esto implica tener otra gnoseología, no estar atados a la repetición de eso que nos condujo al fracaso; en cierta medida, significa utilizar la capacidad de la descripción, es decir, retratar lo que se ve, sin distorsiones por prejuicios e ideologías.

2. Los problemas de la economía

El patrón de desarrollo (Toranzo, 2017) es uno de los temas nodales para la reflexión del futuro (Valenzuela, 1990). En Bolivia ese patrón ha sido siempre primario exportador, basado en la explotación de materias primas; fue así desde la Colonia, pues en esos tiempos vivíamos de la explotación de la plata, años en los cuales Potosí tenía una escala productiva de alcance mundial que permitió la bonanza

del Imperio español. Ese patrón de desarrollo nos ha marcado con la huella del extractivismo.

Nuestra llegada a la República no cambió la economía, pues, continuamos con la explotación de materias primas, con la explotación y exportación de mineral de plata hasta el final del siglo XIX. El inicio del siglo XX vino de la mano del estaño, con la metáfora de La Salvadora² y la gran producción de los barones del estaño, Patiño, Aramayo y Hochschild; pero tampoco dejamos el extractivismo, antes bien, continuamos en su senda, sólo que bajo el manto de la República. La Revolución de 1952 y la nacionalización de las minas echaron a los barones del estaño, la propiedad de las minas pasó al Estado, pero no se modificó el patrón de desarrollo primario exportador, pues seguimos exportando estaño, base de la economía nacional en los tiempos revolucionarios. La crisis de la minería, por la baja de la cotización del estaño y los altos costos de su producción, se produjo por los años cercanos a 1985. A pesar de la liberalización de la economía comandada por Víctor Paz Estenssoro y el Decreto 21060,³ que abría las puertas al neoliberalismo, a pesar de los despidos en la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), llamados “relocalización”, Bolivia siguió viviendo del extractivismo. En los años 70 del siglo XX, a los minerales se le sumó una pequeña producción de petróleo. Al iniciar el siglo XXI, muy cerca del advenimiento de Evo Morales al poder, Bolivia comenzó a vivir la era del gas, de ese que se pudo producir gracias a los contratos de capitalización de las empresas realizados durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y otros gobiernos neoliberales. El *boom* del gas duró poco, sólo hasta 2014, de ahí en adelante vino su declive, el que vivimos con intensidad en este 2023. Es decir, continuamos en el siglo XXI en la ruta del patrón de desarrollo primario exportador. Frente al agotamiento del gas, las respuestas no vienen por la ruta del alejamiento del extractivismo, sino que se asientan en la reincidencia

2 Me refiero a la fortuna de Simón I. Patiño al descubrir, en 1900, una gran veta de estaño en la mina La Salvadora de Llallagua.

3 El DS 20160 fue aprobado el 29 de agosto de 1985, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, con este comenzó de nuevo la liberalización de la economía boliviana.

en él, ahora pensando en el sueño de la explotación del litio. Colonia, República, Estado revolucionario de 1952, neoliberalismo, Estado Plurinacional, es decir, más de cinco centurias, seguimos dependiendo del patrón primario exportador. Estos siglos han creado un prejuicio social en los bolivianos: el desarrollo sólo es posible explotando materias primas y desarrollando el extractivismo en la economía.

Muchos hablan de la maldición de los recursos naturales, pero en Bolivia sucede todo lo contrario, hay una cultura que cree en la bendición de la explotación de ellos, sin reparar en que, por vivir y pervivir dentro del patrón de desarrollo primario exportador, no hemos logrado el desarrollo, sino que hemos eternizado el atraso. Pero, mirando el mundo, hay países como Canadá que, con una alta explotación de recursos naturales, no ha caído en el atraso, sino, más bien, ha demostrado que la explotación de ellos, bien concebida, con reinversión constante, con salto tecnológico, sin presencia de la corrupción, sin propiedad estatal de las empresas, sin una cultura antiempresarial, con trasiego de excedentes a otros sectores productivos, sin utilizar los excedentes exclusivamente en renta a ser solamente redistribuida, se puede lograr el ansiado desarrollo. El análisis económico internacional comparado muestra caminos de cómo se puede aprovechar de manera sensata la explotación de los recursos naturales para alcanzar el desarrollo. Pero, para eso, se requiere poseer una mirada global de los problemas económicos y no hundirse en los prejuicios provincianos que aún subsisten en el país. Si es una evidencia que difícilmente podremos dejar el patrón de desarrollo primario exportador, lo que hay que pensar y apuntar hacia adelante es que no se debe repetir la forma en que se condujo. Antes que pensar en el uso del excedente para convertirlo en consumo o en redistribución, es preciso entender que dicho excedente debe ser reinvertido bajo patrones de salto tecnológico; por un lado, en el mismo sector donde se lo produce, y segundo, y más importante, tal excedente debe ser sembrado en otros sectores, preferentemente donde se cree valor agregado a partir del acceso a innovaciones tecnológicas. Es preciso cambiar la cultura del extractivismo, unida al rentismo, para dar saltos hacia el desarrollo con miradas frescas que nos articulen al mundo y no nos aislen de él.

Si el patrón de desarrollo no se ha modificado en siglos, en cambio, el modelo o patrón de acumulación ha tenido variaciones. Desde el inicio de la República en 1825, ese modelo de acumulación ha estado caracterizado por la propiedad privada de los activos, en otro lenguaje, de los medios de producción. En el siglo XIX los dueños de las minas eran los patriarcas de la plata, tal el caso de Gregorio Pacheco o Aniceto Arce, esto cambió al comenzar el siglo XX con la era del estaño, pues la propiedad se concentró en manos de los barones del estaño, Patiño, Hochschild y Aramayo, con la compañía de pequeños mineros o rescatistas privados. Todo esto se modificó con la Revolución nacional de 1952, la propiedad de las minas pasó a manos del Estado boliviano, empero, el gobierno del nacionalismo militar de David Toro en 1936, al salir de la Guerra del Chaco (1932-1935), nacionalizó los hidrocarburos, como una señal del inicio de las luchas nacionalistas por el control de los recursos naturales. La propiedad estatal de las minas fue modificada con la asunción de Víctor Paz Estenssoro al poder en 1985, época en que produjo la liberalización de la economía. Dos décadas después, con la asunción de Evo Morales al poder, este nacionaliza los hidrocarburos en el año 2006 y entramos a la fase del neoestatismo.

Quiere decir que el modelo de acumulación fue, al inicio, privado, durante el comienzo de la República; luego, estatal, durante la Revolución de 1952; después, privado, con el neoliberalismo; por último, viró a estatista desde la asunción de Evo Morales al poder y la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 y las demás nacionalizaciones que aprobó, ya sea en la minería, telecomunicaciones u otras áreas económicas. La creación de excedente económico en el país, ya sea con patrón de acumulación privado o estatista, se ha concentrado en el área de los recursos naturales, en la minería o en los hidrocarburos, los demás sectores económicos, incluidos los de industria, agro, transporte, telecomunicaciones u otros, no han tenido la musculatura suficiente para crear excedente económico, lo cual convalida la existencia de un patrón de desarrollo primario exportador. Esto quiere decir que vivimos prácticamente de la explotación de recursos naturales.

En Bolivia todas las apuestas por la industrialización han fracasado; la mentalidad de los bolivianos, de las autoridades políticas, de

los empresarios y de los sectores populares es extractivista, unida a la costumbre y cultura del rentismo (Laserna, Gordillo & Komadina, 2011). El país no piensa en la reinversión de la renta de los recursos naturales, lo que desea es su uso indiscriminado en aumento del consumo y, a veces, en favor de la redistribución; en esta medida, el capitalismo boliviano es un protocapitalismo. Para dejar esta situación lo que se requiere es privilegiar la inversión, reinversión y el salto tecnológico, y no dilapidar el excedente en un uso solamente destinado al consumo. La médula del capitalismo es la reinversión, la acumulación en espiral y no la dilapidación del excedente en consumo como sucede en Bolivia.

Las diferentes corrientes del marxismo, así como sus partidos, el Partido Obrero Revolucionario (POR) o el Partido Comunista (PC), y también el nacionalismo revolucionario encabezado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) han coincidido en sus hipótesis sobre el desarrollo boliviano, que coinciden a su vez con las formuladas por los teóricos del desarrollo del capitalismo que formularon para Inglaterra el siguiente itinerario: se transita del feudalismo al capitalismo mediante el desarrollo de la urbanización, el país se descampesiniza progresivamente para dotar la mano de obra que precisa el crecimiento de la industrialización, es decir, los campesinos que migran a las ciudades se convierten paulatinamente en proletarios, en obreros de las industrias nacientes, sujetos al trabajo asalariado (Sweezy & Dobb, 1982). Pero ¿qué paso en Bolivia?, se produjo una urbanización lenta, operó la descampesinización también a paso cansino, tan es así que en el presente la población rural es aún un 25% del total. En efecto, la población rural migró a las ciudades, se produjo un crecimiento de la urbanización, en especial de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pero ella no se acopló a la proletarianización de los migrantes, por la sencilla razón que no existía industrialización, o porque el crecimiento de las industrias fue y es ínfimo. Por tanto, los migrantes no se convirtieron en trabajadores asalariados, antes bien, lo que generaron fue la informalización del mercado de trabajo. Esos migrantes, para subsistir, entraron a los diferentes ámbitos del subempleo, del autoempleo, del empleo precario, al empleo familiar, es decir, a los distintos ámbitos de la informalidad: al comercio

minorista, al espacio de los gremiales, al transporte urbano, a la venta de abarrotes, a la comercialización de alimentos, al contrabando de mercancías. Una de las marcas salientes de la economía Bolivia es la informalización del mercado de trabajo; en 2023, dicho fenómeno alcanza al 85 o 90% de la población. Somos un país de informales.

Así, pues, lo que se creó tempranamente es informalidad, empleo precario, subempleo, y eso se ha ido desarrollando hasta el presente. La informalidad en Bolivia no es la excepción, es la norma; hace 17 años el empleo informal llegaba a cerca del 66%, hoy, bajo el influjo del proceso de cambio y la reprimarización de la economía, alcanza al 90%. La existencia de industrias es la excepción, así como también el trabajo asalariado. Cometen un error los teóricos que entienden que el desarrollo boliviano pasa por formalizar a lo informal, antes bien, de lo que se trata es de explicar como un fenómeno normal a la informalidad y conocer cómo opera, sin creer que la formalización es posible. Justamente, el comercio es uno de los núcleos de esa informalidad, ese es el lugar donde anidaron, donde se crearon y potenciaron los distintos grupos de las burguesías cholos que controlan la circulación de capital y de mercancías, que usan trabajo asalariado, trabajo familiar, apelan a la superexplotación de la familia, de sus trabajadores, de sus compadres o ahijados (Toranzo, 2020a). Esa burguesía tiene muchos lazos de comunidad con el empresariado tradicional, pero, a su vez, posee muchos elementos que la diferencian, es decir, que su existencia está marcada por la heterodoxia (Tassi *et al.*, 2013). Si el camino hacia el desarrollo no pasa por formalizar a los informales, cosa prácticamente imposible en Bolivia, lo que se precisa es reconocer que esa informalidad puede jugar roles también productivos y no sólo estar anidada en los canales de la circulación de mercancías. Ya sea en la órbita de la producción o de la circulación, se debe impulsar el salto tecnológico para todos los circuitos informales.

Junto a un patrón de desarrollo que no se ha modificado a lo largo de muchos años, en cambio, hallamos mutaciones en el modelo de acumulación, interesa poner atención en uno de los hitos de ellos, nos referimos a la Revolución de 1952. Esta temática se concentra en esta pregunta: ¿quién o quiénes han manejado la circulación de capital y de mercancías durante la fase 1952-1985? Antes de dar una

respuesta, recordemos que en la primera mitad del siglo XX quienes manejaban las compras del Estado, las exportaciones de minerales, las compras de insumos para la minería privada eran los grandes importadores, las casas comerciales como Hansa, Grace, Intermaco, Skoda. En el control de la circulación de mercancías estaban presentes también las grandes ferreterías de migrantes europeos, esas que se instalaron en Oruro para acompañar al desarrollo de la minería. Pero la Revolución de 1952 generó grandes cambios, no sólo produjo la nacionalización de las minas, sino que, en general, democratizó la economía, dando lugar a que aparezcan con intensidad en el manejo de la circulación los sectores populares. Ese es un momento clave del desarrollo y presencia de esos sectores en el comercio, así como en el transporte urbano, después interprovincial, luego interdepartamental y finalmente internacional. Poco a poco los sectores populares se apropiaron de la circulación de capital y de mercancías.

La hiperinflación en 1956, durante el gobierno de Hernán Siles Zuazo, el desabastecimiento de alimentos, las colas, lanzó a los comerciantes de sectores populares a incrementar el manejo del contrabando en fronteras, ya sea en el Desaguadero,⁴ frontera con el Perú, o en las fronteras de Brasil y Argentina. A lo largo de su historia esos sectores populares han manejado con sagacidad el tipo de cambio, el comercio de fronteras, el contrabando y, claro está, lo hacen aún. Poco a poco, las ferreterías y los proveedores de materiales de construcción dejaron de ser exclusividad de elites extranjeras, los sectores populares fueron copando esas actividades. Al llegar al siglo XXI, fracciones importantes de las burguesías cholas manejan el abastecimiento de materiales de construcción.

En nuestra historia el patrón de desarrollo no se modificó, siempre fue primario exportador, productor de materias primas, ya sea con control estatal o privado de la producción del excedente; así sucedió con la creación de riqueza en la explotación de los recursos naturales, minería, petróleo o gas, que fue controlada por el Estado o

4 A inicios de los años 50 se fundó la asociación de comerciantes al Desaguadero, es decir, la asociación de quienes manejaban el contrabando por esa zona. La Revolución nacional les dio espacios para su institucionalización.

por empresarios privados. Pero en la circulación de capital y de mercancías, lo dijimos, hubo cambios importantes; si en el liberalismo, hasta 1952, había un control de las grandes empresas comerciales, en cambio, la Revolución nacional, al democratizar la economía, en especial la circulación de capital y de mercancías, puso la piedra fundamental para el desarrollo de las burguesías cholas o, en general, de los empresarios populares emergentes. La participación de estos en el comercio no se inaugura con la Revolución nacional, el germen ya estaba en esas actividades desde el inicio de la República, pero esa Revolución les abrió espacios y posibilidades para su potenciamiento, de tal manera que algunas fracciones de esos sectores populares, con el transitar del tiempo, se convirtieron en burguesías cholas. Las grandes empresas compraban y vendían para la minería privada (Patiño, Aramayo, Hochschild), y junto a estas siempre existieron los mercados donde operaba la pequeña circulación de mercancías.

Con las crisis económicas y el desabastecimiento emergente de ellas, se abrieron más espacios de control de la circulación de capital por parte de las burguesías cholas, eso sucedió en la crisis económica 1982-1985, durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) (Morales, 2012). ¿Quiénes proveían de alimentos y productos industriales en esa época? Lo hacían los comerciantes populares, de los cuales una fracción importante son las burguesías cholas, estas coparon mercados con los productos traídos de otros países debido a su excelente manejo del tipo de cambio; el comercio de fronteras, el contrabando fue manejado por ellas y las potenció nítidamente.

En 1985 arribó al poder Víctor Paz Estenssoro, a los 23 días de su posesión, el 29 de agosto, aprobó el Decreto Supremo 21060, que era el inicio del retorno del liberalismo o la instauración del neoliberalismo. Ese Decreto contenía un severo ajuste estructural y daba inicio a las liberalizaciones de la economía que condujeron a ratificar la quiebra de las industrias que vivían de los subsidios y subvenciones estatales. Así entonces, la llegada del neoliberalismo y del ajuste estructural post-1985 vino de la mano de la quiebra de las industrias nacionales, lo que generó el incremento de las importaciones legales e ilegales. De este modo, con la informalidad acrecentada, se fortalecieron los canales del comercio, formal e informal, lícito e

ilícito, pues el contrabando siempre ha sido una fuente de recursos y de acumulación para algunos sectores comerciales populares. Si en la época de la UDP algunos sectores de las burguesías cholas ya estaban fortalecidos, en la fase del neoliberalismo 1985-2006 siguieron su crecimiento, lo cual implicaba que la circulación de capital y de mercancías seguía en manos de sectores populares, no solamente de los provenientes de la China.

Hace más de una década se habla de las *chineras*, empresarias populares que viajan a China a llenar *containers* de mercancías para traerlos al país (Tassi *et al.*, 2013). Las burguesías cholas, o *cunumis*, están ligadas al comercio mundial, a la globalización, a China, a Estados Unidos, a Argentina, o todos los países fronterizos, con todos realizan transacciones. Este salto exponencial de las importaciones implicó un crecimiento muy grande de la circulación de capital y de mercancías que está en manos de empresarios populares, de burguesías cholas de todo tipo. El contrabando en Bolivia es un dato estructural de la economía, la mayor parte de las importaciones viene por esa vía; un elemento que complejiza ese fenómeno es el referido al narcotráfico, cuyos negocios, en cálculos conservadores, se sitúan en 800 millones de dólares. El contrabando y el narcotráfico tienen una línea divisoria muy estrecha, esto implica que sectores de las burguesías cholas están conectados a estas esferas, así sucede en el Chapare, Yapacaní, Cobija, frontera con Santa Cruz, Sabaya, Yacuiba, Bermejo. En todos estos lugares se mezclan las importaciones legales con el contrabando y con el lavado de dinero del narcotráfico. En 2023, a través de la pugna entre sectores del MAS, entre *evistas* y *arcistas*, se ha transparentado que el Chapare es el centro de la producción de cocaína en Bolivia; el gobierno de Luis Arce ha llegado a aceptar que en Bolivia hay presencia de cárteles internacionales del narco y que los mismos han penetrado en círculos políticos y en la propia Policía. Como nunca antes, Bolivia sufre la presencia del narcotráfico, este es uno de los talones de Aquiles del Estado; si su presencia continúa y se extiende, será muy difícil hablar de un posible desarrollo democrático en el país.

Si no hubo modificaciones en el patrón de desarrollo primario exportador en casi dos siglos, en cambio, al interior del patrón de

acumulación, desde 1952 en adelante la circulación de capital está en manos de los sectores populares. Lo curioso, y que no hay que repetir en el futuro, es que esos empresarios emergentes, las burguesías cholas, los adinerados del presente, prácticamente no tributan, ¿el Estado no los grava porque son de sectores populares? Hay que evitar esta simplificación y saber que todos los empresarios, los tradicionales o las burguesías cholas emergentes, deben tributar, deben contribuir al desarrollo.

El excedente es creado en el ámbito de la producción de materias primas, ya sea que esté en manos del Estado o en poder de privados; la industria es débil, pero paralelamente hay un discurso político muy extendido que habla de desarrollar la industrialización; afirmación falaz, pues quien sube al poder se asienta en la explotación de materias primas y no impulsa la industrialización. Entre los años 40 y 60 del siglo XX, bajo el mando del MNR, se produjo una débil diversificación económica, pero de tan poco vigor que nos conduce a decir que el país no se ha industrializado todavía. En estos siglos se ha verificado que ni el Estado ni los privados pueden crear un excedente de dimensiones apreciables fuera de la explotación de los recursos naturales. Asimismo, durante todo este tiempo se ha reafirmado la gran presencia de los sectores populares, de las burguesías cholas, en el manejo de la circulación de mercancías y de capital. Pareciera que los más de los bolivianos, en especial los sectores populares de origen aymara o quechua, poseen un alma fenicia que los conduce a comprar y vender de todo; guiados por un gran instinto de obtención de ganancias, su alma se posa en la circulación, pero sin capacidad, ni voluntad, de apostar por la producción. Todos ellos no responden a la lógica comunitaria de la reciprocidad, sino, por el contrario, están imbuidos por la lógica de mercado y la sed de acumulación. Insistamos, la presencia cada vez más grande del narcotráfico en Bolivia, en especial desde la llegada del MAS al poder en 2006, ha aumentado la cantidad de dinero que fluye en la circulación de mercancías y de capital; el narcotráfico y el contrabando tienen puntos de contacto muy cercanos, a ellos están ligados muchos sectores populares o burguesías cholas que se mueven con sagacidad en la órbita de la circulación del capital, ya sea de forma legítima o ilegítima. No obstante, tales empresarios son premiados

por el Estado porque este no los grava tributariamente como debería hacerlo de acuerdo a la estatura económica que poseen.

3. Los problemas sociales

En Bolivia, el problema no es la tasa de escolaridad ni el acceso a la educación, la ley postula que todos tienen acceso a la educación; pero la educación en los centros urbanos es de lejos mejor que en los lugares rurales, entre ambos hay una brecha muy grande. Sólo el 80% de los niños acaban la primaria y el 70% la secundaria; solamente el 28% de estos accede a estudios superiores, en tanto que no más del 25% se gradúa en la universidad. Pero, en ambos, en lo urbano y en lo rural, el problema radica en la calidad de la educación, que no es mala, es pésima, arcaica, sujeta a pésimos contenidos, sin códigos de modernidad. La última reforma educativa sintetizada en la Ley Avelino Siñani es nada más que una propuesta de adoctrinamiento arcaico, antiimperialista, antipatriarcal, descolonizadora. Los alumnos, al acabar la secundaria, apenas saben leer, pero no comprenden lo que leen; su formación en lenguaje y matemáticas es elemental. La escuela no provee una educación cívica, no ayuda a formar ciudadanos, como tampoco inculca los valores de la defensa del medio ambiente, por ello, en parte, la sociedad boliviana no tiene conciencia ambiental. La deforestación, el cuidado ambiental, el mal uso del agua están normalizados entre niños, jóvenes y mayores. El reto en el país radica en la mejora de la calidad educativa, en la existencia de una currícula que esté de acuerdo a los tiempos de la transformación digital. El desafío radica en poseer una educación que forme ciudadanía, ciudadanos conscientes de los problemas del medio ambiente, que impulse una educación democrática de respeto y reconocimiento del otros.

Uno de los gremios que menos lee en Bolivia es el de los maestros, los sindicatos del magisterio son profundamente conservadores, se oponen a cualquier reforma que dé pasos hacia la modernidad; esta es una conducta gremial muy difundida en toda América Latina (Contre-ras, 2021). Paralelamente, se sabe que los salarios del magisterio son

bajísimos, los maestros se hacen los que ganan y, simultáneamente, se hacen los que enseñan, el país vive hace décadas con esa doble mentira a cuestas. La infraestructura educativa es pésima, el acceso a internet es totalmente limitado, los maestros sufren de analfabetismo digital, en Bolivia no existe una red de banda ancha que facilite el acceso a internet a los estudiantes. Las organizaciones gremiales del magisterio se oponen a la incorporación del salto tecnológico en las currículas educativas; vivimos un siglo XXI de un salto tecnológico enorme junto a un magisterio cuya formación no parece haber superado el siglo XIX.

Durante los años de pandemia, la brecha entre los colegios fiscales y privados se agrandó, las familias populares apenas si poseían un celular para que cuatro o cinco hijos lo utilicen para acceder a clases, con un problema mayor, no todos ellos tenían acceso ilimitado a internet. Pero tampoco en la enseñanza privada las cosas lucen bien, muy pocos colegios o escuelas tienen condiciones para impartir una educación medianamente aceptable, en general, la mayoría de los centros privados es de mala calidad, sólo justifican su existencia porque la enseñanza pública no es confiable. Bajo estas condiciones de educación es evidente que Bolivia tiene un déficit alarmante de capital humano, por lo tanto, es muy complicado impulsar el desarrollo en un contexto internacional que exige cada vez mayores destrezas ligadas al cambio tecnológico, a la transformación digital y al influjo de la inteligencia artificial. Los países que han dado grandes saltos en el desarrollo, como Corea, Singapur o Japón, han fundado su avance en la formación de capital humano y la creación de valor agregado, nada de esto posee Bolivia, y el reto consiste en afirmar que esos son los instrumentos del cambio.

Si en la educación hay problemas, en el sector de salud las cosas están mucho peor. En un país cuya Constitución otorga plenos derechos de salud a la población, la paradoja es que la gran mayoría de esta no tiene acceso real a la salud, pero no por limitaciones legales, sino simplemente por la carencia de infraestructuras, por falta de personal médico, ausencia de equipos, por presupuestos públicos muy limitados; la cantidad de hospitales públicos en los centros urbanos es mínima y en el medio rural es inexistente. Peor aún, en

los centros hospitalarios no existe tecnología para la atención a los pacientes. Con dificultad existen equipos antiguos de rayos X, los tomógrafos son una excepción y los equipos de resonancia magnética son prácticamente inexistentes; los laboratorios no tienen ninguna capacidad de dar abasto a las necesidades de quienes lo requieren, y si hay laboratorios, no hay insumos para que funcionen. La gratuidad de la salud es una fábula, pues todos los servicios públicos se pagan. Las cajas de salud también son elementales, no poseen capacidad de atención a sus afiliados. Los enfermos de los hospitales públicos deben hacer colas de días para acceder a una ficha de atención; si se les fija una operación, deben esperar de 8 a 12 meses para que se practiquen las cirugías requeridas. Esa tragedia ocurre en las áreas urbanas, pero la situación es peor en el ámbito rural, en el cual simplemente no hay hospitales. El personal médico en los hospitales públicos es reducido, mal pagado, con poca capacidad de atender a la alta demanda de pacientes, los médicos no poseen la posibilidad de recalificarse continuamente. Hace un par de décadas los especialistas jóvenes salen del país a encontrar mejores opciones de trabajo en el exterior. En el ámbito de los hospitales públicos y en las cajas de salud existe una alta politización que conduce a que las direcciones médicas no recaigan en los mejores especialistas, sino que los designados son quienes tienen cercanía política al poder de turno, sin poseer las calificaciones que exigen esos puestos. No puede existir capital humano, no puede desarrollarse el trabajo si no hay salud, lamentablemente toda esta problemática no ha sido agendada por la población ni por el Estado, por lo tanto, un reto de futuro es pensar en la reforma de la salud.

Bolivia tiene una larga tradición de discriminación de los sectores populares, campesinos, indígenas, mestizos, mujeres; también se discrimina a los diferentes, pero no por razones étnicas, de género, sino por cuestiones regionales, de creencia religiosa, de opción sexual. Aunque el país avanzó algo con el Congreso Indigenal de 1945, con la Revolución nacional de 1952, con la Participación Popular de 1994 y con el proceso de cambio de los últimos años, no por ello ha desaparecido la discriminación. Lo paradójico es que, con el MAS en el poder, muchos sectores populares, en especial campesinos,

discriminan a clases medias y sectores empresariales. Si el MNR de la Revolución de 1952 tenía un modelo de homogenización social a través del mestizaje, sin reconocer las diversidades étnicas y culturales,⁵ por el otro lado, los antropólogos del MAS tratan de borrar a los múltiples mestizajes y construir un país inexistente, de solamente indígenas u originarios. Hubo una falacia en el modelo cultural soñado por el 52, como la hay en la propuesta autoritaria del MAS de invisibilizar a los mestizajes. Un desafío democrático de aquí en adelante es reconocer abiertamente a todas las diversidades étnicas, pero paralelamente reconocer a los múltiples mestizajes que existen en Bolivia (Toranzo, 2009).

Pero la discriminación más fuerte es la de género, pues a las mujeres se las discrimina laboral y salarialmente, se las sojuzga con una violencia desmedida de feminicidios, se las somete a violencia cuando llegan a cargos de representación popular. El trabajo doméstico familiar no está reconocido, por ello, la explotación de la mujer, su doble o triple jornada, está normalizada sin reconocimiento alguno. El rol de las mujeres en la economía del cuidado, la atención que realizan a los enfermos, a los abuelos y abuelas en el hogar, tampoco tiene ningún tipo de valoración. El MAS, a través de la idea del *chacha warmi*, plantea que hay igualdad automática entre hombres y mujeres, pero ese es un discurso falaz que oculta la realidad de la discriminación de las mujeres. Paradójicamente, el MAS, que habla del *chacha warmi*, es una organización política que reafirma el machismo boliviano, con dirigentes muy cercanos a la misoginia. No puede haber desarrollo democrático bajo las condiciones de discriminación contra las mujeres, ni con las altas tasas de feminicidio; una democracia de calidad se construye con las mujeres como sujetos de la historia (Ardaya, 2021).

Por otra parte, se discrimina a los jóvenes, se les cierra opciones laborales y de ascenso político, los partidos y organizaciones políticas sólo los usan como escalera para ascender los peldaños del poder. En

5 El MNR de 1952 no tenía en su horizonte de cognoscibilidad las diversidades culturales de las distintas etnias en Bolivia, de acuerdo a su época, miraba a los indígenas sólo con el lente de clase social.

Bolivia todavía prima la *achachiracia*, que significa el poder de los viejos, a los jóvenes se los mira con recelo y molestia, no se los comprende, ni se entienden sus preocupaciones y motivaciones, esto es paradójico en un mundo donde el salto tecnológico es comprendido con más facilidad justamente por ellos. Si eso sucede con los jóvenes, otro tanto acontece con los adultos mayores, con quienes han llegado a la tercera edad, pues, para ellos, no hay consideraciones ni un trato especial por parte del Estado, ni siquiera en la vida cotidiana. No se reconoce el papel de esos mayores en la economía del cuidado; miles de migrantes que mandan remesas al país lo hacen porque los abuelos y abuelas cuidan a los nietos cuando ellos trabajan en el exterior. Todavía no se reconoce el rol productivo de los mayores, no hay ninguna idea sobre la economía plateada. La jubilación en Bolivia se estableció cuando la expectativa de vida era muy baja, por ello, la gente se jubila de manera pronta y no se abre otros accesos de ocupación a mayores que todavía tienen muchos años de vida productiva. Si el mundo exige privilegiar lo medio ambiental, si las finanzas verdes son temas contemporáneos, también debe serlo la economía plateada que se refiere justamente a esos adultos mayores.

Para poder subsistir, para mantenerse en el poder, el MAS ha jugado a dividir a la sociedad, y aún intenta que sean irreconciliables las diferencias entre cambas y collas, opone a unos contra otros, porque en ese juego de desarrollo de la polarización se engendra la discriminación con la cual sale ganando el poder. Sucede exactamente igual cuando trata de llevar a extremos la oposición entre *q'aras* y *t'aras*, entre los supuestamente blancos y no blancos, no digo mestizos, pues los "blancos" de Bolivia son también mestizos como los de piel morena. Santa Cruz, que alberga a millones de collas, nos dice que la interculturalidad ahí es un hecho, por tanto, la oposición entre cambas y collas se va diluyendo poco a poco. De igual modo sucede en La Paz, donde los jóvenes de El Alto estudian en la UMSA, en la Universidad Católica, asisten a los cines y cafés de la zona Sur contactándose con los jóvenes del sur, dando lugar también a un fenómeno de interculturalidad cotidiana, sin que se lleve a mayores la "diferencias" entre blancos y no blancos; oposición que sólo le interesa amplificar a quienes detentan el poder para mantenerlo.

4. Una democracia débil, sin instituciones

Nuestra democracia representativa no es de larga data, sólo a partir de 1982 se comenzó a construir, con más intensidad desde 1985, cuando se fundó la democracia pactada; antes de esas fechas hubo dictaduras militares, gobiernos revolucionarios, gobiernos civiles que emanaron del voto, pero no edificaron democracia representativa. En dos siglos de vida republicana no se construyó un Estado fuerte, legítimo, más bien, la marca de Bolivia es la de tener una sociedad civil fuerte, levantisca, aguerrida y, muchas veces, radical, frente a un Estado débil, poco desarrollado (Pareja, 2021). La sociedad civil es fuerte por su capacidad de organización y movilización ante un Estado pequeño y débil; se sostiene que ella y las masas son antidictatoriales debido que a lo largo de sus historias han luchado contra las dictaduras militares, pero una cosa es poseer alma antidictatorial y otra, distinta, que esas organizaciones de la sociedad civil, en especial los sindicatos, sean democráticos, que posean un sentido de la construcción de un Estado republicano que se adscriban a la democracia representativa. Su cultura política de “hasta las últimas consecuencias” estuvo guiada por la lógica amigo-enemigo, y a este último, al enemigo, al que discrepaba de sus ideas, había que eliminarlo; se trataba siempre de derrocar al capitalismo y eliminar a los capitalistas y a quienes disientan de su idea revolucionaria. Si bien luchaban y se oponían a los gobiernos dictatoriales, en especial a las dictaduras militares, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y el movimiento obrero boliviano ansiaban tener su propia dictadura, la proletaria, en esa medida, no eran democráticos. Así pues, los sindicatos pueden haber sido antidictatoriales, lo cual tiene un gran mérito, pero no fueron y no son democráticos. Más todavía, la COB, la FSTMB, las organizaciones campesinas y todos los sindicatos fueron cooptados clientelariamente por el MAS, por ello, perdieron su independencia del Estado, y continuaron sin ser democráticos, es más, fueron y son instrumentos del autoritarismo del MAS. En suma, no son ni fueron democráticos, ni creían en un Estado republicano ni en la construcción de la democracia representativa. Es un desafío inmenso para la democracia boliviana lograr que haya una idea republicana, democrática, en las organizaciones sociales.

Si el Estado es débil, también lo son sus instituciones, estas no son consistentes, se las renueva constantemente sin darles tiempo

para que maduren; en una situación de este tipo no pueden existir políticas de Estado, pues cada régimen que sustituye a otro borra o elimina lo hecho por el anterior, cada nuevo gobernante, presidente, ministro, gobernador o alcalde trata de refundar las instituciones, conducta que sólo provoca la debilidad institucional. Ni el Poder Judicial ni el Legislativo ni el Electoral han dado muestras de fortaleza institucional, ese fenómeno se extiende a la Contraloría, Banco Central, Gobernaciones y municipios, y para empeorar las cosas, los partidos tampoco han llegado a ser instituciones. En la Constitución Política de 1826 se hablaba de estado de derecho, de separación de poderes, pero esta no existe; los pesos y contrapesos, característica de las democracias, no han sido elementos de nuestra historia política. En la mayor parte de esta, el Poder Ejecutivo absorbió o cooptó a los demás poderes del Estado; en el sistema hiperpresidencialista que poseemos, ni el Poder Legislativo ni el Judicial han tenido independencia, otro tanto ocurrió con el Poder Electoral; la historia muestra cómo, casi siempre, el Poder Ejecutivo domine a los demás poderes. Junto a todo eso, la norma ha sido la judicialización de la política, pues el Poder Ejecutivo normalmente usó al Judicial para eliminar a sus adversarios, jueces y fiscales fueron transformados en instrumentos de ataque y de castigo a los opositores.

En cualquier lugar del mundo una democracia, para ser tal, no puede convivir con un sistema de justicia venal e incompetente como el que existe en Bolivia (Fundación Construir, 2022); si a algo le temen los bolivianos, es a una justicia que no funciona, ya que esta es para los poderosos y para los políticos que acceden al poder; los procesos en nuestro país sólo avanzan si se paga a los jueces, tales juicios pueden durar lustros; la justicia se ocupó y se ocupa de amparar a la corrupción. La norma es que esa justicia está digitada por el Poder Ejecutivo; si algo caracteriza a la democracia boliviana es la impunidad de los corruptos, pues la justicia se ha encargado de protegerlos o de lavarles la cara, debido a esto, está marcada por la ilegitimidad y la ineficiencia. No podrá haber una democracia de calidad si no se abre el camino para una profunda reforma judicial, esta es una de las necesidades más urgentes del país. Sin embargo, aunque el ciudadano sufre por la inexistencia de justicia, o por la

venalidad de esta, paradójicamente la población no ha agendado la necesidad de la reforma judicial.

Nuestra democracia es extraña: opera sin demócratas, pues los bolivianos, en su mayoría, no somos demócratas (Lazarte, 1993); somos portadores de una cultura autoritaria, la misma que fue forjada en la escuela, la familia, las iglesias, los sindicatos o los partidos. Es muy difícil que la democracia funcione si lo que opera cotidianamente es la lógica amigo-enemigo; no se reconocen adversarios, sino enemigos por eliminar. Esta lógica no sólo está presente en el poder, en los gobernantes, antes bien, es parte de la cultura cotidiana de las organizaciones sociales. Si los gobernantes no respetan la Constitución, no se apegan a las leyes, tampoco lo hacen los ciudadanos. La escuela, que debería ser un lugar donde se forme ciudadanos con ideas de respeto hacia los demás, no cumple su rol.

La democracia debería impulsar la libertad de pensamiento, de prensa, el derecho al disenso, pero el poder sanciona a quienes no piensan como él, se ataca a quienes disienten del poder; usualmente, los medios de comunicación son sancionados desde el poder si ellos no lo defienden, la pauta publicitaria es el arma que se utiliza para penalizar las discrepancias. En Bolivia no existe el respeto por el otro, al contrario, lo que domina la vida es la desconfianza entre unos y otros; si el respeto de la otredad es una marca clave de la democracia, esta no existe en Bolivia. Pero es hora de defender las libertades democráticas, sin las cuales la vida cotidiana se complica y se abre paso a las autocracias.

Nuestra historia generó una cultura política corporativa, los corporativismos existen hace dos siglos y el Estado de 1952 le dio más intensidad al corporativismo político; las corporaciones del MNR, los obreros, campesinos y militares sostuvieron al régimen de la Revolución. La democracia boliviana no es de ciudadanos, es de corporaciones que sólo apuestan por sus intereses particulares y no por el interés general; todo Estado corporativo es autoritario y es eso, precisamente, lo que ha marcado a la historia de la democracia en el país. Si bien no se pueden eliminar a las corporaciones, es necesario impulsar la creación de ciudadanía. Tenemos una democracia sin un sistema de partidos políticos, a los bolivianos les encanta la

política, pero, paradójicamente, no han militado en partidos, han hecho su actividad al margen de ellos. No es solamente por la crisis de la “forma partido” que arrastramos desde fines del siglo pasado, no es únicamente por la deslegitimación de los partidos, que está de moda, sino porque en nuestra historia los partidos no han sido organizaciones fuertes. Quizás lo fue el MNR revolucionario, y luego, el MAS, pero, en general, el partido no ha sido el lugar para participar en política. Sin embargo, los bolivianos han hecho política bajo la forma sindicato; aunque no sean asalariados, se han agrupado bajo esa modalidad, lo hicieron obreros, campesinos, gremiales, desocupados, prácticamente todos. La *forma sindicato* ha sido siempre más fuerte que la *forma partido*.

La democracia en Bolivia se caracteriza por ausencia de ciudadanía o por tener una ciudadanía incompleta, hay una brecha muy grande entre derechos y obligaciones, poseemos una alta consciencia de nuestros derechos, pero eludimos las obligaciones, eso conduce a no respetar las leyes; es célebre el: “se acata, pero no se cumple”. Desde el Constitución garantista de 1938 hasta la última de 2009, se reconocen centenas de derechos, pero la asimetría con las obligaciones es muy alta. No es fácil construir una democracia con personas que no son responsables de sus obligaciones y que sólo valoran sus derechos, más todavía, con corporaciones que únicamente buscan su interés particular sin reparar en el interés general.

Los cambios políticos y democráticos no siempre suceden por la vía de las instituciones, sino por medio de otros mecanismos que –algunos– han denominado *la política en las calles* (Calderón & Szmulker, 2000). La añeja costumbre de hacer política son las marchas, huelgas, bloqueo de caminos, cercos, autocrucifixiones; todo eso está incorporado a la memoria de la sociedad. En general, las “minorías eficientes” manejan todas esas movilizaciones para lograr cambios políticos, mejoras sociales o para impedir algunos avances de las políticas gubernamentales. Buena parte de ellas son violentas, no poseen códigos democráticos, y en buena medida, el exceso de la política en las calles ayudó a desinstitucionalizar al país. Lo curioso es que los gobiernos que poseen mayorías de dos tercios en el Parlamento impulsan reformas utilizando simultáneamente la calle y sus rodillos parlamentarios.

La política en Bolivia es maximalista, los bolivianos han sido educados en el maximalismo, cada acción política es hasta las *últimas consecuencias*, no hay puntos intermedios, es todo o nada. Los actores de la sociedad civil se movilizan para pedir imposibles, sin pensar en lo viable de sus exigencias, pero con sus códigos maximalistas debilitan al Estado y a la propia democracia; si esta, en el fondo, es pacto, diálogo, negociación, los actores, con sus códigos maximalistas, descalifican a quienes intentan caminar por los senderos de la concertación. Los bolivianos tenemos un desafío muy difícil de lograr, este radica en impulsar el diálogo, la concertación, evitando los autoritarismos del maximalismo político. La gran brecha entre la palabra de los políticos y la práctica de los mismos erosionó la democracia; los políticos, los líderes, casi nunca han respetado su palabra, ha existido una enorme distancia entre sus palabras, sus promesas y lo que hicieron en la realidad; en las más de las ocasiones hicieron todo lo contrario de lo que proponían en épocas electorales. Esas conductas deslegitiman a la democracia, la convierten en poco creíble, y lo paradójico es que la población sigue votando por quienes actúan de esa manera.

5. Las trabas de la cultura política

El caudillismo es muy añejo en Bolivia, existe desde el nacimiento de la República, estuvo presente durante todo el siglo XIX y continuó en el siglo XX y XXI. Los políticos buscan y sueñan con ser caudillos, no importa si de un grupo o de un partido político pequeño; la población se identifica con la política a través de los caudillos, sean estos bárbaros o letrados (Toranzo, 2021). En las campañas electorales los bolivianos no oyen los programas de los partidos, no analizan las ideas de los candidatos, antes bien, asumen posiciones a favor o en contra, apostando por quien tenga mejor perfil de caudillo. Ninguna organización política tiene futuro si está desprovista de un caudillo, es imprescindible la existencia de este para que esa organización tenga viabilidad política. El caudillismo no ha provisto de líderes que posean una mirada estratégica de la política; a los caudillos lo que les importa es mantener el poder, sus miradas son de corto plazo y son

reacios a mirar el largo plazo. Una tragedia de la política boliviana es la inexistencia de estadistas o la existencia de un número escaso de estos.

El patrimonialismo es otra de las marcas de la política nacional, de la cultura política, cada gobernante, sea del nivel nacional o subnacional, usa como privado aquello que es público, entiende que la propiedad pública es de su propiedad personal.⁶ El patrimonialismo está íntimamente ligado al prebendalismo, los gobernantes de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, en general acaudalados representantes de la burguesía, tomaban al erario público como su alcancía o disponían de los bienes públicos para su uso personal. Caída la oligarquía por el influjo de la Revolución nacional, los gobernantes del MNR también tuvieron la misma conducta, en épocas de inflación regalaban comestibles a sus dirigentes para que estos los vendan a precios elevados, eran los llamados “cupos”⁷ que entregaba el gobierno a sus allegados. Las dictaduras militares posteriores al MNR actuaron de manera calcada, Hugo Banzer regaló dinero, “créditos”, a los empresarios cruceños para generar la industria algodonera, “préstamos” que no fueron devueltos al Estado. La síntesis del patrimonialismo es la forma en que Evo Morales dispuso de los fondos públicos para su uso personal: regalos de canchas sintéticas de fútbol a los municipios de su partido, uso de esos mismos fondos para hacer su propio museo. Con Morales no acaba esa historia, los gobiernos de Jeanine Áñez y Luis Arce Catacora también dieron señas de patrimonialismo, pues varios de sus funcionarios usaron bienes públicos como privados. El patrimonialismo en el uso del poder es una marca tanto de los gobiernos de izquierdas como de los de derechas. La casi totalidad de

6 La situación en las Gobernaciones y municipios llega a extremos insospechados, pues no existe ningún control social o este es escaso, más aún, se ha consolidado la costumbre social de entender que quien llega a administrar esos puestos tiene el derecho a usufructuar de ellos como si fueran su propiedad privada. La idea que disculpa esos hechos es: “roba, pero hace”, que implica la tolerancia social ante esos abusos.

7 Fueron denominados *cuperos* los dirigentes o militantes del MNR que recibían como premios *stocks* (cupos) de alimentos a precios subsidiados para comercializarlos a precios de mercado y beneficiarse con los diferenciales de precios. Una parte de la clientela emenerrista tuvo acceso a eso privilegios.

los políticos que entran al Gobierno nacional o subnacional, Gobernaciones o Alcaldías, poseen la firme decisión de enriquecer su peculio personal, no les interesa los objetivos nacionales, ni la situación de pobreza o de inequidad de la población; el prebendalismo ha sido la marca de todos ellos.

La lógica prebendal está íntimamente unida al clientelismo. Cada gobierno, nacional, departamental o municipal, creó su propia clientela para favorecerla con prebendas, para tener una masa poblacional que lo apoye sin ningún carácter crítico. Muchas veces las clientelas fueron convertidas, vía pagos del erario público, en grupos de choque de los gobiernos contra los opositores; de ese carácter eran los grupos civiles movilizados por Manuel Isidoro Belzu, más tarde, Bautista Saavedra, entre 1920 y 1925, usaba a los denominados “ovejas de Achacachi”, grupos de campesinos que atacaban a sus rivales.⁸ Fue muy conocida la actividad de los milicianos emenerristas pagados por el Estado para reprimir a la oposición, las milicias del MNR eran pagadas por el partido para reprimir a sus adversarios. Por su parte, en pleno siglo XXI, Evo Morales tuvo sus propias clientelas, entre ellas, los cooperativistas mineros que se encargaban de reprimir a sus adversarios, y actuó de la misma manera con su clientela de cocaleros de Cochabamba.

El MNR de la Revolución de 1952 usó el prebendalismo, la lógica prebendal, para favorecer a sus dirigentes: entrega de “cupos”, divisas a precios oficiales y precios diferenciales, contratos públicos y pago de comisiones para la realización de construcciones; las clientelas emenerristas, militares, obreros, campesinos, recibieron pagos especiales, decretos especiales, entregas de bienes para mantener su fe en el gobierno. De manera similar, y en mayor escala, Evo Morales cooptó, vía prebendas, a los movimientos sociales, los convirtió en sus clientelas con base en favores; a los cocaleros les extendió la superficie

8 Bautista Saavedra, para amedrentar a los movimientos liberales que se le oponían, ordenaba al prefecto de La Paz y al subprefecto de Achacachi que “mande ovejas”, es decir, militantes que puedan amedrentar a sus adversarios. A quienes eran parte de esos grupos se los conoció como las ovejas de Achacachi. Esta práctica política la utilizaron muchos otros presidentes de Bolivia.

de coca cultivada,⁹ por este motivo tuvo una gestión permisiva con los coccaleros que devino en la fuerte presencia del narcotráfico en Bolivia, hoy, la presencia de los cárteles del narcotráfico en el país es uno de nuestros principales problemas. A los cooperativistas mineros los eximió de tributos y les otorgó múltiples regalos en contante y sonante; a los campesinos les creó un fondo¹⁰ especial que fue manejado con la lógica de la corrupción; a los vendedores de ropa vieja les liberalizó la entrada de sus productos; a los importadores de autos ilegales les legalizó el negocio.¹¹ El gobierno de Arce Catacora sigue la línea de su antecesor, pues coopta a los movimientos sociales por medio de prebendas. Esa mezcla de prebendalismo y clientelismo carcomió los valores de la sociedad boliviana y distorsionó la democracia.

El extractivismo es la marca fundamental que caracteriza a la economía boliviana; desde la Colonia, la que hoy es Bolivia se dedicó a la explotación de minerales, durante siglos la plata fue el producto principal de la economía; en el siglo XIX, en la nueva República, también fue la minería de la plata la que marcó con su impronta a nuestro país. La crisis de este metal dio campo a la producción de estaño; el inicio del siglo XX no sólo estuvo marcado por la Guerra Federal y la pérdida de nuestro litoral,¹² sino también por

9 La superficie legal de coca explotada pasó, con Evo Morales, de 12.000 a 20.000 hectáreas.

10 El Fondo de Desarrollo Indígena es una institución estatal que debería ocuparse de financiar y desarrollar proyectos económicos y sociales en favor de los campesinos e indígenas de Bolivia. Durante el gobierno de Evo Morales, esta institución fue manejada por las dirigencias del MAS, y este partido la usó como una caja chica para favorecer de manera poco transparente a sus militantes y así realizar manifestaciones, marchas y no actividades económicas. De manera deliberada se dejó que la corrupción sea la marca del Fondo de Desarrollo Indígena, para que así los movimientos campesinos indígenas favorecidos sean manejados por el gobierno.

11 Evo Morales, en varios periodos, legalizó la entrada de autos “chutos” ilegalmente importados; los chutereros se convirtieron en parte de la clientela del MAS.

12 El Tratado de Paz y Amistad de 1904 suscrito con Chile se realiza para terminar el estado de guerra con ese país, mediante este se acepta que Bolivia perdió su litoral en el Pacífico. Los políticos del liberalismo estaban con premura por reiniciar sus exportaciones de minerales que pasaban por Chile, por eso, con un pragmatismo exagerado, aceptaron la cesión territorial y garantizaron sus negocios.

la producción de un nuevo mineral, son las épocas de gloria de los barones del estaño, Simón I. Patiño,¹³ Avelino Aramayo y Mauricio Hochschild (Toranzo, 2017), quienes generaron una revolución tecnológica y administrativa en el campo de la minería. Al otro lado del país, en el oriente, la explotación de la goma caracterizó a esa región.¹⁴ La Revolución de Abril vivió también del extractivismo, de la producción de estaño, por eso las minas de Siglo XX y Catavi fueron los lugares de mayor importancia económica y política de la segunda mitad del siglo XX.¹⁵

En los inicios de los 70 del siglo XX, durante el gobierno de Hugo Banzer, la explotación de petróleo se sumó a la lógica del extractivismo. Aunque la Revolución del 52 hizo algún esfuerzo por diversificar la economía a través de la creación de algunas industrias impulsadas por la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), la explotación de materias primas fue aún lo central de nuestra economía.¹⁶ En la época del neoliberalismo, a partir de 1985, se continuó con la producción de minerales y de petróleo, pero se sumó la soya. El inicio del siglo XXI estuvo marcado por el *boom* del gas natural,¹⁷ y el gobierno de Evo

-
- 13 Simón I. Patiño fue es más importante de los barones del estaño ya que modernizó tecnológica y administrativamente la minería. Pero el nacionalismo revolucionario nunca aceptó esos saltos de la producción. Por ello Augusto Céspedes escribió *El metal del diablo*, libro en el que condena y caricaturiza a Patiño.
- 14 Si en el occidente se daba el *boom* del estaño, en el oriente, a inicios del siglo XX, se produjo el *boom* de la goma. Nicolás Suárez fue el barón de la goma, fundó la Casa Suárez, se estableció en Cachuela Esperanza y desde ahí dominó Ribalta, Guayaramerín y los accesos al río Beni para la explotación del caucho.
- 15 Para René Zavaleta Mercado, creyente de la centralidad obrera en la dinámica social y política de Bolivia, la importancia de Siglo XX y Catavi era fundamental para el cambio de la política boliviana, él creía que lo que acontecía en esos centros mineros era lo que debía suceder en todo el país.
- 16 La CBF impulsó la industrialización de la caña de azúcar, la instalación de la fábrica de fósforos, la industrializadora de leche, la laminadora de goma y la fábrica de bicicletas.
- 17 Los gobiernos del neoliberalismo iniciado en 1985 con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, a través de la capitalización de los hidrocarburos, atrajeron capital extranjero para la exploración, el resultado de esto fue que dejaron al país con una reserva probada de 27 TCF, lista para ser explotada por los siguientes gobiernos. A Evo Morales le tocó administrar, o malgastar, esa herencia económica que le dejaron los neoliberales.

Morales se benefició por el *boom* de precios de las materias primas, del propio gas y de los minerales. En 2023 esa producción está en declive, pero la esperanza del extractivismo que anida en la mente y subconsciente de los bolivianos es que el litio sustituya al gas. La creación de valor agregado, la industrialización, es un discurso que repiten todos los políticos,¹⁸ pero casi ninguno de ellos hizo algo por materializar esas palabras. La pujante burguesía chola, de emprendedores populares, se ubica en el campo de la circulación de mercancías y no en los ámbitos de la industria, salvo contadas excepciones (Toranzo, 2020a).

Si el país ha vivido del extractivismo, de la explotación de materias primas, esa lógica ha sido acompañada por el rentismo (Laserna, Gordillo & Komadina, 2011). El Estado, los gobernantes, los políticos, no han pensado en privilegiar el ahorro, la inversión y la reinversión de los excedentes generados por la explotación de los recursos naturales, antes bien, han optado por la lógica de la distribución o redistribución de los ingresos para el impulso del consumo, muchas veces suntuario. La mentalidad de los gobernantes y del propio empresariado no ha puesto por delante la lógica de la reproducción del capital, sino la distribución, esto fue acompañado por la pugna redistributiva, pues, los sectores asalariados, actores populares, las regiones y la casi totalidad de la sociedad boliviana entendía que los excedentes de la producción debían ser redistribuidos, no reinvertidos, por lo que, en general, fueron malgastados en obras donde dominó la corrupción. Esa es una de las razones por las cuales, después de 1952, la minería se estancó, pues no se reinvertió, quizás solamente Simón I. Patiño lo hizo en la primera parte del siglo XX. Pero la Revolución nacional, el nacionalismo revolucionario, en faceta civil o militar, privilegió la distribución, las más de las veces con carácter prebendal y, fundamentalmente, con características clientelares. Es más, con el gobierno del

18 El MNR del 52 no logró su postulado de industrialización, sin embargo, logró diversificar en algo la economía del país. A través de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) instaló algunas industrias. Y siguiendo las ideas del Plan Bohan de la década de los años 40 del siglo XX, inició la Marcha al Oriente para desarrollar la agropecuaria boliviana.

MNR revolucionario, la empresa estatal de las minas, la COMIBOL, entró en una crisis severa por falta de inversión y de desarrollo tecnológico.

El extremo de todo, del extractivismo, sucedió con el gobierno de Evo Morales, este se benefició con el más grande *boom* de las materias primas que existió en Bolivia, pero esos ingentes caudales de excedentes no fueron reinvertidos, el sector de hidrocarburos no hizo inversión de exploración y, además, no se invirtió de manera sensata en otros sectores, por ello, el *boom* fue malgastado y el país quedó sumido en la misma miseria que lo caracterizó en las décadas anteriores. En el gobierno de Morales se pasó a depender mucho más de la exportación de materias primas, si antes ella significaba un 70% de la generación de divisas, con Morales esa cifra pasó al 80%, junto a una cada vez mayor informalización de la economía. En 2023 el presidente Arce manifestó que, en materia de producción de gas, hemos tocado fondo, eso sucedió porque durante el gobierno de Morales, cuyo ministro de Economía fue el actual presidente, no se reinvertió en exploración de hidrocarburos.

A los problemas señalados se debe sumar el centralismo, el país, a lo largo de su historia, tiene la marca del centralismo estatal, que es más fuerte cuando los gobiernos son revolucionarios, o cuando algunos de ellos poseen una mayoría parlamentaria que les garantiza los dos tercios en el Parlamento. El MNR revolucionario de 1952 tenía en su ADN político la marca del centralismo, y aunque en los años 90 del siglo XX aprobó la Ley de Descentralización para el nivel departamental, el centralismo subsistió. No obstante, la Ley de Participación Popular aprobada en 1994 fue un hito muy importante, pues realmente descentralizó el nivel municipal. Los pocos avances en descentralización han tenido un retroceso muy grande desde la llegada del MAS al poder, ese partido ha recentralizado al extremo el Estado boliviano; ello sucede de manera paradójica con la aprobación, en 2009, de la nueva Constitución, que habla de la existencia de un Estado plurinacional y autonómico.

La Guerra del Chaco y la Revolución de 1952 han influido mucho en la cultura política del país, dicha revolución, no hay duda, es el acto político y social más importante del siglo XX ya que marcó hasta el presente al país; la nacionalización de las minas, la

reforma agraria o el voto universal, son reformas que dejan atrás al Estado oligárquico e inician la creación de un nuevo país, más democrático. El repaso de esta historia posibilita entender cómo, en el ADN político de los bolivianos, está profundamente arraigada la ideología del nacionalismo revolucionario. No son los indigenismos, tampoco las ideas socialistas del marxismo, ni menos aún los códigos de la democracia representativa los que están dentro de la médula de la conducta política de los habitantes de este país. Las ideas de la nacionalización de los recursos naturales, en especial de los hidrocarburos, del antiimperialismo, la política en las calles, el hiperpresidencialismo, el maximalismo en la política, la idea corporativa del poder, la lógica del rentismo, la ilusión fallida de la industrialización, la organización política entendida más como movimiento que como partido, el rol clave del caudillo son conductas, costumbres políticas, con las cuales nos ha marcado y sigue marcando el nacionalismo revolucionario. La Revolución y el nacionalismo revolucionario crearon la idolatría por el Estado, o el estatalismo, todo dentro del Estado, nada fuera de él, justamente por eso generaron la cultura del paternalismo estatal que pervive hoy. La idea que privilegia el antiimperialismo le hizo y le hace mucho daño a Bolivia, pues genera un sentimiento contra la inversión extranjera cuando, como se sabe, en un mundo globalizado las naciones deben aceptar la entrada de capitales extranjeros, absorber las tecnologías de punta de las grandes empresas internacionales. Sin embargo, por una ideologización exagerada, el país se cierra y no admite con facilidad la inversión extranjera. Más todavía, y para peor, se ha creado una mentalidad antiempresarial que da lugar a entender que todos los empresarios son unos expoliadores y se les critique que busquen ganancia en sus actividades. Con ideas de eso tipo lo único que reclaman los sectores populares es la ampliación del Estado empresario, a pesar de saber que en décadas y *décadas la actividad económica estatal* no nos ha llevado al desarrollo. Si queremos un futuro donde haya desarrollo, hay que extirpar esa idea antiimperialista y la mentalidad antiempresarial que existe en los movimientos sociales de Bolivia.

6. Corolario

El reto de avanzar a un desarrollo democrático en Bolivia tiene muchos desafíos, los más de ellos fueron planteados a lo largo del texto, pero hay otros que nos exigen mirar al mundo con más detenimiento, conocer qué hacen los países que avanzan con rapidez, escuchar cómo piensan las grandes instituciones internacionales como, por ejemplo, la Unión Europea (UE). Tanto la UE como varios países desarrollados se han puesto retos coincidentes en tres campos:

- El primero es avanzar lo más posible en la transformación digital (Toranzo, 2020b) y usar a fondo las facilidades de la inteligencia artificial, todo esto implica dar una importancia de primer orden a la transformación tecnológica y a la innovación para el desarrollo. Al cavilar en estos temas no dudan de la importancia de las matemáticas, la biología y del lenguaje como elementos esenciales de la educación del futuro; reflexionan que los saltos educativos en esos temas no sólo deben producirse en el ámbito formal de la educación, sino en todos los espacios sociales.
- Segundo, sin dar orden de prelación, ubican al medio ambiente, a su cuidado, a la educación en esas áreas, enfatizando los temas del calentamiento global y del cambio climático que ponen a las temáticas del agua y las energías renovables como las de más importancia mundial; postulan que son vitales las reflexiones y políticas públicas relativas a la economía y las finanzas verdes.
- Tercero, una de las prioridades para enfocar el desarrollo democrático lo ubican en las cuestiones de género, la incorporación de las mujeres a los retos del desarrollo, la inclusión financiera de las mismas, la eliminación de las discriminaciones de género en los ámbitos económicos, políticos y culturales, la lucha contra la violencia ejercida contra ellas en todos los ámbitos, enfatizando que el desarrollo, para ser democrático, debe tener rostro de mujer.

Internamente planteamos que si bien Bolivia reconoció legalmente, hace mucho tiempo, la pluriethnicidad y la pluriculturalidad,

no ha dado pasos firmes para avanzar hacia la interculturalidad, y este es un desafío democrático de la más alta importancia pues implica la convivencia y diálogo democrático entre todos los bolivianos, entre todas las culturas existentes en el país, pues todos, mestizo e indígenas, campesinos rurales y pobladores urbanos, cambas y collas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos deben ser parte de la creación de una nueva visión de país compartida, eliminando los vicios de la monoculturalidad y el andinocentrismo que impide la expansión de la democracia. Por otra parte, precisamos una cultura política que adscriba la democracia representativa, el respeto del estado de derecho, la vigencia de los *check and balances*, que respete las libertades democráticas, dejando atrás los autoritarismos del corporativismo y la tendencia a las autocracias.

7. Bibliografía

Ardaya, Gloria

2021 “¿Hay democracia para las mujeres? Avances y tensiones 1982-2020”. En *Un amor desenfrenado por la libertad. Antología de la historia política de Bolivia (1825-2020)*. Tomo II: 1952-2020. Lupe Cajías e Iván Omar Velásquez-Castellanos (coords.). La Paz: Konrad Adenauer Stiftung. 275-304.

Calderón, Fernando; Szmulker, Alicia

2000 *La política en las calles. Política, urbanización y desarrollo*. La Paz: Plural editores.

Contreras, Manuel

2021 “Políticas y reformas educativas en Bolivia, 1900-2020”. En *Un amor desenfrenado por la libertad. Antología de la historia política de Bolivia (1825-2020)*. Tomo II: 1952-2020. Lupe Cajías e Iván Omar Velásquez-Castellanos (coords.). La Paz: Konrad Adenauer Stiftung. 115-144.

Fundación Construir

2022 *Informe sobre el estado de la justicia en Bolivia (2021)*. La Paz: Fundación Construir / Plataforma ciudadana por el acceso a la justicia y los derechos humanos.

- Laserna, Roberto; Gordillo, José; Komadina, Jorge
2011 *La trampa del rentismo... y cómo salir de ella*. La Paz: Fundación Milenio.
- Lazarte, Jorge
1993 *Certezas e incertidumbres de la democracia*. La Paz: ILDIS.
- Morales, Juan Antonio
2012 *La política económica boliviana 1982-2010*. La Paz: Plural editores / UCB.
- Pareja, Franklin
2021 “Movimientos sociales. Viacrucis entre la República y el Estado plurinacional”. En *Un amor desenfrenado por la libertad. Antología de la historia política de Bolivia (1825-2020)*. Tomo II: 1952-2020. Lupe Cajías e Iván Omar Velásquez-Castellanos (coords.). La Paz: Konrad Adenauer Stiftung. 349-394.
- Sweezy Paul; Dobb, Maurice
1982 *La transición del feudalismo al capitalismo*. México: FCE.
- Tassi, Nico; Medeiros, Carmen; Carmona, Antonio; Ferruffino, Giovana
2013 *Hacer plata sin plata. El desborde de los comerciantes populares en Bolivia*. La Paz: PIEB.
- Toranzo, Carlos
2009 “Repensando el mestizaje en Bolivia”. En *¿Nación o nación(es) bolivianas. Institucionalidad para nosotros mismos*. Gonzalo Rojas (coord.). La Paz: CIDES-UMSA. 45-61.
- Toranzo, Carlos
2017 “Elites económicas en los siglos XX y XXI”. En *Un siglo de economía en Bolivia (1900-2015). Tópicos de historia económica*. Iván Omar Velásquez-Castellón y Napoleón Pacheco (coords.). La Paz: Konrad Adenauer Stiftung. 469-506.
- Toranzo, Carlos
2020a “Burguesías cholas y capitalismo boliviano”. *Journal de Comunicación Social*, No. 10. UCB.
- Toranzo, Carlos
2020b *Coronavirus: ¿Cambio de época?* Mimeo.

Toranzo, Carlos

2021 “Dos siglos de política, avances y problemas. Prospectiva”. En *Un amor desenfrenado por la libertad. Antología de la historia política de Bolivia (1825-2020)*. Tomo II: 1952-2020. Lupe Cajías e Iván Omar Velásquez-Castellanos (coords.). La Paz: Konrad Adenauer Stiftung. 583-611.

Valenzuela Feijóo, José

1990 *¿Qué es un modelo de acumulación?* México: Facultad de Economía, UNAM.

Wanderley, Fernanda (coord.)

2011 *El desarrollo en cuestión: reflexiones desde América Latina*. La Paz: CIDES-UMSA / Oxfam.

Bolivia 2023: modelos de desarrollo en la práctica

Roger Cortez Hurtado¹

Resumen

Se escrutan, en este artículo, rasgos principales del modelo de desarrollo vigente, con su estructura de rezago productivo y tecnológico que mantienen a nuestro país en situación de crónicas y duras desventajas, que se contraponen a posibilidades de superarlo, gestadas al margen de organizaciones políticas e ideólogos.

Se trata de ver más allá de las discusiones que se concentran y agotan en la consideración del déficit, las reservas internacionales de divisas, las tasas del producto bruto, mientras se cierran firmemente los ojos ante cuestiones de fondo como los cambios de matriz energética y productiva o la forma de encarar la crisis ambiental, capaz de terminar con la humanidad y la vida toda en el planeta (IPCC, 2023: 7).

¹ Es investigador, docente y analista de temas sociales, económicos, ambientales, políticos, de comunicación, participación y control social. Director de la red de investigadores del Instituto Alternativo desde 2012. Miembro del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles desde 2006. Docente universitario y docente de posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y otras desde 1983. Ha trabajado en periodismo noticioso, investigativo y de interpretación; producción televisiva y radial; y es columnista de *El Deber*, *Página Siete*, *Los Tiempos* y *La Prensa*, además de corresponsal extranjero.

Se parte del supuesto de que las fallas del modelo vigente han conducido a un punto de quiebre a su motor político y social, en tanto su ideología básica, el desarrollismo, se desnuda como una de las condiciones principales de su inviabilidad. Se toma como evidencia empírica de estas apreciaciones el deterioro general y sostenido de los indicadores económicos y sociales de los últimos ocho años.

Frente a ese horizonte se observa que, del seno mismo de la sociedad, con prescindencia del sistema de partidos, sindicatos, grupos corporativos y, en general, del sistema formal e informal de representación y mediación política, están en marcha respuestas espontáneas y autónomas, esenciales para cambiar de rumbo y modelo.

Se presentan cuatro casos concretos de iniciativas que pueden perfilarse como referencias de un *modelo alternativo de desarrollo*; partiendo, en un caso, de experiencia vivida y compartida y, en los otros dos, de testimonios obtenidos mediante entrevistas y bibliografía, que se contrastan con un cuarto caso extremo de desarrollismo, propio del modelo vigente, sobre la base de una investigación inédita del autor.

1. Extractivismo y desarrollismo

La escala de valores de un sistema globalmente hegemónico, que se funda en, y desvive por, el crecimiento, la acumulación y el consumo infinitos, palpita en casi cada individuo del planeta y en las comunidades, de las más pequeñas a las gigantescas: pueblos, países, bloques económicos.

No existe, al menos explícitamente, un certamen mundial –algo como un Miss/Mr. Universo– donde cada potencia exhiba el abultamiento anual de su producto interno, la rotundidad de sus avances tecnológicos o lo apabullante de su consumo de cualquier índole. Claro que tal torneo sería redundante, porque vivimos sumergidos en un mar de mensajes difundidos por medios y redes que nos saturan con las décimas y puntos que cada uno, o al menos los mayores, acumula, los que retrocede o con los que sueña, con la misma asiduidad con que se nos informa de los matrimonios, divorcios o chisme cualquiera de *estrellas*, *socialites...* o *influencers!*

Quien, viviendo en esta complicada globalización, no acumule, expanda y concentre al máximo capital –en cualquiera de sus formas–, tecnología de última generación, fuerza de trabajo calificada, y obligadamente camaleónica, y posesiones de casi cualquier naturaleza es considerado un perdedor, un desdichado, o más comúnmente, un pobre.

La globalización, entendida como etapa actual del capitalismo (“*tecnocapitalismo*”, “*imperio del capital financiero*”), y su ideología dominante, el neoliberalismo, nos incitan vehementemente a utilizar cualquier recurso para crecer, “**desarrollarnos**”, (hipertrofiarnos si podemos), *sin medida ni clemencia*.

Ahora, según donde uno se encuentre, el desarrollismo, en tanto insaciable ansia de adelantar en riqueza, poder, control de la naturaleza y la sociedad, compitiendo implacablemente con “los demás”, presenta distintas caras, de tal modo que, en los países periféricos (“en desarrollo, de mediano desarrollo, ingresos medios”, o como se prefiera), se asienta característicamente una dependencia imperativa del usufructo directo de recursos naturales.²

Esta particularidad se designa, con cada vez mayor frecuencia, como **extractivismo**, definido como “*la explotación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o la alta intensidad, destinados en su mayor proporción a exportarse como materia prima, con escaso o ningún procesamiento industrial*” (Gudynas, 2018: 62, las cursivas son mías).

La segunda parte de la definición desliza la idea de que extracción e industrialización tienden a contraponerse, incluso como antagonicos, prestándose a confusiones o limitando el rango de utilidad del

2 El malestar económico de las economías capitalistas no se restringe a la periferia, ni al extractivismo. El centro imperial es presa de su propio malestar, tal como expresa Wolfgang Munchau, periodista económico: “Prácticamente todos nuestros regímenes de política económica se basan en los modelos macroeconómicos ortodoxos [...]. La independencia de los bancos centrales, los objetivos de inflación y las reglas fiscales deben su existencia a ideas profundamente arraigadas en esos modelos. El problema es que estos modelos dejaron de funcionar hace tiempo”. Los nuevos equilibrios de fuerza mundiales pesan decisivamente en este cuadro, como puede verse con el ascenso de China que actualmente aventaja a EE. UU. en 33 de 47 áreas tecnológicas clave, según el Australian Strategic Policy Institute. Ver: <https://legrandcontinent.eu/es/2023/04/06/china-aventaja-a-estados-unidos-en-la-investigacion-de-tecnologias-criticas/>

concepto porque, por lo menos en América Latina, el *extractivismo*, hace mucho, está asociado con un obsesivo **anhelo**, planes, proyectos e iniciativas *de industrialización*; concebida, en la mayoría de casos, en esquemas propios de finales del siglo XIX o inicios del XX.

Nada raro, por lo demás, ya que la industrialización es casi sinónimo universal de **desarrollo** (y demasiado frecuentemente de **progreso**, para gran parte de las ideologías *autodenominadas progresistas*).

Y, quizá, por encima de todo, las industrializaciones suelen asociarse a mucha obra pública, gran inversión y enormes oportunidades de sustraer recursos para caudillos, séquitos y partidos enteros, consolidando la inclinación de depredar arcas públicas para beneficio de núcleos privilegiados.

La intimidad de imaginarios y prácticas de ambas nociones las ha hecho inseparables, por lo que resulta más útil, y fiel a los hechos, entender al *extractivismo* como un componente del **desarrollismo** (en tanto práctica e ideología), dado que el desarrollismo amalgama *una visión industrializante* (usualmente **obsoleta**) que reposa **sobre un cimiento extractivista**.

Ayuda bastante a entender esta asociación la célebre frase del venezolano Uslar Pietri, quien, en 1936, exhortaba a “sembrar petróleo”, aludiendo a la necesidad de emplear los recursos de la extracción en inversiones industriales (y sociales), como lo han citado y aclarado políticos y presidentes de toda América Latina, millones de veces, desde ese entonces.

Sin alejarnos demasiado, el centro del planteamiento del *Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP)* del actual régimen boliviano pretende, infructuosamente, *industrializar* al país con los recursos obtenidos de la intensiva explotación de recursos naturales; siguiendo fiel e imperturbable, los lineamientos centrales del **Plan Bohan³ ochenta años después** de su enunciación.

3 Oficialmente, “Misión Económica de los Estados Unidos a Bolivia”, fue entregado en 1943 por el Gobierno de Estados Unidos al boliviano en una suerte de retribución por haberse declarado a favor de los Aliados contra el Eje y hacer un importante aporte económico comerciando a bajo precio varios minerales, en especial el estaño, de valor estratégico en la contienda. “El precio que se paga

El Plan, dirigido por el funcionario del US State Department, Merwin Bohan, definió, entre 1942 y 1943, unas líneas maestras “para desarrollar la economía boliviana”, con recursos obtenidos de la tradicional extracción y comercialización de minerales que dominó la economía boliviana desde la época colonial española. Con ese propósito, propone como tareas centrales *la marcha al oriente boliviano*, promoviendo migraciones de pobladores de los Andes a las tierras bajas del este, como mano de obra barata; la construcción de vías camineras y ferroviarias con la misma dirección; la intensificación de la explotación de recursos naturales, acelerando la extracción; y la incursión en la industrialización básica de hidrocarburos y producción agropecuaria.⁴

Los planteamientos sobre vías de comunicación y avances industrializadores concordaban plenamente con algunas de las reivindicaciones planteadas por la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz en 1904, así como por otros sectores de diferentes regiones del país. Tales antecedentes explican cómo el Plan pasó a ser la médula del modelo económico *único*, ejercitado en Bolivia desde ese entonces hasta ahora. Su diseño calza perfectamente con el *sentido común* desarrollista, implantado en la sociedad y en el Estado, que lo respiran y viven como parte de la *comprensión moderna* –en el sentido de *economía de mercado*– que compartimos, en nuestra propia versión nacional, con el resto del planeta.⁵

ahora por el estaño boliviano es el más bajo en los últimos 25 años. La carta informativa del Banco Minero correspondiente a abril (de 1942) trae la siguiente demostración numérica obtenida de la revista *Tin [Estaño]*: ‘Siendo el precio de Libras 275 papel igual a Libras 139 oro, inferior al precio oro promedio en los precedentes 25 años en un 21.5%’ (Lora, 1952).

- 4 “Construcción de un ingenio para azúcar y alcohol, un ingenio arrocerero con capacidad anual de 10.000 toneladas, una planta de envase de productos ganaderos” p 39 Poder Santa Cruz”; “...el Plan de Desarrollo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para abrir nuevos pozos e instalar las refinerías de Cochabamba y Sucre” (*id.*: 41)
- 5 La evolución mundial de ciudades y la mayor parte de las diversas tendencias arquitectónicas y urbanísticas, siguiendo patrones y esquemas originados en Estados Unidos, es probablemente la expresión gráfica más fiel y cabal de las más típicas y constantes representaciones del contenido y significado de las nociones prevalecientes sobre desarrollo. Se las puede encontrar igual en Shanghái que

Las duras y a veces sangrientas luchas que, antes y después de enunciado el Plan, han pautado nuestros cambios económicos, sociales y democráticos nunca han cuestionado el esquema de **extraer para sobrevivir, desarrollar** y, desde luego, **industrializar**, sino **cómo hacerlo y quién controlaría** políticamente el proceso; o, de otra manera, si la ruta preferencial debía privilegiar al mercado o al Estado.

La ideología nacionalista revolucionaria, conductora de la Revolución de 1952, de la que nació el campesinado,⁶ hizo explícita y raigalmente suyos los lineamientos desarrollistas, inoculándolos en todo el espectro político e ideológico con una influencia que persiste, básicamente incuestionada, hasta hoy.

Con mayores o menores matices, esta hegemonía se basa en la creencia de que la línea temporal del pasado al futuro apunta hacia un horizonte de desarrollo económico más o menos homogéneo, bajo un régimen político que podría ser capitalista, *postcapitalista*, “socialista”, o alguna variante intermedia, de acuerdo a las preferencias políticas de cada actor o sujeto.

Sus denominadores comunes son una **industrialización y ambiente tecnológico transferido** (por venta, alquiler, cesión o apropiación) por las potencias capitalistas centrales, y un *avance del bienestar* medido en términos de posesiones materiales y acceso a servicios, “irremediablemente”⁷ siempre inferior a los de las potencias occidentales, pero siguiendo sin vacilación su huella. Las visiones autodenominadas socialistas dan por hecho que esto ocurrirá con la extinción del capitalismo, pero suponen que una

en Riad, La Paz o Lagos, y, muchas veces subrepticamente, en ideologías tan contrapuestas como pueden ser el marxismo-leninismo ortodoxo, el salafismo, el ultraliberalismo o tendencias indigenistas aymaras.

- 6 Clase social mayoritaria de Bolivia, con base etnocultural quechua-aymara. Dicha revolución colocó las bases de la modernización capitalista del país y el real inicio de la vida democrática nacional que se abrió para las mujeres, indígenas y campesinos, todos previamente discriminados e ignorados en cuanto al ejercicio de libertades, derechos, garantías civiles y participación política.
- 7 Allá donde los más han fracasado, un puñado de experiencias asiáticas (Corea del Sur, Singapur, por ejemplo) lo han conseguido, igualando y sobrepasando, incluso, marcas de los países centrales.

sociedad comunista, donde: “*De cada cual, según sus capacidades; a cada quien, según sus necesidades*”, sólo se alcanzará en un futuro brumoso, pero siempre a través de un desarrollo acumulativo⁸ (con sus respectivos saltos cualitativos).

2. I+D y producción de alimentos sanos

Mientras nuestras élites políticas y económicas se hallan embebidas en sus pugnas, nuestro planeta, cada vez más candente, presenta, especialmente después de la pandemia de SARS Covid 19, espasmos crecientes por abruptas oscilaciones del clima y las necesidades insatisfechas de alimentos⁹ y cambios en la manera en cómo estos se producen, distribuyen y consumen.

Vecinos nuestros como Argentina, Brasil, y más recientemente Paraguay, producen oleaginosas, soya principalmente, y granos (también carne bovina) en cantidades tan grandes que los hacen parte fundamental de sus ingresos nacionales. Los tres son parte del reducido grupo de países¹⁰ que emplean, indiscriminadamente y

8 Tendencias *pachamámicas*, que anidan en el Movimiento al Socialismo (MAS), tienen una visión diferente, planteando un “buen vivir” que reniega de la idea de “desarrollo”, recuperando un bucólico comunitarismo que pareció exhibir algún vigor inicial (2006-2007), ahora diluido completamente al mantener estáticos y rudimentarios sus planteamientos e indiferenciarse de las prácticas cotidianas y discurso de las tendencias dominantes.

9 Diversos estudios coinciden en que el nuevo ascenso del hambre (795 millones de personas) obedece, más que a la escasez propiamente dicha, a las modalidades dominantes de comercialización y distribución y al alto nivel de desperdicio de comida. Ver <https://www.bread.org/es/que-causa-el-hambre/>

10 Se trata de 29 países, incluidos 19 países “en desarrollo”, donde se involucra a 18 millones de agricultores que plantaron más de 190 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en 2019, según datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA), una ONG que promueve el uso de organismos genéticamente modificados (OGM). Los mayores productores (EE. UU., Canadá, India, Brasil, Argentina) encabezan al grupo. En Europa han prohibido el uso de OGM: Alemania, Francia, Austria, Bulgaria, Croacia, Italia, Chipre, Dinamarca, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia y Eslovenia. Rusia, que es un gran productor,

han “desregulado” de manera total, semillas transgénicas aptas para soportar sequías y plagas, pero objetadas principalmente por el paquete tecnológico que requieren, basado en poderosos agrotóxicos y fertilizantes químicos que, a la larga, acaban con la fertilidad natural de los suelos y alientan, mediante fenómenos de resistencia, la aparición de nuevas y más peligrosas plagas.¹¹

Son probablemente igual o más importantes las objeciones al agronegocio basado en organismos genéticamente modificados (OGM),¹² en la **pérdida de biodiversidad** (sólo se cultivan las semillas que venden los proveedores del paquete tecnológico y las demás se van extinguiendo, por su no uso), en el **menoscabo de la soberanía y seguridad alimentaria** (quedan disponibles sólo los OGM patentados, por los cuales hay que pagar en cada siembra) y en la **incertidumbre sobre sus efectos** a largo plazo sobre la salud de animales y personas.¹³

El negocio de los OGM es uno de los sostenes principales del desarrollismo a escala mundial y las empresas que producen semillas, maquinaria para los cultivos y agroquímicos componen un poderoso conglomerado de presión, con participación accionaria central de las “gestoras de fondos de inversión” (Black Rock, Vanguard, Fidelity, entre los principales) que pugnan por imponerlos en el planeta.

En todos los escenarios, el crecimiento demográfico, el calentamiento global y la crisis ambiental, con sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos, incrementarán la demanda de alimentos. Una gran producción de alimentos **sanos** y sus productos industrializados puede convertirse en un eslabón estratégico de la **transformación productiva** de un nuevo modelo de desarrollo de nuestro país.

también los tiene vetados (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales).

11 Ver <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/26576/riesgos.pdf>; <https://www.fontagro.org/new/proyectos/reduccion-de-plaguicidas-en-arroz-y-frijol/es>

12 La *edición genética* puede imponerse como nueva tendencia tecnológica en la producción de semillas, dejando atrás, como obsoleto, el uso de las actuales y los agroquímicos que requieren.

13 Ver, <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31737.pdf>

En Bolivia, al mismo tiempo que hemos ido achicando drásticamente la capacidad de cultivar nuestros alimentos básicos que ahora importamos en su mayoría (Castañón en ONU-Habitat, 2021), los transgénicos se han impuesto como productos estrella de la exportación. Así ha ocurrido por la rápida desaparición de nuestra inicial ventaja comparativa, que era la fertilidad natural de los suelos. En esas condiciones ha nacido una potente asociación de intereses entre los grandes capitales de la agroindustria y los pequeños y medianos productores. Como consecuencia, **“la tasa de deforestación, por la producción de soya en Bolivia, [es] siete veces mayor que la de Brasil”**¹⁴ y nuestro país es el **tercer talador y quemador de bosques más activo del planeta**.

El agronegocio, como parte nodal del modelo desarrollista boliviano vigente, incluye un módulo industrial que produce harina, torta y aceite de oleaginosas; además está ampliando su capacidad de procesar productos cárnicos. Las ventajas de los bajos costos de la tierra y de la mano de obra,¹⁵ los subsidios a los carburantes y la práctica exención tributaria explican que haya pasado a ser el dínamo central de la economía departamental cruceña, generando, mediante la amplia red de actividades de apoyo y servicios que demanda, una importante cantidad de empleos y “movimiento económico”, pero con un costo socioambiental excesivo que está ampliando la vulnerabilidad del país al cambio climático.¹⁶

El enigma económico financiero que rodea a esta actividad radica en cómo puede mantenerse y expandirse con una productividad 40% a 50% inferior a la de Brasil o Argentina, operando con elevados costos de transporte por los más de mil kilómetros que nos separan de

14 Según el Informe Trase Insights, citado por *El Deber*: https://eldeber.com.bo/pais/hasta-2022-la-chiquitania-perdio-el-30-de-su-cobertura-boscosa_338618 (consultado 05.09.23). También <https://es.insightcrime.org/wp-content/uploads/2022/11/Amazonia-Saqueada-ES-InSight-Crime-Igarape%CC%81.pdf> (consultado 05.09.23).

15 Esto, referido al conjunto del sector laboral cruceño y boliviano, porque el agronegocio es intensivo en capital, con un nivel de mecanización muy alto y escasa participación de trabajadores.

16 Ver, https://eldeber.com.bo/edicion-impresia/el-85-de-los-municipios-del-pais-sufren-por-la-sequia-potosi-es-un-caso-extremo_339515

los puertos. ¿Cómo lo hace? ¿Algún secreto o innovación tecnológica poco difundida?;¹⁷ o ¿los vínculos se relacionan con el muy dinámico crecimiento de la frontera y **el mercado clandestino de tierras, para la agroganadería?**

Tecnologías sostenibles

El Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS) es la **única institución** civil boliviana dedicada a la investigación y difusión de tecnologías limpias, reconocida como tal, durante varios años, por el Global Go To Think Tank Index Report de la Universidad de Pennsylvania.

Nacido a finales del siglo XX, el CPTS surge de la concurrencia de dos programas de cooperación orientados a mejorar la eficiencia energética e hídrica de la industria y asesorarla en optimizar, ambiental y productivamente, sus procesos.

El CPTS también es punto de reencuentro de varios de los jóvenes profesionales doctorados en Química, Física e ingenieros que crearon INQUIBOL, un exitoso pero fugaz emprendimiento industrial que producía con notable éxito diversos productos y reactivos. La hiperinflación de los años 80 y la falta de experiencia empresarial frustraron su continuidad cuando había crecido considerablemente.

Carlos Arze Landívar y Antonio Ruiz Michel fusionaron los programas de producción limpia mencionados y Cesín Curi Sabja

17 Es urgente e imprescindible develarlo porque, después de ostentosos choques y desinteligencias con el gobierno actual, los grandes agroempresarios han logrado, en las últimas semanas, sustantivos entendimientos con el régimen, que se apresta a autorizar a la brevedad “eventos” (introducción de nuevas variedades de transgénicos en maíz, trigo y otros cultivos). Ver, <https://www.la-razon.com/economia/2023/09/05/ibce%e2%80%88gobierno-agenda-uso-de-biotecnologia-y-cupos-de-exportacion/>. Una posible explicación puede radicar en que empresas argentinas, por ejemplo, prefieran cultivar y completar sus cupos y lotes de exportación en Bolivia –pese a la baja productividad y costos de transporte–, ya que aquí no enfrentan tasas impositivas y retenciones. De ese modo se puede equilibrar costos y cumplir contratos con los compradores internacionales.

se integró, como lo haría también Justo Zapata y un joven grupo con Juan Cristóbal Birbuet, economista, Juan Carlos Guzmán, experto en energía, Cecilia Espinosa, Patricia Durán y varios otros que conformaron un equipo descollante.

Una de sus primeras tareas fue diagnosticar la situación del nivel artesanal en que se había estancado el beneficiado y la exportación de quinua, donde encontraron como primer problema el rezago tecnológico y, después de un análisis profundo, el segundo consistente en estrangulamientos estructurales de la producción de materia prima.

A la cabeza de Curi, vieron que, si se resolvían estas cuestiones, Bolivia podría exportar mucha más quinua orgánica de lo que nunca ha logrado y productos industrializados que se obtienen de ella, insuperables en calidad por ventajas climáticas excepcionales del Altiplano del país, con un valor igual o superior al que proveía el gas natural de petróleo en el momento en que su producción y precio alcanzaron topes históricos (2006 a 2014).

A partir de esa idea básica y mientras diseñaban y construían una primera planta industrial de procesamiento de quinua, fueron desarrollando ideas e iniciativas que han llegado a configurar un auténtico **Programa de Transformación Productiva del Occidente Boliviano**. Sus componentes básicos son: producir anualmente, con tecnología¹⁸ propia –desarrollada por el CPTS entre 2001 y 2017–, un volumen mínimo de **un millón doscientas cincuenta mil toneladas métricas de quinua real orgánica**;¹⁹ combinar esta producción con una **ampliación sistemática del hato de camélidos**, con la **construcción de granjas solares** para producción de energía fotovoltaica y con el cambio de cultivos en la tierra

18 El ascenso vertiginoso de nuestras exportaciones de quinua se encuentra estrechamente vinculado a los avances tecnológicos, inventados y adaptados por Cesin Curi y su equipo en el beneficiado y limpieza de la quinua. A partir del año 2013 –“Año mundial de la quinua” de NNUU–, a instancias del Gobierno boliviano, el Perú, con una superficie apta para el cultivo menor que la nuestra, nos desplazó del primer lugar como exportadores gracias a importantes inversiones y estímulos estatales en ese país que no se han dado en Bolivia.

19 La producción *mundial total* de un total de 88 países que producen actualmente quinua ascendió, en 2022, a 176.000 TM. (<https://www.tridge.com/es/intelligences/quinoa>).

dedicada tradicionalmente a la quinua, sustituyéndola por otros alimentos andinos²⁰ en beneficio de nuestra seguridad y soberanía alimentaria.

Se trata de convertir una zona empobrecida, en un área donde más de cuatrocientas comunidades campesinas son propietarias por defecto, según la Constitución vigente, de una buena parte de ocho millones de hectáreas de **tierras áridas, baldías y sin ningún uso económico actual**, en comunidades prósperas, **disminuyendo** las corrientes migratorias vigentes y, así, **la presión sobre bosques y cuencas fluviales**, en general las tierras bajas, con un nítido aporte medioambiental como de reequilibrio económico²¹ y de distribución de la población nacional.

La tecnología del CPTS, experimentada y desarrollada principalmente en la comunidad Ayamaya de la provincia Sica Sica, incluye la **preparación** y retexturización **de la tierra** (suelos de arcilla y arena, principalmente); el uso de semillas de quinua encapsulada en “grageas” que contienen humedad y nutrientes suficientes para que la semilla germine y crezca hasta unos 10 cm, sin necesidad de ningún otro aporte; la fumigación con enmiendas líquidas orgánicas (ELO), es decir, fertilizantes que contienen minerales, micronutrientes y todo lo necesario para que las plantas alcancen el doble de productividad que ahora tienen, incluso en las zonas tradicionales más fértiles (unos 600 kg/ha vs. 4-6 TM en Perú).

Los prototipos de la maquinaria para cultivar cada unidad de producción industrial (UPI), con una superficie de **5.000 ha** (50

20 La zona tradicional (intersalar) está sobreexplotada y en los momentos en que los precios de la quinua se incrementan se tiende a utilizar pastizales, bofedales y humedales con alto riesgo de desecar amplias zonas y, con ello, que la quinua boliviana sea vetada en Europa y otros mercados como un producto depredador y agresor del medioambiente.

21 Cada UPI de 5.000 ha utiliza unas 40 personas, más unas 10 en cada planta de beneficiado e industrialización de quinua, debido a su alta mecanización y automatización. Pero el proyecto genera una enorme cantidad de empleo indirecto por sus múltiples requerimientos en transporte, construcción de infraestructura y mantenimiento de todas las áreas productivas (energía fotovoltaica; ganadería; industrialización textil, cárnica; nuevos cultivos de nuevos productos; formación de personal; metalmecánica para construcción de equipos y maquinarias, etc., etc.).

km²), han sido construidos de manera que, en 2017, el CPTS y las seis principales empresas beneficiadoras y exportadoras de quinua del país se coaligaron para llevar a cabo la fase de validación de equipos (sembradora, trilladora, cosechadora, secador solar, etc.), invirtiendo cerca de dos millones de dólares americanos aportados por los participantes. Problemas con el cronograma de desembolsos, técnicos y meteorológicos condujeron a que la validación, indispensable para iniciar las fases de inversión y explotación comercial, siga pendiente.

La **transformación productiva** planteada por el CPTS se basa en y sostiene el funcionamiento de una auténtica **economía plural**, en la que pactan inversores, comunidades campesinas, tecnólogos y el Estado. La intervención estatal se centra en viabilizar los trámites de titulación comunitaria de las tierras desérticas requeridas, construcción de vías de acceso en el área de la cordillera Occidental, fronteriza con Perú y Chile, y mantener un sistema de garantías jurídicas de contratos entre los participantes.

Al lado del CPTS, las empresas participantes han desarrollado componentes como el biocontrol de plagas y otros bioinsumos provistos por la Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos (PROINPA), un equipo profesional creado e inspirado por el científico boliviano Alejandro Bonifacio.

El avance conseguido hasta ahora se ha logrado con el esfuerzo de científicos, técnicos, profesionales y empresarios bolivianos, e inicialmente, con el respaldo de varios países que en los últimos años han replegado sus mecanismos e instituciones de ayuda al país.

Realizada la validación (en tres ciclos agrícolas y con una inversión que ronda los dos millones de dólares),²² tiene una proyección y potencial infinitamente mayores que cualquier megahidroeléctrica

22 Una inversión ciertamente menor a la que se pensaba usar en el proyecto *hidroeléctrico Chepete/Bala*, o en inciertas plantas de biodiesel, en una nueva planta de urea (más de 1000 MM de dólares), de polipropileno (2000 MM de dólares) y otras similares. La de polipropileno (plástico) exhibe con transparencia la obsoleta visión industrializadora del desarrollismo que se propone fabricar plástico a contracorriente de las tendencias vigentes. Los plásticos son causantes de gran parte de la contaminación de tierra y aguas y los esfuerzos actuales se orientan a sustituirlos.

u otro de los proyectos de industrialización estatal, sin los enormes daños socioambientales que cada uno acarrea, e insertando al país en el mercado mundial, regional y nacional como un actor clave en la producción de alimentos ricos en proteína vegetal.²³

Los planteamientos, enfoque y prácticas científicas del CPTS tienen un significado de alto impacto porque la **investigación y el desarrollo** son ineludibles y decisivos en el diseño y ejecución de un modelo alternativo de desarrollo (componente básico de un nuevo proyecto nacional).

Las tareas pendientes más importantes de la propuesta de Transformación Productiva del Occidente de Bolivia, además de la validación, son la formulación de mecanismos contractuales sólidos que garanticen el buen funcionamiento de la alianza entre inversores y las comunidades propietarias de la tierra; ideas y propuestas para una gobernanza de las organizaciones comunitarias, capaces de garantizar la transparencia y el buen manejo de las utilidades comunitarias y la identificación de fuentes seguras de aprovisionamiento de algunos insumos clave para el manejo de suelos y su fertilización orgánica.

Biocontrol de plagas, fertilización orgánica y rescate tecnológico

Mientras el CPTS busca financiar la validación de su programa de transformación productiva para pasar a la fase de inversiones, Productividad Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA), una institución privada de desarrollo social con raíces que se remontan a la época de la gran sequía nacional de 1983, ha patrocinado la creación de una industria que elabora productos de control natural de plagas, en contraste y competencia con la descontrolada utilización de agrotóxicos que emplea tanto la pequeña agricultura como el paquete tecnológico de los cultivos industriales.

23 En 2022, la proporción mundial de personas vegetarianas y veganas superaría el 13% (unos 1000 millones) según Statista, mientras la prevalencia mundial promedio de la enfermedad celíaca es de 1% (cerca de 80 millones de personas). Ambos grupos requieren de alimentos con altos niveles proteínicos y sin gluten, entre los que la quinua es la mejor opción disponible. Sobre veganos y vegetarianos ver: <https://es.statista.com/estadisticas/947416/paises-en-los-que-mas-personas-siguen-dietas-sin-carne-a-nivel-mundial/>

Miguel Ángel Crespo Castro, fundador y principal impulsor de PROBIOMA, empezó a relacionarse con comunidades campesinas administrando fondos de microcrédito, experiencia que le permitió conocer las dinámicas productivas que se observan en algunos parques y reservas naturales (principalmente la del Amboró).²⁴ Autodidacta y emprendedor, verificó en su trabajo con los campesinos que bacterias, hongos y otros seres microscópicos actúan con mayor eficacia y sin causar desastres ambientales sobre diversos agentes patógenos (insectos, virus, bacterias, etc.) que afectan los cultivos, muchas veces hasta extinguirlos.

Partiendo de la observación directa y el trabajo continuo con comunidades campesinas e indígenas, ha ido acumulando un amplio conocimiento que ratifica las cada vez más vigorosas corrientes²⁵ que preconizan el **mantenimiento de la biodiversidad** y las **prácticas agrícolas regenerativas** como la verdadera cuestión crucial para enfrentar la crisis ambiental e impedir el avance arrasador del hambre.

De forma artesanal, inicialmente, y luego cada vez más sistemática y científica, observó, coleccionó, probó, cultivó y usó recursos biológicos de nuestro propio entorno para combatir diversas plagas, hasta llegar a una producción industrial que ahora combina con la elaboración de soluciones líquidas orgánicas que fertilizan los suelos, sin los efectos secundarios del uso de fertilizantes químicos empleados intensivamente.

Recorren una ruta paralela investigadores individuales como el beniano Óscar Saavedra Arteaga, quien, combinando tecnologías ancestrales andinas-moxo-amazónicas, ha conseguido triplicar rendimientos de cultivos de yuca, maíz y otros alimentos.²⁶ El enfoque y mérito particular de sus investigaciones es que recupera técnicas y

24 Su equipo jugó un papel central en el planteamiento del establecimiento de distintas áreas dentro de las reservas naturales y parques nacionales, asimilando la experiencia real y concreta de comunidades insertas en esas zonas.

25 Ver *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 2023* (FAO, FIDA, BM, OMS *et al.*). https://www.clarin.com/rural/agro-mundial-asume-logica-naturaleza_o_JVtpclxtiZ.html

26 Ver, https://inesad.edu.bo/developmentoast/2013/02/bolivias-best-interview-with-oscar-saavedra-arteaga-agroecologist/?upm_export=print

tecnologías de civilizaciones ancestrales asentadas en nuestro territorio, que obtuvieron, hace miles de años, logros no alcanzados hasta ahora por los paradigmas vigentes.

Miles de pequeños ecoagricultores bolivianos están comprometidos con estas prácticas, construyendo laboriosamente la posibilidad de un nuevo horizonte productivo que rompa con las prácticas dominantes de destrucción de la naturaleza sobre las que se asienta el vertiginoso avance de la frontera y los mercados de tierra, basados en el tráfico ilegal de tierras (AGRECOL, 2018: 36-38).

Recolección, silvicultura, bosques sanos y sostenibles

Desde al menos 1991, los trabajos de Carlos Nobre y otros científicos nos han puesto al tanto de que la Amazonía, además de “pulmón” del planeta, cumple un papel esencial transportando corrientes hídricas por encima de las copas de los árboles de la selva,²⁷ transportando un caudal mayor al del propio río Amazonas. Estos **ríos voladores** regulan el ciclo del agua en gran parte de Sudamérica y están sufriendo embates múltiples por la deforestación, la ganadería, los cultivos industriales, las hidroeléctricas (cerca de 500 proyectos sólo en la cuenca amazónica), la minería ilegal y otras actividades.²⁸

Nobre también se dedica ahora a demostrar que mantener en pie y sano al bosque puede reportar beneficios económicos mayores que la suma de todas las actividades con que se lo está diezmando.

Prácticamente sin recursos, pero imbuido de tenacidad, un científico amazónico (riberalteño para más señas), Vincent Vos Rubbens, nacido y criado en los Países Bajos, en una población rescatada del mar, trabaja en nuestra Amazonía hace años y su experiencia ratifica que los trabajos científicos que demuestran la superioridad económica de obtener productos del bosque, preservándolo y respetando los equilibrios naturales, se aplican completamente en nuestro país.

27 Ver, <https://www.yumpu.com/en/document/view/54752082/el-futuro-climatico-de-la-amazonia>

28 Ver, <https://elpais.com/america-futura/2023-07-10/carlos-nobre-el-potencial-economico-de-los-bosques-en-pie-en-la-amazonia-es-mayor-a-la-agricultura.html>

Según su experiencia y trabajo con comunidades indígenas, ONG aplicadas a la producción y la Universidad del Beni, estima que, para empezar, la simple optimización de recolección de asaí, castaña y cacao tiene todas las posibilidades de ser un poderoso animador de la economía regional; mucho más, si se integra a un abanico de cadenas productivas que incluya el ecoturismo y las actividades que lo generan y circundan. Según sus cálculos, la exportación de asaí y productos derivados de esta fruta, con un alto valor nutritivo, puede superar el valor alcanzado hasta ahora por las exportaciones de oleaginosas (soya, girasol, sorgo).

Para alcanzar esos niveles afirma que es inexcusable avanzar, a marchas forzadas, en investigación e ingeniería que permitan, mediante el uso de recursos mecanizados, viabilizar que la alta demanda de fuerza de trabajo que tienen actividades de recolección pueda superar las barreras que hoy supone lo alejado de las fuentes de recolección, debido a que el avance de la frontera agrícola y ganadera ha destruido bosque y, con él, las fuentes más cercanas y accesibles.

Recursos como el uso de drones para acceder a las altas copas donde se halla el asaí, por ejemplo, pueden acelerar la recolección y disminuir notoriamente los riesgos que se afrontan ahora.

3. Del ecoturismo a la fundación de un pilar económico nacional

La industria del turismo ha llegado a hacerse gigantesca a escala mundial y el PIB de varios países, incluso del G7, depende en una proporción importante de sus ingresos. La pandemia la afectó seriamente y, aunque ha empezado a recuperarse, esa experiencia, además de la sobreacumulación de visitantes en varios lugares (Venecia, Barcelona, como dos de muchos ejemplos), le genera una creciente animadversión en un número creciente de regiones afectadas. Puede decirse que el turismo, tal como lo conocemos, requiere de un cambio radical, desde ya porque de otro modo será cada vez más problema que solución.

Bolivia llegó en 2019 a sumar un millón de turistas, entre extranjeros y locales,²⁹ y, al igual que en todos los otros países, vivió un retroceso considerable del que hasta ahora no termina por recuperarse, especialmente en lo que había conseguido avanzar con el ecoturismo comunitario.

El Parque Nacional Madidi, reserva de clase mundial por la riqueza de biodiversidad que lo habita, ha servido de base a la más prolongada experiencia de un ecoalbergue, Chalalán, desde 1995 hasta la actualidad. Construido con financiamiento de la cooperación internacional, estuvo administrado desde su apertura hasta 1999 por una ONG, como fase de entrenamiento y preparación de la comunidad en su manejo. Desde entonces en adelante se encuentra bajo la responsabilidad de la comunidad (San José de Uchupiamona), y en ese cuarto de siglo ha conocido todos los vaivenes, impuestos por los estrangulamientos de largo plazo y los de coyuntura.

En la actualidad se contabilizan, en el área del Madidi y Pílon Lajas (ubicado en la ribera beniana del río Beni), un total de diez establecimientos comunitarios que intentan sobrevivir, o estabilizarse, después de la pandemia, las regulaciones y contrarregulaciones gubernamentales y problemas propios de la gobernanza de emprendimientos comunitarios.

Alex Vilca, joven dirigente ribereño que se hizo conocido por su participación en la lucha de resistencia de los pueblos indígenas ribereños del río Beni ante las amenazas del proyecto Chepete/Bala, evalúa que este y los tres próximos años serán decisivos para definir la sostenibilidad de estos emprendimientos.

En el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS), algunas comunidades desarrollaron actividades de ecoturismo de aventura (pesca, principalmente), pero el Gobierno las clausuró y proscribió, como represalias posteriores a las marchas indígenas VIII y IX que reclamaban el respeto de los derechos constitucionales de los pueblos del TIPNIS.

29 Los países que reciben más turistas son: Francia, 89 millones; España, 84; Estados Unidos, 79; China, 66; Italia, 65; Turquía, 51; México, 45 y Tailandia, 40.

4. Digitalización y economía de la creatividad y el conocimiento

De manera autónoma y, no pocas veces, colisionando con el manejo de fondos que hacen las instituciones estatales, se ha mencionado que en áreas clave para una nueva economía (una **bioeconomía**, para sobrevivir y sobrepasar la ebullición y el desastre ambiental), como la producción de alimentos sanos para el país y el mundo, se combinan la generación, apropiación, adaptación tecnológica con el rescate de aportes y herencia de conocimiento de nuestros pueblos originarios.

Esas mismas características se encuentran en las iniciativas y trabajos de niñas, niños, adolescente, talentos naturales que, a punta de puro ingenio y a falta de recursos y apoyos, incursionan en la robótica, la electrónica y otras áreas de avanzada, destacando en certámenes internacionales.³⁰ Estos talentos, que nadan a contramano de los aluviones de malas noticias, se manifiestan igual en las ciudades más grandes que en remotas comunidades.

La multiplicación de casos en los que hemos visto aparecer a estos genios de la robótica, la programación y otras áreas nos indica cuán importante es encarar los problemas de un sistema educativo que nada les aporta y tiende a asfixiarlos.

Por otro lado, están las noveles empresas de *software* que se abren campo en el mercado mundial, en condiciones francamente desventajosas, y sin embargo, ratifican una larga y consolidada tradición de trabajadores bolivianos, en distintos rubros –minería, construcción, mecánica, metalurgia–, que han creado y desarrollado soluciones de bajo o ningún costo, para poner en marcha, reparar e incluso crear repuestos o maquinaria, inaccesible en un determinado momento por obstáculos de toda índole.

30 Ver, <https://elcomercio.pe/tecnologia/inventos/ninas-bolivianas-crean-brao-hidraulico-345583-noticia/> ;
<https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20190914/hay-gran-potencial-produccion-software/> ;
<https://demandsolutions.iadb.org/es/speakers/detail/esteban-quispe>
<https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/nino-boliviano-construye-mano-robotica-68994>

Dentro de este campo es claro que las adversidades más constantes y difundidas son las que enfrentan inventoras, diseñadoras, científicas, tecnólogas, trabajadoras de todos los campos por el simple hecho de ser mujeres en sociedades taponadas por prejuicios sexistas y prácticas misóginas. Por ello, destacan experiencias de organizaciones como *Emprender Futuro*, creada por Allison Silva, que impulsa y alienta la presencia protagónica de mujeres en empresas tecnológicas, particularmente en los campos de información y comunicación (TIC).

Mientras se despliega la *inteligencia artificial generativa*, el *aprendizaje profundo de las máquinas*, tenemos que superar la condición de usuarios bobos y mecánicos de tecnologías capaces de alterar sustantivamente la realidad tal cual la conocemos y percibimos.

Las cuatro áreas, casos y experiencias que se han reseñado muestran la fuerza de la creatividad, ingenio, sacrificio de personas y colectivos que están construyendo, concreta y objetivamente, formas distintas de producir, ahorrar y distribuir, diferentes a las que caracterizan al modelo desarrollista –sea liberal o manejado por el Estado– que sobrevive, inmune a los cambios políticos del país.

La ruta que trazan los esfuerzos de innovación y transformación de bolivianas y bolivianos, sin intervención, respaldo o aliento estatal, no están recogidos ni representados por programas o planteamientos de cualesquiera de las organizaciones políticas –se llamen o no partidos– o corporativas que conforman el sistema de mediación y representación política, formal o informal.

En cambio, estas iniciativas son consonantes y congruentes con la pluralidad económica, el respeto a la naturaleza y la biodiversidad, la descentralización, la autonomía territorial y social que plantea nuestra Constitución, surgida del único proceso de deliberación colectiva que registra la historia de nuestro país, encarnado en el proceso constituyente que le dio origen.

Es bastante previsible que, mientras estas iniciativas de una auténtica transformación de las matrices productiva y energética no converjan y sean parte de una propuesta articulada de un nuevo modelo de desarrollo y proyecto nacional, el modelo vigente pervivirá, así sea desgarrado y agonizante, generando los mismos efectos sobre la sociedad toda.

Su enfoque y proyecciones sobre la matriz productiva, encarnado en el mayor de sus proyectos, se analizan en el título que sigue y muestran por sí solos la capacidad destructiva de la persistencia del modelo vigente.

5. Megaobras: el modelo recargado con industrialización arcaica

El desarrollismo latinoamericano se ha apropiado golosamente y de la manera más rudimentaria y menos afortunada de la recomendación maquiavélica de ganar el aprecio popular acometiendo grandes empresas (*Quid principem deceat ut egregius habetur*).

No cabe discutir cuánto se necesita de emprendimientos verdaderamente ambiciosos capaces de generar saltos cualitativos, pero ocurre que, en demasiados casos, acertar cuáles son los realmente imprescindibles es un reto que suele exceder con demasiada constancia a nuestros políticos profesionales, especialmente cuando sus sueños provienen de las matrices de industrialización más populares en sus círculos de consejeros y estrategas.

El modelo económico vigente en Bolivia, el ya señalado MSPC, ha hecho tan grandes cuanto fallidas apuestas en diversos campos, con costos exorbitantes, entre los cuales puede resultar fatigoso y excesivamente complicado distinguir qué proporción se lleva la impericia y la que toca a la acumulación originaria –y periódica– de capital, propia de los cambios de gobiernos; especialmente cuando ocurre uno tan significativo como el que se inició en 2006, con una modificación radical del bloque de poder y cambios sociales y étnicos en la composición del personal de máxima jerarquía e intermedio del Estado.

Altos costos y bajos rendimientos, ubicaciones geográficas erradas y otros problemas han costado fortunas al pueblo boliviano, tanto como un rápido agotamiento del importante ahorro interno acumulado en la primera fase del régimen vigente (2006 a 2014).

Desde la planta de urea de Bulu Bulu, con un uso promedio menor al 25% anual de su capacidad instalada, pasando por grandes edificios

de viviendas, hospitales o mercados, no equipados y ya en ruinas, hasta plantas “secadoras” de gas natural, plantas de litio, aeropuertos... en fin, la lista es demasiado extensa.³¹

Aquí se analiza el caso de una megahidroeléctrica que ha supuesto un importante gasto, no transparentado, y estudios y consultorías³² durante los últimos siete años, desde que se anunció hasta ahora, y que tendría el privilegio de ser la mayor de **todas las obras** acometidas por el Estado, con un costo anunciado que sextuplica la más cara acometida en Bolivia hasta la actualidad, pero que, si llegara a ejecutarse (lo que es muy dudoso), batiría récords continentales.

Se la examina, aunque se halle en fase proyecto, porque dibuja de manera muy clara las dimensiones y alcances del modelo de desarrollo vigente, sus proyecciones y su concepción de la realidad actual y la del futuro.

De todos los planes, realizaciones y proyectos, la idea de, por fin, subsanar el gran déficit de todos los gobiernos, del 52 en adelante, en cuanto a avanzar hacia una nueva matriz productiva, fue planteada en julio de 2016 por el presidente del Estado plurinacional,³³ con el anuncio de que en seis años se construiría una grandiosa generadora hidroeléctrica sobre el río Beni, en la zona el estrecho del Bala.

La construcción costaría alrededor de **6.000 millones de dólares**³⁴ que podrían pagarse en un plazo parecido al de la construcción, según el presidente del Estado, pues se esperaba exportar electricidad con

31 Ver, <https://erbol.com.bo/nacional/el-programa-evo-cumple-empresas-cercanas-al-poder-obras-abandonadas-y-p%C3%A9rdidas-econ%C3%B3micas>
https://correodelsur.com/politica/20230720_bolivia-cambia-genera-polemica-en-el-gobierno.html

<https://es.euronews.com/next/2022/05/23/bolivia-litio>

32 Ver, <https://fundacionsolon.org/2019/03/11/impactos-economicos-de-el-bala-chepete-rositas-y-cachuela-esperanza/>. El “estudio a proyecto final” volvió a ser licitado en 2021 por el gobierno actual.

33 Ver, <https://www.la-razon.com/economia/2016/07/13/hidroelectrica-el-bala-y-chapete-generara-3-675-mw-y-evo-alista-consulta-a-la-paz/>

34 A ese costo multiplicaría, por el valor del Burj Khalifa (Dubái), el costo del edificio más alto del mundo, con capacidad de albergar 37.000 personas; pero como se analiza más adelante, su ejecución será mucho más cara (ver <https://eju.tv/2018/05/docente-de-la-umsa-advierte-que-coste-de-proyecto-chepete->

utilidades anuales de unos **1.000 millones** por año.³⁵ La obra principal se realizaría en el Chepete y, una década después de su finalización, se complementarían con una represa de unos **20 metros** (la del Chepete tendría **180 m** de altura con turbinas Francis, de caída) y con las turbinas de arrastre de El Bala .

Dos semanas después del anuncio presidencial de la intención de avanzar con el proyecto, organicé un foro, con apoyo y en instalaciones de la Fundación Friedrich Ebert en la ciudad de La Paz, con participantes favorables y críticos ante el proyecto. Allí se reiteró que a finales de los años 90 había sido descartada cualquier posibilidad de construir una gran represa en el estrecho de El Bala por sus impactos socioambientales, prácticamente insostenibles. Luego, que **el potencial energético radicado en la cuenca alta del río Beni**, por encima de los 3000 m/s.m (sus nacientes y los de sus afluentes), y las cordilleras Oriental, Tres Cruces y Apolobamba, según la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), **multiplicaba por cuatro** el potencial que se atribuía en el proyecto oficial, por lo que **es definitivamente mejor apostar por varias pequeñas y medianas generadoras en áreas elevadas** y no en las zonas bajas y tropicales.

Después del anuncio inicial la información escaseó hasta casi hacerse nula, excepto por la filtración de la ficha ambiental elaborada por la consultora, italiana en ese entonces, Geodata, encargada de realizar el “perfil del proyecto”. La Fundación Solón y la agencia ANF publicaron el 23 de octubre de 2016 datos clave de ese documento, puntualizando graves omisiones y contradicciones informativas que dejaban un amplio margen para dudar de la viabilidad y fiabilidad del proyecto.³⁶

bala-representa-casi-el-25-del-pib/), como ha ocurrido en todo el mundo con las hidroeléctricas; Itaipú en Brasil, por ejemplo, cuyo costo inicial se calculó en 13.000 MM de dólares y ha terminado costando \$us63.500 MM. Ver: https://www.swissinfo.ch/spa/paraguay-brasil_claves-en-pago-de-deuda-de-itaip%C3%BA--la-represa-que-comparten-paraguay-y-brasil/4832882

35 Ver, <https://www.la-razon.com/economia/2016/08/01/morales-defiende-proyecto-de-el-bala-y-dice-que-el-gobierno-esta-obligado-a-buscar-rubros-que-nos-den-plata/>. También, <https://www.la-razon.com/economia/2016/07/13/hidroelectrica-el-bala-y-chapete-generara-3-675-mw-y-evo-alista-consulta-a-la-paz/>

36 Ver, <https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/represa-del-chepete-inundara-poblaciones-de-colonizadores-368873-368775>

Poco después se filtró una copia de todo el **Estudio de Identificación** realizado por Geodata.³⁷ Ese trabajo fue manejado por el gobierno con una reserva propia de material bélico ultrasecreto, tanto que hasta hoy es desconocido incluso por gran parte, o todo, el Gabinete ministerial de ese entonces (excepto, quizás, el de Energía), igual que por la bancada de 2/3 de parlamentarios que tenía el oficialismo en esa época y hasta 2019.

Se distribuyó una copia del Estudio (32 *gigabytes* de información) a varias universidades estatales y facultades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), igual que a distintas ONG especializadas en cuestiones económicas y socioambientales.

La UMSA convocó a una comisión multidisciplinaria de docentes que estudió el informe de la consultora, como lo hicieron varios especialistas. La Universidad invitó, en varias ocasiones, públicamente, al ministro, viceministro de Energía y al presidente de ENDE a defender y debatir abiertamente, como lo mandan la ley la Constitución, el perfil de proyecto, pero las autoridades siempre se negaron y extremaron los recaudos para hacer la información sencillamente inaccesible.

En septiembre de 2016, en visita directa con el biólogo Daniel Robison a la zona del proyecto, incluyendo el cañadón del Chepete (situado a unos 40 km aguas arriba del estrecho de El Bala), se entrevistó a dirigentes de comunidades indígenas ribereñas del área afectada, tanto del departamento de La Paz como del Beni, a especialistas en hidroeléctricas y ecosistemas y a representantes cívicos.

Los resultados de esa investigación inédita identifican diversas y fundamentales fallas e incongruencias en el proyecto, y objeta la intención de licitar un *Estudio Final* sin subsanar esos problemas.³⁸

37 Como se dijo, la consultora era originalmente italiana, pero luego fue comprada por Powerchina y la gigantesca constructora china SinoHydro, una de las posibles candidatas a construir la (y financiar) la megaobra Chepete-Bala. Ver, http://www.chinadaily.com.cn/m/powerchina/2017-08/24/content_31059786.htm (consultada el 31.08.2023).

38 En 2018 ENDE pidió enmiendas al proyecto de Geodata, muy probablemente porque en sus conclusiones recomendaba “aplazar el desarrollo de la central hidroeléctrica El Bala 220, hasta cuando las condiciones del mercado energético de Bolivia y del exterior indiquen la conveniencia de su puesta en marcha”. Ver, <https://www.noticiasfides.com/economia/>

Actualmente se ignora el avance y el gasto de tal estudio final, pero sí se sabe que el actual gobierno anunció su intención de finalizar esa consultoría y dio señales de impulsar el proyecto en 2021.³⁹

Los problemas principales pueden resumirse en los siguientes aspectos:

- La ausencia de un estudio de mercado y disponibilidad de compra de la energía producida cuestiona la viabilidad general del proyecto. Brasil, el cliente más probable (en realidad el único, en la actualidad), no compra electricidad por acuerdos entre Estados, sino que subasta, califica y adjudica proyectos. En 1996 descartó, frente a la oferta público-privada, generar energía en Bulo Bulo, comprar electricidad no generada en, o muy cerca, de la frontera entre Brasil y Bolivia.
- El **costo global** del proyecto tiene serios visos de estar **gravemente subestimado** debido a lo incompleto de los estudios, incluyendo el costo financiero. El rango de error se ubica entre el 40 y 60%, con lo que su costo real se ubicaría entre los **12 mil y 15 mil millones de dólares**.
- La **deuda a contraerse** y los bajos rendimientos por una energía **no solicitada y no pactada** con el comprador tendría que venderse a precios subvencionados, lo que **ahogaría las finanzas del país**.
- El tiempo de construcción es irreal; sólo el camino de acceso puede llevar seis años (según el perfil del proyecto, demoraría un año), a un costo fácilmente tres veces superior al que le asigna el estudio, e impulsaría la **colonización con nuevos plantíos de coca** e incursión **minera ilegal**. La duración de la construcción puede duplicar el estimado del estudio. Si se concluyera la obra, lo haría cuando las fuentes de agua del embalse peligran seriamente y las fuentes solar y eólica sean más baratas.

chepete-bala-ende-devuelve-el-estudio-de-prefactibilidad-a-geodata-para-que-sea-corregido--384714

39 Ver, <https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ende-retoma-construccion-de-las-represas-chepete-bala-y-la-amazonia-nuevamente-bajo-amena-za-412443>

- Los daños socioambientales abarcan toda la cuenca del río Beni, aguas arriba y abajo, y no sólo el área del embalse. La desoxigenación de las aguas (debido al gran embalse) implica la mortandad masiva de fauna, erosión de la cuenca (aguas abajo del embalse), con impacto global sobre la biodiversidad ribereña y sentencia de expulsión y extinción de pueblos indígenas y otras poblaciones ribereñas en La Paz y Beni.
- Los cálculos de generación, con una producción muy baja de una de las casas de máquinas y una excesivamente optimista de la otra turbina, restan consistencia técnica y financiera al proyecto. Según Molina, la capacidad real de generación podría no llegar al 20% de lo previsto (Molina & Espinosa, 2019: 1).
- El espejo de agua del Chepete, antes que convertirse en un atractivo turístico, corre el riesgo de llegar a ser una fosa de contaminación y detritus arrastrados desde la ciudad de La Paz y todas las poblaciones por las que fluyen corrientes afluentes del Beni, así como del mercurio de decenas y centenares de puntos de explotación clandestina de arenas auríferas.
- La cuenca del río Beni se caracteriza por una elevada tasa de arrastre de sedimentos, por lo que la represa del Chepete se *colmataría* en 20 años de materiales sólidos y no en 50, como proyecta el Estudio de Identificación.

Este, muy comprimido, resumen de señalamientos básicos del más caro y ambicioso proyecto del desarrollismo boliviano deja pistas precisas sobre el grado de obnubilación y pésimas decisiones a las que conduce la obsesión por aferrarse a un patrón que sigue inspirando programas como la *Agenda Patriótica* que se llevó como principal propuesta a las elecciones bolivianas de 2019 y que sirvió de base e inspiración a las que permitieron alzarse con el triunfo al actual gobierno en 2020.

Ante el agotamiento del gas natural de petróleo que sostuvo la economía boliviana por décadas, el desarrollismo propone ahora “extraer e industrializar” una parte considerable de los probables

veintitrés millones de toneladas de litio que contendrían los salares de Uyuni, Coipasa y otros menores, haciendo del país el poseedor de las mayores reservas mundiales, que aún no han sido cuantificadas con precisión y no están certificadas.

Lo que está certificado en las cuentas públicas, pero que se pretende olvidar por la burocracia actual del Estado, es que hasta ahora se han gastado más de un mil millones de dólares en construir piscinas solares y plantas que, según los compromisos oficiales, reiterados a través de los años, deberían estar exportando miles de toneladas de carbonato de litio e innumerables baterías, pero que no han superado las 600 toneladas el año pasado.⁴⁰

Igual que su antecesor, las acciones del gobierno actual reiteran falta de transparencia en licitaciones y contrataciones, así como una suma de postergaciones y de nuevos problemas (interrogantes sobre la disponibilidad del agua necesaria para los procesos industriales del salar).⁴¹

El modelo carece de estrategia de cambio de la matriz energética y la *nueva industrialización*, esta vez del litio, apunta al fracaso o a unos rendimientos muy mediocres, como ya pasó con ese mineral y gran parte de otros proyectos ejecutados o planeados.

6. Pautas y pistas

La adhesión electoral que ha logrado el régimen por cerca de 18 años tiene base objetiva en la disminución de pobreza y en políticas que mantuvieron capacidad adquisitiva de ingresos y posibilidad de ahorro para grupos que nunca la tuvieron. La experiencia de algunos otros países muestra que la enorme masa de recursos que fluyeron hacia las arcas de países exportadores de materias prima, como Bolivia, permitía hacer mucho más. Pero la lógica del modelo antagoniza con las intenciones, por buenas que pudieran ser –las de algunos–, y allá tiene

40 Ver, <https://www.rumbominero.com/bolivia/bolivia-litio-2022/>

41 Ver, <https://diarioenergetico.com/falta-de-agua-atrasa-la-puesta-en-marcha-de-planta-de-litio-en-uyuni/>

que buscarse el fundamento del crecimiento de la **deuda**, el **déficit**, la **devastación** medioambiental, el **desfalco** de los fondos públicos y la confianza e ilusiones populares; la **dependencia** política y económica.

Los problemas de su obsoleta matriz energética y la propuesta oficial de exportar electricidad manteniendo la forma de generación omiten lo urgente, que es superar la dependencia de la quema de gas⁴² que soporta más del 60% de la generación de electricidad, para lo cual debe avanzarse en sustituir las plantas termo a gas por la generación de proyectos hidro inconclusos, como Ivirizu, e interrumpidos, como Miguillas, como un primer paso.

Ello aliviaría la creciente presión para invertir atolondrada y tardíamente en prospección de hidrocarburos⁴³ e incrementaría la disponibilidad de gas natural para el uso interno, que está ingresando rápidamente en zona de riesgo. La tarea siguiente es apretar el paso en desplazar la generación a fotovoltaica, eólica y otras, porque la hidrogenación ya enfrenta los problemas del ciclo del agua que ha traído la aceleración del calentamiento.

Debe volcarse la mirada hacia propuestas integrales como la Transformación Productiva del Occidente Boliviano, que abarca componentes de producción de alimentos sanos para consumo interno y de exportación, rescate de suelos, profundización de investigaciones científicas e innovación en las áreas beneficiadas, producción de energía fotovoltaica, industrialización de quinua, carne, textiles y otros provenientes de ganado auquénido, con alivio de presión sobre bosques, reservas naturales y territorios indígenas de nuestras tierras bajas; todo ello con generación de empleos dignos y fuentes de ingreso.

42 Ver, <https://eldeber.com.bo/tarija/departamentos-productores-de-gas-natural-piden-debatir-nueva-ley-de-hidrocarburos-y-retomar-proyecto>

43 La posibilidad de conseguir inversiones extranjeras para prospección, retornando a esquemas impositivos del pasado, como sugieren varios de los más conocidos especialistas, luce poco realista, dada la situación actual del mercado y las tendencias observables en los inversores que se orientan a recuperar la producción de pozos (especialmente de gas no convencional) que cesaron de producir durante la pandemia en regiones que son mucho más predecibles para los inversores que nuestro país.

Concentrando nuevamente la atención en la matriz energética, la migración a fuentes limpias de energía incluye el cambio de fuente de energía para el transporte masivo, como lo propone Zaratti, así como la incursión en campos de investigación de alta prioridad como combustibles alternativos para transporte masivo y maquinaria pesada (Chile, por ejemplo, además de tener en Atacama un gran parque solar, está dirigiendo su atención a la fabricación de hidrógeno verde, un combustible genuinamente limpio).

Aquí se ha visto que, a falta de capacidad del sistema de mediación y representación política para idear y generar planteamientos propios de un nuevo proyecto nacional, iniciativas, grupales y personales, nacidas en el seno mismo de la sociedad perfilan la recuperación de tendencias que van llenando ese vacío, en cuanto a un modelo alternativo, siguiendo huellas del proceso constituyente (1990-2009),⁴⁴ cuyas directrices sociales, políticas y económicas cincelaron la Constitución vigente.

Los casos que se han mencionado y revisado someramente⁴⁵ presentan indicios claros de no ser simples “chispazos” afortunados y armonizan y se ensamblan con un tipo de *sentido común* cuyo lineamiento principal se encuentran en las orientaciones constitucionales que definen a los recursos naturales como de **propiedad del pueblo boliviano (no del Estado)**, marcando la necesidad de utilizarlos respetando el equilibrio con la naturaleza. El cambio de rumbo económico se entiende como parte de una pluralidad multidimensional –de la económica a la democrática y cultural– bajo un régimen político altamente descentralizado, con participación y control de la sociedad sobre el Estado.

44 Desde la marcha indígena de 1990, que señala cuán premiosa es una profunda reforma social y política, hasta la aprobación de la nueva Constitución, resultado de una cadena de deliberación y reflexión colectiva que se prolongó por más de una década.

45 La indagación de estos casos empezó en 2016 (proyecto Chepete) y prosigue hasta ahora. Sus principales resultados se publicaron como reportajes audiovisuales difundidos por redes digitales en 2020 durante la pandemia (ver, <https://www.facebook.com/profile.php?id=100047671456566>). Los capítulos 4 al 12 contienen información adicional a la que se presenta en este documento (los primeros se dirigieron a temas sanitarios de la pandemia).

En espacios como la planificación estratégica, practicada en las comunidades durante la Participación Popular, o los encuentros nacionales para definir el uso de los recursos condonados de la deuda externa y las consultas sobre una nueva Constitución, iniciada en 2001, se expresaron propuestas de producción, productividad, creatividad que pueden reconocerse en la dinámica de los cuatro casos aquí apuntados.

La producción de alimentos, como pilar de una bioeconomía, necesita dejar atrás el esquema del agronegocio, controlado por grupos transnacionales que tienden a repetir esquemas de concentración de propiedad de la tierra y preservar, sin investigación ni aportes propios, tecnologías depredadoras.

Necesitamos encontrar y llevar adelante un nuevo modelo de producción de alimentos, respaldado en investigación propia sobre la **agricultura regenerativa** (también llamada del carbono),⁴⁶ estudiando sus rendimientos, los costos de transición, la disminución de emisiones, las formas de socializarla y compartirla con los grandes grupos de familias agricultoras y comunidades dedicadas a la producción de alimentos.

El seguidismo tecnológico que prima en nuestras prácticas actuales empobrece los suelos, favorece la erosión y desertificación y mantienen una curva descendente productiva. El cambio de modelo⁴⁷ requiere cambiar la inercia intelectual y el uso de la investigación ultracotada que se emplea, exclusivamente, para imitar y adaptar modelos como el brasileño o argentino.

Lo mismo toca a la ganadería, que necesita recurrir a métodos alternativos como la **ganadería a la sombra**⁴⁸ y el silvopastoreo, de manera que la producción de alimentos evolucione de una manera

46 Ver, https://www.fastcompany.com/90796487/is-regenerative-agriculture-the-future-of-farming-or-the-next-greenwashing-fad?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=rq (consultado 02.09.2023).

47 Ver, https://www.fastcompany.com/90796487/is-regenerative-agriculture-the-future-of-farming-or-the-next-greenwashing-fad?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=rq (consultado 02.09.2023).

48 Ver, <https://iica.int/es/prensa/noticias/la-sombra-como-beneficio-para-los-sistemas-productivos-ganaderos> (consultado 02.09.2023).

compatible con una **pausa ambiental** inmediata y de largo plazo destinada a detener el continuo avance de la frontera y mercados agroganaderos, al mismo tiempo que incrementa la productividad regenerando los suelos, sanando el medioambiente y recuperando nuestras deterioradas cuencas.

El consenso sobre las posibilidades que ofrece el turismo necesita tomar en cuenta que esa industria, golpeada en sus moldes tradicionales por la pandemia, necesita que la encaremos con un diseño propio y una oferta muy creativa que englobe la coexistencia armónica de la belleza natural del país con **culturas vivas**, esa diversidad de pueblos que enfrentan unidos los desafíos de la crisis climática con respuestas propias, algunas de las cuales tienen proyección universal.

No se trata de replicar otras experiencias, centradas en una perspectiva paisajística y conservacionista, sino de convertir al país en un punto de avanzada en la lucha contra el calentamiento, en todos sus espacios, no sólo los remotos e intactos, sino incluso nuestras ciudades, que requieren de un cambio avanzado de la inercia arquitectónica y urbanística que tiende a convertirlas en más o menos patéticas imitaciones de las urbes repletas de rascacielos y *malls*.

El cambio de óptica para abrirse a visitantes respetuosos e interesados en conocer culturas que trabajan en búsqueda de armonía con la naturaleza requiere de múltiples ajustes que van más allá de ampliar carreteras y aeropuertos o trabajar en la calidad de servicios de toda índole. Toca modificar la autodestructiva práctica que ha convertido al bloqueo y cierre de carreteras y vías de recurso extremo de resistencia a práctica cotidiana de presión y extorsión para canalizar intereses corporativistas, teñidos del egoísmo de grupos, a veces, ridículamente diminutos.

Cada una de las áreas productivas que se han señalado y las tantas otras a las que no nos hemos referido, conducidas bajo la óptica de que la economía humana tiene que priorizar la preservación de la vida (es decir, una bioeconomía), indican las bases de un nuevo modelo de desarrollo y el desafío político universal más importante, aunque políticos y mentes convencionales supongan que se trata de una cuestión de especialistas ambientales o románticos empedernidos.

Estas experiencias e iniciativas, libradas a la pura espontaneidad, los esfuerzos dispersos y aislados dependientes de la buena voluntad cívica de los ciudadanos, no alcanzan para contrarrestar la fuerza de los intereses que se empeñan en mantener la situación presente. Si estas experiencias no se articulan y sistematizan, expresando su perfil político, organizativo, cultural y ético, serán insuficientes para concurrir en una auténtica generación e impulso de un renacimiento colectivo bajo la forma de un proyecto nacional alternativo.

7. Bibliografía de referencia

AGRECOL

2018 *Diagnóstico de Producción Ecológica en Bolivia e Identificación de Necesidades de Capacitación*. Cochabamba: Fundación AGRECOL Andes.

American Farmland Trust

2021 *Agricultura Regenerativa: La Fertilidad del Suelo y El Manejo de Cultivos*. Washington: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Cortez Hurtado, Roger

2016 *Incógnitas tóxicas y verdades ocultas del proyecto Chepete/El Bala*. Inédito, 32 páginas.

ENDE Bolivia

2016 *Estudio de identificación proyecto hidroeléctrico El Bala “Componente 1 Agosto Chepete 400”*. La Paz: ENDE.

FAO-FIDA

2023 *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo*. Roma: FAO.

Fundación Tierra

2020 *¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS TRANSGÉNICOS? Tenencia de la tierra, agronegocio y rendimientos*. Foro virtual. La Paz: Fundación Tierra.

Fundación Tierra

2016 *Empresas transnacionales controlan el agronegocio sojero en Bolivia*. La Paz: Fundación Tierra.

InSight Crime-Instituto Igarapé

2022 *Amazonía saqueada: Las raíces de los delitos ambientales en cinco países*. Río de Janeiro: Instituto Agarapé.

IPCC

2023 *Informe del cambio climático*. Génova: IPCC.

Malky, Alfonso; Saavedra, Cándido; Limaco N., Alejandro; Mamani, Guido

2008 *El efecto Chalalán: Un ejercicio de valoración económica para una empresa comunitaria*. La Paz: CSF.

McKay, Ben

2018 *Extractivismo agrario. Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia*. La Paz: Fundación Tierra.

Montes, M. P.; Botero, R.; Ciro, É. M.

2020 “Los ríos voladores y el monstruo de mil cabezas”. *Revista Ambiental ÉOLO*. Fundación Ficamazonía (Medellín).

Ministerio de Economía

2014 *Modelo Económico Social Comunitario Productivo*. La Paz: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Sandoval, Dunia *et al.*

2003 *Santa Cruz: economía y poder 1952-1993*. La Paz: PIEB.

Repensando el desarrollo desde conceptos básicos

J. Enrique Velazco Reckling¹

Resumen

El ingreso por persona en Bolivia ha caído del nivel promedio en América Latina en 1950 a uno de los últimos lugares en 2022. Este deterioro relativo del ingreso no se puede explicar por falta de recursos naturales ni por la incapacidad productiva de su gente dado que muestran un desempeño laboral positivo cuando salen del país. Este estudio plantea que la causa del deterioro es la incompetencia de gobernantes que, para satisfacer intereses corporativos centrados en el extractivismo minero y en hidrocarburos, aplicaron políticas socialmente equivocadas.

¹ *Cuenta con un doctorado y postdoctorado en Ciencias (EE. UU.). Descubrió una familia de sistemas láser ultravioleta de alta potencia por lo que se le concedió el Premio RANK (Londres, 1992) en mérito a su significativo aporte a la optoelectrónica. En Bolivia, fue director de Investigación Científica y Post Grado del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB); fundador y gerente de Industrias Químicas Bolivianas; presidente de la Federación Boliviana de Pequeña Industria y de la Confederación Andina de Pequeña y Mediana Industria; secretario General del Programa de Fomento a la Pequeña Industria en América Latina; y director Ejecutivo del Fondo de Inversión Social. Es fundador y director Ejecutivo de la Fundación INASET, investigador independiente, autor de libros y columnista invitado en varios medios.*

Resalta que, en la segunda mitad del siglo XX, la teoría económica neoliberal ofreció un paraguas académico al extractivismo al posicionar al capital como el factor escaso pero determinante del crecimiento. Los organismos multilaterales y las agencias de cooperación, alineados a esa lógica, bajo el eufemismo de emprendedurismo, alentaron el cuentapropismo con efectos directos en el debilitamiento y la desaparición de sindicatos, la precarización del empleo y la distorsión de la distribución primaria del ingreso en favor de los dueños del capital.

Luego de esbozar los rasgos del desarrollo integral, sustentable y democrático, el estudio plantea los vínculos y relaciones que definen el mecanismo que habría dado lugar a la realidad política, económica y social boliviana actual, en la que dos conceptos dominantes son el extractivismo y el neoliberalismo. Establece el mecanismo que explica los rasgos de la realidad hoy vigente, que es incompatible con el desarrollo integral.

Muestra que, para reconfigurar el mecanismo vigente de manera que sea conducente al desarrollo integral, la condición necesaria es la diversificación productiva que crea valor en la economía a partir de la creatividad y el esfuerzo humano, y que deben ser las personas y sus hogares –no el Estado ni los dueños del capital–, los depositarios directos de los beneficios del crecimiento.

Argumenta que los temas y desafíos de mayor urgencia, como la crisis energética, económica y social que amenaza por la desastrosa conducción de la economía en los últimos veinte años, deben ser encarados de manera que las urgencias políticas no inviabilicen las transformaciones estructurales destinadas a superar el extractivismo rentista que nos ha condenado al atraso.

Finalmente, con esta orientación, ofrece un esbozo de la ruta crítica a seguir para desmontar los cimientos estructurales del extractivismo, abandonar las bases conceptuales del neoliberalismo y construir la institucional “pro-producción con empleo digno” como la base conceptual del deseado desarrollo integral, sustentable y democrático.

1. Introducción

El “desarrollo” parece ser una elusiva meta para Latinoamérica y, en especial, para Bolivia. Incluso en términos de simple crecimiento de la economía –uno de los factores para el desarrollo–, a pesar de que en los últimos 70 años experimentamos pendularmente con sistemas políticos –dictaduras, democracia o caudillismo, y “modelos” económicos híbridos propios con rasgos de capitalismo de Estado, economía social de mercado, neoliberalismo o del Socialismo del siglo XXI–, el desempeño de nuestra economía es pobre comparado con muchos otros países que tenían un ingreso anual por habitante (el PIB per cápita) comparable al nuestro hace 70-80 años.

En 1945, el ingreso medio de los bolivianos era comparable o superior al de países cuyas economías, hoy, nos superan ampliamente. Setenta años después, mientras el PIB por persona de los bolivianos (valores constantes) aumentó en algo más del 50% respecto a 1945 (en el mejor de los casos, se habría duplicado, dependiendo de la métrica utilizada para estimar los valores relativos), en promedio, los latinoamericanos triplicaron similar indicador. El PIB de los malasio, indonesios, irlandeses y españoles se multiplicó entre cinco y ocho veces, Japón y China unas 18 veces y, finalmente, Corea del Sur y Taiwán, en más de 25 veces. De una muestra de cerca de 30 países en América Latina, el PIB per cápita boliviano sólo supera –levemente–, al de Nicaragua, Guatemala y Haití.

¿Cómo llegamos a esta situación?

La causa del estancamiento no puede ser la falta de recursos materiales y humanos: Bolivia tiene un privilegiado acervo de recursos naturales y la capacidad laboral de la gente queda en evidencia porque normalmente triunfa y se destaca fuera del país. El no haber sido capaces de aprovechar estos recursos como base del desarrollo –contando además con el mismo marco teórico e instrumental económico (académica y políticamente) bajo el que otras economías prosperaron–, sugiere fuertemente que nuestro atraso relativo a otras sociedades se debe, en general, a las malas políticas aplicadas hasta ahora.

Pero, como ya destacamos hace más de treinta años, no se trata solamente de una sucesión de errores cometidos por políticos en función de gobierno, sino de la persistencia de una “institucionalidad disfuncional” para el desarrollo humano productivo (Velazco, 1989) que muta permanentemente a nuevas formas en función de las cambiantes condiciones del contexto interno y externo. Cuatro son los aspectos en los que se puede resumir los rasgos de esta institucionalidad disfuncional en el siglo XXI.

Primero, respecto al promedio regional y global, la incompetencia relativa de nuestros gobernantes es generalizada y sus efectos negativos no se pueden revertir con breves períodos de “buen gobierno”. Segundo, la clase política tiene una incapacidad sistemática para ver (y entender) la realidad a partir de los procesos y de los mecanismos verdaderos que la configuran debido a cuatro formas (autoimpuestas) de ceguera: la ideológica (“que el gato tenga el color del partido aunque no cace ratones”); la política (“conservar y reproducir el poder a cualquier precio”); la teórica (“el pensamiento económico dominante se expresa en relaciones matemáticas deterministas”); y la ceguera por conveniencia (“ver o fingir que no ve, de acuerdo a su conveniencia”). Tercero, el “modelo extractivo-rentista” centrado en la explotación de recursos naturales es el que mejor se ajusta para satisfacer las expectativas de poder y control prebendal de quienes acceden al Gobierno.

Y, cuarto, la “academia” –la universidad, que debería orientar la transición hacia el desarrollo–, con muy pocas excepciones, ha preferido la seguridad de la ceguera por conveniencia (ideológica, política y financiera) para asumir el rol de difusora, protectora y promotora del pensamiento económico “místico” arropado por la ceguera teórica: aunque puede percibir los reales problemas, no propone las acciones correctivas para eliminar las causas estructurales del pobre desempeño de los gobiernos, acentuando la vulnerabilidad y la indefensión social ante los errores y los desgobiernos. En particular, limita las opciones de manejo económico a ajustes en unas pocas variables macroeconómicas, sin poner en la mesa del debate social enfoques alternativos para el desarrollo.

El resultado es que estamos tan confundidos como equivocados.

Eso es precisamente lo que reflejan hoy los titulares y las portadas en los medios de comunicación y abarrotan las redes sociales: vociferancia caótica en la que algunos ya eligen candidatos para el 2025 sin conocer ni los problemas a resolver –menos aún tener prioridades, conocer las propuestas y las capacidades “del candidato”; los grandes temas de la economía se reducen al tamaño del déficit fiscal o a qué sustituirá al gas y poco más o menos. Según la tendencia del “opinador”, el desarrollo será realidad automáticamente si mantenemos en alto las banderas del socialismo del siglo XXI, si abrazamos el liberalismo o si vamos por el camino del desarrollo verde, naranja o azul.

Es muy poco probable que diagnósticos realizados a una misma realidad, con niveles similares de precisión, profundidad y alcances, lleven a tan enorme disparidad en las opiniones, en los criterios y en las prioridades que las caricaturas precedentes reflejan. En consecuencia, el punto de partida para “identificar los factores determinantes del desarrollo integral, sustentable y democrático” debe ser un diagnóstico de la realidad liberado de las cegueras y de las limitaciones, hoy dominantes, por ignorancia o por conveniencia.

Sin embargo, un diagnóstico sólo puede identificar los problemas a resolver si se ha definido el objetivo que se persigue: “un problema es un obstáculo que impide lograr un objetivo”; en ausencia de objetivos, puede haber “temores, temas y controversias”, pero no se podrá identificar “problemas”. Más aún, para entender la realidad y poder modificarla, es necesario identificar los procesos y los mecanismos que vinculan los eventos en diversos ámbitos (político, social, económico, ambiental, etc.), identificando las interrelaciones que, si operaran en la forma concebida, explicarían los eventos observados y reproducirían los eventos experimentados y medidos.

En general, la teoría ha adoptado relaciones de causalidad directa recurriendo al *ceteris paribus*² para fijar relaciones matemático-deterministas sobre las que se soportan los cimientos conceptuales de la teoría. Pero incorporar correlaciones empíricas aisladas como base

2 Inferencias que se deducen respecto a relaciones entre dos variables “manteniendo el resto de las cosas iguales”, es decir, suponiendo que no intervienen otras influencias de factores.

para “verdades” entre conjuntos de datos lleva las interpretaciones de los procesos y mecanismos que explicarían la realidad a extremos incompatibles con el sentido común.

Por ejemplo, la Teoría Monetaria Moderna (MMT, por sus siglas en inglés), después de 20 años de ser fuertemente rechazada por el *establishment* académico, es un enfoque que empieza a “ganar tracción” porque deduce los vínculos en los procesos económicos a partir de los mecanismos que operan en la realidad, en lugar de “por las relaciones que la teoría económica dominante suponía que operaban”; como resultado, explica de manera más realistas la relevancia de los déficits, la gestación de procesos inflacionarios, o la posibilidad y los beneficios de una economía de pleno empleo.³

En este sentido, la (falsa) concepción determinista que se atribuye a la formulación matemática de la teoría económica ha llevado a privilegiar el “dato económico” por encima del contexto en el que se lo obtiene, contribuyendo a la confusión generalizada: ¿por qué un crecimiento del 3% del PIB es bueno para Suecia o Corea, pero incluso tasas superiores al 6% no han logrado sacar a Bolivia del subdesarrollo? Si bien hay datos sobre crecimiento económico y nivel educativo que se correlacionan, es mucho menos obvio que la dirección causal vaya de educación a crecimiento: ¿no se necesita primero una economía fuerte para construir, orientar y sostener un sistema educativo de excelencia?

De ahí que, para promover un cambio hacia un desarrollo integral, se requiere conocer y entender la secuencia de las acciones –en todos los ámbitos relevantes–, lo que permitiría modificar las relaciones de causa y efecto vigentes induciendo nuevas formas y mecanismos de interacción entre los factores, a fin de generar las condiciones generales que sean compatibles con la configuración del escenario meta. En el marco del realismo crítico, esta secuencia determina la “ruta crítica” que debe seguir un proceso de cambio planificado para construir sistemáticamente las condiciones que converjan en el objetivo.

3 Hay una amplia y creciente literatura sobre la MMT inicialmente planteada por L. Randall Wray y William Mitchell en la primera década del siglo XXI; entre otros autores recientes, están Warren Mosler, Stephanie Kelton y Martin Watts.

El presente ensayo es un aporte que se inscribe en la lógica general del realismo crítico. Específicamente, en relación al comportamiento de los indicadores económicos tradicionales, el análisis prescinde del determinismo que la teoría asigna a relaciones entre variables como la inversión y crecimiento, por ejemplo; más allá de aceptar que “correlación no es causalidad”, recupera el principio de la navaja de Ockham:

- en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable;
- alternativamente, cuando hay dos o más explicaciones para un hecho, es preferible la que con menos supuestos explica la mayor cantidad de aspectos relacionados.

En este marco, cuestiona los actuales “debates” político-ideológicos y económicos en términos de su relevancia y sus aportes efectivos para la construcción de las condiciones básicas para el desarrollo sostenible. A partir de un diagnóstico empírico-deductivo de las tendencias en las estructuras de las cuentas nacionales, muestra los “efectos sociales del crecimiento” comparando el desempeño relativo de la economía entre 1990-2005 y 2006-2022. Como la estructura y relaciones de las cuentas nacionales son verdades axiomáticas –su validez conceptual no está sujeta a debates teóricos–, los comportamientos relativos al interior de las cuentas del ingreso y del gasto, o simultáneos entre cuentas de ingreso y de gasto, muestran posibles relaciones a partir de las que se deducen mecanismos causales cuyos resultados efectivos no siempre coinciden con el discurso político o con la teoría.

El documento está organizado de la siguiente manera. Inicialmente, describe las “definiciones de trabajo” del objetivo o meta de referencia (el desarrollo integral, sustentable y democrático) en relación al proceso elemental de actividad económica en el que identifica la importancia relativa de los más usuales indicadores económicos, sociales, políticos o medioambientales.

Posteriormente, presenta los resultados de un diagnóstico sobre los efectos sociales de una decena de temas vinculados a varios

aspectos del desarrollo, comparando los comportamientos y las tendencias dominantes en los períodos 1990-2005 y 2006-2022 (los mal llamados “período neoliberal” y del “proceso de cambio”), a partir de los cuales se formula un esquema relacional de los mecanismos que podrían describir la realidad vigente.

En la tercera parte, analiza los aspectos críticos sobre los cuales se debería actuar con el fin de reorientar las políticas vigentes hacia un nuevo paradigma de desarrollo que sería compatible con el tipo de desarrollo deseado. Revisa los nuevos flujos de relaciones y los mecanismos que operarían en el paradigma alternativo e identifica los principales hitos de la “ruta crítica” que se debería seguir para la transición.

Argumenta que los temas y desafíos de mayor urgencia, como la crisis energética, económica y social que amenaza por la desastrosa conducción de la economía en los últimos veinte años, deben ser encarados de manera que las urgencias políticas no inviabilicen las transformaciones estructurales destinadas a superar el extractivismo rentista que nos ha condenado al atraso.

Finalmente, plantea conclusiones puntuales en relación a los factores que resultaron en la realidad actual, para destacar los lineamientos más relevantes que deberían orientar las políticas de desarrollo compatibles con el objetivo estratégico de un desarrollo integral, sustentable y democrático.

2. Marco conceptual y definiciones de trabajo

En su proyección de largo plazo, el *desarrollo integral, sustentable y democrático* se refiere a “un enfoque global y equilibrado del desarrollo que promueve el progreso en todas las dimensiones importantes de la vida. No se limita a aspectos económicos, sino que también abarca aspectos sociales, culturales, ambientales y personales”. En su dimensión de desarrollo sustentable incluye la preservación, conservación y protección de los recursos naturales, y es sostenible cuando busca asegurar procesos saludables para satisfacer las necesidades sociales

y económicas de los seres humanos. Finalmente, es democrático al reconocer, como condición necesaria y requisito fundamental para garantizar el desarrollo económico, político y cultural de la sociedad, la participación equitativa –bajo un mismo estado de derecho–, de todas las personas en las decisiones vinculadas al desarrollo.

En la realidad boliviana y en horizontes temporales más cercanos, este conjunto de atributos naturalmente se concentra en los aspectos más directamente relacionados con el bienestar de las personas y sus hogares, que, hoy y en el futuro mediato, son la insuficiencia del ingreso por la falta de acceso a oportunidades de empleo. El empleo con ingreso digno es la condición de acceso a las mejoras “autónomas” en la salud, la educación y la vivienda. La educación, a su vez, es el medio para comprender el rol de las instituciones democráticas, el respeto al medio ambiente, el consumo responsable, el desarrollo de conocimientos, la mejora de la productividad, etc. De manera que, al poner en marcha sucesivos procesos virtuosos que abren nuevos espacios como oportunidades al desarrollo, se construye un proceso de desarrollo sostenible.

Entre 2008 y 2018, cerca de 24.000 personas participaron en el Programa de reflexión social y productiva de la Fundación INASET en varias ciudades capital y en El Alto. Uno de los objetivos del Programa era insertar conceptualmente el desarrollo productivo en el modelo de país que proponía el proceso de cambio. En respuesta a cómo las personas entendían el concepto del vivir bien, de manera prácticamente unánime coincidieron en que podía resumirse en “acceso a oportunidad de empleo permanente y justamente remunerado hoy, seguridad de una vejez digna mañana, y certeza de un futuro posible para los hijos” (Velazco, 2012). Esta percepción es compatible con la falta o insuficiencia del ingreso laboral como la causa-raíz de la pobreza multidimensional (Velazco, 2019).

El punto a resaltar es que, si bien Bolivia enfrenta una gran cantidad de problemas y de desafíos, la condición base para iniciar un sólido proceso de desarrollo es generar y garantizar las condiciones para consolidar una economía cuyo crecimiento dependa en la menor medida posible de factores externos, como ha sucedido a lo largo de

nuestra historia extractivista: requiere que la generación de valor y la creación de empleo digno sean alentadas por el Estado en lugar de ser penalizadas sistemáticamente.⁴ Estas condiciones permitirían tener ingresos relativamente estables para planificar, con alguna certeza, acciones con efectos a mediano y largo plazo en todos los otros ámbitos.

El empleo no es hoy un objetivo de la “política”, menos aún de los “políticos”

El manejo de políticas públicas ha despreciado el rol del empleo como factor determinante de la calidad –y magnitud– del crecimiento. En la Bolivia del siglo XXI, más del 85% de la población ocupada es informal, sinónimo de alta precariedad laboral, baja productividad y muy bajos aportes a la generación y agregación de valor. La última década muestra un mayor crecimiento del empleo informal que del formal en actividades extractivo-rentistas antes que en las productivas y, en particular, en el sector público más que en el privado; aunque sabemos que la administración pública genera los obstáculos burocráticos que han sido identificados hace 40 años como causas de la “institucionalidad disfuncional” que limita las inversiones generadoras de valor y empleo.

Entre 2006 y 2019, de casi 1,2 millones de personas que se sumaron a la población ocupada, hay una pérdida neta de puestos de trabajo en agricultura, manufactura y servicios profesionales (-8%), en tanto que ocupaciones informales en el comercio, los servicios, la construcción y el transporte son casi la totalidad de incorporaciones a la población ocupada. De hecho, 70% de las incorporaciones al mercado laboral son “cuentapropistas”.

Sumada a las tendencias mencionadas, la productividad laboral en Bolivia es la más baja de la región: esta es una de las principales razones para la persistencia de la pobreza a pesar de los episodios de alto crecimiento impulsados por los precios de materias primas

4 Aunque abundamos sobre el tema posteriormente, promover el empleo digno básicamente requiere decisiones políticas, toda vez que, a corto plazo, existen oportunidades –tanto técnicas como de mercado– para crear al menos 500.000 empleos con productividad superior al actual promedio.

exportadas. El resultado final es que, para las políticas públicas orientadas al crecimiento económico, el empleo no es un objetivo, sino un indicador a ser atendido por las “políticas sociales”: el Estado se exime de su responsabilidad constitucional de garantizar la creación de los puestos de trabajo –en cantidad y en calidad– que la sociedad demanda (CPE, Art. 46).

Las ignoradas relaciones entre empleo y crecimiento

Luego de la gran crisis de 1929, economistas de la talla del liberal John Maynard Keynes, o del marxista Michal Kalecki, coincidieron en que el empleo, justamente remunerado, era el medio básico de distribución del ingreso y la garantía de una demanda suficiente para absorber la capacidad del aparato productivo. Con estas premisas se reconstruyó, desde 1946, la Europa devastada por la guerra, y las economías occidentales, en general, lograron altas tasas de crecimiento con mejoras inéditas en equidad e inclusión social hasta los años 1970. En ese proceso, avanzar hacia “economías de pleno empleo” era una meta no sólo deseable, sino posible.

Con el advenimiento del neoliberalismo abanderado por Milton Friedman en los 1960, la teoría económica –y la práctica política– privilegió un modelo en el que el crecimiento económico estaba fundamentalmente dominado por inversiones (el capital) para aumentar el nivel de la oferta, en tanto que el empleo pasaba a planos subalternos con el fin de, entre otros, debilitar a los sindicatos y su alto poder de negociación en relación a los salarios.

En la visión neoliberal, el crecimiento depende básicamente del crecimiento de la inversión y de la “productividad total de los factores (PTF)”, que representa el crecimiento que “no puede ser explicado por la inversión o el empleo”. En la práctica, como reconocen los propios economistas, la “PTF es la manifestación de nuestra ignorancia”.

El valor agregado (VA) que se genera en un emprendimiento es la diferencia entre el costo total de producción menos el costo de los insumos incorporados a los productos. La suma de los valores agregados en todas las unidades económicas durante una gestión es el producto interno bruto (PIB).

El VA tiene por destino: primero, pagar salarios (la nómina o planilla, incluyendo los aportes sociales); y, segundo, remunerar los otros factores –que incluye las depreciaciones, intereses, alquileres, utilidades, etc.– a través del excedente o utilidad bruta. La relación entre la remuneración al trabajo y el excedente bruto es una forma de expresar la distribución primaria del ingreso (DPI). Sobre esta base, en la *economía real*, el “sueldo medio” en una unidad económica (empresa) es el valor agregado que aporta el trabajo (la productividad laboral), ajustado por el porcentaje del valor agregado destinado a remunerar al trabajo (DPI).

La DPI puede estar afectada por condiciones de mercado, la normativa laboral vigente y otros factores, pero, en principio, *puede ser modificada por las políticas empresariales* hacia mayor ganancia empresarial o hacia una mayor equidad. Tender en una dirección o la otra depende de principios y valores que guían a las políticas, y que se traducen en incentivos a la concentración del ingreso en los dueños de las empresas o a su mejor distribución entre todos los que aportan a los procesos productivos.

Si el nivel de remuneración al trabajo es una decisión empresarial influida por factores internos y externos (p. ej., el tamaño del mercado o la capacidad sindical de negociación), los dilemas y debates sobre emprendimientos públicos o privados, o sobre formas capitalistas, socialistas o comunitarias de apropiación del excedente, se refieren específicamente a las formas, los principios o los criterios dominantes al definir la DPI. Tales distinciones ni aplican ni tienen sentido respecto al proceso inicial de *crear valor* (valor agregado y productividad), que es un desafío común para todas las formas y tamaños de organizaciones económicas: maximizar el valor agregado (creado) con la mayor eficiencia y efectividad posibles en lo social, económico y ecoambiental.

En resumen, el PIB y su crecimiento dependen de la productividad –el valor de lo que produce cada trabajador– y del nivel de empleo (cantidad de trabajadores). Sin embargo, el efecto (o la calidad) social del crecimiento depende de la medida en la que la productividad se traduzca en ingresos dignos y en capacidad efectiva de consumo para los hogares.

En otras palabras, el crecimiento sostenido e inclusivo de la economía requiere el equilibrio entre qué y cuánto se produce, y lo que la sociedad está en capacidad de demandar y consumir; implica necesariamente *distribución* del ingreso: no la *re-distribución* de riqueza acumulada, sino la distribución directa del valor conforme lo creen los procesos productivos, garantizando la capacidad de consumo compatible con la capacidad de oferta del aparato productivo.

Aunque básicas y obvias, estas relaciones resaltan que la creación de riqueza debe beneficiar a *toda la sociedad*, y vinculan los tres elementos básicos de la economía: producción, distribución y consumo.

Empleo digno: condición necesaria para crecimiento con desarrollo

Partiendo de conceptos elementales llegamos a la conclusión que las políticas que aumentan empleo, productividad y *remuneración al trabajo* necesariamente aportan al crecimiento económico con reducción de la pobreza, en tanto que, las que las deprimen, tienen el efecto contrario. De hecho, la forma simple (y precisa por definición) para calcular el PIB es el producto de la cantidad de personas ocupadas productivamente multiplicada por su productividad laboral: $PIB = PO \times PL$.

Tres factores permiten aumentar la remuneración neta global: mejorar la distribución primaria del ingreso; aumentar el valor agregado y la productividad; y la creación de puestos de trabajo (ocupar productivamente a la fuerza laboral a la vez que se le confiere capacidad de consumo).

Fuera de proyectos de “empleos de emergencia”, Bolivia no ha encarado políticas reales de creación de empleo digno con incentivos a la justa remuneración del trabajo y la distribución equitativa del ingreso, siendo la tendencia, por el contrario, promover el “cuentapropismo forzado”. Bajo el eufemismo de “emprededurismo” se busca ocultar la incapacidad estructural de la economía para crear empleos dignos alentando microempresas de muy baja productividad y con alta precariedad de empleo.

Como la prioridad hoy es “crecer exportando recursos naturales”, la inversión (pública y privada) se concentra en sectores intensivos

en capital, en infraestructura física o en ciertos servicios, pero sin generar empleo productivo permanente; las políticas generan distorsiones (tipo de cambio, enfermedad holandesa, etc.) que afectan a la producción interna capaz de agregar valor y al desarrollo de la capacidad productiva, por lo que, desde 2006, más de un millón de profesionales han salido del empleo formal, reduciendo sus ingresos y la capacidad de consumo de sus familias.

Los políticos justifican la mala distribución primaria y la “profundización financiera” arguyendo que “el capital es el factor escaso”; aplican políticas laborales y salariales que acorralan al empleo formal, mientras celebran como “emprendedurismo” puro al cuentapropismo forzado; ahogan fiscalmente a los contribuyentes capaces de crear valor y empleo para cumplir “metas de recaudación”; persisten en el extractivismo “para re-distribuir excedentes”; y aspiran a diversificar la producción, pero fortalecen el boliviano y fijan el tipo de cambio “para abaratar las importaciones”...

En síntesis, a pesar de los discursos, de las ideologías y de los rótulos de los “modelos pro-pobres” seguidos a lo largo del tiempo, las políticas extractivo-rentistas nunca buscaron el bienestar colectivo a través de la creación de oportunidades de empleo digno para todos. Por ello, han perpetuado patrones de acumulación, pública o privada, que antes de hacer alguna mella para reducir la desigualdad la preservan o la aumentan.

Generar oportunidades de empleo digno para todos aquellos que se incorporan al mercado laboral es, en consecuencia, un desafío fundamental en una economía que privilegie a las personas como fuente de creación de valor, y a los hogares como los destinatarios directos y finales de los beneficios del crecimiento. Implica una profunda transformación conceptual de los objetivos de la “política”: superar el extractivismo y las falacias neoliberales que niegan el rol protagónico del empleo en el crecimiento con desarrollo.

De la economía ideal a la (surrealista) economía boliviana

Sustituir las tendencias actuales –que conceptualmente reflejan un capitalismo salvaje y empobrecedor en la sociedad– implica demandar

soluciones que reivindicquen la dignidad del trabajo como base fundamental del crecimiento sostenido. Pero privilegiar el empleo digno y productivo requiere trabajadores sin voces (¿auto?)embargadas que mantengan visiones congeladas en la ideologización y el salarialismo; empresarios con una clara visión estratégica del desarrollo; y políticos (y académicos) que entiendan la realidad para cambiarla, en lugar de esforzarse por ajustar la realidad a divagaciones ideológicas o teóricas.

En consecuencia, el objetivo que expresa las expectativas del bienestar esperado del desarrollo es la *creación de empleo digno en cantidad suficiente para frenar –y revertir–, la precarización laboral que aumenta la pobreza*. Implícitas se entienden las condiciones generales de preservar o mejorar –en todo caso no deteriorar– el enfoque de integralidad, la sustentabilidad y el avance democrático. Con estas consideraciones, el funcionamiento “ideal” de la economía está representado por el esquema básico de la figura 1; haciendo analogía con un vehículo, los factores vinculados por las líneas verdes constituirían el motor básico del vehículo, y el resto de los componentes serían factores que pueden contribuir a mejorar o a deteriorar el funcionamiento del motor (acondicionador de aire, sistema de refrigeración, etc.).

Figura 1

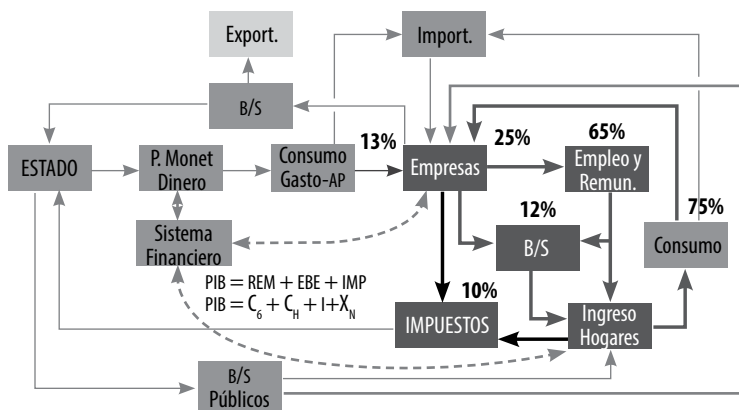


Figura 1. Esquema de funcionamiento de una economía y de sus principales elementos. Los elementos relacionados con las líneas verdes son los directamente asociados a la generación de valor y empleo; los restantes conforman el contexto institucional que determina la eficiencia y la calidad de la generación de valor agregado y empleo.

Desde el punto de vista del desarrollo, los rasgos más relevantes son, en la estructura del ingreso, el predominio de la remuneración al trabajo y, en la estructura del consumo-gasto, el consumo de los hogares.

En la realidad, la economía en Bolivia tiene severas distorsiones respecto al ideal (figura 2). La más relevante, para fines del presente análisis, es que la participación de los trabajadores y de sus hogares en las cuentas del ingreso y del consumo es mucho menor a las vigentes en la economía saludable, porque una gran parte del ingreso se origina en la exportación de recursos naturales que generan poco empleo y distorsionan, en favor del capital, la distribución del ingreso.

Figura 2

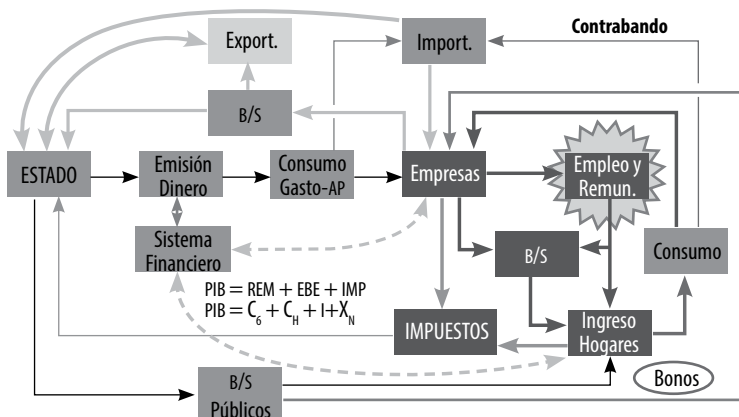


Figura 2. Representación de las relaciones y flujos en la economía boliviana. A diferencia del esquema de economía con desarrollo integral, en Bolivia la generación de valor y de empleo es el componente más débil; la política tributaria, con su prioridad centrada en recaudaciones, la hiperfiscalización de la buro-parásito-cracia y los “bonos” para la fidelización política, acentúa la incapacidad productiva nacional.

Además, en Bolivia, la capacidad de consumo de los hogares está muy fuertemente dañada por la presión tributaria que afecta el precio final de los productos –encarece a los productos nacionales respecto a los productos importados–, efecto, además, acentuado por los incentivos reales al contrabando que implican las políticas de

tipo de cambio o los límites para determinar las contravenciones en materia de importaciones, o por actividades ilegales como el lavado de dinero. Finalmente, las propias transferencias condicionadas –los “bonos”– añaden capacidad de consumo a los hogares, pero, al no estar vinculadas al aumento de la producción interna, se desvía hacia las importaciones, legales o por contrabando, que mantienen su capacidad de oferta con múltiples proveedores.

Todos estos aspectos tienden a reducir el empleo productivo formal con aumento de las actividades informales, del trabajo precario y de menor productividad que, finalmente, se traduce en menores tasas de crecimiento.

Las cuentas nacionales y las identidades contables básicas

Recapitulando, el empleo participa directamente en la agregación (social) de valor: el valor agregado (VA) es la diferencia entre el valor del bien (o servicio) producido (su “precio” en el mercado estará afectado por los impuestos aplicables) y el costo de los insumos incorporados en el producto; se distribuye entre la remuneración al trabajo (REM) y el excedente bruto empresarial (EBE) que queda en las empresas para cubrir la depreciación de los equipos, la utilidad de los dueños, alquileres o intereses. La REM es, a su vez, el ingreso de los hogares que determina su capacidad de consumo y justifica el nivel de producción de las empresas.

En consecuencia, para que una economía crezca de manera sostenida, las políticas de desarrollo deben promover la distribución del ingreso para asegurar el equilibrio entre la capacidad de consumo de los hogares y la capacidad del aparato productivo. En Bolivia, el actual modelo recurre a las transferencias condicionadas –los bonos– como el medio de “redistribución del ingreso para reducir la pobreza y desigualdad”. Pero el efecto que logra es exactamente contrario al argumento que lo justifica: los bonos aumentan la capacidad de consumo de los hogares, pero fuera del mecanismo básico de producción-salario-consumo el resultado es un aumento de la demanda sin un equivalente aumento tanto del producto como del empleo; de

manera que la mayor demanda sólo puede ser satisfecha por la oferta de productos extranjeros, además insertados ilegalmente al país (vía contrabando), sea para facilitar el lavado de dinero o aprovechando el tipo de cambio fijo y sobrevaluado.

Es decir, una condición básica de equilibrios elementales entre oferta y demanda ha sido violentado no por una, sino por varias medidas que no tienen el menor sentido desde el punto de vista de la racionalidad en el funcionamiento de los procesos económicos y, aún menos, para construir una institucionalidad básica para el desarrollo integral, sustentable y democrático. Pero sí resultan muy útiles para fidelizar apoyos políticos desde sectores cuya relevancia en la cantidad de votos y en la presión política es creciente.

Cerramos el marco conceptual recordando que, en las cuentas nacionales, en cada gestión (anual), el ingreso total en la economía por la producción de bienes y servicios –el VA– es la suma de la remuneración a empleados (REM) y el excedente bruto empresarial (EBE). El VA, por definición, es igual al producto interno bruto a “precios básicos” (PIBpb); si a este se le añaden los impuestos a los procesos productivos o a los productos finales, se obtiene el PIB a precios de mercado (PIBpm).

El mismo valor para PIBpm se obtiene sumando las asignaciones del ingreso al gasto del gobierno (C_G), al de los hogares (C_H), al gasto en inversión (FBKF) y al saldo comercial neto (X-M): la diferencia entre el valor de las exportaciones (X, ingreso a nuestra economía por el consumo de otras economías) y el de las importaciones (M, gasto nuestro en productos extranjeros). Los valores (%) en la figura 1 son los que aproximadamente predominan en las economías con mejores grados de desarrollo; la figura 3 muestra la equivalencia global de las cuentas de ingreso y gasto, su relación con el valor agregado y con la DPI.

Figura 3

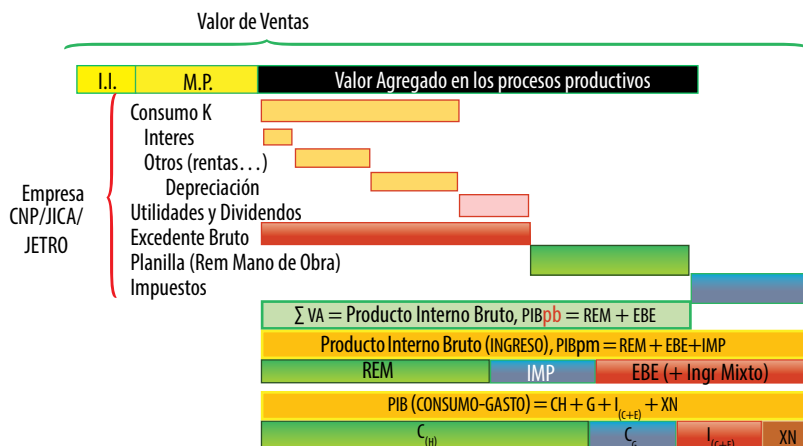


Figura 3. Formación de valor agregado en procesos productivos y su relación con el PIB y las cuentas nacionales.

Si la economía estuviera orientada por objetivos de crecimiento con desarrollo que se reflejen en el bienestar de las personas y de sus hogares, las tendencias en las cuentas de ingreso y de gasto deberían mostrar un acercamiento sistemático hacia los valores promedio de las estructuras de ingreso y gasto de las sociedades con mejor calidad de crecimiento:

- en las cuentas del ingreso, aumento en la participación relativa de la remuneración a los trabajadores, en la distribución primaria del ingreso (REM/VA) y en la relación del VA (= PIBpb) respecto al PIBpm;
- en las cuentas del gasto, aumento del consumo de los hogares, saldo comercial positivo, reducción de las importaciones en el consumo, creciente “eficiencia de la inversión fija”; en la estructura total del gasto.

El esquema siguiente (figura 4) muestra las relaciones entre los varios componentes de las cuentas del ingreso y del gasto. Frente a los casi coreográficos flujos de las múltiples relaciones que resultarían

en crecimiento con desarrollo integral, sustentable y democrático, el único punto de impacto que las visiones académicas tienen sobre el crecimiento en las cuentas nacionales es la inversión (el capital) como factor determinante del crecimiento.

El grado de simplicidad (¿simplismo?) con el que la teoría económica vincula al PIB y a la inversión (el capital) en el modelo teórico es, en sí mismo, una señal de sus severas limitaciones como explicación representativa de la realidad. De hecho, la navaja de Ockham eliminaría esta “explicación” porque no considera –menos explica– una gran cantidad de efectos observables en un determinado proceso de crecimiento, en términos de empleo, valor agregado, ingresos, consumo, etc.

Figura 4

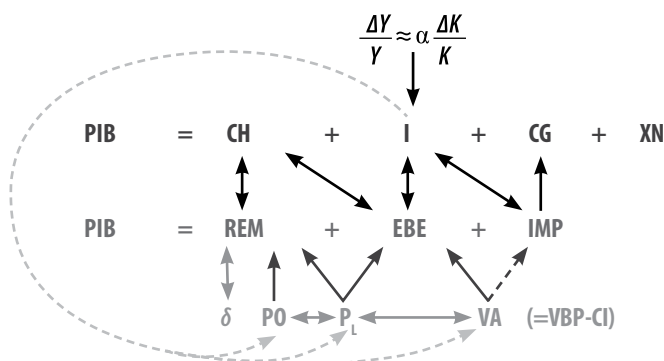


Figura 4. Relaciones de influencia-dependencia entre las cuentas de ingreso y de consumo (gasto), y la incidencia esperada de la FBK en el empleo (PO), la productividad laboral (P_L) y valor agregado. La relación teórica directa entre crecimiento del PIB e inversión es evidentemente superficial en extremo. La distribución primaria del ingreso (δ) aparece aislada por depender fundamentalmente de aspectos subjetivos.

3. Elementos de diagnóstico de la calidad social del crecimiento

Diez temas que refutan el exitismo en la economía

En relación a la economía, la atención de la academia y del “discurso-contradiscurso” entre los políticos gira alrededor de indicadores macro

como la tasa de crecimiento, déficit fiscal, reservas internacionales, tipo de cambio, inflación, etc., bajo supuestos derivados de la teoría económica dominante –pero hasta ahora no respaldados por evidencia empírica incontrovertible. La teoría asume que existen relaciones directas y biunívocas entre, por ejemplo, el crecimiento económico y el bienestar de las personas; que el equilibrio fiscal es determinante para la estabilidad macroeconómica; que una baja inflación garantiza el poder adquisitivo del salario; que la financiarización promueve el emprendedurismo; que el gobierno debe financiar sus inversiones con impuestos, etc.

La realidad es que, por la fijación en estos temas, en los últimos cincuenta años se ha descuidado valorar los *efectos sociales* de las políticas económicas –frecuentemente aplicadas bajo argumentos discursivos opuestos ideológicamente. El efecto concreto, en Bolivia, es que pasamos de estar en el promedio de América Latina en indicadores como el ingreso por persona, o en la incidencia del hambre y de la subnutrición en 1950, a los últimos lugares en la actualidad.

Para valorar la “calidad social de la economía y de su crecimiento”, es necesario, por supuesto, salir de los indicadores tradicionales de crecimiento, inflación o déficit fiscal para abordar aspectos más vinculados al bienestar cotidiano de las personas y de los hogares, y expresarlos en términos de su efecto e impacto en la calidad de vida.

Una muestra de temas sobre los que ni el Gobierno ni la academia abren a debate son los siguientes:

1. El “milagro boliviano” no es tal: seguimos a la cola de América Latina sin converger.
2. Estructuralmente, los hogares han sido más afectados por la deteriorada distribución primaria del ingreso.
3. La economía creció por el sector externo (*import-export*) más que por el consumo de la producción nacional.
4. Sectorialmente, crecieron los sectores que menos deberían crecer.
5. El crecimiento es desigual y episódico, tanto territorial como sectorialmente.

6. Bolivia es el líder mundial de informalidad laboral y precariedad de empleo.
7. El Estado “quita más recursos” a las personas de los que distribuye en bonos.
8. La gran reducción de la pobreza moderada y extrema es “de escritorio”, porque castiga la educación, la formalidad y el valor agregado.
9. El manejo fiscal-impositivo incentiva la informalidad y es la causa más directa de la reducción del consumo productivo interno y de su capacidad de crear empleo digno.
10. La financiarización ha tenido muy poco impacto directo en la diversificación productiva; benefició al sistema financiero, pero con el aumento del endeudamiento y la reducción del ahorro de los hogares.

Presento, a continuación, un resumen de las principales conclusiones del diagnóstico a las que lleva el análisis del comportamiento de la economía en los últimos 30 años en relación a los 10 temas enumerados.⁵

En la mayoría de los temas, el análisis compara las estructuras promedio de las cuentas nacionales (ingreso y/o gasto) en 2006-2022 (“proceso de cambio”) respecto a los promedios en 1990-2005 (“período neoliberal”), lo que permite, además, un “control de consistencia” entre el discurso y las acciones específicas.

5 Los ensayos sobre los 10 temas fueron publicados semanalmente por el periódico *Página Siete* entre marzo y junio de 2023, y están disponibles en <https://ensayosydebate.blogspot.com/TEMA>

Diez temas sobre economía que afectan a la gente...

	TEMA	EVIDENCIAS
<p>1. EL DESEMPEÑO RELATIVO DE LA ECONOMÍA</p>	<p>1. El “milagro boliviano” no es tal</p> <p>El desempeño de la economía boliviana no es suficiente para convergir hacia el promedio del PIB latinoamericano, sea en términos absolutos o en valores por persona.</p> <p>Las altas tasas de crecimiento que colocaron a la economía boliviana al tope del crecimiento regional alrededor de 2013 fueron casos excepcionales que tampoco alteraron significativamente las tendencias de mediano y largo plazo.</p> <p>Considerando que Bolivia cuenta con un gran acervo de recursos y que las bolivianas y los bolivianos demuestran capacidad de trabajo y creatividad cuando salen del país, la explicación del estancamiento tiene que estar relacionado a malas decisiones políticas.</p>	<p style="text-align: center;">Evolución PIB real (CEPAL, M\$us de 2010)</p> <p style="text-align: center;">PIB por persona \$us constantes</p> <p style="text-align: center;">Fuente: CEPALSTATS</p>

	TEMA	EVIDENCIAS																																												
2. CAMBIOS ESTRUCTURALES EN INGRESO/GASTO	<p>2. Estructuralmente, los asalariados y los hogares han sido mas afectados</p> <p>Desde 2006, en las cuentas del ingreso se ha reducido la participación de la remuneración al trabajo en favor de impuestos, mientras que, en el gasto, cae el aporte del consumo de los hogares en favor de exportaciones netas y la inversión (pública).</p> <p>La distribución primaria del ingreso (DPI) se redujo en detrimento de los asalariados al caer del 40,5%, en el promedio de 1990-2005, al 32,6% entre 2006 y 2016 (último año para el que el INE reporta los datos sobre las cuentas del ingreso).</p> <p>De estas tendencias estructurales se infiere que la producción y el consumo internos no han sido los factores determinantes del crecimiento ni sus bases de sostenibilidad y, en consecuencia, que crear empleo productivo no ha sido una prioridad.</p>	<p align="center">Estructura promedio de las cuentas de ingreso y gasto</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>98-05</th> <th>06-16</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Ingreso</td> <td>Impuestos</td> <td>14.1</td> <td>20.7</td> <td>6.6</td> </tr> <tr> <td>Remuneraciones</td> <td>34.1</td> <td>26.7</td> <td>-7.3</td> </tr> <tr> <td>Excedente Bruto</td> <td>51.9</td> <td>53.6</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Gasto</td> <td>Gasto consumo (GC)</td> <td>88.3</td> <td>78.0</td> <td>-10.4</td> </tr> <tr> <td>GC Gobierno</td> <td>15.5</td> <td>14.6</td> <td>-0.9</td> </tr> <tr> <td>GC Hogares</td> <td>72.8</td> <td>63.3</td> <td>-9.5</td> </tr> <tr> <td>FBKF+VE</td> <td>16.2</td> <td>18.1</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>Saldo comercial XN</td> <td>-4.5</td> <td>3.9</td> <td>8.4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>100.0</td> <td>100.0</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">Cuentas del ingreso</p> <p> Remuneración Excedente Empr Impuestos-Subs </p> <p>40,5% = DPI = 32,6%</p>			98-05	06-16	Diferencia	Ingreso	Impuestos	14.1	20.7	6.6	Remuneraciones	34.1	26.7	-7.3	Excedente Bruto	51.9	53.6	0.7	Gasto	Gasto consumo (GC)	88.3	78.0	-10.4	GC Gobierno	15.5	14.6	-0.9	GC Hogares	72.8	63.3	-9.5	FBKF+VE	16.2	18.1	1.9	Saldo comercial XN	-4.5	3.9	8.4		Total	100.0	100.0	0.0
			98-05	06-16	Diferencia																																									
	Ingreso	Impuestos	14.1	20.7	6.6																																									
		Remuneraciones	34.1	26.7	-7.3																																									
		Excedente Bruto	51.9	53.6	0.7																																									
	Gasto	Gasto consumo (GC)	88.3	78.0	-10.4																																									
		GC Gobierno	15.5	14.6	-0.9																																									
		GC Hogares	72.8	63.3	-9.5																																									
		FBKF+VE	16.2	18.1	1.9																																									
		Saldo comercial XN	-4.5	3.9	8.4																																									
	Total	100.0	100.0	0.0																																										

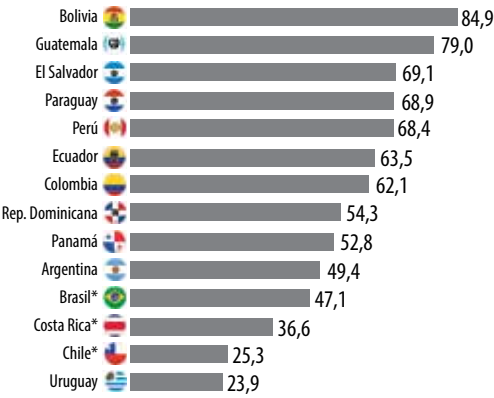
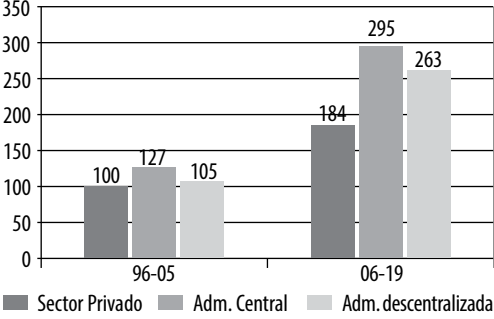
	TEMA	EVIDENCIAS			
3. DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO	<p>3. La economía creció por la alta incidencia del sector externo a costa del consumo de los hogares y de la producción nacional</p> <p>Una mirada más detallada a la evolución de los indicadores de consumo y demanda confirma que, desde 2006, la apertura externa se incrementó en un 10% en valores constantes, y en 22% en valores corrientes respecto al modelo “neoliberal”.</p> <p>En la estructura de la demanda global interna (DGI), la participación del consumo cae en la proporción en la que se reduce el consumo de los hogares.</p> <p>Finalmente, desde la perspectiva de un desarrollo sostenido a mediano y largo plazo, es una señal de alarma que las importaciones hayan desplazado a la producción interna respecto al consumo total, y especialmente respecto al consumo de los hogares. Implica menos empleo, demanda e ingresos.</p>	Componentes del crecimiento (Indicadores)			
		Estructuras porcentuales a valores corrientes	98-05	06-16	Diferencia
		Componente externo de la demanda global	17.6%	27.2%	9.6%
		Componente importado de la demanda global	21.7%	25.9%	4.2%
		Coefficiente medio de importaciones	27.8%	35.1%	7.3%
		Coefficiente medio de exportaciones	22.5%	36.8%	14.3%
		Coefficiente de apertura externa	50.3%	71.9%	21.6%
		Participación del consumo en la demanda interna	84.8%	81.0%	-3.9%
		Inversión respecto a demanda global interna	15.2%	19.0%	3.9%
		Consumo de hogares respecto a DGI	71.2%	65.5%	-5.7%
		Consumo público respecto a DGI	11.3%	11.3%	1.9%
		Importaciones respecto al consumo	31.2%	44.4%	13.2%
		Importaciones respecto al consumo de hogares	37.2%	54.8%	17.7%

	TEMA	EVIDENCIAS																																															
4. COMPORTAMIENTO DEL CRECIMIENTO MACRO-SECTORIAL	<p>4. Sectorialmente, han crecido los sectores que menos deberían crecer por sus aportes negativos a la diversificación productiva con generación de empleo digno</p> <p>Respecto al crecimiento global del PIB, entre 2006 y 2019 crecieron los sectores que menos deberían crecer: los servicios financieros 3,31 veces más que el PIB; los impuestos 1,62 veces, y la administración pública 1,4 veces más.</p> <p>Los sectores con alta incidencia en el empleo (formal o informal) crecieron significativamente menos que el PIB: madera y sus productos (0,7), la agricultura tradicional (0,6) y textiles (0,4).</p> <p>En general, la economía creció por los aportes del sector extractivo y del FAPI (Financiero, Impuestos y Administración Pública), mientras que la economía real (los restantes sectores) se redujo de manera muy marcada y, además, concentrada cada vez más en actividades de muy baja productividad: el crecimiento no es el necesario para el desarrollo.</p>	<p>Crecimiento 2005-2009 relativos al del PIB (pb)</p>																																															
		<p>Desempeño de los sectores agregados</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bs Corrientes</th> <th>98-05</th> <th>06-16</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Extractivo</td> <td>6.9%</td> <td>20.7</td> <td>6.6</td> </tr> <tr> <td>FAPI</td> <td>35.1%</td> <td>26.7</td> <td>-7.3</td> </tr> <tr> <td>Real</td> <td>58.0%</td> <td>53.6</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <th>Bs 1990</th> <th>90-05</th> <th>06-19</th> <th>Diferencia</th> </tr> <tr> <td>Extractivo</td> <td>9.8%</td> <td>14.6</td> <td>-0.9</td> </tr> <tr> <td>FAPI</td> <td>29.8%</td> <td>63.3</td> <td>-9.5</td> </tr> <tr> <td>Real</td> <td>60.4%</td> <td>18.1</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <th>Valor agregado</th> <th>90-05</th> <th>06-21</th> <th>Diferencia</th> </tr> <tr> <td>Extractivo</td> <td>7.9%</td> <td>15.1%</td> <td>7.1%</td> </tr> <tr> <td>FAPI</td> <td>26.0%</td> <td>28.9%</td> <td>2.9%</td> </tr> <tr> <td>Real</td> <td>66.1%</td> <td>56.1%</td> <td>-10.0%</td> </tr> </tbody> </table>	Bs Corrientes	98-05	06-16	Diferencia	Extractivo	6.9%	20.7	6.6	FAPI	35.1%	26.7	-7.3	Real	58.0%	53.6	0.7	Bs 1990	90-05	06-19	Diferencia	Extractivo	9.8%	14.6	-0.9	FAPI	29.8%	63.3	-9.5	Real	60.4%	18.1	1.9	Valor agregado	90-05	06-21	Diferencia	Extractivo	7.9%	15.1%	7.1%	FAPI	26.0%	28.9%	2.9%	Real	66.1%	56.1%
Bs Corrientes	98-05	06-16	Diferencia																																														
Extractivo	6.9%	20.7	6.6																																														
FAPI	35.1%	26.7	-7.3																																														
Real	58.0%	53.6	0.7																																														
Bs 1990	90-05	06-19	Diferencia																																														
Extractivo	9.8%	14.6	-0.9																																														
FAPI	29.8%	63.3	-9.5																																														
Real	60.4%	18.1	1.9																																														
Valor agregado	90-05	06-21	Diferencia																																														
Extractivo	7.9%	15.1%	7.1%																																														
FAPI	26.0%	28.9%	2.9%																																														
Real	66.1%	56.1%	-10.0%																																														

	TEMA	EVIDENCIAS																																																																																																
5. EL CRECIMIENTO REGIONAL Y DE LOS SECTORES	<p>5. El crecimiento es desigual y episódico, tanto territorial como sectorialmente</p> <p>El crecimiento sectorial en las regiones muestra que la participación del agregado real (productivo) ha caído en todos los departamentos, mientras que también en todos aumenta el "aporte" FAPI (un aporte esencialmente contable porque estos tres sectores generan rentas sin crear valor-ingresos o empleo productivo). El agregado extractivo sólo incide significativamente en Tarija, Potosí y Oruro.</p> <p>Sectorialmente, esto se refleja en el hecho que, respecto a los 10 años precedentes, desde 2006 (a valores corrientes), sólo crecieron el extractivo y la administración pública; si se toman como base valores constantes de 1990, se suman los sectores del transporte y (marginamente) la construcción y la industria. En todo caso, la escasa articulación –tanto horizontal como vertical de esos cinco sectores– es un fuerte indicio de que el crecimiento que da lugar a los comportamientos observados es episódico y no responde a un proceso articulado de desarrollo.</p>	<p align="center">Diferencia porcentual en la estructura del PIB (dpto.) del promedio de aportes macro-sectoriales 90-05/06-20</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bs Corrientes</th> <th>CHU</th> <th>LPZ</th> <th>CBB</th> <th>ORU</th> <th>POT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAPI</td> <td>7.1%</td> <td>9.0%</td> <td>10.3%</td> <td>0.5%</td> <td>-3.0%</td> </tr> <tr> <td>Extractivo</td> <td>4.9%</td> <td>2.6%</td> <td>0.4%</td> <td>7.3%</td> <td>16.6%</td> </tr> <tr> <td>Real</td> <td>-12.0%</td> <td>-11.5%</td> <td>-10.7%</td> <td>-7.8%</td> <td>-13.7%</td> </tr> <tr> <th>Bs 1990</th> <th>CHU</th> <th>LPZ</th> <th>CBB</th> <th>ORU</th> <th>POT</th> </tr> <tr> <td>FAPI</td> <td>3.6%</td> <td>5.0%</td> <td>4.4%</td> <td>1.1%</td> <td>-0.8%</td> </tr> <tr> <td>Extractivo</td> <td>1.6%</td> <td>0.9%</td> <td>-2.8%</td> <td>-4.0%</td> <td>3.8%</td> </tr> <tr> <td>Real</td> <td>-5.2%</td> <td>-5.9%</td> <td>-1.6%</td> <td>2.9%</td> <td>-3.0%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bs Corrientes</th> <th>TAR</th> <th>SCZ</th> <th>BEN</th> <th>PAN</th> <th>PROM. NAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAPI</td> <td>15.4%</td> <td>7.7%</td> <td>7.7%</td> <td>5.0%</td> <td>6.6%</td> </tr> <tr> <td>Extractivo</td> <td>15.3%</td> <td>1.2%</td> <td>1.4%</td> <td>2.1%</td> <td>5.8%</td> </tr> <tr> <td>Real</td> <td>-30.7%</td> <td>-8.9%</td> <td>-9.1%</td> <td>-7.1%</td> <td>-12.4%</td> </tr> <tr> <th>Bs 1990</th> <th>TAR</th> <th>SCZ</th> <th>BEN</th> <th>PAN</th> <th>PROM. NAL</th> </tr> <tr> <td>FAPI</td> <td>6.5%</td> <td>1.7%</td> <td>2.2%</td> <td>1.8%</td> <td>2.8%</td> </tr> <tr> <td>Extractivo</td> <td>14.2%</td> <td>-1.4%</td> <td>-0.4%</td> <td>-3.2%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>Real</td> <td>-20.7%</td> <td>-0.2%</td> <td>-1.8%</td> <td>1.4%</td> <td>-3.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">El crecimiento regional de sectores con más del 4,5%</p> <p>Crecimiento mayor a 4,5%</p> <p>Serv. Financieros IVA, IT y otros Imp. Construcción</p>	Bs Corrientes	CHU	LPZ	CBB	ORU	POT	FAPI	7.1%	9.0%	10.3%	0.5%	-3.0%	Extractivo	4.9%	2.6%	0.4%	7.3%	16.6%	Real	-12.0%	-11.5%	-10.7%	-7.8%	-13.7%	Bs 1990	CHU	LPZ	CBB	ORU	POT	FAPI	3.6%	5.0%	4.4%	1.1%	-0.8%	Extractivo	1.6%	0.9%	-2.8%	-4.0%	3.8%	Real	-5.2%	-5.9%	-1.6%	2.9%	-3.0%	Bs Corrientes	TAR	SCZ	BEN	PAN	PROM. NAL	FAPI	15.4%	7.7%	7.7%	5.0%	6.6%	Extractivo	15.3%	1.2%	1.4%	2.1%	5.8%	Real	-30.7%	-8.9%	-9.1%	-7.1%	-12.4%	Bs 1990	TAR	SCZ	BEN	PAN	PROM. NAL	FAPI	6.5%	1.7%	2.2%	1.8%	2.8%	Extractivo	14.2%	-1.4%	-0.4%	-3.2%	1.0%	Real	-20.7%	-0.2%	-1.8%	1.4%	-3.8%
	Bs Corrientes	CHU	LPZ	CBB	ORU	POT																																																																																												
	FAPI	7.1%	9.0%	10.3%	0.5%	-3.0%																																																																																												
	Extractivo	4.9%	2.6%	0.4%	7.3%	16.6%																																																																																												
Real	-12.0%	-11.5%	-10.7%	-7.8%	-13.7%																																																																																													
Bs 1990	CHU	LPZ	CBB	ORU	POT																																																																																													
FAPI	3.6%	5.0%	4.4%	1.1%	-0.8%																																																																																													
Extractivo	1.6%	0.9%	-2.8%	-4.0%	3.8%																																																																																													
Real	-5.2%	-5.9%	-1.6%	2.9%	-3.0%																																																																																													
Bs Corrientes	TAR	SCZ	BEN	PAN	PROM. NAL																																																																																													
FAPI	15.4%	7.7%	7.7%	5.0%	6.6%																																																																																													
Extractivo	15.3%	1.2%	1.4%	2.1%	5.8%																																																																																													
Real	-30.7%	-8.9%	-9.1%	-7.1%	-12.4%																																																																																													
Bs 1990	TAR	SCZ	BEN	PAN	PROM. NAL																																																																																													
FAPI	6.5%	1.7%	2.2%	1.8%	2.8%																																																																																													
Extractivo	14.2%	-1.4%	-0.4%	-3.2%	1.0%																																																																																													
Real	-20.7%	-0.2%	-1.8%	1.4%	-3.8%																																																																																													

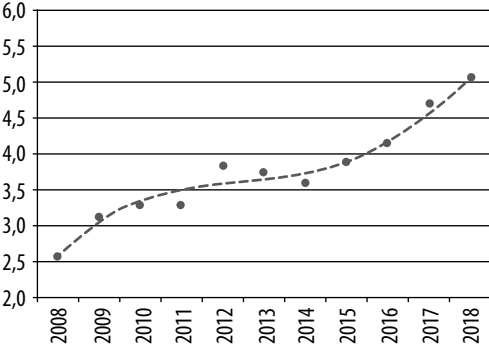
	TEMA	EVIDENCIAS
<p>5. EL CRECIMIENTO REGIONAL Y DE LOS SECTORES</p>	<p>El crecimiento, desde 2006, está sustentado por los sectores y las actividades que menos deberían crecer si lo que se busca es un desarrollo productivo integral, que valore el trabajo y la iniciativa humana como fuente de creación de valor, y considere que deben ser las personas las beneficiarias directas y finales de los beneficios del crecimiento.</p> <p>Por ejemplo, en 2013-2014, el PIB creció por encima del 4,5% “gatillando” el segundo aguinaldo; pero sólo servicios financieros, administración pública, impuestos (FAPI, que no aportan a crear valor ni empleo productivo), la construcción, industria de cemento, transportes y distribución de gas, agua y electricidad crecieron más del 4,5%.</p>	<p>Crecimineto mayor a 4,5%</p> <p>El crecimiento regional de con menos del 4,5%</p>

5. EL CRECIMIENTO REGIONAL Y DE LOS SECTORES	TEMA	EVIDENCIAS
	<p>El resto de las actividades de la economía real (28 sectores/subsectores), en las que se concentra el 80% del empleo remunerado, crecieron apenas en 2,3% como promedio, pero cargaron el peso del segundo aguinaldo.</p>	<p>Crecimineto menor a 4,5%</p> <p>The figure consists of three radar charts, each with eight axes representing Bolivian regions: Bolivia, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, and Pando. Each chart has a scale from -4 to 8. A red line represents the average growth rate, which is consistently below 4.5% in all three charts. The legend for the top chart includes 'Industria Man.' (red), 'Agricultura...' (green), 'Prop. vivienda' (purple), and 'Serv. a Empresas' (yellow). The legend for the middle chart includes 'Rest y Hoteles' (red), 'Otras industrias' (green), 'Comercio' (purple), and 'Comunic.' (yellow). The legend for the bottom chart includes 'Textiles' (red), 'Silvicult, Caza Pesca' (green), and 'Madera y Prd Mad' (yellow).</p> <p>Crecimineto menor a 4,5%</p> <p>Crecimineto menor a 4,5%</p> <p>Crecimineto menor a 4,5%</p>

	TEMA	EVIDENCIAS																																																						
<p>6. EL EMPLEO: TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DOMINANTES</p>	<p>6. Bolivia es líder mundial de informalidad laboral y de precariedad del empleo</p> <p>El 85% de la población ocupada en Bolivia se ubica en el sector informal, que es sinónimo de gran precariedad, baja productividad y muy bajos aportes a la generación y agregación de valor.</p> <p>Los sectores con alta incidencia en el empleo (formal o informal) crecieron significativamente menos que el PIB: madera y sus productos (0,7), la agricultura tradicional (0,6) y textiles (0,4).</p> <p>Además, los índices de empleo en los sectores privado y público muestran un crecimiento mayor del empleo en el sector público, sobre todo, en la administración central que genera los innumerables obstáculos burocráticos que han sido identificados hace 40 años como las causas que limitan las inversiones generadoras de valor y empleo.</p> <p>Respecto a los índices de empleo privado, entre 2006 y 2019 el empleo público lo supera en un 50%.</p>	<p>La informalidad laboral en Latinoamérica</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>País</th> <th>Índice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bolivia</td><td>84,9</td></tr> <tr><td>Guatemala</td><td>79,0</td></tr> <tr><td>El Salvador</td><td>69,1</td></tr> <tr><td>Paraguay</td><td>68,9</td></tr> <tr><td>Perú</td><td>68,4</td></tr> <tr><td>Ecuador</td><td>63,5</td></tr> <tr><td>Colombia</td><td>62,1</td></tr> <tr><td>Rep. Dominicana</td><td>54,3</td></tr> <tr><td>Panamá</td><td>52,8</td></tr> <tr><td>Argentina</td><td>49,4</td></tr> <tr><td>Brasil*</td><td>47,1</td></tr> <tr><td>Costa Rica*</td><td>36,6</td></tr> <tr><td>Chile*</td><td>25,3</td></tr> <tr><td>Uruguay</td><td>23,9</td></tr> </tbody> </table> <p>*Datos de 2020 Solo incluye países con datos disponibles desde 2019 Fuente: OIT</p> <p>Índices de empleo público y privado (promedios)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>96-05</th> <th>06-19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sector priavo</td> <td>100</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td>Administración central</td> <td>127</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>Administración descentralizada</td> <td>105</td> <td>263</td> </tr> </tbody> </table> <p>Índices de empleo</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Sector Privado</th> <th>Adm. Central</th> <th>Adm. descentralizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96-05</td> <td>100</td> <td>127</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>06-19</td> <td>184</td> <td>295</td> <td>263</td> </tr> </tbody> </table>	País	Índice	Bolivia	84,9	Guatemala	79,0	El Salvador	69,1	Paraguay	68,9	Perú	68,4	Ecuador	63,5	Colombia	62,1	Rep. Dominicana	54,3	Panamá	52,8	Argentina	49,4	Brasil*	47,1	Costa Rica*	36,6	Chile*	25,3	Uruguay	23,9		96-05	06-19	Sector priavo	100	184	Administración central	127	295	Administración descentralizada	105	263	Período	Sector Privado	Adm. Central	Adm. descentralizada	96-05	100	127	105	06-19	184	295	263
País	Índice																																																							
Bolivia	84,9																																																							
Guatemala	79,0																																																							
El Salvador	69,1																																																							
Paraguay	68,9																																																							
Perú	68,4																																																							
Ecuador	63,5																																																							
Colombia	62,1																																																							
Rep. Dominicana	54,3																																																							
Panamá	52,8																																																							
Argentina	49,4																																																							
Brasil*	47,1																																																							
Costa Rica*	36,6																																																							
Chile*	25,3																																																							
Uruguay	23,9																																																							
	96-05	06-19																																																						
Sector priavo	100	184																																																						
Administración central	127	295																																																						
Administración descentralizada	105	263																																																						
Período	Sector Privado	Adm. Central	Adm. descentralizada																																																					
96-05	100	127	105																																																					
06-19	184	295	263																																																					

	TEMA	EVIDENCIAS																																				
<p>6. EL EMPLEO: TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DOMINANTES</p>	<p>De hecho, un tercio de las 700.000 personas (240.000) que se sumaron a la población ocupada entre 2006 y 2015 lo hizo en la administración pública; un 45% (312.000) lo hizo en comercio (dominado por microcomercio que constituye el macro canal de distribución de productos de contrabando) y otro 30% (215.000) se ubica en la construcción.</p> <p>El incremento en el resto de sectores solamente “compensa” las pérdidas de puestos de trabajo en la agricultura tradicional (-140.000) y en las actividades inmobiliarias y de servicios a las empresas (-120.000).</p> <p>Como reflejo de las tendencias mencionadas, la productividad laboral en Bolivia es la más baja de la región: esta es una de las principales razones para la persistencia de la pobreza a pesar de los episodios de alto crecimiento impulsados por los precios de las materias primas exportadas.</p> <p><i>En síntesis, el crecimiento económico no garantiza la creación de los puestos de trabajo –en cantidad y en calidad– que la sociedad boliviana demanda.</i></p>	<p style="text-align: center;">Incremento Poblacional Ocupada 2006-2015</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Personas</th> <th style="text-align: center;">Estructura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: center;">703,088</td> <td style="text-align: center;">100.0%</td> </tr> <tr> <td>Comercio, Rest/Hot</td> <td style="text-align: center;">311,815</td> <td style="text-align: center;">44.3%</td> </tr> <tr> <td>Administración Pública</td> <td style="text-align: center;">237,309</td> <td style="text-align: center;">33.8%</td> </tr> <tr> <td>Construcción</td> <td style="text-align: center;">213,876</td> <td style="text-align: center;">30.4%</td> </tr> <tr> <td>Transporte</td> <td style="text-align: center;">111,957</td> <td style="text-align: center;">15.9%</td> </tr> <tr> <td>Extractivo</td> <td style="text-align: center;">47,168</td> <td style="text-align: center;">6.7%</td> </tr> <tr> <td>Industria Man</td> <td style="text-align: center;">32,099</td> <td style="text-align: center;">4.6%</td> </tr> <tr> <td>Electricidad...</td> <td style="text-align: center;">4,520</td> <td style="text-align: center;">0.6%</td> </tr> <tr> <td>NS/NR</td> <td style="text-align: center;">2,701</td> <td style="text-align: center;">0.4%</td> </tr> <tr> <td>Financieras, inmob, profes...</td> <td style="text-align: center;">-118,223</td> <td style="text-align: center;">-16.8%</td> </tr> <tr> <td>Agropecuaria</td> <td style="text-align: center;">-140,133</td> <td style="text-align: center;">-19.9%</td> </tr> </tbody> </table>		Personas	Estructura	Total	703,088	100.0%	Comercio, Rest/Hot	311,815	44.3%	Administración Pública	237,309	33.8%	Construcción	213,876	30.4%	Transporte	111,957	15.9%	Extractivo	47,168	6.7%	Industria Man	32,099	4.6%	Electricidad...	4,520	0.6%	NS/NR	2,701	0.4%	Financieras, inmob, profes...	-118,223	-16.8%	Agropecuaria	-140,133	-19.9%
		Personas	Estructura																																			
	Total	703,088	100.0%																																			
	Comercio, Rest/Hot	311,815	44.3%																																			
	Administración Pública	237,309	33.8%																																			
	Construcción	213,876	30.4%																																			
	Transporte	111,957	15.9%																																			
	Extractivo	47,168	6.7%																																			
	Industria Man	32,099	4.6%																																			
	Electricidad...	4,520	0.6%																																			
	NS/NR	2,701	0.4%																																			
	Financieras, inmob, profes...	-118,223	-16.8%																																			
	Agropecuaria	-140,133	-19.9%																																			

	TEMA	EVIDENCIAS																									
7. LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, MÁS ALLÁ DE LOS BONOS	<p>7. El Estado confisca a las personas más de lo que distribuye en bonos</p> <p>En tanto no se modifiquen estructuralmente las condiciones que determinan las tasas y los ritmos del crecimiento –sectorial y regional– que inducen la precariedad del empleo, las políticas sectoriales no tendrán el impacto positivo real en el desarrollo que se traduzca en incrementar, fortalecer y consolidar la capacidad productiva necesaria para revertir la pobreza y la exclusión social.</p> <p>El crecimiento no es suficiente y la economía sólo es saludable si ofrece, a todos, calidad en el empleo, dignidad en los ingresos, confianza en una vejez segura y la tranquilidad de legar un medio ambiente sostenible; la distribución del ingreso vía la justa remuneración al trabajo debe ser parte de <i>políticas que aporten al incremento sostenible de actividades productivas con aumento del empleo y los salarios, lo que contribuirá necesariamente al crecimiento de la economía, a mejorar la equidad y al vivir bien.</i></p>	<p><i>El crecimiento sostenido de la economía requiere equilibrio entre oferta y demanda. Implica necesariamente la distribución de la riqueza. No la re-distribución de la riqueza acumulada por otros actores, sino la distribución directa conforme los procesos productivos creen valor, para garantizar un nivel de consumo compatible con la capacidad real de oferta del aparato productivo.</i></p> <p><i>En tanto persistan la severa inequidad en la distribución primaria y las metas de recaudación como objetivo único, ni medidas en el ámbito macroeconómico –controlar inflación, acumular reservas internacionales o aumentar la tasa de crecimiento– ni programas de transferencias (bonos) podrán revertir la pobreza, la desigualdad y la precariedad del empleo.</i></p> <p><i>La equitativa remuneración al trabajo es el mecanismo más eficiente para garantizar equidad y oportunidad en la distribución</i></p>																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Remuneración “confiscada” (Millones de Bs)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>8,086</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>9,345</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>13,339</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>10,089</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>13,246</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>16,523</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>20,311</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>23,236</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>22,576</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>16,500</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>13,700</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>167,021</td> </tr> </tbody> </table>	Remuneración “confiscada” (Millones de Bs)		2006	8,086	2007	9,345	2008	13,339	2009	10,089	2010	13,246	2011	16,523	2012	20,311	2013	23,236	2014	22,576	2015	16,500	2016	13,700	Total
Remuneración “confiscada” (Millones de Bs)																											
2006	8,086																										
2007	9,345																										
2008	13,339																										
2009	10,089																										
2010	13,246																										
2011	16,523																										
2012	20,311																										
2013	23,236																										
2014	22,576																										
2015	16,500																										
2016	13,700																										
Total	167,021																										

	TEMA	EVIDENCIAS																								
	<p>Las transferencias en efectivo (bonos) no tienen este enfoque. Entre 2006 y 2016 suman Bs 22.000 millones (US\$ 3.000 millones). En el mismo período, por la caída en la participación de remuneraciones en el PIB (tema 1), los asalariados dejaron de percibir Bs 170 mil millones a (unos US\$ 25 mil millones), monto ocho veces mayor que los bonos.</p> <p>Pero las transferencias tampoco garantizan la mejor distribución del ingreso: en 2006 el patrimonio del SIF (sistema financiero) era el doble de todos los pagos anuales por bonos; en 2018, el patrimonio del SIF era cinco veces mayor a las transferencias anuales en todos los bonos.</p> <p>Finalmente, en su relación diaria con el Estado, es el ciudadano el que le transfiere “ingresos” mediante tarifas y certificados que no están adecuadamente dimensionados con la calidad de los servicios que brinda el Estado y que, en todo caso, debían en buena medida ser cubiertos por los impuestos: en realidad, la burocracia es agencia de recaudaciones</p>	<p style="text-align: center;">Patrimonio SIF/Bonos</p>  <table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Patrimonio SIF/Bonos</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Ratio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2008</td><td>2.6</td></tr> <tr><td>2009</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>2010</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>2011</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>2012</td><td>3.8</td></tr> <tr><td>2013</td><td>3.7</td></tr> <tr><td>2014</td><td>3.6</td></tr> <tr><td>2015</td><td>3.9</td></tr> <tr><td>2016</td><td>4.1</td></tr> <tr><td>2017</td><td>4.7</td></tr> <tr><td>2018</td><td>5.1</td></tr> </tbody> </table>	Año	Ratio	2008	2.6	2009	3.1	2010	3.3	2011	3.3	2012	3.8	2013	3.7	2014	3.6	2015	3.9	2016	4.1	2017	4.7	2018	5.1
Año	Ratio																									
2008	2.6																									
2009	3.1																									
2010	3.3																									
2011	3.3																									
2012	3.8																									
2013	3.7																									
2014	3.6																									
2015	3.9																									
2016	4.1																									
2017	4.7																									
2018	5.1																									

	TEMA	EVIDENCIAS																																						
8. REDUCCIÓN DE LA POBREZA MODERADA Y EXTREMA	<p>8. La gran reducción de la pobreza moderada y extrema que muestra el INE no es realista</p> <p>FAO (2018): <i>El ranking del hambre en América Latina, lo lidera Bolivia (con el 19,8% de población subalimentada); siguen Nicaragua (16,2%) y Guatemala (15,8%).</i></p> <p>Los datos oficiales sobre reducción de la pobreza (medida bajo el criterio de la línea de pobreza) no reflejan la compleja realidad que implica la pobreza en sus múltiples dimensiones. Incluso si los ingresos que habrían permitido superar las líneas de pobreza a ciertos grupos no pudieran ser cuestionados, la realidad del empleo, de la distribución del ingreso y las bases del crecimiento analizados en los temas precedentes muestran que superar la línea de pobreza no es sinónimo de “salir de la pobreza.”</p> <p>Por ejemplo, la <i>multidimensionalidad</i> de la pobreza estudiada por el CEDLA muestra que los “recursos monetarios” son una de las dimensiones que, por otra parte, tiene efectos efímeros si provienen de fuentes que no sean un (auto)empleo digno.</p>	<p style="text-align: center;">Población Subalimentada</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>País</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bolivia</td><td>19,8</td></tr> <tr><td>Nicaragua</td><td>16,2</td></tr> <tr><td>Guatemala</td><td>15,8</td></tr> <tr><td>Honduras</td><td>15,3</td></tr> <tr><td>Venezuela</td><td>11,7</td></tr> <tr><td>Paraguay</td><td>11,2</td></tr> <tr><td>Rep. Dominicana</td><td>10,4</td></tr> <tr><td>El Salvador</td><td>10,3</td></tr> <tr><td>Panamá</td><td>9,2</td></tr> <tr><td>Perú</td><td>8,8</td></tr> <tr><td>Ecuador</td><td>7,8</td></tr> <tr><td>Colombia</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Costa Rica</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>México</td><td>3,8</td></tr> <tr><td>Chile</td><td>3,3</td></tr> <tr><td>Uruguay</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>Brasil</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>Cuba</td><td>2,5</td></tr> </tbody> </table>	País	%	Bolivia	19,8	Nicaragua	16,2	Guatemala	15,8	Honduras	15,3	Venezuela	11,7	Paraguay	11,2	Rep. Dominicana	10,4	El Salvador	10,3	Panamá	9,2	Perú	8,8	Ecuador	7,8	Colombia	6,5	Costa Rica	4,4	México	3,8	Chile	3,3	Uruguay	2,5	Brasil	2,5	Cuba	2,5
	País	%																																						
Bolivia	19,8																																							
Nicaragua	16,2																																							
Guatemala	15,8																																							
Honduras	15,3																																							
Venezuela	11,7																																							
Paraguay	11,2																																							
Rep. Dominicana	10,4																																							
El Salvador	10,3																																							
Panamá	9,2																																							
Perú	8,8																																							
Ecuador	7,8																																							
Colombia	6,5																																							
Costa Rica	4,4																																							
México	3,8																																							
Chile	3,3																																							
Uruguay	2,5																																							
Brasil	2,5																																							
Cuba	2,5																																							

	TEMA	EVIDENCIAS																											
<p>8. REDUCCIÓN DE LA POBREZA MODERADA Y EXTREMA</p>	<p>Una mirada más realista a la magnitud de la pobreza en Bolivia debe incluir, por ejemplo, el ranking del hambre que Bolivia lidera en América Latina. Pero son también muy ilustrativas sobre las distancias en la calidad de vida que impone la pobreza, la relación entre las magnitudes de los gastos de los hogares en los aspectos básicos de vida y en los de bienestar: en Bolivia, la relación es de 73% en básicos y 27% en bienestar, mientras que, en el promedio de América del Sur, son 53% y 47%, respectivamente.</p>	<p style="text-align: center;">La pobreza multidimensional</p> <p style="text-align: center;"> Gastos de vida básicos Gastos en bienestar </p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Datos del gráfico de barras: Gastos de vida básicos vs. Gastos en bienestar</caption> <thead> <tr> <th>País/Región</th> <th>Gastos de vida básicos (%)</th> <th>Gastos en bienestar (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bolivia</td> <td>73.1%</td> <td>26.9%</td> </tr> <tr> <td>Chile</td> <td>~45%</td> <td>~55%</td> </tr> <tr> <td>Colombia</td> <td>~55%</td> <td>~45%</td> </tr> <tr> <td>Ecuador</td> <td>~55%</td> <td>~45%</td> </tr> <tr> <td>Paraguay</td> <td>~55%</td> <td>~45%</td> </tr> <tr> <td>Perú</td> <td>~55%</td> <td>~45%</td> </tr> <tr> <td>Uruguay</td> <td>~55%</td> <td>~45%</td> </tr> <tr> <td>Promedio</td> <td>53.1%</td> <td>46.9%</td> </tr> </tbody> </table>	País/Región	Gastos de vida básicos (%)	Gastos en bienestar (%)	Bolivia	73.1%	26.9%	Chile	~45%	~55%	Colombia	~55%	~45%	Ecuador	~55%	~45%	Paraguay	~55%	~45%	Perú	~55%	~45%	Uruguay	~55%	~45%	Promedio	53.1%	46.9%
País/Región	Gastos de vida básicos (%)	Gastos en bienestar (%)																											
Bolivia	73.1%	26.9%																											
Chile	~45%	~55%																											
Colombia	~55%	~45%																											
Ecuador	~55%	~45%																											
Paraguay	~55%	~45%																											
Perú	~55%	~45%																											
Uruguay	~55%	~45%																											
Promedio	53.1%	46.9%																											

	TEMA	EVIDENCIAS																																																																																																												
<p>8. REDUCCIÓN DE LA POBREZA MODERADA Y EXTREMA</p>	<p>En cuanto a los montos destinados por rubros, es por demás alarmante la poca capacidad de gasto de los bolivianos en aspectos fundamentales para el desarrollo como la educación, la salud y la cultura. Por último, en América del Sur, los bolivianos son los que menos capacidad de consumo tenemos, factor que limita el tamaño del mercado para promover las inversiones productivas.</p>	<p style="text-align: center;">Gasto consumo efectivo pc, \$us 2011 (PPP)</p> <p>Top Chart: Bolivia vs Prom</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubro</th> <th>Bolivia</th> <th>Prom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aliment/b...</td> <td>~1,050</td> <td>~1,800</td> </tr> <tr> <td>Viv/servic</td> <td>~1,000</td> <td>~2,100</td> </tr> <tr> <td>Ropa/calz</td> <td>~50</td> <td>~250</td> </tr> <tr> <td>Transp/Com</td> <td>~500</td> <td>~900</td> </tr> <tr> <td>Salud</td> <td>~350</td> <td>~1,050</td> </tr> <tr> <td>Educación</td> <td>~450</td> <td>~1,800</td> </tr> <tr> <td>B/S varios</td> <td>~100</td> <td>~900</td> </tr> <tr> <td>Recr/cultura</td> <td>~20</td> <td>~350</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bottom Chart: Multi-Country Comparison</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubro</th> <th>Bolivia</th> <th>Chile</th> <th>Colombia</th> <th>Ecuador</th> <th>Paraguay</th> <th>Perú</th> <th>Uruguay</th> <th>Prom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aliment/b...</td> <td>~1,050</td> <td>~2,200</td> <td>~1,800</td> <td>~1,500</td> <td>~1,200</td> <td>~1,100</td> <td>~2,700</td> <td>~1,800</td> </tr> <tr> <td>Viv/servic</td> <td>~1,000</td> <td>~2,800</td> <td>~2,200</td> <td>~1,800</td> <td>~1,300</td> <td>~1,200</td> <td>~3,800</td> <td>~2,200</td> </tr> <tr> <td>Ropa/calz</td> <td>~50</td> <td>~400</td> <td>~300</td> <td>~300</td> <td>~300</td> <td>~300</td> <td>~400</td> <td>~300</td> </tr> <tr> <td>Transp/Com</td> <td>~500</td> <td>~1,500</td> <td>~800</td> <td>~800</td> <td>~700</td> <td>~700</td> <td>~1,300</td> <td>~900</td> </tr> <tr> <td>Salud</td> <td>~350</td> <td>~1,700</td> <td>~800</td> <td>~700</td> <td>~600</td> <td>~600</td> <td>~2,000</td> <td>~1,050</td> </tr> <tr> <td>Educación</td> <td>~450</td> <td>~3,600</td> <td>~1,500</td> <td>~1,500</td> <td>~1,400</td> <td>~1,300</td> <td>~1,800</td> <td>~1,800</td> </tr> <tr> <td>B/S varios</td> <td>~100</td> <td>~1,800</td> <td>~900</td> <td>~600</td> <td>~600</td> <td>~600</td> <td>~1,100</td> <td>~900</td> </tr> <tr> <td>Recr/cultura</td> <td>~20</td> <td>~700</td> <td>~300</td> <td>~300</td> <td>~300</td> <td>~300</td> <td>~400</td> <td>~350</td> </tr> </tbody> </table>	Rubro	Bolivia	Prom	Aliment/b...	~1,050	~1,800	Viv/servic	~1,000	~2,100	Ropa/calz	~50	~250	Transp/Com	~500	~900	Salud	~350	~1,050	Educación	~450	~1,800	B/S varios	~100	~900	Recr/cultura	~20	~350	Rubro	Bolivia	Chile	Colombia	Ecuador	Paraguay	Perú	Uruguay	Prom	Aliment/b...	~1,050	~2,200	~1,800	~1,500	~1,200	~1,100	~2,700	~1,800	Viv/servic	~1,000	~2,800	~2,200	~1,800	~1,300	~1,200	~3,800	~2,200	Ropa/calz	~50	~400	~300	~300	~300	~300	~400	~300	Transp/Com	~500	~1,500	~800	~800	~700	~700	~1,300	~900	Salud	~350	~1,700	~800	~700	~600	~600	~2,000	~1,050	Educación	~450	~3,600	~1,500	~1,500	~1,400	~1,300	~1,800	~1,800	B/S varios	~100	~1,800	~900	~600	~600	~600	~1,100	~900	Recr/cultura	~20	~700	~300	~300	~300	~300	~400	~350
Rubro	Bolivia	Prom																																																																																																												
Aliment/b...	~1,050	~1,800																																																																																																												
Viv/servic	~1,000	~2,100																																																																																																												
Ropa/calz	~50	~250																																																																																																												
Transp/Com	~500	~900																																																																																																												
Salud	~350	~1,050																																																																																																												
Educación	~450	~1,800																																																																																																												
B/S varios	~100	~900																																																																																																												
Recr/cultura	~20	~350																																																																																																												
Rubro	Bolivia	Chile	Colombia	Ecuador	Paraguay	Perú	Uruguay	Prom																																																																																																						
Aliment/b...	~1,050	~2,200	~1,800	~1,500	~1,200	~1,100	~2,700	~1,800																																																																																																						
Viv/servic	~1,000	~2,800	~2,200	~1,800	~1,300	~1,200	~3,800	~2,200																																																																																																						
Ropa/calz	~50	~400	~300	~300	~300	~300	~400	~300																																																																																																						
Transp/Com	~500	~1,500	~800	~800	~700	~700	~1,300	~900																																																																																																						
Salud	~350	~1,700	~800	~700	~600	~600	~2,000	~1,050																																																																																																						
Educación	~450	~3,600	~1,500	~1,500	~1,400	~1,300	~1,800	~1,800																																																																																																						
B/S varios	~100	~1,800	~900	~600	~600	~600	~1,100	~900																																																																																																						
Recr/cultura	~20	~700	~300	~300	~300	~300	~400	~350																																																																																																						

	TEMA	EVIDENCIAS
<p>9. POLÍTICA FISCAL Y PRESIÓN TRIBUTARIA</p>	<p>9. El manejo fiscal es una de las fuentes de desigualdad e incentivo a la informalidad</p> <p>Mientras el índice del PIB y del excedente bruto de las empresas aumentó en algo más de cuatro veces desde 2000, el índice de remuneración (REM) a asalariados sólo se triplicó, pero el de impuestos recaudados llegó a crecer un poco más que ocho veces (incluyendo IDH). La de REM a impuestos era de 2,7 veces en el año 2000, pero cae a 1 en 2014: es decir, la participación de impuestos igualó a la de remuneración al trabajo.</p> <p>Bolivia es el único caso en a región en el que recaudaciones son iguales a remuneraciones. Como en Bolivia la mayoría de los impuestos son indirectos –los paga el consumidor final–, las políticas fiscales bolivianas son el mecanismo directo para reducir el poder adquisitivo de los salarios y reducir la capacidad de consumo de los hogares (ver las tendencias de temas 2 y 3).</p>	<p>Índices de las cuentas del ingreso (2000=1.00)</p> <p>Impuestos/Remuneraciones</p>

	TEMA	EVIDENCIAS																																																																						
<p>9. POLÍTICA FISCAL Y PRESIÓN TRIBUTARIA</p>	<p>En estas condiciones de capacidad de consumo tan deprimida, no es posible desarrollar una sólida oferta nacional competitiva, menos con el tipo de cambio fijo y sobrevaluado. A la presión tributaria “formal”, se suman factores adicionales que limitan la capacidad de consumo: los costos y gastos en los que el ciudadano debe incurrir con cierta regularidad para cumplir con certificaciones sobre todo tipo de aspectos que la “buro-parásito-cracia” añade en función de sus intereses.</p> <p>Incluso los aportes que estarían haciendo las empresas públicas (ENTEL, BoA, etc.) para los bonos, se pagan con las tarifas que las empresas imponen a la sociedad por servicios caros y muy poco competitivos, como ser la calidad y el costo de telecomunicaciones y del internet que ofrece ENTEL o las tarifas de BoA, que doblan las vigentes en tiempos del LAB o AeroSur.</p> <p>Finalmente, además del costo económico y social que los impuestos suponen para las personas, queda claro que los impuestos, hoy, ya “no construyen escuelas y hospitales”: las recaudaciones esperadas en 2022 son de 43 mil millones de bolivianos, pero la planilla de personal del Estado supera los 53 mil millones.</p>	<p style="text-align: center;">REM/Recaudaciones totales</p> <table border="1"> <caption>Approximate data from the REM/Recaudaciones totales chart</caption> <thead> <tr> <th>País</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Argentina</td> <td>1,600</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>Bolivia</td> <td>1,300</td> <td>1,200</td> <td>1,100</td> <td>1,100</td> <td>1,100</td> <td>1,100</td> </tr> <tr> <td>Brasil</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>Chile</td> <td>1,800</td> <td>1,800</td> <td>1,800</td> <td>1,800</td> <td>1,800</td> <td>1,800</td> </tr> <tr> <td>Colombia</td> <td>3,000</td> <td>2,800</td> <td>2,700</td> <td>2,700</td> <td>2,700</td> <td>2,700</td> </tr> <tr> <td>Ecuador</td> <td>2,000</td> <td>1,900</td> <td>1,800</td> <td>1,800</td> <td>1,800</td> <td>1,800</td> </tr> <tr> <td>Paraguay</td> <td>2,700</td> <td>2,700</td> <td>2,700</td> <td>2,700</td> <td>2,700</td> <td>2,700</td> </tr> <tr> <td>Perú</td> <td>2,200</td> <td>2,100</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>Uruguay</td> <td>2,100</td> <td>2,100</td> <td>2,100</td> <td>2,100</td> <td>2,100</td> <td>2,100</td> </tr> </tbody> </table> <pre> graph TD Empresas --> EmpleoRemun[Empleo y Remun.] EmpleoRemun --> Consumo EmpleoRemun --> IngresoHogares[Ingreso Hogares] Consumo --> IngresoHogares IngresoHogares --> IMPUESTOS IngresoHogares --> B/S[B/S] B/S --> Empresas B/S --> IMPUESTOS IMPUESTOS --> Empresas </pre>	País	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Argentina	1,600	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	Bolivia	1,300	1,200	1,100	1,100	1,100	1,100	Brasil	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	Chile	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	Colombia	3,000	2,800	2,700	2,700	2,700	2,700	Ecuador	2,000	1,900	1,800	1,800	1,800	1,800	Paraguay	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	Perú	2,200	2,100	2,000	2,000	2,000	2,000	Uruguay	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
País	2010	2011	2012	2013	2014	2015																																																																		
Argentina	1,600	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500																																																																		
Bolivia	1,300	1,200	1,100	1,100	1,100	1,100																																																																		
Brasil	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500																																																																		
Chile	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800																																																																		
Colombia	3,000	2,800	2,700	2,700	2,700	2,700																																																																		
Ecuador	2,000	1,900	1,800	1,800	1,800	1,800																																																																		
Paraguay	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700																																																																		
Perú	2,200	2,100	2,000	2,000	2,000	2,000																																																																		
Uruguay	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100																																																																		

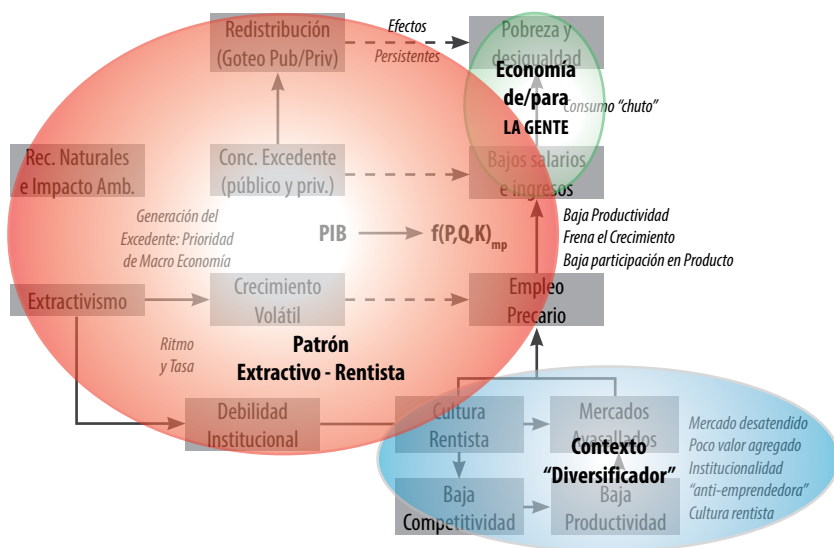
	TEMA	EVIDENCIAS																																			
<p>10. LA FINANCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA</p>	<p>10. La financiarización benefició sobre todo al sistema de intermediación financiera</p> <p><i>“Financiarización”: patrón de acumulación en el cual el proceso de realización de los beneficios tiene lugar fundamentalmente a través de canales financieros en lugar de a través de la producción y comercialización de mercancías, nace impulsado por el FMI a principios de los años 1980.</i></p> <p>El crédito aporta al crecimiento si ayuda a aumentar ingresos, empleo y genera nuevo valor al aumentar la capacidad productiva; no implica “deuda” porque, por cada Bs de crédito, se genera <i>al menos</i> otro Bs de ingreso, <i>y la economía dirige al sector financiero.</i></p> <p>Si el crédito se destina al consumo –comprar TV LED o vacaciones–, la deuda afecta ingresos futuros; <i>le genera rentas al banco y a los vendedores, sin crear ingresos al deudor ni valor a la economía.</i> Aumenta los activos financieros (bonos, inmuebles, etc.) y promueve especulación por rentas, con bajo aporte al crecimiento. En estos casos de <i>financiarización</i> el bienestar actual hipoteca el ingreso futuro y el SIF controla la economía.</p>	<p><i>La gráfica muestra el ahorro total del 1% de todas las cuentas con mayores depósitos, frente al 99% de las cuentas menores</i></p> <p style="text-align: center;">Estructura del Ahorro Total</p> <table border="1"> <caption>Estructura del Ahorro Total</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Ahorro 1%</th> <th>Ahorro 99%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2005</td> <td>59.7%</td> <td>40.3%</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>73.1%</td> <td>26.9%</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>80.8%</td> <td>19.2%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>84.2%</td> <td>15.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Evaluación de la relación Cartera/Ahorro por Cta, Bs</p> <table border="1"> <caption>Evaluación de la relación Cartera/Ahorro por Cta, Bs</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Cartera/Cuenta (Bs)</th> <th>Ahorro/Cuenta (Bs)</th> <th>Deuda/Ahorro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2005</td> <td>60,026</td> <td>23,735</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>64,266</td> <td>15,213</td> <td>4.2</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>104,687</td> <td>18,655</td> <td>5.6</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>139,544</td> <td>16,056</td> <td>8.7</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Ahorro 1%	Ahorro 99%	2005	59.7%	40.3%	2010	73.1%	26.9%	2015	80.8%	19.2%	2020	84.2%	15.8%	Año	Cartera/Cuenta (Bs)	Ahorro/Cuenta (Bs)	Deuda/Ahorro	2005	60,026	23,735	2.5	2010	64,266	15,213	4.2	2015	104,687	18,655	5.6	2019	139,544	16,056	8.7
Año	Ahorro 1%	Ahorro 99%																																			
2005	59.7%	40.3%																																			
2010	73.1%	26.9%																																			
2015	80.8%	19.2%																																			
2020	84.2%	15.8%																																			
Año	Cartera/Cuenta (Bs)	Ahorro/Cuenta (Bs)	Deuda/Ahorro																																		
2005	60,026	23,735	2.5																																		
2010	64,266	15,213	4.2																																		
2015	104,687	18,655	5.6																																		
2019	139,544	16,056	8.7																																		

	TEMA	EVIDENCIAS
<p>10. LA FINANCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA</p>	<p>Por ejemplo, los hogares han reducido sus saldos en ahorro y han aumentado su deuda: el ahorro por cuenta en el 1% de las cuentas “más gordas” es del orden de Bs 1,7 millones; en el resto –el 99% de cuentas– el ahorro promedio por cuenta cae de Bs 9.700 en 2005 a Bs 2.700 en 2020; la relación de montos entre ahorro del 1% respecto al 99% sube de 246 a 636 veces.</p> <p>Pero las utilidades del SIF han aumentado en 800% entre 2008 y 2016 beneficiando a pocas familias. Desde 2014, a nivel mundial, hay evidencia de un vínculo entre profundización financiera y aumento global de la desigualdad (concentración de riqueza). La experiencia boliviana no es excepción; la realidad desvirtuó los supuestos beneficios que el modelo de gobierno asigna a la financiarización.</p> <p>De hecho, hay muy poca correlación entre el crecimiento de la cartera y el crecimiento productivo con empleo.</p>	<p>Utilidades del sistema bancario 1900-2013</p> <p>Evaluación del Patrimonio</p>

4. La realidad vigente: procesos y mecanismos que la explican

Los efectos estructurales del persistente patrón de crecimiento

El denominador común en los diez temas abordados en el diagnóstico de la calidad social del crecimiento es su vinculación con



- b. Más allá del discurso político, mantener el modelo extractivo-rentista es prioridad para los gobiernos que, ocasionalmente, anuncian medidas que nunca prosperan para diversificar el aparato productivo; lo que menos hacen es luchar contra la pobreza y la desigualdad porque usan a los pobres como bases "fidelizadas prebendalmente".

Para los gobernantes, la prioridad de las políticas está concentrada en preservar el patrón extractivo-rentista que es la fuente y sustento del ejercicio del poder, entendido como el fin último de la actividad política. Con esta prioridad, han configurado una institucionalidad funcional para el ejercicio rentista y clientelar del poder, pero disfuncional para promover la diversificación productiva que requiere condiciones de competitividad y productividad; en este marco, la burocracia incluso desarrolló "estrategias extractivistas" para capturar rentas bajo el disfraz de servicios públicos. Con estas prioridades, la "economía de y para la gente" no ha pasado de algún discurso ocasional de campaña que la menciona sin mayor convicción.

El crecimiento extractivista depende de la producción exportable de materias primas, en precios y en cantidades, y, especialmente, de la capacidad de acceder a las fuentes de las inversiones necesarias

para su explotación. La caída de las RIN en los últimos meses y la crisis en ciernes que ha generado nos recuerda que las economías enmarcadas en el extractivismo tienen un ritmo de crecimiento demasiado volátil –dependen de demandas y de precios que están fuera del control estatal– para planificar y realizar acciones orientadas a metas de mediano y largo plazo.

En consecuencia, son incompatibles con las medidas necesarias para reducir la pobreza y la desigualdad, metas que requieren esfuerzos permanentes para promover las actividades generadoras de valor agregado y empleo, de calidad y dignamente remunerado.

En estas condiciones, el Estado es forzado (o lo busca, como forma de ejercer su poder) a adoptar mecanismos públicos de re-distribución a través de “bonos” y otros bienes y servicios públicos. La realidad, sin embargo, es que estos mecanismos, además de ser insuficientes para anular los efectos negativos de la falta de empleos productivos dignamente remunerados, pueden ser un mecanismo adicional para debilitar las estructuras productivas domésticas, como sugieren los comentarios en relación a los bonos.

La precariedad del empleo se acentúa por la desatención política a los factores clave que determinan la capacidad de crear puestos de empleo digno: mercados, productividad, competitividad y una sólida cultura productiva con equidad. Las razones son obvias: el valor agregado se materializa en el instante en el que el producto se vende; producir para aumentar inventarios es gasto sin retorno; la productividad es una medida de la eficiencia del proceso productivo que se refleja en el costo de producción y, eventualmente, en el precio de venta; si no se produce dentro del rango de productividad con el que la competencia lo hace, el mayor costo se transfiere al precio, lo que normalmente resulta en menores ventas.

Pero, si bien la productividad refleja la eficiencia de los procesos productivos y es una responsabilidad al interior de la empresa, puede estar condicionada por la competitividad, que es el conjunto de instituciones y normas que rigen el funcionamiento de las actividades productivas. Sin embargo, hace casi medio siglo se ha demostrado que Bolivia se gestiona políticamente como un “Estado antiempresario” que ha configurado una institucionalidad disfuncional para la creación

de valor agregado y empleo por su absoluta preferencia por el extractivismo rentista; tal postura, en última instancia, refleja las ideologías, principios y (anti)valores a los que los gobernantes se inclinan.

En consecuencia, en tanto no cambie –expresa y sistemáticamente– el telón de fondo configurado por los valores sociales y productivos que determinan el grado de competitividad institucional y de productividad del aparato productivo, las políticas sectoriales y las acciones aisladas no tendrán ningún impacto real en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades necesarias para revertir la pobreza y la exclusión social: persistirán las insuficientes tasas y la volatilidad en los ritmos del crecimiento económico.

En resumen, bajo el extractivismo rentista, las políticas nacionales tienen realmente muy poco o ningún control sobre los factores que definen el crecimiento del PIB, porque al estar supuestamente determinado conceptualmente por una relación (determinista) dominada por el aporte del capital (K) y por los precios (P) y cantidades (Q) de recursos naturales que puedan demandar los mercados internacionales, las políticas públicas no atenderán aquellos temas que efectivamente podrían modificar las bases del crecimiento y del desarrollo.

Por el contrario, como el crecimiento del PIB en el modelo depende de $(P, Q, K)_{mp}$, quienes controlan el capital encuentran útil recurrir a formas diferentes de la “teoría del goteo” para tranquilizar a la sociedad con la promesa de que el estaño, el gas –ahora el litio–, traerá prosperidad a todos. Con tal argumento, la prioridad política está en preservar el extractivismo con algunas políticas de maquillaje institucional para justificar el discurso diversificador, y con la pobreza y la desigualdad como conceptos estrictamente discursivos. Lo evidente es que, siguiendo esa receta, en 500 años nada sugiere que pueda revertirse en el futuro el crecimiento extractivista (figura 5b).

El gas es la más reciente –y debería ser la última– fuente de recursos del extractivismo. Su previsible agotamiento “por y para” el dispendioso e irresponsable manejo del Estado debe marcar, para 2025, el punto de inflexión que inicie la construcción del desarrollo integral, sustentable y democrático.

Sin duda, el país enfrentará una severa crisis con múltiples manifestaciones: primero, una fuerte reducción en los ingresos para

inversión y operaciones del Estado por la caída de las ventas de gas a la Argentina y Brasil; segundo, una crisis energética interna por la falta de previsión para diversificar las fuentes de energía saliendo de la dependencia en las de origen fósil para aprovechar el potencial de las fuentes no tradicionales como la solar, eólica e hídrica disponibles en diferentes regiones del país. Tercero, al haber anclado al gas incluso a la sobredimensionada capacidad actual de generación de energía eléctrica, tendremos también severas limitaciones financieras para importar la gama de combustibles que demandará el aparato productivo en la próxima década, incluso si se inicia un acelerado proceso de transformación de la matriz energética nacional. Queda, como cuarta amenaza, la conflictividad social que pueda generarse por intereses políticos escudados en el costo social de las medidas paliativas y correctivas.

Sin duda, como sociedad, no podemos soslayar la atención a tan acuciante problema. Ciertamente, son temas que deben ser resueltos, pero sería persistir en el error –y profundizarlo– insistir en espejismos que, como el litio, sean falsas salidas que nos eternicen en la tradición extractivista.

El mensaje, en consecuencia, es que las soluciones a estos problemas deben ser pensadas y ejecutadas teniendo como objetivo estratégico al desarrollo integral, pero con el empleo digno y productivo como el medio más inmediato para reconducir las políticas y las metas a corto y mediano plazo.

El no haber podido salir del encierro conceptual que implica la teoría económica en relación al rol efectivo del trabajo humano como factor de desarrollo es la causa común que explica la similitud de los resultados producidos por modelos que, desde el discurso, responden a bases ideológicas totalmente diferentes.

5. Hacia la economía postneoliberal de y para la gente

El pobre desempeño de la economía boliviana en términos de reducir la pobreza y la desigualdad refleja la falta de coherencia entre los fines y los objetivos de la sociedad, y las políticas y medios adoptados para

la gestión pública. El diagnóstico sugiere que, primero, el énfasis y la centralidad de la explotación de recursos naturales como “meta de desarrollo” y *el* instrumento básico de crecimiento es la principal causa del “crecimiento empobrecedor”; segundo, la estabilidad macroeconómica es necesaria pero *no suficiente* para el desarrollo: de hecho, *el crecimiento económico no es la meta del desarrollo*; y, tercero, la respuesta estructural a los desafíos de pobreza, equidad, inclusión y crecimiento sostenido deben fundamentarse en el incremento real de la productividad, del empleo digno (de calidad) y de la efectiva participación social: es poner *la economía al servicio de la gente*.

¿Cuáles deberían ser los rasgos distintivos de esa “economía para la gente” o, en general, de una economía que supere los problemas e inequidades que se atribuyen al extractivismo “neoliberal”? En particular, ¿cuál debe ser, en esencia, el cambio fundamental que distinga a la nueva economía *de todos los modelos previos de desarrollo que resultaron en tan pobre desempeño económico para la gente?*

Para responder estas preguntas es necesario despejar las “cegueras ideologizadas” que han enturbiado los debates propositivos sobre el desarrollo. En particular, dado el total centralismo discursivo del “neoliberalismo como adjetivo descalificador”, es preciso reconocer que los fundamentos doctrinales del neoliberalismo no son las políticas del Consenso de Washington (la CPE de 2009 incorpora hasta nueve de las diez propuestas de políticas del Consenso), ni las posturas “anti” neoliberales asociadas a la intervención del Estado en la economía y al control de los recursos naturales.

Los principios doctrinales del neoliberalismo son esencialmente dos:

La distribución del ingreso: el neoliberalismo posiciona al capital como el factor escaso (caro) y al trabajo como el abundante (barato) en los procesos productivos, por lo que busca capturar, para los dueños del capital, la mayor parte en la distribución primaria del ingreso.

La determinación del empleo agregado: colocando al capital en “el asiento del piloto” de la economía, y a la inversión como determinante de la oferta, el neoliberalismo anula la idea del pleno empleo, justificando teórica y *políticamente* el desempleo (y el autoempleo); refuerza la expansión del sector financiero y privilegia la remuneración al

capital sobre la remuneración a los procesos y actores directamente productivos.

Una economía “doctrinalmente antineoliberal” que revierta esas prioridades debería tener como conceptos base: a) la fuente de la riqueza social es la creatividad del trabajo humano; b) la remuneración al trabajo es el mecanismo directo de distribución del ingreso conforme se lo crea; c) el salario de los trabajadores depende de la decisión empresarial (política) limitada por la productividad y está orientada –no dictada– por el mercado; y d) el nivel de empleo depende de la demanda agregada: el nivel de actividad económica está determinado por la capacidad de consumo y el ingreso disponible de los hogares.

El empleo digno, base del desarrollo humano-productivo

El patrón extractivo concibe el crecimiento como directamente dependiente de los precios y de las cantidades de recursos naturales (materias primas) explotados y de las inversiones que se realizan para viabilizar esa explotación. Por el contrario, la visión de una economía postneoliberal “para la gente” privilegia al esfuerzo humano como la fuente de la riqueza y concibe a la persona como la beneficiaria principal del crecimiento. Esta concepción, que promueve el desarrollo humano productivo, implica cambiar conceptualmente las bases del crecimiento extractivo por la convicción que el *producto interno bruto es el resultado de la cantidad de gente trabajando productivamente y de la productividad con que lo hace: $PIB = PL * PO$* .

Si el PIB depende de la cantidad de personas “empleadas productivamente”, *toda política –pública o privada– que resulte en el aumento sostenible de actividades económicas con mayor nivel y calidad de empleo productivo asalariado contribuirá necesariamente al crecimiento de la economía y a la equidad social*, promoviendo además condiciones de sostenibilidad y de viabilidad social al proceso: *las políticas “sectoriales” (fiscal, monetaria, laboral, etc.) son instrumentos para la “sintonía fina” de las condiciones que permitan asegurar la creación de empleo*, satisfaciendo equilibrios sostenibles entre oferta, demanda y medio ambiente, según las necesidades de la sociedad.

A partir del concepto del esfuerzo y el emprendimiento humanos como base para crear la riqueza social, es necesario re-configurar el esquema de relaciones que caracterizan el patrón de crecimiento extractivo-rentista re-definiendo las relaciones, influencias, efectos y metas de los vínculos establecidos por el modelo hoy vigente. El esquema siguiente propone que toda política que resulte en creación de empleo digno necesariamente se traduce en crecimiento de la economía.

FIGURA 6
El paradigma no ortodoxo de desarrollo humano productivo para Bolivia

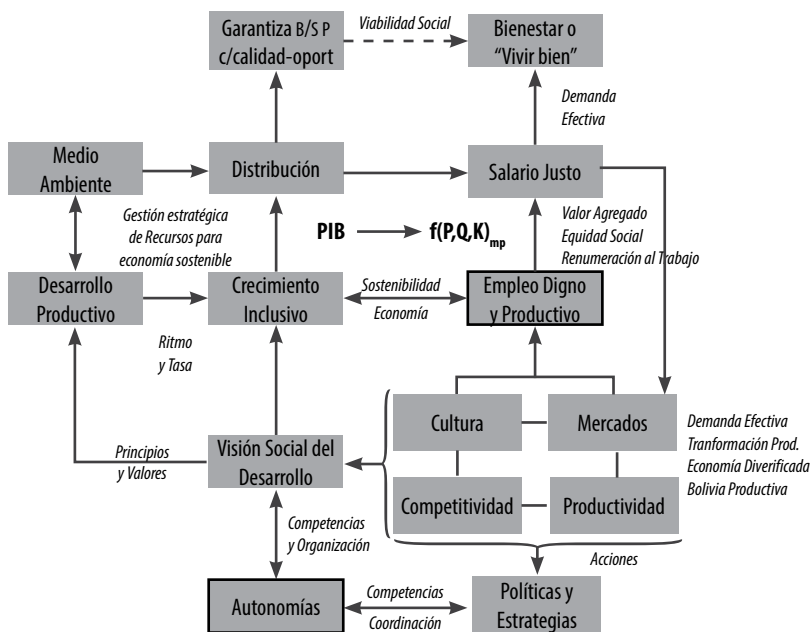
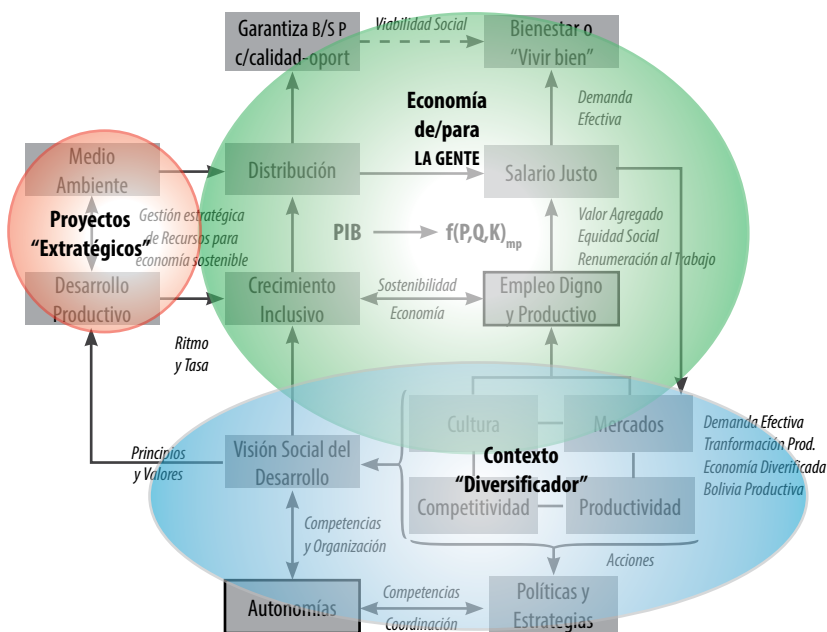


Figura 6. La institucionalidad para el desarrollo con empleo

- a. La economía orientada por el empleo productivo tiene como meta permanente establecer las condiciones objetivas que optimizan el uso de factor humano como la base para la creación de valor, y a las personas y sus hogares –no al Estado ni al capital– como destinatarios directos y finales de los beneficios del crecimiento.



- b. La economía orientada al desarrollo integral limita el extractivismo a ciertos proyectos estratégicos que contribuyan a las metas del desarrollo. Mejora de manera permanente la competitividad social y premia el incremento de la productividad.

Como sugiere el esquema, en la medida en que el Estado, por una parte, privilegie y premie la creatividad emprendedora y el trabajo humano, y por otra, que la creación de empleo digno asegure la justa distribución primaria del ingreso, se habrán establecido las condiciones más necesarias para avanzar hacia el bienestar.

Pero crear las oportunidades de empleo digno para todos los entrantes al mercado laboral significa, además de promover, desarrollar y fortalecer capacidades emprendedoras, establecer las condiciones necesarias para: asegurar de manera permanente el acceso a los mercados; mejorar la productividad de las organizaciones económicas; desarrollar la competitividad y la institucionalidad que permitan mejorar la productividad; y desarrollar y promover la cultura productiva que premie el emprendimiento productivo económicamente competitivo, socialmente equitativo y ambientalmente comprometido.

En el esquema, además del empleo digno y productivo, las autonomías tienen el otro papel esencial como medio para articular y concertar acciones y políticas y para establecer estructuras político-administrativas adecuadas porque el desarrollo es, en esencia, un fenómeno local; configurar las condiciones para crear empleo digno depende, en gran medida, de la articulación y coherencia para aplicar las políticas de desarrollo –productivo y humano– en todas las entidades territoriales autónomas. En este sentido, el empleo digno, por su parte, asegura la viabilidad social y la sostenibilidad económica-financiera de las autonomías al generar la dinámica económica capaz de proveer los recursos monetarios y financieros que necesita un proceso estable de crecimiento económico orientado al “vivir bien” como quiera que se lo defina en el marco del desarrollo integral, sustentable y democrático.

6. La ruta crítica para superar el extractivismo

De la coyuntura a las prioridades para el largo plazo: premisas

Abriendo la puerta hacia el camino del desarrollo productivo sostenible, el análisis realizado lleva a plantear un paradigma alternativo de desarrollo que se resume en *construir una economía en la que la creatividad y el esfuerzo humanos sean la base de un desarrollo sustentado en un crecimiento económico “eco-socialmente sostenible”, con las personas como las destinatarias directas y finales de los beneficios del crecimiento.*

¿Cómo avanzar hacia el nuevo paradigma en un enrarecido ambiente en el que la multiplicidad y complejidad de los temas, sumada a la extrema ideologización y polarización discursiva desde los diferentes grupos de interés y de presión, amenazan hacer crisis en varios ámbitos? ¿Es posible hacerlo con las cegueras ideológicas, políticas, teóricas y de conveniencia que soportan las prioridades de los vinculados al poder político?

Cierto, los temas que confrontamos como sociedad son múltiples: institucionales, energía, económicos, sociales, políticos y ecoambientales; a ellos se suman muchos otros “problemas” que no

se vinculan directamente al desarrollo, sino que reflejan pugnas de intereses particulares, regionales o corporativos. Pero ¿cuáles son los problemas que efectivamente impiden avanzar hacia una economía de y para la gente?

La multiplicidad de temas y controversias que nos agobia es una señal muy clara de la falta de objetivos concretos (y de exceso de discurso y demagogia): *un problema es un obstáculo que impide alcanzar un objetivo*, si no se tiene el objetivo, no se puede definir el problema. Esto es particularmente cierto en el manejo de la economía, ámbito en el que las opiniones asignan importancias relativas a la deuda pública, déficit fiscal, tipo de cambio o la tasa de inflación, según preferencias teóricas personales. Sin embargo, en las economías con mejor desempeño social, la atención se concentra en mantener la ruta hacia el objetivo, aceptando que los indicadores bajo los que se logre ese cometido –inflación, déficit, tipo de cambio, etc., dentro de límites razonables, pero ni prefijados ni rígidos– son “los correctos” independientemente de las tendencias y los valores que recomiende la “teoría”.

Es decir, la calidad de los resultados respecto al logro del objetivo, *no la teoría*, es el criterio que determina la pertinencia de los valores que pudieran tener los indicadores macro y microeconómicos. Implica que, para buscar maximizar la capacidad de crear oportunidades de empleo digno, no tiene sentido establecer, *ex ante*, como condiciones o metas, la tasa de inflación, el tipo de cambio, el nivel de inversión pública, etc., etc. En general, abordar temas sin visión de desarrollo, ni la capacidad o los recursos para abordarlos seriamente, lejos de ayudar, malgasta recursos que se restan a las verdaderas prioridades estratégicas; por ejemplo, ningún sistema educativo tendrá sentido –menos contenido– si la sociedad no adopta los principios que sustituyan “la joda”, la “viveza criolla” o la “pega” por la excelencia, el esfuerzo personal, la ética profesional y la eficiencia (productividad) como valores sociales.

En este ámbito también caen las tendencias “desarrollistas” que deslumbran con etiquetas y frases como “economías verde o naranja”, la “revolución industrial de cuarta generación”, o *slogans* como “Bolivia digital, inclusiva, soberana”, etc. No es que las tendencias sean equivocadas; el hecho es que, para ser útiles, requieren de un contexto institucional favorable, hoy ausente.

La realidad: no podemos cortar en seco los ingresos del extractivismo, pero debemos asumir, como tarea prioritaria, empezar a sustituirlos creando empleo productivo que genere internamente los ingresos para un funcionamiento básico de la sociedad. Partimos de una economía con los más altos niveles de precariedad del empleo, y la productividad más baja. La causa primaria nunca ha sido la falta de opciones técnicas, recursos materiales, ni la incapacidad laboral de la gente; es la incompetencia de los políticos que, prácticamente, han destruido de manera sistemática las bases de institucionalidad que mantenían vigentes principios y valores sociales esenciales. En estas condiciones, es insuficiente –inútil– plantear acciones o políticas económicas específicas sin antes precisar la naturaleza de las condiciones institucionales básicas necesarias, las que deben (re)construirse al ritmo que permita que las políticas y acciones tengan los efectos esperados.

El marco institucional básico

Hace treinta años planteamos que Bolivia era “un caso de institucionalidad disfuncional” (Velazco, 1991) para el desarrollo productivo y la creación de empleo digno. Hoy, lejos de mejorar, la situación ha caído a niveles extremos. El manoseo político hundió la justicia en un nivel de “pestilencia” inédito –así reconocido por los gobernantes–, y la administración pública ha sido tomada por asalto para extraer rentas a la economía formal, como botín político y corporativo.

Reformar estructuralmente la justicia es la tarea de mayor urgencia e importancia, pero poner en marcha una efectiva reactivación de la economía no puede esperar a ese proceso que, sin duda, tomará unos buenos años. La solución son reformas focalizadas en los aspectos de más relevancia e incidencia para desrepresar la capacidad creativa, productiva y emprendedora de la sociedad: la creación de empleo productivo y la reforma de las competencias autonómicas, porque la creación de empleo parte de “lo local”.

Los factores determinantes para la creación de empleo digno

Para incidir en una mayor calidad social del crecimiento económico, debe aumentar simultáneamente el nivel de empleo, el valor

agregado, la productividad y la participación del trabajo en la distribución del ingreso. La productividad laboral promedio en Bolivia es de \$us 6.000 (por trabajador/año), mientras que en América Latina es de \$us 24.000. Si las 150.000 personas que se incorporan al mercado laboral boliviano cada año lo hicieran con la productividad laboral media de América Latina, Bolivia podría alcanzar tasas de crecimiento del PIB del orden del 8% al 10% anual.

Crear esos puestos de trabajo requiere políticas públicas coherentes y permanentes, es decir, Políticas de Estado. Las políticas “pro producción y empleo” necesariamente deben considerar los cuatro ámbitos específicos que determinan la tasa de crecimiento, la capacidad de agregar valor, la sostenibilidad institucional y la pertinencia ecosocial de la economía:

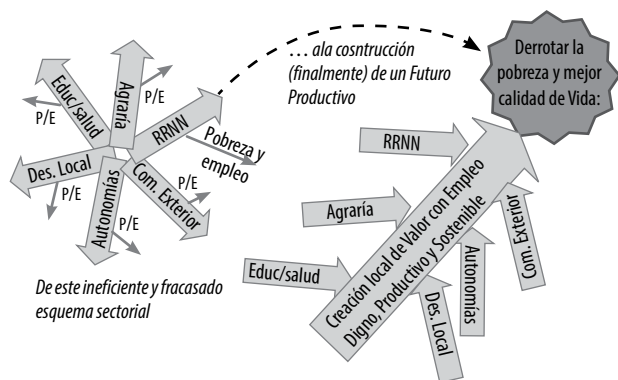
FIGURA 7



Figura 7. La creación permanente de empleo digno implica una profunda transformación institucional. Partiendo de la reforma de los principios y valores que guían a la sociedad, el Gobierno tiene, como misión elemental, construir y mejorar continuamente la competitividad social, para que la productividad de las empresas les permita acceder y permanecer en mercados abiertos.

- a. Mercados. El valor agregado se materializa sólo si los productos se venden: el salario de los trabajadores lo pagan los consumidores, por lo que el aparato productivo debe producir lo que los mercados demandan, no sólo “lo que saben producir”. Pero es imposible participar en mercados demandantes con tipos de cambio,

- tolerancia a la competencia desleal o con políticas comerciales determinadas por razones políticas o por intereses sectoriales.
- b. **Productividad y gestión.** No es posible “garantizar mercados” sólo con medidas o con acuerdos políticos. Las unidades económicas deben poder competir en los mercados por su productividad y por la calidad de sus productos. Aunque la mejora de la productividad es responsabilidad esencialmente de las empresas, factores determinados políticamente –y externos a las empresas– limitan la productividad. Las inversiones que podrían mejorarla se frenan por las amenazas del mercado, por un lado, y por la baja competitividad general que no ofrece garantías a la inversión, por otro. A su vez, consignas e ideologizaciones anacrónicas impiden acuerdos que podrían renovar e innovar las relaciones empresa-empleados con el fin de “mejorar la productividad con corresponsabilidad” por los resultados.
 - c. **Competitividad social.** La competitividad es el conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, laborales, ambientales, etc., que permiten a las empresas mejorar la productividad. En este ámbito, Bolivia ha retrocedido significativamente en el siglo XXI: la sobrerregulación y la arbitrariedad normativa, por un lado, la orientación estrictamente recaudatoria de los impuestos, la competencia desleal en las adquisiciones del Estado, las políticas comerciales y monetarias, etc., han acorralado al aparato productivo nacional, lo que se refleja en la altísima incidencia del empleo informal y precario.
 - d. **Cultura y valores sociales.** Finalmente, es imposible una sociedad competitiva e inclusiva sin una “cultura productiva” que se sustente en el principio de que la creación de valor y de riqueza se origina en el esfuerzo humano antes que en la renta de los recursos naturales. En Bolivia, la cultura rentista, la aversión al riesgo, la baja autoestima, el cortoplacismo, la cultura “del serrucho”, de la transgresión y, sin duda, la cultura del conflicto, son antivalores que alientan las expectativas rentistas sobre los recursos naturales, inhibiendo el gran potencial creativo y



- b. Las autonomías orientadas hacia un desarrollo integral, sustentable y democrático, se guían por un eje matriz dirigido a creación local de empleo digno, objetivo hacia el cual se subordinan todas las políticas sectoriales en todos los niveles de gobierno territoriales autónomos.

En particular, los gobiernos subnacionales no tienen competencias en la creación de empleo, aunque es un desafío fundamentalmente local. Tampoco tienen competencia para incidir en la transformación productiva en términos de mercados, mejora de la productividad, desarrollo de competitividad o la sustitución de la cultura extractivo-rentista por la de “producción y empleo”.

Han centrado su prioridad en el gasto para visibilidad política y en la pugna por los recursos del centralismo para solventarlo. Ante “el fin del IDH”, sólo la diversificación económica y la transformación productiva asegurarían la sostenibilidad económica y social para hacer viable a cada autonomía; por ello, la meta inicial, central y común a todas ellas debe ser desarrollar la capacidad de generar valor, creando oportunidades de empleo dignos y productivos.

En consecuencia, la reforma autonómica daría el marco para corregir el rumbo y encaminar el desarrollo bajo premisas de subsidiaridad. Implica responsabilidades y metas compartidas en todos los niveles, superando miradas y acciones sectoriales aisladas, haciéndolas todas funcionales al objetivo de superar la pobreza mediante el empleo digno que sólo puede generar una economía diversificada, con las personas como la fuente creadora de valor y la gente como depositaria directa y final de los beneficios del crecimiento.

7. Conclusiones

El ingreso por persona en Bolivia ha caído del nivel promedio en América Latina, en 1950, a uno de los tres últimos lugares en 2022. Este deterioro relativo del ingreso no puede ser explicado por falta de recursos naturales –Bolivia tiene uno de los mayores acervos de riqueza natural a nivel mundial–, ni por la incapacidad productiva de su gente dado que es muy conocido su desempeño laboral positivo cuando salen del país.

El análisis plantea que la causa-raíz del pobre desempeño es la incompetencia de los gobernantes que aplicaron políticas equivocadas por decisiones orientadas, básicamente, a satisfacer intereses políticos o corporativos antes que por el bien común. Común a todos los gobiernos en el último siglo es el extractivismo centrado inicialmente en el sector minero hasta fines de los años 1970, para dar paso a los hidrocarburos hasta el presente, y ya fijar el litio como el siguiente “futuro brillante”.

Más allá de los intereses privados vinculados a la riqueza minera o hidrocarburífera que buscaron controlar los gobiernos –directamente o a través de políticos obsecuentes–, en la segunda mitad del siglo XX la teoría económica neoliberal ofreció un paraguas académico al extractivismo al posicionar al capital como el factor escaso y determinante del crecimiento. Bajo esa lógica, los organismos multilaterales y las agencias de cooperación al desarrollo, bajo el eufemismo del emprendedurismo, alentaron el cuenta-propismo y la autoexplotación laboral que tuvieron como consecuencias directas el debilitamiento y la desaparición de los sindicatos, la precarización del empleo y una marcada distorsión de la distribución primaria del ingreso en favor de los dueños del capital.

La precarización del empleo en Bolivia, que alcanza al 85% de la población ocupada, invalida toda acción de política pública en beneficio de los trabajadores, a lo que se suman otras decisiones orientadas a fidelizar políticamente a los sectores por cuenta propia a través de medidas sectoriales que afectan negativamente –debilitan– la institucionalidad en todos los aspectos: sobre la propiedad privada, los avasallamientos de tierras; respecto al comercio y la competencia

leal, el contrabando; respecto a la igualdad tributaria, las concesiones a los sectores cocaleros, cooperativistas mineros, etc.

Luego de adoptar definiciones de trabajo para esbozar los “rasgos gruesos” de lo que se entiende por un desarrollo integral, sustentable y democrático, el estudio revisa vínculos existentes y propone la secuencia de las relaciones que caracterizarían el mecanismo que explica la realidad política, social y económica boliviana al presente, en la que el extractivismo y el neoliberalismo son conceptos dominantes. Establece que el mecanismo que explica los rasgos de la realidad hoy vigente es incompatible con el desarrollo deseado.

Dadas las características de la resultante “institucionalidad disfuncional” para la creación de valor agregado y empleo que está vigente, ninguna acción puntual que se pretenda realizar para avanzar hacia el desarrollo tendrá éxito, como atestiguan muchos ejemplos: simplificar trámites está en la agenda hace 40 años y son, cuando menos, un centenar los “proyectos exitosos” realizados en ese ámbito, a nivel del gobierno central o de los municipios, pero si algo es evidente, es que la digitalización del Estado avanzó sólo en la dirección de acosar al ciudadano, no en aliviarle las cargas; las luchas contra la corrupción o el contrabando, la reforma judicial o la universalidad tributaria, etc., etc., seguirán siendo parte de las ofertas electorales pero no cambiarán en la dirección correcta a menos que se supere el paradigma extractivorentista con el que se nutre la actual hípercorrupta buro-parásito-cracia.

En consecuencia, el análisis muestra que, para reconfigurar el mecanismo vigente de manera que sea conducente al desarrollo integral, la condición necesaria es la diversificación productiva que crea valor en la economía a partir de la creatividad y el esfuerzo humano. Tal condición implica, necesariamente, una institucionalidad creíble y transparente, administrada por una burocracia tecnocrática y profesional, evaluada permanentemente por su eficiencia y productividad.

Por supuesto, esta será una meta imposible de alcanzar si la sociedad acepta como una regla compatible con la democracia y el buen gobierno que los partidos políticos tengan el derecho de establecer que todos los funcionarios públicos sean de la militancia oficialista. En este caso, la sociedad es culpable de no rechazar semejante insulto al sentido común si no impone principios que sustituyan “la joda”, la

“viveza criolla” o la “pega” por la excelencia, el esfuerzo personal, la ética profesional y la eficiencia (productividad) como valores sociales.

Por supuesto, para que sean las personas y sus hogares –no el Estado ni los dueños del capital– los depositarios directos y finales de los beneficios del crecimiento, los políticos deben dejar gobernar a los estadistas que hubieran superado la cultura rentista, la aversión al riesgo, la baja autoestima, el cortoplacismo, la cultura “del serrucho”, de la transgresión y, sin duda, la cultura del conflicto. Estos son antivalores que alientan expectativas rentistas sobre los recursos naturales, inhibiendo el gran potencial creativo y productivo que las bolivianas y los bolivianos muestran cuando salen a otros países que valoran el esfuerzo humano.

El desafío frente a los temas de mayor urgencia, como la crisis energética, económica y social que nos amenaza por la desastrosa conducción de la economía en los últimos veinte años, debe ser encarado asegurando que las prioridades políticas y las otras urgencias por conveniencia no inviabilicen las transformaciones estructurales destinadas a superar el extractivismo rentista que nos ha condenado al atraso.

En síntesis, la ruta crítica para construir la institucional “producción con empleo digno” como la base conceptual del deseado desarrollo integral, sustentable y democrático requiere, como condición necesaria, desmontar los cimientos estructurales del extractivismo y abandonar las bases conceptuales del neoliberalismo.

8. Bibliografía

Velazco, E.

2012 “La Economía para la Gente, camino hacia el vivir bien”. Mesa Permanente de Concertación Productiva de El Alto, INASET.

Velazco, E.

2019 “Pobreza multidimensional y desafíos de la política pública en Bolivia (Una mirada no ortodoxa de la economía, el crecimiento y el desarrollo)”. Presentación PPT para el seminario sobre Pobreza Multidimensional organizado por CEDLA, La Paz.

ANEXO

Del trabajo decente (OIT) al empleo digno (INASET)

Los términos ‘empleo’ y ‘trabajo’ se usan –equivocada pero muy frecuentemente– como sinónimos. Lo mismo sucede con los adjetivos ‘decente’ y ‘digno’, con los que se califica los primeros términos mencionados a fin de resaltar la necesidad de revertir las múltiples formas de precariedad o de abusos en el trabajo.

El Tesoro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define:

Trabajo: “conjunto de las actividades humanas, *remuneradas o no*, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos”.

Empleo: “*trabajo efectuado a cambio de pago* (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie) sin importar la relación de dependencia del empleado, es decir, si el empleo es dependiente (asalariado), o independiente (autoempleo)”.

En 1999 la OIT introdujo el concepto de *trabajo decente* al que caracterizó con los cuatro rasgos distintivos de su propuesta estratégica: los derechos de las personas en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Cada una de estas características se asocia, además, con metas más amplias como la erradicación de la pobreza, la inclusión social, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal.

Esta definición del *trabajo decente* se ajusta a los objetivos estratégicos de la OIT:

- Libertad: libertad sindical, negociación colectiva y lucha contra el trabajo forzoso y la servidumbre.
- Igualdad: lucha contra la discriminación en el empleo por razones de raza, etnia, edad, origen nacional, religión o género.
- Seguridad: seguridad social y protección contra los riesgos laborales y el desempleo.

- Dignidad: erradicación del trabajo infantil y diálogo social.

El trabajo decente puede incluir actividades o trabajo no remunerado y tiene fuertes connotaciones con el trabajo en condiciones de dependencia (asalariado). Sin embargo, la realidad es que, a nivel mundial, en América Latina y, muy particularmente, en Bolivia, la gran mayoría del trabajo se realiza por cuenta propia y como el único medio de subsistencia personal y familiar ante la (total) ausencia de redes de seguridad y de protección social.

En consecuencia, en 2001, la Fundación INASET introdujo el concepto de *empleo digno* sobre la base de las siguientes ideas. Primero, a diferencia del *trabajo* –que puede o no ser remunerado–, el concepto de empleo implica necesariamente una actividad *con una remuneración*, condición absolutamente esencial para que la actividad humana permita generar los ingresos que otorguen a las personas un mínimo grado de autonomía y de autoestima personal en las relaciones económicas en la sociedad y con las estructuras del Estado.

Segundo, más allá del respeto a los derechos de las personas o de la calidad de la legislación aplicable para defender esos derechos frente a los empleadores, la actividad humana destinada a la producción de bienes y servicios con los que se satisfacen las necesidades de la sociedad deben también ser una fuente de satisfacción y de realización de las personas, y deben expresar las relaciones de respeto y de equidad entre las personas y entre las personas y las instituciones.

En consecuencia, además de los rasgos del trabajo decente (libertad de sindicalización, garantía de no discriminación, protección contra los riegos laborales y seguridad social y diálogo social), el concepto de ‘digno’ con el que INASET califica al empleo *deseable* para la sociedad implica conceptos y valores que son muy cercanos a las ideas del vivir bien que incluye la Constitución Política del Estado:

- El derecho de las personas a optar entre oportunidades de empleo que les permitan satisfacer las necesidades personales y familiares, y que contribuyan a su realización personal sin comprometer

el medio ambiente ni las oportunidades de las generaciones futuras; implica orientar las prioridades sociales y los objetivos de la economía para *proteger a las personas contra el “cuentapropismo obligado” que impone la autoexplotación de la fuerza de trabajo en tareas o actividades a las que se ven forzadas por necesidad, y sin opciones reales a elección.*

- Reconocer el esfuerzo humano como la fuente de riqueza: implica adoptar criterios de *distribución equitativa del Valor Agregado (el excedente) entre los factores que contribuyen a crearlo*, superando enfoques primarios que incluyen, en un extremo, al trabajo como una mercancía sujeta a oferta y demanda o, en el otro, a la creación de valor simplemente como una fuente de recaudación fiscal.

El concepto del *empleo digno*, en resumen, no sólo establece (cualifica) los rasgos distintivos de las actividades humanas deseables en una sociedad productiva, inclusiva y equitativa, sino que se establece como el fundamento y la condición necesaria para asegurar el crecimiento sostenido –y socialmente sostenible– de la economía, para garantizar la equidad y la distribución de la riqueza y para promover el tránsito de la cultura rentista, centrada en los recursos naturales, hacia la cultura productiva que considera al esfuerzo humano como la fuente de la creación sostenible de riqueza para la sociedad.

Desarrollo económico integral, sustentable y democrático: una perspectiva desde el liberalismo y el capitalismo popular

Jaime Dunn De Avila¹

Resumen

El logro de un desarrollo económico que sea integral, sustentable y democrático constituye una meta omnipresente en las agendas políticas y económicas a nivel mundial. Este objetivo multidimensional aspira a armonizar el crecimiento económico inclusivo, la sostenibilidad ambiental y la participación democrática en la toma de decisiones. En este panorama, conceptos como la libertad individual, el libre mercado y el capitalismo popular se destacan como pilares esenciales que fomentan la innovación, la responsabilidad y la prosperidad general.

1 Máster en Administración de Empresas, graduado con honores del Programa de Maestría para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana y el Harvard Institute of International Development, graduado en Relaciones Internacionales en Colgate University. Trabajó como operador bursátil en la Bolsa de Nueva York y fue co-autor de la Ley 1834, Ley del Mercado de Valores de Bolivia. Fue vicepresidente en Mabon Securities en Nueva York (EE. UU.) y fue gobernador interino del departamento de La Paz. Ha sido asesor del Gobierno de Egipto; fundó y dirigió NAFIBO ST, ahora conocido como BDP ST; y ha sido profesor de Titularización en la Academia de Fideicomiso del Congreso Latinoamericano de Fideicomisos de la Federación Latinoamericana de Bancos. En 2010 y 2011 fue nombrado Mejor Banquero de Inversión de Bolivia por la revista *World Finance* y la Bolsa de Valores de Londres. Trabajó como consultor del Departamento de

Este ensayo examina la intersección de diversos principios clave: la estabilidad macroeconómica, la formalización económica, una estructura tributaria que sea tanto justa como eficiente, el fomento de la libertad individual y del libre mercado, la diversificación económica apoyada por un sistema financiero sólido, políticas fiscales responsables, apertura comercial, competitividad, inversión en investigación y desarrollo, y una gestión sostenible de los recursos naturales. Este análisis se enmarca en el contexto del desarrollo económico integral, sustentable y democrático, y se basa en las contribuciones de algunas eminentes figuras del liberalismo clásico y de la escuela austriaca de economía.

1. Introducción

En un mundo cada vez más interconectado y en constante transformación, la búsqueda del desarrollo económico integral, sustentable y democrático se presenta como una empresa de vital importancia. Este ambicioso propósito no sólo se enfoca en el crecimiento económico, sino que abarca una perspectiva multidimensional que busca equilibrar el progreso económico con la equidad social, la preservación del medio ambiente y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectan sus vidas.

En este ensayo, adentrándonos en un análisis profundo y meticuloso, exploraremos cómo la línea de pensamiento económico liberal,²

Estado de los EE. UU.; fue asesor Presidencial para la reforma del Mercado de Valores de la República Dominicana y es el autor de la nueva ley y reglamentos del Mercado de Valores de dicho país. Consultor en Mercado de Valores para la Corporación Andina de Fomento. Es profesor y expositor internacional en temas relacionados con el mercado de valores y la titularización. Es escritor, columnista y analista financiero frecuente en temas financieros y políticos en periódicos y revistas tanto nacionales como internacionales.

2 A lo largo del texto nos enfocaremos en el pensamiento y el trabajo de liberales clásicos y de aquellos pertenecientes a la escuela austriaca. El liberalismo clásico es una corriente de pensamiento político y económico que se originó en los siglos XVII y XVIII, especialmente en la Ilustración europea. Esta corriente

incluyendo la escuela austriaca³ y otros creyentes del libre mercado y las libertades individuales, desempeñan un papel esencial en la concepción y consecución de estos objetivos de desarrollo. Los principios y conceptos propuestos por pensadores liberales han sido fundamentales para moldear nuestra comprensión y enfoque en la consecución de un desarrollo que sea integral, sustentable y democrático.

El análisis se apoyará en la rica tradición del pensamiento liberal apuntando a temas fundamentales necesarios para el desarrollo económico: estabilidad macroeconómica seguida de la formalización de la economía y una estructura tributaria justa y eficiente. También se discute la promoción de la libertad individual y el mercado libre, la diversificación económica, un sistema financiero robusto y políticas fiscales responsables. Además, se aborda la apertura comercial y la competitividad, la inversión en investigación y desarrollo, y el medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales. Este

promueve la libertad individual, la propiedad privada, la limitación del poder del Estado y la economía de mercado como pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Los miembros destacados del liberalismo clásico incluyen a: John Locke (1632-1704), quien defendió la idea de los derechos naturales, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Adam Smith (1723-1790), conocido como el padre de la economía moderna que abogó por la economía de mercado y la no intervención estatal, introduciendo el concepto de la “mano invisible” como mecanismo autorregulador en la economía. Montesquieu (1689-1755), quien defendió la separación de poderes en el Gobierno como una forma de salvaguardar las libertades individuales. John Stuart Mill (1806-1873), quien fue un defensor de la libertad individual y la defensa de la libertad de expresión y la importancia de limitar la intervención del Estado en la vida de las personas.

- 3 La escuela austriaca de economía es una corriente de pensamiento económico que se caracteriza por su énfasis en el individualismo, la propiedad privada y el mercado libre. Aunque no es estrictamente un subconjunto del liberalismo clásico, comparte muchos de sus principios, especialmente en relación con la economía de mercado. Algunos de los miembros más destacados de la escuela austriaca son: Carl Menger (1840-1921), fundador de la escuela austriaca, sentó las bases de la teoría del valor subjetivo y la teoría marginalista del valor. Ludwig von Mises (1881-1973), gran defensor del liberalismo y la economía de mercado. Friedrich Hayek (1899-1992), quien advierte sobre los peligros del colectivismo y la planificación central. Murray Rothbard (1926-1995) fue un defensor apasionado del anarcocapitalismo.

enfoque no sólo busca el crecimiento económico, sino que promueve un desarrollo que respete las libertades individuales, fomente la innovación, la responsabilidad y la prosperidad para todos los miembros de la sociedad.

A lo largo de estas páginas, exploraremos cómo las teorías económicas y las reflexiones de pensadores liberales han evolucionado y se han adaptado a lo largo del tiempo, influyendo en nuestra percepción y abordaje de un desarrollo que no sólo se centra en los aspectos materiales, sino que aspira a mejorar la calidad de vida de las personas, garantizar una distribución equitativa de la riqueza y proteger el entorno natural.

Demostraremos que el pensamiento liberal proporciona una base sólida y razonada para el logro de estos objetivos. Sus principios promueven la libertad individual como motor de innovación y bienestar, y defienden la propiedad privada y la limitación del poder estatal como elementos esenciales para una gestión responsable de los recursos naturales y un desarrollo sostenible.

Además, abordaremos la esencial contribución del capitalismo popular en este contexto. El capitalismo popular busca ampliar la participación y los beneficios de la economía a un mayor número de personas. Promueve la propiedad privada, la libre competencia y la movilidad social ascendente como medios para mejorar la calidad de vida de la población en general. Este enfoque, respaldado por la tradición liberal, enfatiza la importancia de que cualquier individuo, independientemente de su condición económica, pueda tener la oportunidad de acumular riqueza y prosperar económicamente a través de la participación en actividades económicas en el marco de la legalidad.

Examinaremos cómo el capitalismo popular complementa y enriquece la perspectiva liberal, ofreciendo una visión de desarrollo que promueve no sólo la prosperidad individual, sino también la estabilidad económica, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Para respaldar nuestras afirmaciones, nos apoyaremos en las contribuciones y obras de reconocidos pensadores liberales, cuyas ideas han dejado una huella indeleble en la comprensión de este importante y desafiante tema.

Debates sobre el desarrollo económico

El desarrollo económico ha sido objeto de análisis y debate durante décadas. A lo largo del tiempo, diferentes teorías han emergido intentando descifrar cómo y por qué algunas economías prosperan mientras otras luchan por mantenerse a flote. Lo cierto es que el desarrollo económico es un concepto amplio que se refiere al proceso por el cual una economía mejora el bienestar de sus ciudadanos a través del crecimiento económico sostenible. Va más allá de la simple acumulación de riqueza y abarca aspectos más amplios relacionados con la calidad de vida de las personas.

La teoría del crecimiento lineal de Walt W. Rostow, por ejemplo, ve el desarrollo como un viaje evolutivo. Imagina a las economías avanzando a través de etapas predecibles, desde sociedades tradicionales, pasando por fases de crecimiento sostenido, hasta llegar a la etapa de consumo masivo (Rostow, 1961). Esta perspectiva evolutiva contrasta con los modelos de Harrod-Domar del crecimiento basados en el capital, donde el foco está en la importancia del ahorro y la inversión. En estos modelos, la idea es que una sociedad que ahorra e invierte en infraestructura o industria verá un crecimiento acelerado (Harrod, 1939 y Domar, 1946).

Sin embargo, no todos ven la inversión como el único camino. Las teorías estructuralistas como la planteada por Raúl Prebisch argumentan que el crecimiento y el desarrollo requieren más que sólo inversión. Estas teorías sugieren que las economías, especialmente las emergentes, necesitan cambiar en su esencia, sustituyendo las importaciones, diversificando sus industrias locales y mejorando la educación y las habilidades de su gente (Prebisch, 1950).

Por otro lado, las teorías del desarrollo desigual de André Gunder Frank ponen el foco en el panorama internacional. Sostienen que las relaciones entre países pueden ser inherentemente desiguales, y que las naciones más ricas a veces pueden beneficiarse a expensas de las más pobres (Frank, 1967 y 1978).

Entrando en aspectos más internos, los modelos de crecimiento endógeno como los de Paul Romer ven el desarrollo como el resultado de factores intrínsecos, como la innovación y la inversión en capital

humano. Es decir, un país que invierte en educación, salud y tecnología tiene una mejor oportunidad de prosperar. De manera similar, las teorías institucionalistas como la de Douglas North resaltan la importancia de tener instituciones sólidas, como un sistema legal robusto y una gobernanza transparente (Romer, 1990).

La innovación y el cambio tecnológico también tienen su espacio en este mosaico de ideas. Como establecía Joseph Schumpeter, la rápida adopción de tecnologías emergentes puede ser una fuente significativa de crecimiento a través de la destrucción creativa o innovación disruptiva (Schumpeter 1911 y 1942).

Pero, en contraste, el debate sobre la riqueza en recursos naturales y su impacto en el desarrollo ha contado con contribuciones de Jeffrey Sachs y Andrew Warner, quienes han examinado cómo la abundancia de recursos puede influir, positiva o negativamente, en el desarrollo. Tener una riqueza de recursos naturales no siempre se traduce en desarrollo. Algunas teorías argumentan que estos recursos pueden ser más una maldición que una bendición, llevando a la economía a ser unidimensional y vulnerable (Sachs & Warner, 1995).

El capitalismo y las libertades individuales como elementos para el desarrollo económico

El desarrollo económico es claramente un rompecabezas complejo, y aunque existen muchas teorías al respecto, más allá de los detalles y las particularidades, todas se establecieron en los años subsiguientes al establecimiento de la economía como una disciplina formal en 1776 con la publicación del libro *La riqueza de las naciones* de Adam Smith. Este período coincidió con el advenimiento del capitalismo y la primera revolución industrial, que desencadenó un aumento significativo en la tasa de crecimiento del PIB per cápita.

El análisis del crecimiento económico histórico realizado por Angus Maddison es una contribución valiosa para entender cómo la humanidad ha progresado a lo largo del tiempo. Maddison utiliza una variedad de métodos estadísticos para estimar el PIB histórico de diversas naciones y regiones, proporcionando un panorama detallado del desarrollo económico mundial a lo largo de los milenios.

Según Maddison, durante gran parte de la historia humana, las tasas de crecimiento económico eran extremadamente bajas, a menudo estancadas, y rara vez superaban el 0,1% anual en las regiones más avanzadas hasta antes de 1800 (Maddison, 2001). Esto se traduce en una vida material relativamente estática para la mayoría de las personas durante largos períodos de tiempo.

Adicionalmente, Nicholas Crafts y Terence J. O. Harkey señalan que existió un incremento en la tasa de crecimiento del PIB al 0,4% entre 1750 y 1840 y que, durante el siglo XIX, el Reino Unido experimentó tasas de crecimiento del PIB en el rango del 1% al 2% (Crafts & Harkey, 1992). Este incremento significativo se atribuye a la Revolución Industrial, que marcó un punto de inflexión en la historia económica al introducir mejoras significativas en la tecnología y la producción industrial.

Crafts y Harkey también abordan el incremento subsiguiente en la tasa de crecimiento durante las segundas, terceras y cuartas revoluciones industriales, lo cual es coherente con la idea de que el capitalismo y la innovación tecnológica están intrínsecamente vinculados al desarrollo económico. Estas revoluciones industriales trajeron consigo avances significativos en diversas áreas, como la electrificación, la automatización, la digitalización y, más recientemente, la inteligencia artificial, lo que ha impulsado la productividad y el crecimiento económico a niveles nunca vistos.

Por otro lado, Amartya Sen es un economista conocido por su enfoque sobre el desarrollo centrado en la capacidad y la libertad de las personas. Su perspectiva difiere de la idea convencional del desarrollo que se enfoca únicamente en el crecimiento económico.

Sen argumenta que el desarrollo debe medirse no sólo por indicadores económicos como el PIB, sino también por la mejora en la calidad de vida y en las oportunidades disponibles para las personas. Sen destaca que el desarrollo debería permitir a las personas tener la libertad de elegir entre diferentes funcionamientos según sus propias preferencias y valores (Sen, 1999).⁴

4 Aunque no sería correcto decir que Amartya Sen era un pensador liberal clásico, comparte muchas de las ideas de esta corriente de pensamiento.

Un aspecto central de su enfoque es la importancia de eliminar las barreras que limitan las oportunidades de las personas, como la falta de acceso a la educación, la atención médica y otros servicios básicos. Se resalta también la relevancia de la participación política y el empoderamiento de las personas como componentes esenciales del desarrollo.

Desarrollo económico integral, sustentable y democrático

El objetivo del desarrollo económico integral, sustentable y democrático es una meta universalmente deseada. Este concepto abarca no sólo el crecimiento económico, sino también mejoras en la calidad de vida, equidad en la distribución de la riqueza y la preservación del medio ambiente. En este marco, las ideas de economistas liberales tienen un papel significativo en la formulación de políticas y enfoques para alcanzar dicho desarrollo.

En detalle, el desarrollo económico integral va más allá del simple aumento del PIB. Incorpora una variedad de factores, como acceso equitativo a servicios básicos, mejora en la educación y la salud, y amplias oportunidades para todos los miembros de la sociedad. En este contexto, la teoría sobre la eficiencia de los mecanismos de mercado es particularmente relevante. En un sistema de libre mercado se permite la coordinación descentralizada de decisiones individuales, aprovechando de manera eficiente el conocimiento disperso en la sociedad.

La sostenibilidad es otra faceta clave en este tipo de desarrollo. La perspectiva liberal, aunque muy dispersa entre extremos en la relación individuo-Estado, defiende la importancia de la propiedad privada y una asignación de recursos que respete esos derechos. La idea es que los derechos de propiedad bien definidos y la participación limitada del Estado fomentan una gestión responsable de los recursos naturales, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental.

Por lo tanto, para buscar un desarrollo económico que sea a la vez integral, sustentable y democrático, es valioso considerar las contribuciones teóricas de pensadores liberales. Sus ideas ofrecen un marco útil para desarrollar políticas que promuevan un crecimiento equitativo y respetuoso con el medio ambiente.

Libertad individual y democracia

La libertad individual es un pilar esencial tanto del desarrollo económico integral como de la democracia. Los pensadores liberales sostienen que la libertad individual es el motor que impulsa la innovación, la creatividad y la iniciativa empresarial. Cuando las personas persiguen sus propios intereses egoístas en un sistema de libre mercado, naturalmente contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto.

En el ámbito político, la democracia juega un papel fundamental al asegurar que las políticas y decisiones sean responsables y respeten los derechos de los individuos. El enfoque liberal en la limitación del poder estatal y su advertencia sobre el peligro de la concentración de poder en manos del Gobierno adquieren relevancia. Una sociedad libre y democrática necesita de un sistema de pesos y contrapesos para evitar la acumulación excesiva de poder y prevenir la erosión de las libertades individuales.

El pensamiento liberal también enriquece el concepto de desarrollo económico integral y sustentable. Nos recuerda la importancia de considerar las consecuencias a largo plazo de las políticas económicas y evaluar sus efectos no sólo en el corto plazo, sino en todos los segmentos de la sociedad.

Por otro lado, el liberalismo enfatiza la necesidad de limitar el alcance del Gobierno y proteger los derechos individuales frente a la expansión estatal. Su perspectiva resalta que un Gobierno limitado es fundamental para preservar la autonomía y la dignidad de las personas en un sistema democrático.

Capitalismo popular

El concepto de capitalismo popular se refiere a la idea de ampliar la participación y los beneficios de la economía a un mayor número de personas. Busca promover y fortalecer la propiedad privada, la iniciativa individual y el libre mercado como medios para mejorar la calidad de vida de la población en general. Se basa en la idea de que la propiedad privada y la participación plena y libre de los ciudadanos en la economía son primordiales para el progreso y el bienestar.

Fomenta la idea de que cualquier individuo, independientemente de su condición económica, cultural u origen, pueda tener la oportunidad de acumular riqueza y prosperar económicamente a través de la participación en actividades económicas en el marco de la legalidad (Dunn, 2023).

El capitalismo popular enfatiza la importancia de la libre competencia y la movilidad social ascendente. Abre espacio para que los menos favorecidos accedan a recursos productivos, emprendan sus propios negocios y generen ingresos sostenibles. Populariza y democratiza el acceso al capital y a la generación de riqueza, creando ciudadanos respetuosos de las leyes. Aquellos que son legalmente dueños de una propiedad no son destructivos y no destruyen la propiedad privada de otros.

Para alcanzar este propósito, es necesario reducir las funciones del Estado y garantizar que este se concentre en proteger el derecho a la vida, las libertades individuales y el acceso de todos a la propiedad privada, el trabajo, la inversión y la actividad empresarial. De esta forma, se contraponen al colectivismo y la planificación central, donde el Estado decide por todos.

Para complementar todo esto, el capitalismo popular aboga por políticas que promuevan la seguridad jurídica, el acceso amplio a los mercados de capitales, el emprendimiento y la simplificación o eliminación total de impuestos para estimular la actividad económica y dejar que las personas y las empresas conserven la mayor parte de sus recursos. Incentiva la educación y capacitación para mejorar las habilidades y oportunidades de la fuerza laboral y de todos los ciudadanos en el ámbito financiero y del emprendimiento. Busca crear un país de propietarios, no de proletarios.

En el caso particular de reducir la informalidad, el capitalismo popular busca eliminar aranceles, impuestos y burocracia actual. El objetivo debe ser que los beneficios de la formalidad sean mayores que los costos de la informalidad, logrando que la opción de ser formal sea una decisión totalmente racional y no coercitiva.

Es entonces imperativo establecer incentivos para la creación de riqueza dentro del marco de la formalidad. Debemos premiar a quienes trabajan, a quienes producen e invierten, a quienes exportan

y generan empleo. Todo bajo el imperio de la ley y de un Estado ágil, promotor de la generación de riqueza, con un gobierno que trabaja para la gente y no en su contra.

Adicionalmente, la contribución de Hernando de Soto al entendimiento de cómo el capitalismo popular puede promover la diversificación económica es fundamental. Sus investigaciones y publicaciones proporcionan una base sólida para comprender cómo el fortalecimiento de la propiedad individual y la participación en la economía pueden conducir a una mayor diversidad económica (De Soto, 2000).

De Soto argumenta que la falta de reconocimiento legal de la propiedad en muchos países en desarrollo es un obstáculo clave para el crecimiento económico y la diversificación. Proporciona ejemplos detallados de cómo la formalización de la propiedad puede catalizar el emprendimiento y la diversificación económica.

2. Estabilidad macroeconómica

La estabilidad macroeconómica es esencial para la prosperidad económica de un país. Es un pilar fundamental para el desarrollo económico sostenible y el bienestar de una nación ya que implica mantener el equilibrio en variables económicas clave, como la inflación, las tasas de interés, el crecimiento económico y el mercado laboral. Cuando se logra la estabilidad macroeconómica, se crean condiciones propicias para el crecimiento sostenido y la mejora del nivel de vida de la población.

La estabilidad macroeconómica fomenta la inversión y la creación de empleo. Los inversores y las empresas son más propensos a invertir en un entorno económico estable, ya que esto reduce la incertidumbre y el riesgo. Esto, a su vez, conduce a la generación de más empleos y oportunidades para los trabajadores, lo que contribuye a la estabilidad social y reduce la pobreza. La estabilidad macroeconómica también tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de la moneda. Cuando la inflación se mantiene bajo control, las personas pueden comprar bienes y servicios esenciales sin experimentar aumentos desmedidos en los precios. Esto mejora la calidad de vida de la población y promueve la equidad económica.

La estabilidad macroeconómica también es fundamental para atraer inversiones extranjeras y fomentar el comercio internacional. Los inversores internacionales buscan países con economías estables para colocar su capital, lo que puede impulsar el crecimiento económico y la transferencia de tecnología. Un entorno económico estable hace que un país sea más atractivo para las empresas que buscan socios comerciales, lo que puede abrir oportunidades de exportación y fortalecer las relaciones comerciales globales.

Liberalismo y estabilidad macroeconómica

Milton Friedman (1992), laureado con el Premio Nobel en Economía, ha sido un firme defensor de la estabilidad monetaria. Friedman estudió cómo diversos episodios monetarios a lo largo de la historia han influido en el desarrollo y trayectoria económica de diversas naciones. Comienza destacando cómo el dinero, aunque es una creación humana, tiene el poder de influir profundamente en la sociedad. Este poder se manifiesta en la forma en que las políticas monetarias, especialmente las mal gestionadas, pueden tener efectos perjudiciales en la economía y la vida de las personas. Friedman critica la interpretación convencional que atribuye la Gran Depresión a la caída de la bolsa en 1929. Argumenta que fue más bien una serie de errores en la política monetaria por parte de la Reserva Federal los que profundizaron y prolongaron la depresión.

Utilizando ejemplos como la hiperinflación en Alemania tras la Primera Guerra Mundial y la inflación en Estados Unidos en la década de 1970, Friedman destaca cómo la expansión irresponsable de la oferta monetaria puede tener efectos devastadores en una economía. El período posterior a la Primera Guerra Mundial vio a Alemania sumida en una hiperinflación devastadora. La República de Weimar, debido en parte a las pesadas reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles y en parte a sus propias políticas monetarias, comenzó a imprimir dinero sin control. Esto llevó a una rápida devaluación del marco alemán. El episodio es un estudio sobre cómo la pérdida de confianza en la moneda puede llevar a la ruina económica y cómo

las consecuencias políticas pueden ser igualmente graves, sentando las bases para el ascenso al poder de los nazis.

Por otro lado, la economía no debe ser entendida exclusivamente en términos cuantitativos, como el crecimiento del PIB. Es esencial analizar cómo distribuye oportunidades, capacidades y cómo afecta las libertades individuales. Aquí es donde la estabilidad macroeconómica cobra especial relevancia para el liberalismo, ya que, como indicaba Friedrich Hayek, las libertades individuales pueden verse amenazadas en contextos de inestabilidad. Una moneda fuerte y predecible es un pilar fundamental para la protección de los ahorros y la planificación. La libertad individual y la estabilidad económica están intrínsecamente entrelazadas, y la primera está en grave peligro en situaciones de inestabilidad económica (Hayek, 1944 y 1978).

Hayek plantea que la libertad individual sólo puede prosperar en un ambiente de previsibilidad económica. Cuando una economía se vuelve inestable debido a, por ejemplo, políticas inflacionarias, intervencionismo excesivo del Gobierno o falta de respeto a la propiedad privada, las personas se vuelven dependientes de soluciones centralizadas que a menudo llevan a más control gubernamental. En un ambiente de incertidumbre económica, los ciudadanos pueden verse impulsados a apoyar medidas políticas que restrinjan sus libertades individuales en busca de seguridad económica. Estas medidas podrían incluir controles de precios, racionamientos o políticas de redistribución de riqueza, las cuales, según Hayek, socavan el orden espontáneo del mercado y restringen las libertades individuales.

Al igual que para Friedman, para Hayek, una moneda fuerte y predecible es un pilar fundamental para la protección de los ahorros y la planificación futura, pues genera confianza en los individuos y las empresas para realizar transacciones, invertir y ahorrar. En contraste, una moneda inestable, afectada por la inflación o políticas fiscales irresponsables, erosiona el valor del trabajo y del ahorro, impactando negativamente la planificación a largo plazo y la inversión.

Cuando la moneda es inestable, se produce una especie de “efecto de expulsión”, en el cual, los activos seguros y predecibles son reemplazados por inversiones más riesgosas o por bienes tangibles como

el oro o la propiedad inmobiliaria. Este cambio puede tener efectos distorsionadores en la economía y disminuir la eficiencia del sistema de precios, que Hayek considera esencial para el funcionamiento de una economía de mercado libre.

Además, en un ambiente de inestabilidad monetaria, las personas están menos dispuestas a participar en contratos a largo plazo o a invertir en proyectos futuros. Este tipo de incertidumbre puede llevar a un círculo vicioso de menor inversión, menor crecimiento y, en última instancia, menor libertad individual, ya que los individuos y las empresas se vuelven cada vez más dependientes de la intervención estatal para navegar por la inestabilidad.

Hayek propone que la planificación centralizada y la intervención excesiva del Estado no sólo limitan las libertades individuales, sino que pueden llevar a crisis económicas y desequilibrios (Hayek, 1944). Al igual que para Friedman, para Hayek, la historia post Segunda Guerra Mundial de Alemania se convierte en un testimonio de este pensamiento. La recuperación económica de Alemania fue, en gran medida, producto de políticas económicas que permitieron la libre actuación de los mercados.

Adicionalmente, autores como Henry Hazlitt y Murray Rothbard, desde perspectivas liberales, han brindado valiosas reflexiones sobre la importancia de la estabilidad macroeconómica. Mientras Hazlitt (1946) advierte sobre políticas inflacionarias imprudentes, Rothbard (1962) profundiza en la teoría del ciclo económico y la distorsión de la estructura productiva debido a la expansión crediticia. Ambos subrayan la importancia de un crecimiento económico controlado para prevenir crisis y recesiones.

Hazlitt advierte contra las políticas inflacionarias, es decir, el aumento de la oferta de dinero por parte del Gobierno más rápido que el crecimiento de bienes y servicios. Mientras que la inflación puede parecer beneficiosa a corto plazo, al proporcionar un impulso temporal a la economía, en realidad erosiona el poder adquisitivo del dinero y crea incertidumbre económica. Hazlitt señala que la inflación puede llevar a la mala asignación de recursos, la distorsión de la estructura de precios y, finalmente, a recesiones económicas

cuando se corrige la inflación. Hazlitt enfatiza en mirar más allá de las consecuencias inmediatas de una política. Por ejemplo, un aumento de salarios forzados por el Gobierno puede parecer beneficioso para los trabajadores al principio, pero podría resultar en desempleo si las empresas no pueden permitirse pagar esos salarios en el largo plazo.

Por lo dicho, queda claro que la estabilidad macroeconómica y las libertades individuales están estrechamente entrelazadas en un equilibrio delicado. La estabilidad económica, caracterizada por una inflación controlada, tasas de interés estables y un crecimiento sostenible, proporciona un ambiente en el cual las personas pueden planificar su futuro económico y tomar decisiones informadas. Esto preserva su poder adquisitivo y fomenta la inversión y el empleo, contribuyendo a un mayor bienestar y calidad de vida. Por otro lado, la falta de estabilidad económica puede socavar las libertades individuales al impulsar a las personas a respaldar políticas gubernamentales restrictivas en busca de seguridad económica, lo que puede llevar a una mayor intervención estatal y a la erosión de las libertades personales. Así, la estabilidad macroeconómica y las libertades individuales son fundamentales para una sociedad próspera y libre, y su comprensión y promoción conjuntas son esenciales para el desarrollo integral y sostenible de una nación.

Capitalismo popular y estabilidad macroeconómica

Además de las contribuciones de los pensadores liberales, el capitalismo popular introduce una nueva dimensión a esta discusión. Louis Kelso, junto con Mortimer Adler, argumentan en favor de una democratización de la propiedad, sugiriendo que la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas fomenta un interés personal en la estabilidad macroeconómica (1958). Estos autores estudiaron el capitalismo tradicional, no liberal, y proponen soluciones para crear un sistema más equitativo y democrático.

Kelso y Adler nos hacen notar que el capitalismo, en su forma tradicional, ha llevado a desigualdades económicas profundas y

propone la “propiedad ampliada” como solución a este problema. Propone la democratización de la propiedad. Esto significa que en lugar de que unos pocos posean la mayoría de las acciones y otros activos productivos, una mayoría más amplia de personas debería tener una participación en la propiedad de estos activos. Al hacerlo, más personas tendrían acceso a las fuentes de ingresos aparte del trabajo, equilibrando así la distribución de la riqueza y el poder en la sociedad. Los trabajadores, al ser también propietarios, estarían más motivados para aumentar la productividad y la eficiencia de la empresa, ya que cualquier ganancia se reflejaría directamente en el valor de sus acciones.

Con una distribución más amplia de la riqueza y el ingreso, la demanda en la economía sería más estable. Las recesiones causadas por una distribución desigual de la riqueza (donde la mayoría no tiene suficiente poder adquisitivo para sostener la demanda) serían menos probables. La idea es que quienes son propietarios legítimos tienen un interés personal en la salud de la economía. Al tener una participación personal en la empresa y, por extensión, en la economía en general, los trabajadores estarían más interesados en la estabilidad macroeconómica ya que una economía inestable podría afectar negativamente el valor de sus acciones y dividendos.

Si los trabajadores son también propietarios, la tradicional relación antagonista entre empleadores y empleados podría suavizarse. Ambas partes tendrían un interés compartido en el éxito de la empresa y se reducirían los conflictos laborales.

El capitalismo popular sugiere que la estabilidad macroeconómica no es sólo un asunto de políticas gubernamentales y teorías económicas, sino también una cuestión de distribución de la propiedad y el poder económico. La participación más amplia en la propiedad no sólo puede promover la estabilidad económica, sino que también refuerza las libertades individuales al dar a las personas un mayor control sobre su destino económico. Este enfoque representa una adición valiosa a la discusión sobre cómo alcanzar un desarrollo económico integral, sostenible y democrático en una sociedad.

3. Diversificación económica

La importancia de la diversificación económica para un país radica en su papel como mecanismo de mitigación de riesgos y facilitador de adaptabilidad. Una economía que evita la dependencia excesiva en un solo sector o recurso demuestra mayor resistencia a choques económicos externos, como caídas de precios en materias primas o crisis financieras globales. Esta diversificación actúa como un colchón contra las fluctuaciones imprevistas en mercados específicos, permitiendo una distribución más equilibrada del riesgo económico. Más allá de la mera estabilidad, la diversificación también potencia la creatividad y la innovación, creando un ecosistema en el que emergen nuevos sectores y tecnologías.

La diversificación económica también tiene un alcance más amplio que afecta positivamente al bienestar integral a la población de una nación. En el ámbito del empleo, la diversificación genera más oportunidades y mejora la calidad de vida de estos. Asimismo, una economía bien diversificada fortalece la balanza comercial y añade capas de estabilidad política, reduciendo la probabilidad de conflictos generados por la competencia sobre recursos limitados. Por eso la diversificación económica es una estrategia holística que aborda diversas facetas de la vida en un país, desde su estabilidad económica hasta su cohesión social y sostenibilidad a largo plazo.

Liberalismo y diversificación económica

En *La riqueza de las naciones*, publicada en 1776, Smith desarrolla la idea central de que cuando las personas persiguen sus propios intereses egoístas en un mercado libre y competitivo, de manera indirecta, contribuyen al bienestar general de la sociedad. Esta idea se conoce como la “mano invisible”. Smith argumenta que, al buscar maximizar sus propios beneficios, los individuos se especializan en la producción de bienes y servicios en los que son más eficientes. A medida que esta especialización se expande, se crea una amplia gama de productos y servicios, lo que fomenta la diversificación económica.

El proceso de diversificación económica basado en la mano invisible puede entenderse de la siguiente manera: cuando las personas tienen la libertad de elegir qué producir y qué consumir, tienden a especializarse en actividades en las que son más hábiles. Esto aumenta la eficiencia productiva y, al mismo tiempo, crea una variedad de productos disponibles en el mercado (Smith, 1776). Por ejemplo, en un mercado libre, algunos individuos pueden especializarse en la producción de alimentos, mientras que otros se especializan en la fabricación de productos electrónicos. Esto da como resultado una economía diversificada en la que una amplia gama de bienes y servicios está disponible para satisfacer las necesidades y deseos de la sociedad.

La idea de la mano invisible de Smith tiene importantes implicaciones en la diversificación económica. En un entorno donde la libertad individual y la propiedad privada están protegidas, los individuos tienen incentivos para explorar oportunidades comerciales y diversificar sus actividades económicas. Esto promueve la innovación y la adaptación a las cambiantes condiciones del mercado.

La diversificación económica no sólo se refiere a la variedad de productos y servicios disponibles, sino también a la flexibilidad de la economía para ajustarse a situaciones imprevistas. En un sistema basado en la libertad individual, las empresas pueden cambiar de dirección y adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes de los consumidores. Esto mejora la resiliencia económica y la capacidad de recuperación en tiempos de crisis.

Una economía diversificada surge naturalmente cuando las personas son libres de emprender en áreas de su interés y competencia.

Los economistas de la escuela austriaca, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, hicieron hincapié en los peligros de la planificación centralizada ya que inhibe la libertad individual y limita la diversificación económica.

Ludwig von Mises abordó de manera profunda las limitaciones inherentes a la planificación centralizada (Mises, 1949). El eje central de su argumento es que la información necesaria para tomar decisiones económicas eficientes y racionales está dispersa en la mente de millones de individuos y es esencialmente imposible de centralizar en

una autoridad planificadora. Esta idea se conoce como el “problema del conocimiento” en la planificación central.

Cuando una economía se somete a un sistema de planificación central, la autoridad encargada de tomar decisiones carece de la información necesaria para asignar los recursos de manera eficiente. Esto, en consecuencia, conduce a decisiones ineficaces, falta de adaptabilidad y a menudo resulta en la escasez de bienes y servicios.

Sin embargo, Mises destacaba que, en un sistema basado en la libertad individual y el mercado libre, los precios asumen un papel crucial al actuar como señales que reflejan la información dispersa. Estos precios permiten a los individuos tomar decisiones racionales sobre qué producir y consumir, lo que, a su vez, conduce a una mayor diversificación económica. Es importante señalar que Mises enfatizaba repetidamente que el conocimiento disperso entre los individuos es una realidad inmutable que no puede ser capturada de manera efectiva por una entidad centralizada de planificación (Mises, 1949).

Mises argumentaba que la acción humana desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico y que la libertad individual es esencial para impulsarlo. En este sentido, subrayaba que una nación no debería depender exclusivamente de un solo sector económico. En lugar de ello, Mises promovía la idea de que una economía diversificada surgía naturalmente cuando las personas tenían la libertad de emprender en áreas que se alineaban con sus competencias e intereses.

En una sociedad libre, la acción humana, no restringida por intervenciones estatales excesivas, naturalmente lleva a una diversificación económica. Las personas, en busca de satisfacer sus necesidades y deseos, emprenden en diversos sectores, promoviendo así la diversificación económica de manera orgánica. En resumen, Mises enfatizó que la libertad individual y la acción humana son los motores del desarrollo económico y la diversificación, y que cualquier intento de planificación centralizada se encuentra inherentemente limitado por el problema del conocimiento disperso.

Friedrich Hayek profundizó en su crítica a la planificación centralizada y ofreció una visión detallada de las implicaciones de este enfoque en la economía y la sociedad. Se centró en varios aspectos

clave en su argumento, destacando cómo la planificación central puede llevar a una erosión de la libertad individual y restricciones en la diversificación económica (Hayek, 1944).

Hayek argumentaba que los intentos de planificar la economía centralmente requerían una autoridad estatal con poderes significativos para imponer decisiones económicas. Esta concentración de poder en manos del Estado, en su opinión, tenía el potencial de socavar las libertades individuales y llevar a una sociedad cada vez más autoritaria. La planificación central, según Hayek, abría la puerta a la pérdida de libertades civiles y económicas, además de menoscabar la diversidad económica, pues cuando el Estado controla la economía, se tiende a limitar la variedad de bienes y servicios disponibles. Esto se debe a que la planificación central suele implicar la asignación de recursos basada en decisiones gubernamentales en lugar de las preferencias y elecciones individuales de los consumidores. En consecuencia, se podrían eliminar o desalentar ciertos sectores económicos en beneficio de otros, lo que limitaría la diversificación económica.

Hayek también señalaba cómo la planificación central podía suprimir la competencia. En su visión, la competencia era un motor fundamental de la innovación y la eficiencia económica. Cuando el Estado intervenía de manera excesiva en la economía, a menudo establecía monopolios, cárteles o, como vemos hoy en día, se satisface a intereses corporativos, lo que elimina la competencia y desincentiva la mejora constante. Esta falta de competencia lleva eventualmente al estancamiento económico y a una menor diversificación de productos y servicios.

Hayek también hacía hincapié en la importancia de la adaptabilidad económica. Argumentaba que las economías planificadas centralmente carecían de la capacidad de ajustarse a las cambiantes condiciones del mercado. En un mundo en constante evolución, la rigidez de la planificación central podía llevar a la ineficiencia económica y a la incapacidad de diversificar la producción y satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad.

Profundizando más a Hayek, Jay Nock, un crítico de la intervención gubernamental, decía que la interferencia estatal en la economía

desalienta la diversificación. Al igual que Isabel Paterson, resaltó cómo la expansión del Gobierno puede llevar a la centralización y a la dependencia de un solo sector. Estos pensadores subrayaron que la libertad individual en la toma de decisiones económicas fomenta la diversificación.

Nock criticaba fuertemente al Estado y la intervención gubernamental en la vida cotidiana y la economía. Según él, el Estado y la sociedad son entidades distintas y, a menudo, opuestas. La expansión del Estado se da a expensas de la sociedad. Nock creía que la intervención gubernamental, en lugar de fomentar un entorno económico saludable, desalienta la diversificación. Por ejemplo, si un Gobierno protege a un sector particular a través de subsidios o barreras comerciales, desalienta el crecimiento y la innovación en otros sectores, lo que lleva a una economía unidimensional. Esta falta de diversificación puede hacer que la economía sea más vulnerable a los *shocks* (Nock, 1935). Por ejemplo, supongamos que el Gobierno de un país decide proteger su industria automotriz mediante altos aranceles a las importaciones de vehículos. Mientras que esta medida puede fortalecer temporalmente a la industria local, disuade la inversión en otras áreas potencialmente lucrativas y retarda la innovación dentro de la propia industria automotriz al reducir la competencia.

Por otra parte, Isabel Paterson ofreció una visión filosófica de la economía y la política. Consideraba que la libertad es una fuerza motriz de la innovación y el progreso, y criticaba fuertemente la expansión del Gobierno en la vida de las personas. Su perspectiva se alinea con la importancia de la libertad individual y la autonomía en la sociedad.

Para Paterson, la expansión del Gobierno conduce a la centralización del poder, lo que lleva a la dependencia de un solo sector o industria. Esta centralización sofoca la creatividad y el emprendimiento. En su perspectiva, una economía vibrante y diversificada proviene de la multiplicidad de decisiones individuales, no de un plan centralizado (Paterson, 1943); por ejemplo, un país que se ha enfocado en un recurso natural, como el petróleo, y que ha centralizado su economía alrededor de este recurso, podría encontrar dificultades si los precios del petróleo caen drásticamente. Si el Gobierno ha expandido su

intervención y control sobre este sector, se inhibe la diversificación económica y se crea una dependencia peligrosa.

Desde la perspectiva de Isabel Paterson, el liberalismo y la libertad individual están intrínsecamente relacionados con la diversificación económica. En una sociedad en la que se respeta la libertad individual y se fomenta la iniciativa empresarial, se crea un ambiente propicio para la diversificación económica. Paterson sostenía que, cuando las personas son libres de emprender y perseguir sus intereses, tienen la capacidad de innovar y crear nuevos productos y servicios.

La diversificación económica se logra cuando los individuos tienen la libertad de buscar oportunidades económicas en una variedad de sectores. Esta diversificación no sólo enriquece la economía al aumentar la variedad de bienes y servicios disponibles, sino que también promueve la competencia y la adaptabilidad. La competencia, según Paterson, es un impulsor fundamental de la eficiencia económica y la mejora constante.

Paterson también se mostraba crítica con la intervención gubernamental excesiva en la economía. Sostenía que un Gobierno que limita en exceso la libertad individual y la propiedad privada socava la capacidad de las personas para diversificar sus actividades económicas y prosperar. Argumentaba que el Gobierno debería tener un papel limitado, centrado en proteger los derechos individuales y mantener un marco legal y de seguridad que permita el libre intercambio y la iniciativa empresarial.

Capitalismo popular y diversificación económica

El capitalismo popular enfatiza la importancia de que las personas tengan la oportunidad de convertirse en propietarios de negocios y emprendedores. Esto significa que más personas pueden iniciar y desarrollar negocios basados en sus habilidades e intereses. Cuando un mayor número de emprendedores tienen la libertad de perseguir sus ideas y pasiones, esto conduce a una mayor diversificación de industrias y sectores económicos.

La capacidad de las personas para iniciar y desarrollar negocios basados en sus habilidades, intereses y competencias es un pilar del

emprendimiento. Cuando las personas son libres de seguir sus pasiones y convertir sus ideas en realidades comerciales, esto no sólo promueve la innovación, sino que también lleva a una diversificación natural de la economía expandiendo la propiedad individual y la participación en la economía. Según el informe *Global Entrepreneurship Monitor*, la actividad emprendedora se asocia positivamente con la innovación y, por tanto, con la diversificación económica en muchos países. Cuando más individuos se sienten empoderados para emprender, se producen innovaciones en una variedad de sectores económicos (GEM, 2021).⁵

Al permitir que más personas participen en el mundo empresarial, se fomenta la competencia en el mercado. La competencia es un motor clave para la innovación y el crecimiento económico. Cuando múltiples empresas compiten en un sector, están motivadas para encontrar formas de mejorar sus productos o servicios, lo que a menudo lleva a la introducción de nuevas tecnologías y enfoques. La competencia en el mercado es esencial para la diversificación económica. La idea de que la competencia impulsa la innovación y el desarrollo de ventajas comparativas en diferentes sectores económicos es un principio fundamental en la teoría económica.

El capitalismo popular busca ampliar el acceso de las personas a recursos financieros, lo que incluye la capacidad de invertir en una variedad de sectores económicos. Esto es esencial para la diversificación económica, ya que no todos los sectores prosperan al mismo tiempo. Al invertir en una cartera diversificada que abarca diferentes industrias, los individuos pueden mitigar el riesgo y contribuir a la estabilidad económica.

Al permitir que más personas inviertan en acciones, bonos y otros activos financieros, se crea una mayor diversidad en la propiedad

5 El GEM se ha consolidado como el referente más importante a nivel mundial en el ámbito del emprendimiento. Su objetivo es proporcionar información comparable entre territorios sobre el fenómeno emprendedor, enriqueciendo el conocimiento científico asociado a este fenómeno y contribuyendo a un mejor conocimiento de la dinámica del emprendimiento en todos los países en que ha sido implementado.

de las empresas. Esto es importante porque evita que el control y la toma de decisiones estén concentrados en unas pocas manos. Una base amplia de accionistas puede llevar a una toma de decisiones más equilibrada y a una mayor estabilidad financiera en las empresas.

Cuando se fomenta la inversión en el mercado de valores y otros activos financieros, se brinda a un amplio grupo de ciudadanos la oportunidad de participar en el crecimiento económico. Eso hace que las empresas también accedan a una amplia diversidad de inversionistas. Esto significa que las ganancias y el éxito económico se comparten de manera más equitativa, lo que contribuye a una sociedad más estable y próspera. Así como se redistribuye la riqueza a través del mercado, el mismo también diversifica la economía.

4. Políticas fiscales y monetarias responsables

Las políticas fiscales y monetarias son dos herramientas fundamentales que los gobiernos y los bancos centrales utilizan para gestionar y estabilizar la economía de un país. Ambas políticas tienen objetivos específicos, y cada una tiene sus propias ventajas y limitaciones. Veamos primero qué son y luego por qué es crucial manejarlas de forma responsable.

La política fiscal se refiere a la forma en que un Gobierno ajusta sus niveles de gastos y tasas impositivas para monitorear y afectar la economía. Los componentes principales son los ingresos fiscales (impuestos, aranceles, etc.) y el gasto público (infraestructura, servicios sociales, etc.). Un manejo inadecuado de la política fiscal puede llevar a problemas como el déficit público, la deuda elevada y la inflación. Una estructura tributaria justa y eficiente, junto con un gasto público bien administrado, garantiza la provisión de servicios públicos esenciales y mantiene la deuda pública bajo control.

La política monetaria, por otro lado, es el conjunto de acciones que emprende el banco central para controlar la cantidad de dinero en circulación y, por lo tanto, influir en variables como las tasas de interés, la inflación y el empleo. Esto se logra mediante operaciones de mercado abierto, la tasa de interés de referencia y los requisitos de

reserva bancaria, entre otros mecanismos. Un manejo irresponsable de la política monetaria puede llevar a hiperinflación o deflación, ambas situaciones negativas para la economía. El banco central debe ser cauteloso para no generar burbujas de activos o crisis financieras.

Liberalismo y políticas fiscales y monetarias responsables

El liberalismo económico es una escuela de pensamiento que aboga por una mínima interferencia gubernamental en los mercados. Este enfoque impulsa políticas fiscales y monetarias responsables para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de los individuos.

Para Adam Smith, la propiedad privada era fundamental en una economía próspera. Según Smith, la propiedad privada es más que un simple derecho legal; es un mecanismo que permite a las personas tomar control total de sus activos y utilizarlos como mejor les parezca. Esta autonomía en la gestión de la propiedad genera un ambiente propicio para el desarrollo económico porque incentiva a las personas a utilizar sus recursos de manera óptima (Smith, 1776).

Smith era un crítico acérrimo de los sistemas fiscales opresivos y de la excesiva intervención del Estado en la economía. Argumentaba que una carga tributaria exorbitante podía ser extremadamente perjudicial para el bienestar económico general. Los impuestos excesivos, según él, podían desincentivar la inversión, la iniciativa empresarial y el trabajo duro, y de este modo, afectar negativamente la productividad y la eficiencia económica (Smith, 1776). En pocas palabras, si los costos de participar en la economía (en forma de impuestos) son demasiado altos, entonces la gente podría optar por no participar en absoluto, lo que reduciría la actividad económica y la prosperidad general.

Smith sostenía que la libertad económica era esencial para el funcionamiento eficiente de cualquier economía. Cuando las personas tienen la capacidad de mantener una parte significativa de sus ingresos, se les otorga la libertad para tomar decisiones autónomas. Pueden optar por consumir, ahorrar o invertir en oportunidades que consideren más adecuadas para ellas y sus familias. Esta libertad para tomar decisiones económicas no solo mejora el bienestar individual,

sino que también lleva a una asignación más eficiente de recursos en la economía, impulsando así la innovación y la inversión.

En cuanto al sistema tributario, Smith abogaba por un enfoque que fuera tanto justo como equitativo. Específicamente, creía que la carga tributaria debía ser proporcional a los ingresos. Aquellos con mayores ingresos deberían, en teoría, pagar más impuestos, pero no hasta el punto de obstaculizar la inversión o desincentivar la productividad. Un sistema fiscal mal diseñado, según Smith, no solo es injusto, sino que también podría tener efectos económicos adversos, como la disuasión del esfuerzo individual y la inversión empresarial (Smith, 1776).

Los pensadores liberales como Henry Hazlitt y Murray Rothbard abogaron de manera consistente por políticas fiscales responsables que evitaran la carga excesiva de impuestos y el gasto gubernamental desenfrenado. Ambos analizaron sobre cómo estas políticas pueden tener efectos perjudiciales en la economía.

Aunque Hazlitt comparte con Adam Smith la importancia de la propiedad privada y de un sistema tributario justo, sus obras representan un examen más detallado y crítico de cómo las políticas fiscales y monetarias pueden afectar negativamente la economía. Mientras Smith ponía énfasis en cómo la autorregulación del mercado podía fomentar el bienestar social (Smith, 1776), Hazlitt extiende este argumento al criticar directamente las intervenciones gubernamentales en la economía moderna, especialmente en el ámbito monetario (Hazlitt, 1959).

Henry Hazlitt criticó la idea de gastar para estimular la economía, una estrategia que a menudo se conoce como keynesianismo.⁶ Hazlitt sostenía que el gasto deficitario, o el gasto público financiado por deuda, no es una solución sostenible para el crecimiento económico a largo plazo. Argumentaba que este enfoque simplemente posponía

6 En su obra *The Failure of the "New Economics": An Analysis of the Keynesian Fallacies* (1959), Hazlitt dismantela sistemáticamente las propuestas y los argumentos presentados por John Maynard Keynes en *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, ofreciendo un escrutinio detallado de los supuestos y conclusiones keynesianas.

problemas económicos, creando una “ilusión” de prosperidad que finalmente tendría que ser pagada por generaciones futuras (Hazlitt, 1959).

Hazlitt también criticaba el efecto de desplazamiento del gasto deficitario. Según él, cuando el Gobierno financia su gasto a través de la deuda, está absorbiendo recursos que de otro modo estarían disponibles para la inversión privada. Este desplazamiento de recursos de manos privadas a manos del Gobierno, según Hazlitt, podría llevar a una asignación ineficiente de estos, dado que el Gobierno, a menudo, carece del sistema de incentivos y señales de precios que rige el sector privado. Hazlitt también señalaba que el gasto deficitario no necesariamente lleva a una verdadera inversión productiva ni a la eficiencia económica. En lugar de esto, podría resultar en malas inversiones o en proyectos que no se justificarían en un entorno de mercado libre y competitivo (Hazlitt, 1959).

Hazlitt también advirtió sobre los peligros de políticas fiscales mal diseñadas, especialmente en cuanto a la redistribución de la riqueza y a la fijación de precios y salarios por parte del Gobierno. Argumenta que el impulso para redistribuir la riqueza a través del sistema tributario suele tener efectos negativos no deseados. A menudo, los impuestos excesivos sobre los ingresos y las empresas desincentivan la inversión y la producción, lo que a la larga reduce el crecimiento económico y, paradójicamente, disminuye los ingresos fiscales totales del Gobierno (Hazlitt, 1946).

Murray Rothbard argumentaba que el Gobierno distorsiona la asignación de recursos a través de la intervención fiscal. Sostenía que, al utilizar impuestos y gasto público para redistribuir la riqueza y financiar programas específicos, interfería en la asignación natural de recursos en una economía de mercado (Rothbard, 1970).

Rothbard defendía un enfoque de *laissez-faire*, donde el Gobierno tenía un papel limitado en la economía y la mayoría de las decisiones económicas eran tomadas por individuos y empresas en un mercado libre. Argumentaba que cualquier forma de intervención fiscal, ya fuera a través de impuestos progresivos o gasto gubernamental, tenía el potencial de crear distorsiones y desequilibrios en la economía (Rothbard, 1970).

Contribuyendo con el pensamiento de la escuela austriaca de economía, Murray Rothbard analiza cómo la intervención del banco central en la expansión crediticia puede llevar a distorsiones significativas en la economía. Según Rothbard, cuando un banco central expande el crédito, se produce una “estructura de producción artificialmente alargada”. En términos simples, esto significa que las inversiones realizadas durante la fase de expansión crediticia no reflejan las verdaderas preferencias temporales de los consumidores. Este fenómeno da lugar a una fase de crecimiento económico que es seguida inevitablemente por una recesión. Durante este período de recesión, las “malas inversiones” tienen que ser liquidadas para restablecer el equilibrio económico (Rothbard, 1962).

Este desequilibrio se atribuye a las señales erróneas enviadas por las tasas de interés manipuladas por el banco central. En un sistema económico sin intervención, una baja tasa de interés generalmente señala un alto nivel de ahorro, lo cual justifica inversiones de largo plazo. Sin embargo, cuando el banco central manipula las tasas de interés, envía señales falsas a los mercados, lo que lleva a inversiones que resultan ser insostenibles en el largo plazo.

Rothbard también destaca la importancia de una moneda estable y libre de interferencia gubernamental para la estabilidad económica. Utiliza el ejemplo histórico de la hiperinflación en la República de Weimar, en Alemania, en la década de 1920 para ilustrar cómo la intervención gubernamental puede tener efectos catastróficos en una economía (Rothbard, 1974). Durante este período, el Gobierno alemán financió sus gastos, en particular los relacionados con la Primera Guerra Mundial y las reparaciones de guerra, mediante la emisión excesiva de dinero. Esto llevó a la devaluación del marco alemán y causó un colapso económico. Rothbard argumenta que, si Alemania hubiera tenido un estándar como el patrón oro, esta hiperinflación podría haberse evitado o al menos mitigado (Rothbard, 1974).

Además, Rothbard era un firme defensor de reducir el papel del Estado en la economía, especialmente en el sistema financiero. Creía que un sistema más descentralizado, en el cual el dinero fuera emitido por instituciones privadas o basado en estándares como el oro, podría ofrecer una mayor estabilidad económica (Rothbard, 1983).

Como hemos podido apreciar, todos los pensadores liberales compartían la creencia de que una carga tributaria excesiva y un gasto público descontrolado podían ser perjudiciales para la economía. Argumentaban que estas políticas podían llevar a un Gobierno cada vez más grande y a una creciente interferencia en la libertad económica de las personas. En su lugar, abogaban por un enfoque más limitado del Gobierno en la economía, con impuestos justos y un gasto controlado que permitiera a los individuos y empresas tomar decisiones económicas de manera más autónoma y eficiente.

Capitalismo popular y políticas fiscales

Hernando de Soto ofrece una visión crítica pero constructiva del fenómeno de la economía informal, considerando la informalidad como una forma de capitalismo popular (De Soto, 1986). Este término, capitalismo popular, se refiere a la capacidad innata de los individuos y las comunidades para iniciar y administrar sus propios negocios y empresas sin depender del Estado o de grandes corporaciones. De Soto reconoce la creatividad y la resiliencia de estos empresarios informales, quienes a menudo enfrentan barreras institucionales significativas para entrar en la economía formal.

Sin embargo, como De Soto también señala, este capitalismo popular en forma de informalidad no es sostenible a largo plazo, especialmente en lo que respecta a la generación de riqueza y al desarrollo social en países subdesarrollados. En lugar de ser una panacea, la informalidad es más bien un síntoma de sistemas legales y regulatorios defectuosos que no ofrecen un camino claro hacia la formalización. Esto nos lleva a una discusión sobre las políticas fiscales y tributarias responsables que podrían ayudar a formalizar a las empresas y trabajadores informales (De Soto, 1986).

A través de políticas fiscales y tributarias responsables se puede fomentar esta formalización. Estas políticas podrían incluir la simplificación del sistema impositivo, la reducción de tarifas impositivas excesivamente altas y la implementación de incentivos fiscales para las pequeñas empresas (Gwartney, Lawson & Hall, 2017), impulsando a la formalización.

Este argumento es apoyado por Slemrod y Bakija, quienes sostienen que un sistema tributario complejo a menudo desalienta la formalización, ya que las empresas y los trabajadores encuentran más fácil operar en la economía informal para evitar la carga administrativa. Simplificar los códigos fiscales podría ser un paso efectivo para incentivar la transición de lo informal a lo formal (Slemrod & Bakija, 2017).

Este enfoque se alinea con los principios fiscales expuestos por Adam Smith que decía que los impuestos deben ser justos y proporcionales, particularmente en relación con los ingresos. Para las pequeñas y medianas empresas, que Ayyagari y compañía identifican como la columna vertebral de cualquier economía, la imposición fiscal proporcional podría ser un factor crítico en la decisión de formalizarse (Ayyagari, Demirgüç-Kunt & Maksimovic, 2011).

Otra palanca para la formalización podría ser el uso de incentivos fiscales. Los incentivos fiscales, como deducciones para la inversión en capital o para la contratación de empleados, también pueden fomentar la formalización. Estos incentivos podrían hacer más atractivos para las empresas el pasar a la formalidad, ya que les permitiría acceder a más recursos y oportunidades de crecimiento (Perry *et al.*, 2007).

En resumen, la formalización de la economía informal es fundamental para que el capitalismo popular sea una fuerza positiva y sostenible en el desarrollo económico y social. Las políticas fiscales y tributarias, cuando se diseñan con atención a la simplificación, la equidad y la incentivación, pueden jugar un papel crucial en este proceso.

5. Apertura comercial y competitividad

Una economía abierta y competitiva, en el contexto del desarrollo económico de una nación, es un elemento de vital importancia para su desarrollo. Este enfoque económico se fundamenta en la premisa de que la interacción en los mercados, tanto a nivel interno como internacional, constituye un pilar fundamental para catalizar el progreso, la innovación y el bienestar de una sociedad.

La competencia, inherente a una economía abierta, impulsa a las empresas a innovar de manera constante. La necesidad de sobrevivir y prosperar en un entorno altamente competitivo fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y servicios, motorizando así el progreso económico.

Históricamente, las economías abiertas han exhibido tasas de crecimiento superiores en el largo plazo. Esto se atribuye a la dinámica del comercio internacional y a la inversión extranjera, que generan nuevas oportunidades de mercado y aportan capital, estimulando, de esta manera, la expansión económica. La exposición a los mercados internacionales reduce la dependencia económica en sectores específicos. Como consecuencia, la economía se torna menos vulnerable a las fluctuaciones de un solo sector y más resistente a las crisis económicas.

Una economía abierta también tiende a generar ingresos más elevados para sus ciudadanos, contribuyendo de manera significativa a la mejora de su calidad de vida. Además, facilita el acceso a una mayor variedad de bienes y servicios, enriqueciendo la calidad de vida de la población.

Adicionalmente, la apertura económica estimula el comercio internacional, lo que, a su vez, puede generar ingresos adicionales y oportunidades de empleo. Este fenómeno beneficia no sólo a las empresas, sino que también fortalece las relaciones diplomáticas y la cooperación a nivel internacional. Las economías abiertas y competitivas suelen constituir destinos atractivos para la inversión extranjera directa. Este flujo de capital puede estimular la creación de empleo, fomentar la transferencia de conocimientos y propiciar la modernización de la infraestructura y el capital humano.

Liberalismo, apertura económica y competitividad

Adam Smith (1776) argumentaba con vehemencia a favor de la apertura económica y el libre comercio. En el contexto del mercantilismo, una corriente dominante en la época que promovía políticas comerciales restrictivas, Smith fue un pionero en destacar los problemas

inherentes a las barreras comerciales como los aranceles y las cuotas. Según él, estas restricciones no sólo eran ineficientes, sino que también perpetuaban la desigualdad.

Smith decía que la libre circulación de bienes y servicios beneficia a toda la sociedad al estimular la mejora continua de productos y servicios, y que el comercio no sólo beneficia a las naciones económicamente, sino que también fomenta la comprensión y la cooperación entre las personas.

La capacidad de acceder a mercados internacionales y participar en competencias eficientes emerge como un motor fundamental para el crecimiento económico. Esto implica la necesidad de contar con políticas comerciales apropiadas y una infraestructura de exportación eficaz.

Smith explicó de manera contundente que la libertad para el comercio y la competencia conduce a la producción de bienes y servicios de mayor calidad. Esta libertad para comerciar y competir a nivel internacional está en consonancia con la idea fundamental de que las personas deben tener la libertad de intercambiar bienes y servicios según su propia voluntad, tal como Smith enfatizó en sus escritos (1776 y 1759).

Smith también consideraba que la competencia es un elemento crucial para el funcionamiento eficiente de una economía. Él explicó cómo una economía competitiva fomenta la innovación, la mejora en la calidad de los productos y la reducción de los costos. La competencia impide que las empresas adquieran poder de mercado excesivo, asegurando que los precios sean determinados por las fuerzas naturales de la oferta y la demanda, en beneficio de los consumidores (Smith, 1776).

La teoría de la “ventaja absoluta” en el comercio internacional también es un aporte significativo de Smith. Según esta teoría, si un país puede producir un bien más eficientemente que otro, tiene una ventaja absoluta en la producción de ese bien. Smith argumentaba que los países deberían especializarse en la producción de bienes donde tienen una ventaja absoluta y luego participar en el comercio internacional para obtener los otros bienes que necesitan (Smith, 1776).

Por otro lado, Milton Friedman defendía la idea de que el libre comercio es un pilar esencial para maximizar la libertad de elección

del consumidor (Friedman, 1962). En su análisis, subraya que las restricciones comerciales, al imponer barreras al intercambio de bienes y servicios, limitan la libertad de elección de los consumidores. Además, enfatiza que estas restricciones generan ineficiencias económicas al proteger a las industrias nacionales de la competencia internacional. Esta protección a menudo resulta en una falta de especialización y en la incapacidad de aprovechar plenamente las ventajas comparativas que podrían beneficiar a la economía en su conjunto.

Según Friedman, el libre comercio no sólo promueve la libertad de elección del consumidor, sino que también fomenta la eficiencia económica al permitir una mayor especialización y el aprovechamiento de las ventajas comparativas. Las restricciones comerciales, por otro lado, limitan estas posibilidades y pueden tener efectos negativos en la economía.

Si bien Karl Popper no se centró en la economía, sus ideas sobre la adaptabilidad y el cambio como elementos clave para el progreso podrían interpretarse como un apoyo implícito a la apertura económica y competitiva de los países. En una sociedad abierta, las empresas e individuos tendrían la libertad y el incentivo para innovar, adaptarse y competir, elementos que son vitales para el progreso económico de las sociedades y, por ende, de las naciones (Popper, 1945).

Friedrich Hayek ha planteado teorías que muy bien se ajustan a temas como la apertura económica y la competitividad que han tenido un impacto duradero en el debate económico y político. Hayek subrayaba la importancia de lo que llamó el “orden espontáneo” en la economía (Hayek, 1988). Según esta teoría, la organización espontánea de actividades económicas a través del sistema de precios es mucho más eficiente que cualquier intento de planificación centralizada. En este sentido, la apertura económica, con un énfasis en el libre comercio y la movilidad del capital, es crucial.

Hayek (1945) nos ayuda a deducir que el comercio internacional es un terreno fértil para esta dinámica competitiva. Cuando las empresas de diferentes países compiten en un mercado global, el sistema internacional de precios actúa como un mecanismo para transmitir información entre actores económicos dispersos. Este

es el mecanismo principal que permite la competitividad en una economía de mercado, ya que se crea un ambiente propicio para la mejora constante y la búsqueda de la excelencia que benefician a los consumidores en todo el mundo.

Hayek argumentaba también que las restricciones al comercio no sólo son ineficientes desde el punto de vista económico, sino que también representan un riesgo para las libertades individuales. La apertura económica, en este sentido, es también una forma de limitar el poder del Estado sobre los individuos (Hayek, 1944).

Por su parte, Ludwig von Mises ofrecía una defensa contundente del libre comercio argumentando que las restricciones comerciales limitan la eficiencia y la cooperación pacífica entre las naciones. Según Mises, el comercio es un juego de suma positiva en el que todas las partes involucradas pueden beneficiarse (Mises, 1927). Una economía cerrada, que impone aranceles altos, puede terminar pagando precios inflados por bienes y servicios. En contraste, la apertura comercial permite a los países beneficiarse de productos de alta calidad a precios más bajos.

Mises también apoyaba la idea de que la movilidad de capital y personas es fundamental para una economía abierta. Restricciones a esta movilidad, argumenta, conducen a ineficiencias y al despilfarro de recursos. Al igual que Hayek, Mises enfatizaba en la función del sistema de precios como un mecanismo de transmisión de información (Mises, 1949). Según Mises, la competencia en un mercado libre es lo que permite que este sistema funcione eficazmente.

Si una empresa en un país puede producir un bien a menor costo que sus competidores en otros países, el sistema de precios internacional reflejaría esto, y la empresa ganará cuota en el mercado. Esto incentiva la eficiencia y la innovación en toda la economía mundial.

Capitalismo popular, apertura económica y competitividad

El concepto de “capitalismo popular” apunta a una distribución más equitativa de la riqueza y la propiedad en una economía, de tal forma que una mayor proporción de la población tenga la oportunidad de participar en la creación y distribución de riqueza. Una de las formas

en que esto puede lograrse es a través de la liberalización del comercio, especialmente en términos de reducción de aranceles e impuestos al comercio internacional.

Los bajos aranceles permiten que las empresas locales accedan a mercados internacionales con mayor facilidad. Esto no sólo beneficia a las grandes corporaciones, sino también a las pequeñas y medianas empresas (PYME), que a menudo son propiedad de accionistas locales. Un pequeño productor de café en Colombia podría exportar su producto a Estados Unidos sin enfrentar aranceles exorbitantes, lo que a su vez podría aumentar la rentabilidad de la empresa y, por ende, el valor para los accionistas.

Los bajos aranceles también hacen que los productos importados sean más asequibles. Esto es particularmente beneficioso para los consumidores de bajos ingresos, permitiéndoles acceder a bienes y servicios de alta calidad a precios más bajos. Si un país reduce los aranceles sobre la tecnología, el costo de comprar una computadora disminuirá, lo que a su vez podría hacer que más personas inviertan en herramientas que les permitan participar en la economía digital.

Los bajos aranceles y una economía abierta podrían resultar en una mayor eficiencia y productividad, lo que a su vez podría conducir a mayores niveles de ahorro e inversión. En una economía donde más personas tienen acceso a la inversión en mercados de capital, el ahorro podría traducirse en inversión en acciones y bonos, facilitando así la distribución más equitativa de la riqueza. Con el aumento de la rentabilidad de las empresas gracias al acceso a mercados globales, más personas podrían tener el capital necesario para invertir en mercados financieros, incluso si son pequeños inversores. Kelso y Passell argumentan que permitir que los individuos sean propietarios de acciones en empresas internacionales les da un interés directo en el éxito de la economía global. Esto, a su vez, promueve la competitividad a nivel internacional, ya que los propietarios tienen un incentivo personal en mejorar la eficiencia y la calidad de las empresas en las que invierten (Kelso & Pasell).

El libre comercio no se limita al intercambio de bienes y servicios; también permite la movilidad del capital y el trabajo. Esto

podría ayudar a los individuos a acceder a oportunidades de empleo y emprendimiento en otros países, fomentando así una distribución más equitativa de la riqueza. El libre comercio también fomenta la competencia, lo cual es un estímulo para la innovación y el emprendimiento. En una economía donde más personas tienen la posibilidad de emprender, la probabilidad de una distribución más equitativa de la riqueza y la propiedad aumenta. La competencia con empresas extranjeras podría incentivar a las empresas locales a innovar, lo que podría llevar a nuevos emprendimientos y, en consecuencia, a más oportunidades para la inversión local en acciones y capital.

6. Inversiones en infraestructura

La infraestructura, como carreteras, puertos, energía y telecomunicaciones, es esencial para la actividad económica y puede impulsar la productividad. La infraestructura sólida facilita el comercio y la comunicación, lo que permite a las empresas y las personas operar de manera más eficiente.

Las inversiones en infraestructura pueden impulsar el crecimiento económico de varias maneras. La infraestructura puede ayudar a reducir los costos de producción. Por ejemplo, las carreteras de alta calidad pueden ayudar a las empresas a transportar sus productos de manera más eficiente, lo que reduce los costos de transporte. Las redes de telecomunicaciones de última generación pueden ayudar a las empresas a comunicarse de manera más eficaz, lo que puede conducir a una mayor innovación y productividad.

La infraestructura también puede ayudar a crear nuevos mercados. Por ejemplo, la construcción de nuevas carreteras puede abrir nuevas oportunidades para el desarrollo económico en áreas rurales. La construcción de nuevas redes de telecomunicaciones puede ayudar a conectar a las comunidades desatendidas con los mercados globales.

La infraestructura también puede ayudar a mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, las inversiones en infraestructura de transporte pueden facilitar el acceso a la educación, la atención médica y otros

servicios. Las inversiones en infraestructura de agua y saneamiento pueden ayudar a mejorar la salud pública.

Liberalismo y las inversiones en infraestructura

Adam Smith es ampliamente conocido como un defensor del libre mercado, pero también reconoció el papel esencial del Gobierno en ciertas áreas, como la provisión de bienes públicos e infraestructura, que incluyen carreteras y posiblemente hospitales y escuelas.

Smith abordó la cuestión del papel del Estado reconociendo que hay ciertas funciones que el mercado no puede realizar de manera eficiente por sí solo y que, por lo tanto, deberían ser responsabilidad del Estado. En particular, Smith asignó al Estado el deber de proporcionar ciertos bienes públicos que son no excluyentes y no rivales. Esto incluye la defensa nacional, la justicia y ciertas infraestructuras como carreteras, puentes y canales (Smith, 1776).

Aunque Smith no menciona específicamente hospitales o colegios, su argumento se extiende lógicamente a cualquier forma de infraestructura o servicio que sea crucial para el funcionamiento eficiente de una economía pero que el mercado pueda no proveer de manera óptima. En este sentido, Smith vio una función legítima para el Gobierno la inversión en infraestructura que favorezca el comercio, la seguridad y el bienestar general de la sociedad.

Milton Friedman, otro destacado defensor del libre mercado, planteó en su obra que la inversión en infraestructura puede ser más eficiente cuando está en manos del sector privado, siempre y cuando se garanticen las libertades individuales y los derechos de propiedad. Para Friedman, la infraestructura no sólo impulsa la productividad, sino que también refleja la libertad de asociación y emprendimiento (Friedman, 1962).

Por otro lado, Friedrich Hayek resaltó la importancia de un sistema legal claro y justo en relación con la infraestructura. Además, enfatizó que la inversión privada en infraestructura, en un entorno de propiedad protegida y con derechos contractuales claros, se alinea con la libertad de inversión (Hayek, 1973).

John Stuart Mill reconoció que existen casos en los que el Estado tiene un papel justificado en la provisión de bienes públicos, incluyendo la infraestructura, siempre y cuando contribuya al funcionamiento eficiente del mercado y al bienestar general (Mill, 1848).

Thomas Sowell, conocido por su escepticismo hacia la intervención gubernamental, argumentó que la inversión privada en infraestructura tiende a ser más eficaz y menos propensa a la corrupción que las inversiones estatales, aunque reconoció la necesidad de una planificación cuidadosa en ciertas circunstancias. En varias de sus obras y artículos, ha expresado la opinión de que la inversión privada en infraestructura puede ser más eficiente que la inversión pública. Argumenta que las empresas privadas, impulsadas por el incentivo del beneficio, suelen gestionar los recursos de manera más eficaz y son más susceptibles de llevar a cabo inversiones y mejoras eficientes (Sowell, 1995/2004).

Sowell señala que la burocracia y la politización a menudo hacen que los proyectos de infraestructura financiados con fondos públicos sean más propensos a la ineficiencia y la corrupción. Sin embargo, también reconoce que hay circunstancias donde la intervención del Estado puede ser necesaria, como en el caso de bienes públicos que el mercado no puede proveer de manera eficiente. Pero incluso en estos casos, aboga por una planificación y ejecución cuidadosas para minimizar la ineficiencia y la corrupción (Sowell, 1995/2004).

Ludwig von Mises, en su libro *Liberalismo* (1927), ofreció una defensa contundente del libre comercio y argumentó que las restricciones comerciales limitan la eficiencia y la cooperación pacífica entre las naciones. En el contexto de la apertura comercial y la infraestructura, sus ideas respaldan la inversión en proyectos de desarrollo para el crecimiento económico.

Rose Wilder Lane, una de las figuras fundacionales del movimiento libertario en los Estados Unidos, abogó firmemente por la importancia de la propiedad privada y la libertad individual como elementos clave para el desarrollo humano y económico. Aunque su enfoque principal no era la infraestructura *per se*, sus ideas sobre la libertad económica y la propiedad privada se pueden extender a este ámbito (Lane, 1943). Lane era escéptica sobre la eficacia de la intervención

gubernamental en la economía y se inclinaba hacia la creencia de que la sociedad civil y la propiedad privada eran mecanismos más eficientes para el desarrollo económico y social. Ella argumentaba que el Gobierno a menudo carece de los incentivos adecuados para gestionar los recursos de manera eficiente y que la propiedad privada, donde los individuos tienen una inversión personal en el resultado, conduce a un uso más cuidadoso y eficiente de los recursos.

Estos pensadores, desde diversas perspectivas ideológicas, ofrecen una comprensión profunda de cómo la infraestructura se relaciona con la libertad individual y el desarrollo económico, destacando su importancia tanto en la actividad empresarial como en la mejora de la calidad de vida de las personas. Sus ideas siguen siendo relevantes en los debates contemporáneos sobre inversión en infraestructura y políticas públicas.

7. Sistema de propiedad privada y derechos contractuales claros

Un marco bien estructurado de derechos de propiedad y contractuales se erige como un elemento crucial para el avance económico. La institución de la propiedad privada, la cual confiere a los individuos el derecho exclusivo de uso y gestión sobre bienes y recursos determinados, otorga a los propietarios una significativa autoridad y autonomía en sus decisiones, abriendo la puerta a la generación de beneficios económicos en el marco de la libertad individual.

Los derechos de propiedad privada, con su capacidad de promover el desarrollo económico, tienen múltiples funciones críticas. Funcionan como un potente estímulo para actividades de inversión e innovación. La certeza jurídica que obtienen los propietarios sobre la conservación de los frutos de sus inversiones motiva una asignación de recursos más efectiva hacia bienes y servicios que tienen potencial de rentabilidad. También sirve como un motor de eficiencia económica. Los propietarios, al tener un interés directo en el rendimiento de sus activos, están intrínsecamente motivados para gestionar esos recursos y los riesgos de manera eficiente, ordenada y transparente con el objetivo de maximizar las ganancias. Adicionalmente, una estructura

clara de derechos de propiedad minimiza los conflictos económicos, ya que las reglas claras sobre la tenencia y uso de bienes y recursos disminuyen las probabilidades de disputas y litigios.

En un plano igualmente fundamental se encuentran los contratos, esos acuerdos legales que precisan los términos y condiciones bajo los cuales se realizará una transacción entre dos o más entidades. Los derechos contractuales claros y bien definidos otorgan a todas las partes involucradas una seguridad jurídica, garantizando que los acuerdos alcanzados serán tanto respetados como ejecutados ya que los contratos reducen los conflictos económicos al establecer un protocolo claro para la resolución de disputas.

El liberalismo, la propiedad privada y los derechos contractuales

El pensamiento liberal en economía y la escuela austriaca ofrecen perspectivas particulares sobre cuestiones como el liberalismo, la propiedad privada y los derechos contractuales. Aunque estos dos enfoques comparten ciertos principios fundamentales, también tienen sus propias singularidades. A continuación, se presenta un análisis detallado de las posturas de los pensadores y economistas liberales y de la escuela austriaca respecto a estos temas.

John Locke es uno de los pensadores más influyentes en la concepción moderna de la propiedad privada y los derechos contractuales, donde sienta las bases filosóficas del liberalismo político y económico.

Locke considera que la propiedad privada es un derecho natural que emana del esfuerzo humano aplicado a los recursos naturales. En su famosa teoría del “trabajo-mezclado-con-recursos”, Locke argumenta que, cuando una persona mezcla su trabajo con algo de la naturaleza, ese objeto se convierte en su propiedad legítima (Locke, 1689).

Para Locke también era importante el papel del Estado en la protección de la propiedad. Según Locke, una de las principales razones para la existencia del Gobierno es la protección de la propiedad privada. Antes de la formación del Gobierno, en el “estado de naturaleza”, los individuos eran los encargados de proteger su propia propiedad. Sin embargo, en una sociedad organizada, la protección de la propiedad se delega en el Estado (Locke, 1689).

En la filosofía *lockeana*, los derechos contractuales son una extensión lógica de la propiedad privada. Un contrato es un acuerdo voluntario entre partes libres, y cada parte tiene el derecho de intercambiar lo que legítimamente posee. Para Locke, la “inviolabilidad del contrato” es un principio fundamental que permite la cooperación social y el comercio (Locke, 1689).

Pero eso es posible cuando existe un estado de derecho y una justicia contractual. Locke subraya la necesidad de un estado de derecho para hacer cumplir los contratos y resolver disputas. Para él, un gobierno justo es aquel que opera bajo leyes conocidas y establecidas, y que se aplica imparcialmente para proteger los derechos de propiedad y contractuales (Locke, 1689).

Adam Smith abordó la propiedad privada como un pilar fundamental del capitalismo y el desarrollo económico. Según él, la propiedad privada está intrínsecamente ligada a la libertad individual y es esencial para incentivar la producción económica. Al asegurar que los individuos tienen derechos exclusivos sobre sus bienes y recursos, se fomenta una eficiente asignación de estos recursos (Smith, 1776).

Adam Smith consideraba la propiedad privada como una institución central para el funcionamiento eficiente de una economía de mercado. Según Smith, no es sólo un derecho legal, sino también una manifestación de la libertad individual. Aquí, el acto de poseer, usar y controlar la propiedad es visto como una extensión de la autonomía personal (Smith, 1776; Fleischacker, 2004).

Uno de los argumentos más persuasivos que Smith ofrece a favor de la propiedad privada es que actúa como un fuerte incentivo para la inversión y la innovación. Smith afirma que los individuos están más inclinados a invertir tiempo, esfuerzo y recursos en una propiedad que les pertenece porque pueden disfrutar de los beneficios y rendimientos de tal inversión (Smith, 1776; Kennedy, 2005). Este incentivo, a su vez, fomenta la innovación, ya que los propietarios buscan constantemente formas de mejorar sus activos para obtener un mayor retorno.

Smith también conecta la propiedad privada con la eficiencia económica. Sostiene que, cuando las personas son dueñas de sus recursos, tienen un interés personal en administrarlos de manera eficiente para

maximizar sus beneficios (Smith, 1776; West, 1990). Este interés personal en la eficiencia contribuye al bienestar económico general, ya que los recursos se asignan y utilizan de manera más efectiva.

Además, Smith subraya que una clara demarcación y reconocimiento de la propiedad privada reducen el potencial para conflictos económicos y sociales. Cuando los derechos de propiedad están claramente establecidos y protegidos por un sistema legal robusto, disminuyen las posibilidades de disputas sobre la titularidad de bienes y recursos (Smith, 1776; Buchanan, 1979). Esto crea un entorno más estable, lo que es beneficioso para el desarrollo económico a largo plazo.

Smith también reconoce el papel del Estado en la protección de la propiedad privada. Argumenta que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar la seguridad de la propiedad privada a través de leyes y regulaciones efectivas (Smith, 1776; Evensky, 2005). El Estado debe ser un árbitro imparcial que resuelve disputas y asegura que los derechos de propiedad se respeten, lo que a su vez fomenta un clima de inversión y desarrollo económico.

Según Hayek, la propiedad privada y los derechos contractuales son cruciales para coordinar de manera eficiente la información dispersa en la sociedad y para el funcionamiento del sistema de precios (Hayek, 1944; Caldwell, 2004).

Hayek argumenta que la propiedad privada actúa como un mecanismo que ayuda a comunicar información. En una economía compleja, la información está dispersa y no puede ser centralizada. La propiedad privada permite a los individuos actuar en función de su conocimiento local y adaptarse a las circunstancias cambiantes (Hayek, 1945; Boettke, 2018).

Sobre aspectos de incentivos y eficiencia, similar a otros teóricos liberales, Hayek considera que la propiedad privada brinda incentivos para la utilización eficiente de recursos. Los propietarios, al tener intereses personales en el valor de su propiedad, están motivados para maximizar su utilidad. Este comportamiento autointeresado en el agregado conduce a una asignación eficiente de recursos en la economía (Hayek, 1960; Ebenstein, 2001).

En cuanto a los derechos contractuales, Hayek los considera una extensión natural de la propiedad privada. Los contratos permiten a las personas intercambiar bienes, servicios y promesas de forma segura y predecible. Según Hayek, los contratos son indispensables para la coordinación social y el orden espontáneo en una economía de mercado (Hayek, 1973; Gray, 1984).

Hayek enfatiza fuertemente la necesidad del imperio de la ley para garantizar tanto la propiedad privada como los derechos contractuales. Sin un marco legal sólido y predecible, los individuos no tendrían la seguridad de que sus derechos serán respetados, lo que disuadiría la inversión y el intercambio (Hayek, 1944; Hamowy, 2005).

Henry Hazlitt, por su parte, fue un ferviente defensor del libre mercado y la propiedad privada. Para Hazlitt, la propiedad privada es la piedra angular de la libertad económica. Sin ella, argumenta, no hay incentivos para la inversión, la innovación ni el mejoramiento personal (Hazlitt, 1946). Siguiendo a pensadores como Locke y Smith, Hazlitt sugiere que la propiedad privada es un derecho natural que precede al Gobierno y al derecho formal (Hazlitt, 1979).

En cuanto al papel que juega la propiedad en la asignación de recursos, Hazlitt subrayaba que, en un sistema basado en la propiedad privada, la asignación de recursos se realiza a través del sistema de precios. Cuando los individuos tienen el derecho de poseer y controlar propiedades, se genera un sistema de precios eficiente que transmite información sobre las preferencias de los consumidores y la escasez de recursos (Hazlitt, 1978).

Hazlitt también escribió sobre los derechos contractuales, para él, son una extensión lógica de la propiedad privada. Los contratos voluntarios entre partes permiten el intercambio eficiente de bienes y servicios. Hazlitt valora el contrato como un dispositivo que solidifica la confianza y minimiza los conflictos (Hazlitt, 1972).

Al igual que otros economistas liberales, Hazlitt insiste en que tanto la propiedad privada como los derechos contractuales necesitan un sistema de derecho fuerte y justo para su protección. Sin un marco legal sólido, estos fundamentos de la economía de mercado son susceptibles a la violación y al abuso (Hazlitt, 1964).

Ludwig von Mises, otro de los economistas más destacados de la escuela austríaca de economía, ha ofrecido contribuciones significativas al entendimiento de la propiedad privada y los derechos contractuales dentro de una economía de mercado.

Para Von Mises, la propiedad privada es el fundamento de la economía de mercado y, por extensión, del orden social. Argumenta que, sin propiedad privada, no podría haber un “cálculo económico” racional porque los precios, que son indicadores de las preferencias y escasez, sólo pueden surgir en un sistema donde los bienes y recursos son propiedad de individuos (Von Mises, 1949). El concepto de “cálculo económico” ofrece una comprensión profunda de la complejidad y eficiencia inherentes a una economía de mercado basada en la propiedad privada. Von Mises argumenta persuasivamente que, sin un sistema de precios operativo, el cálculo económico sería imposible, lo que llevaría a una asignación ineficiente y caótica de recursos. Este análisis demuestra la importancia central del cálculo económico en la teoría económica de Von Mises y su relevancia para el debate contemporáneo sobre sistemas económicos.

Von Mises también señala que la propiedad privada facilita la cooperación social al permitir el intercambio voluntario entre individuos. A través del mercado, los individuos pueden coordinar sus actividades de manera descentralizada, lo que da lugar a un orden espontáneo más eficiente que cualquier forma de planificación centralizada (Von Mises, 1949).

Respecto a los derechos contractuales, para Von Mises son cruciales para el funcionamiento eficiente del sistema de mercado. Los contratos son la forma mediante la cual se formalizan los acuerdos entre partes, garantizando que los intercambios sean predecibles y se realicen de manera justa. Esto es especialmente vital en una economía compleja donde la propiedad de bienes y servicios a menudo cambia de manos múltiples veces (Von Mises, 1949).

En cuanto al estado de derecho, para Von Mises, el Estado tiene el papel crucial de garantizar que los derechos de propiedad y contractuales sean respetados. Sin embargo, también advierte contra el exceso de intervención estatal, argumentando que esto puede llevar

a distorsiones en el mercado y a limitar la libertad individual (Von Mises, 1949).

El capitalismo popular, la propiedad privada y los derechos contractuales

El capitalismo popular, entendido como un sistema económico que promueve una amplia distribución de la propiedad privada y los derechos contractuales entre la población, desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico. Este modelo, que recoge influencias tanto de pensadores clásicos como de modernos teóricos económicos, incluidos Hernando de Soto, se centra en cómo una robusta institucionalización de la propiedad y los contratos puede generar una economía más inclusiva y dinámica.

Hernando de Soto, economista peruano, es un defensor clave de la importancia de la propiedad privada en el desarrollo económico. Su libro más famoso, *El misterio del capital: por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo* (2000), articula su enfoque que ha influido significativamente en las políticas de desarrollo económico en todo el mundo.

De Soto argumenta que, en países en desarrollo, una gran cantidad de riqueza está atrapada en “capital muerto”: bienes inmuebles y activos no formalizados que no se pueden utilizar para generar más capital (De Soto, 2000). Este capital podría convertirse en “capital vivo” si se formaliza a través de sistemas de propiedad claros y legalmente protegidos, permitiendo que estos activos se utilicen como garantía para préstamos o como parte de transacciones económicas formales.

El término ‘capital muerto’ se refiere a activos como casas, tierras o pequeños negocios, que carecen de los títulos legales que los formalicen, y entonces, aunque existentes y muchas veces abundantes, no están formalmente reconocidos por las leyes de propiedad y, por lo tanto, quedan fuera del sistema formal de economía (De Soto, 2000).

Sin un reconocimiento legal de la propiedad, estos activos no pueden ser utilizados para obtener créditos, hacer inversiones a largo plazo o ser transferidos de manera segura y eficaz. En resumen,

estos activos, aunque existentes, son inutilizables como una forma de “capital vivo” que pueda generar más riqueza, crecimiento o inversión en la economía formal. Están, en términos de De Soto, “muertos” porque no pueden desempeñar las funciones económicas que podrían desempeñar si estuvieran “vivos” o formalizados (De Soto, 2000).

El capital se convierte en vivo cuando es formalizado. Este proceso permite que los propietarios utilicen sus activos como garantía para préstamos, como capital para inversiones o como una base para la generación de ingresos adicionales. Esta transformación tiene un efecto multiplicador en la economía, desbloqueando oportunidades económicas que estaban previamente inaccesibles.

El concepto de capital muerto también tiene implicaciones profundas para las políticas de desarrollo. Según De Soto, la formalización de estos activos podría liberar trillones de dólares en capital previamente muerto, teniendo el potencial de elevar a millones de personas fuera de la pobreza y hacia una economía de mercado más inclusiva y sostenible (De Soto, 2000).

Uno de los beneficios más significativos de formalizar la propiedad es el acceso mejorado al crédito. Según De Soto, sin un título de propiedad legalmente reconocido, los individuos en países en desarrollo a menudo encuentran imposible acceder a financiamiento para iniciar o expandir negocios (De Soto, 2000). La formalización de la propiedad actúa como un catalizador para el emprendimiento al hacer que el financiamiento sea más accesible.

Además de mejorar el acceso al crédito, la formalización de activos y propiedades también puede impulsar la transición de la economía informal a la formal (De Soto, 2000). Esto no sólo abre oportunidades para el desarrollo empresarial, sino que también mejora la recaudación de impuestos y contribuye a sistemas legales más fuertes y transparentes.

Claramente el capital vivo es una palanca poderosa para el desarrollo económico. Actúa como un multiplicador de riqueza y un facilitador de diversos factores críticos que contribuyen al bienestar económico, desde la eficiencia en la asignación de recursos hasta

la estimulación de la innovación. En este sentido, la conversión del capital muerto en capital vivo podría ser una de las estrategias más efectivas para el desarrollo económico sostenible.

8. La educación y la formación de capital humano

La calidad de la educación, la libertad para buscar conocimiento y la formación de capital humano son pilares fundamentales para preparar una fuerza laboral que pueda satisfacer las demandas del mercado laboral moderno. Estos factores impactan tanto en la calidad de la fuerza laboral como en la capacidad de un país para innovar, competir y adaptarse a los cambios en la economía global.

El incremento de la productividad y la eficiencia son producto de una fuerza laboral educada. La educación provee las habilidades técnicas y cognitivas necesarias para desempeñar trabajos especializados que, en muchos casos, generan mayor valor añadido a la economía. Los avances en ciencia y tecnología, que son motores esenciales para el crecimiento económico, son más factibles en entornos donde hay un alto nivel de conocimiento y habilidades especializadas. Está demostrado que la educación superior y la investigación y desarrollo se correlacionan fuertemente con niveles más altos de innovación.

Adicionalmente, la educación es una herramienta poderosa para la movilidad social. Provee a las personas las habilidades y el conocimiento necesarios para acceder a mejores oportunidades laborales y, por lo tanto, a un mejor nivel de vida. Esto es especialmente importante en sociedades con grandes desigualdades económicas.

Eso también repercute en lo político y la responsabilidad social. Una población educada es más propensa a participar en procesos democráticos, a respetar al prójimo, a reaccionar a los abusos y a tener un entendimiento más profundo de sus derechos y responsabilidades en la sociedad. Esto favorece el desarrollo de instituciones más fuertes y transparentes, las cuales son esenciales para el desarrollo económico y social de un país.

El liberalismo, la educación y la formación del capital humano

El desarrollo económico de una nación no se determina únicamente por su riqueza en recursos naturales o capital financiero, sino también por la calidad de su capital humano, que incluye habilidades, conocimientos y capacidad para la innovación. Diversos filósofos y economistas liberales han destacado la relevancia de la educación en la formación de capital humano, y cómo esta se entrelaza con la libertad individual para fomentar un desarrollo económico sostenible.

Adam Smith abrió un nuevo camino al enfocar su atención en la especialización laboral, que consideraba esencial para el aumento de la productividad. En un entorno donde cada trabajador se centra en una tarea específica, se logran mayores niveles de eficiencia y se genera más riqueza. Sin embargo, Smith también era consciente de los peligros potenciales de la especialización extrema. Argumentaba que dedicarse a una única y monótona tarea durante toda la vida podría llevar a los trabajadores a una forma de “estupidez mental” o alienación, deteriorando así su capital humano (Smith, 1776).

Adam Smith decía que era importante, con un buen sistema de educación pública, impartir enseñanzas adicionales para evitar los efectos negativos que la excesiva división del trabajo podía producir en las clases pobres. Esto también tendría la función positiva de elevar la inteligencia media e infundir “esas costumbres ordenadas que eran la base del progreso económico y del buen gobierno civil” (Ratinoff, 1967). Además, consideraba que un pueblo educado es más difícil de oprimir y explotar. Smith creía que, en una sociedad civilizada, el Gobierno debería asumir ciertas responsabilidades para instruir a la población, particularmente en lectura, escritura y aritmética básica.

Para Smith era muy evidente que los conocimientos y habilidades adquiridos por las personas contribuían a su capacidad para generar ingresos, de una manera similar a como las máquinas y las herramientas contribuyen a la producción. Por eso podemos decir que Smith consideraba la educación como una forma de inversión en capital humano.

Para los economistas de la escuela austriaca en lo referente a la educación y el capital humano, el énfasis principal está en limitar el

papel del Estado y permitir la libertad individual en la elección educativa. Mises, Rothbard y Hayek coinciden en que un sistema educativo eficiente es más probable que emerja de un sistema de libre mercado que de un sistema centralizado y controlado por el Gobierno.

Mises argumenta que la educación en una sociedad socialista sería necesariamente estandarizada y controlada por el Estado, lo que socavaría la libertad intelectual. En general, Mises defendía un enfoque de mercado para la educación, donde la competencia entre instituciones educativas podría asegurar la calidad y eficiencia (Mises, 1922).

Rothbard tenía una opinión fuerte sobre la educación pública y su falta de eficacia. Para Rothbard, la educación debería ser una responsabilidad individual o familiar, y el Estado no debería tener un papel en ella. Él abogaba por un sistema educativo privado, descentralizado y competitivo que pueda adaptarse a las necesidades y capacidades de cada niño (Rothbard, 1972).

Hayek, por su parte, plantea que la educación es crucial para el mantenimiento de una sociedad libre, pero también muestra preocupación por el control estatal excesivo sobre la educación. Hayek defiende una separación entre la economía y el conocimiento, en la que cada individuo hace uso de su conocimiento local. Esta idea podría extenderse a su opinión sobre el capital humano, donde cada individuo, mediante su educación y experiencia, contribuye de forma única al bienestar general (Hayek, 1960).

Por su parte, Thomas Sowell ha contribuido de manera significativa a la discusión sobre educación y capital humano desde la perspectiva de la racionalidad económica. Sowell se ha enfocado en cómo las decisiones económicas en educación afectan no sólo a los individuos, sino también a las sociedades en general (Sowell, 2000 y 2015).

Sowell argumenta que las decisiones educativas deben tomarse en un contexto de “racionalidad económica”, lo que significa considerar los costos y beneficios tanto a corto como a largo plazo. No se trata simplemente de gastar más en educación, sino de gastar de manera efectiva para maximizar los rendimientos del capital humano. Es escéptico sobre la idea de que más gasto gubernamental en educación necesariamente derive en mejores resultados educativos. Para él, la

calidad de la educación, más que la cantidad de fondos gastados, es lo que realmente importa (Sowell, 2000 y 2009).

Además, Sowell pone en tela de juicio las políticas educativas que ignoran las diferencias individuales en talento y aptitud. Sostiene que la educación pública a menudo se convierte en una “talla única para todos”, lo cual es ineficiente desde una perspectiva económica. En lugar de eso, sugiere que un enfoque más adaptado a las capacidades y necesidades individuales no sólo es más eficiente sino también más equitativo (Sowell, 1993 y 2015).

Gary Becker es conocido por ser uno de los pioneros en el estudio del “capital humano”, un término que empleó para describir el conjunto de habilidades, conocimientos y capacidades adquiridas que hacen que las personas sean productivas y valiosas para la economía. Para Becker, la educación debe ser vista como una inversión en capital humano (Becker, 1964).

Becker argumentó que la educación eleva la productividad de los trabajadores al mejorar sus habilidades y capacidades, lo que a su vez lleva a mayores salarios y mejores oportunidades de empleo. Desde esta perspectiva, las personas toman decisiones racionales sobre su educación al sopesar los costos y beneficios. Los costos incluyen tanto los gastos directos como el “costo de oportunidad” de no trabajar mientras se estudia. Los beneficios incluyen las expectativas de mayores ingresos y otras formas de retorno a lo largo de la vida.

En términos de políticas públicas, Becker era en general escéptico acerca de la intervención gubernamental excesiva en la economía, pero reconocía que había un papel para el Estado en la provisión de educación. Sin embargo, defendía que las intervenciones debían diseñarse de manera que maximizaran la eficiencia y la efectividad, permitiendo que las personas tomaran decisiones informadas basadas en sus propias circunstancias individuales.

El capitalismo popular, la educación y la formación del capital humano

En un sistema de capitalismo popular, donde la propiedad y las oportunidades de inversión están ampliamente distribuidas entre

los ciudadanos, la educación y el desarrollo del capital humano son especialmente críticos. Este enfoque busca que el capitalismo no sea un juego exclusivo de una pequeña élite, sino que sea accesible para la mayoría de la población. En esta visión, el capital humano se convierte en un elemento esencial para empoderar a los individuos a participar de manera efectiva en la economía.

La educación básica en lectura, escritura y aritmética es crucial. Sin estas habilidades fundamentales, los individuos tendrán dificultades para participar incluso en las actividades económicas más básicas. Aquí podríamos mencionar a James Coleman, un sociólogo que en su trabajo aborda la relación entre la educación y la movilidad social, sugiriendo que una educación de calidad es crucial para romper el ciclo de la pobreza y permitir la participación económica (Coleman, 1966).

Además de habilidades básicas, la educación en un sistema de capitalismo popular debería inculcar habilidades empresariales. Esto no significa simplemente saber cómo iniciar un negocio, sino entender los fundamentos de la economía, la gestión de riesgos y la toma de decisiones informada.

Esas habilidades empresariales en el contexto de un sistema de capitalismo popular tienen una importancia crítica. En un ambiente donde la propiedad y la inversión son accesibles para un amplio segmento de la población, tener las competencias necesarias para gestionar efectivamente esos recursos se vuelve crucial. Estas habilidades no sólo abarcan la administración efectiva de un negocio, sino también una comprensión profunda de la economía de mercado, la valoración y mitigación de riesgos, y una toma de decisiones estratégica e informada.

Comprender los fundamentos de la economía de mercado es esencial para cualquier emprendedor. Esto implica entender cómo se determinan los precios, cómo funcionan la oferta y la demanda, y cómo se equilibran. También esto debe complementarse con la gestión de riesgos. Saber cómo evaluar y mitigar riesgos es crucial para cualquier empresario, complementándose con conocimientos para la toma de decisiones, estrategias y desarrollo de habilidades para estimular la innovación y la adaptabilidad en economías cambiantes.

Todo esto debe complementarse con una alfabetización financiera profunda y agresiva en la sociedad, ya que es una de las piedras angulares para la construcción de un capitalismo popular efectivo y sostenible. La idea esencial es que si un gran segmento de la población tiene la capacidad de entender conceptos financieros básicos, estará mejor equipado para tomar decisiones que resulten en una mejor gestión de los recursos y, por ende, en un desarrollo económico más saludable. Las personas con mayores niveles de alfabetización financiera tienden a planificar más para el retiro, a tener mayores niveles de riqueza y a participar más en el mercado financiero (Lusardi & Mitchell, 2014).

Para quienes buscan iniciar su propio negocio, la alfabetización financiera es doblemente crucial. No sólo se necesitan habilidades para administrar las finanzas personales, sino también para manejar los recursos de un negocio. La alfabetización financiera engloba el entendimiento de conceptos como el interés compuesto, la diversificación de carteras, la importancia de mantener un buen historial crediticio y la habilidad para interpretar estados financieros y presupuestos. Estos son conceptos que, a pesar de ser básicos, tienen un fuerte impacto en la salud financiera de los individuos y, en última instancia, en la economía en general.

9. Innovación y desarrollo tecnológico

La inversión en investigación y desarrollo, junto con un entorno propicio para la innovación, se ha convertido en un pilar esencial para impulsar la productividad y abrir nuevas oportunidades económicas en la era moderna. En este contexto, se destaca la importancia de la libertad individual como catalizador de la innovación y el desarrollo tecnológico. La innovación impulsada por la creatividad y la libre competencia florece en un entorno de libertad, donde las mentes pueden explorar ideas sin restricciones.

El liberalismo, la innovación y el desarrollo tecnológico

El liberalismo económico ha sido una fuerza impulsora fundamental en el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico. Los principios liberales, como el libre mercado, la propiedad privada y el estado de derecho, crean un ambiente fértil para la experimentación, la inversión y la aplicación de nuevas ideas.

Adam Smith, con su idea de la mano invisible, donde los individuos, al buscar su propio interés, contribuyen al bienestar económico general, establece que es una noción esencial para entender cómo los sistemas liberales fomentan la innovación. En un mercado libre, los emprendedores y las empresas buscan constantemente formas de superar a la competencia, lo que lleva a la innovación y el desarrollo tecnológico (Smith, 1776).

Ludwig von Mises utiliza un enfoque praxeológico para entender cómo los individuos toman decisiones racionales basadas en la información disponible. Este proceso de toma de decisiones es intrínseco a la innovación, ya que los actores económicos evalúan constantemente nuevas oportunidades y tecnologías (Mises, 1949). Dentro de un sistema de mercado, los individuos toman decisiones sobre la producción, el consumo, el intercambio y la acumulación de capital. Mises subraya que, en un entorno de mercado libre, los actores económicos evalúan constantemente nuevas oportunidades. Esta continua recalibración de estrategias y recursos es esencial para la innovación y el desarrollo económico.

Milton Friedman fue un firme defensor de la libertad económica como una condición esencial para la innovación y el desarrollo tecnológico. Su argumento se basa en la idea de que los mercados libres y la competencia son el mejor motor para la eficiencia, la creatividad y, en última instancia, el progreso. De acuerdo con Friedman, los mercados libres empoderan a los individuos al permitirles tomar decisiones sobre su propio bienestar, lo cual es fundamental para la innovación (Friedman & Friedman, 1980).

La competencia en mercados libres crea un ambiente en el que los individuos y las empresas están incentivados a innovar para

obtener una ventaja competitiva. Los precios en un mercado libre actúan como señales que dirigen los recursos hacia las áreas más productivas, optimizando así la asignación de recursos (Friedman, 1962). Esta eficiencia en la asignación de recursos es crucial para financiar y facilitar la investigación y el desarrollo, elementos clave de la innovación.

Friedman argumenta que la libertad económica es un prerrequisito para la libertad política y que los mercados libres ofrecen más oportunidades para la innovación que los sistemas más regulados. La interferencia gubernamental distorsiona los precios, desincentiva la toma de riesgos y, por lo tanto, inhibe la innovación y el progreso económico. Según Friedman, la libertad para entrar y salir de mercados y para experimentar es crucial para el desarrollo tecnológico (Friedman, 1962). Es decir, los emprendedores se desarrollan mejor en un ambiente como este, donde arriesgar no viene cargado de altos costos y riesgos.

Joseph Schumpeter, por su parte, introdujo el concepto de “destrucción creativa”. Según este concepto, la innovación económica resulta en la obsolescencia de las viejas tecnologías e industrias, pero al mismo tiempo da lugar a nuevas oportunidades y sectores. Esta continua renovación es una característica central del capitalismo y un impulsor de su capacidad para innovar (Schumpeter, 1942). Para Schumpeter, los empresarios son los protagonistas en este proceso de destrucción creativa. Los empresarios innovan no sólo al inventar nuevos productos, sino también al introducir nuevos métodos de producción, al abrir nuevos mercados o al reorganizar industrias completas. En su opinión, estos actos de innovación son los que perturban el equilibrio económico existente y desencadenan el proceso de destrucción creativa (Schumpeter, 1942).

Schumpeter argumenta que el capitalismo es el sistema económico más adecuado para fomentar la destrucción creativa, debido a las recompensas económicas que ofrece para la innovación. En un sistema capitalista, los empresarios tienen incentivos para correr riesgos y buscar formas innovadoras de superar a la competencia. Estos incentivos no están presentes de la misma manera en otros sistemas económicos como el socialismo, que, según Schumpeter, carecen

de la dinámica empresarial necesaria para impulsar la innovación (Schumpeter, 1942).

Si bien el concepto de destrucción creativa es ampliamente reconocido y celebrado como un motor de progreso económico, también ha sido objeto de críticas. Algunos argumentan que el proceso puede resultar en desempleo a corto plazo, desigualdades y otros costos sociales. Sin embargo, Schumpeter sostiene que, a largo plazo, los beneficios superan a los costos, ya que la destrucción creativa lleva a una economía más eficiente y a un nivel de vida más alto (Schumpeter, 1942).

El capitalismo popular, la innovación y el desarrollo tecnológico

En cualquier análisis económico de la innovación, los incentivos desempeñan un papel central. Dentro del contexto del capitalismo popular, un sistema en el que la propiedad y la riqueza están distribuidas de manera más equitativa entre la población, los incentivos económicos para la innovación son particularmente robustos y se pueden desglosar en varios componentes.

En un sistema de libre mercado, uno de los principales incentivos para la innovación es el potencial de beneficios económicos. Los emprendedores, científicos y empresas invierten tiempo y recursos en I+D (investigación y desarrollo) con la expectativa de un retorno de la inversión significativo. Milton Friedman dice que la posibilidad de ganancias en un entorno de libre mercado es una potente motivación para que las personas utilicen eficientemente los recursos y se involucren en actividades innovadoras (Friedman, 1962).

Otro incentivo importante viene de la necesidad de diferenciarse en un mercado competitivo. Las empresas, grandes o pequeñas, buscan constantemente una ventaja competitiva. Esto se hace aún más evidente en un entorno de capitalismo popular, donde la competencia es más intensa debido a la participación amplia de diversas entidades en el mercado.

Una de las virtudes más destacadas del capitalismo popular es la democratización del acceso al capital. A diferencia de un sistema donde el capital está concentrado en pocas manos, este modelo

permite a pequeños inversores y al público en general invertir en nuevas empresas y *startups*. Esto resulta en un acceso más fácil al capital para emprendedores, quienes a menudo son los pioneros de la innovación tecnológica.

En ese marco, el concepto de incentivos económicos para la innovación toma un giro aún más interesante cuando se examina a través del prisma de la “teoría de los dos factores”, propuesta por Louis Kelso y Patricia Hetter Kelso. Esta teoría argumenta que tanto el capital como el trabajo son fuentes legítimas de ingresos y, por lo tanto, el acceso a la propiedad del capital debería ser extendido a más personas (Kelso & Kelso, 1967).

En un sistema donde más personas tienen acceso a la propiedad del capital, como propone la teoría de los dos factores, los incentivos para la innovación pueden ser aún más fuertes. No sólo los emprendedores, sino también los empleados y los pequeños inversores tienen un interés directo en la innovación, ya que se benefician directamente del valor agregado que generan.

La teoría de los dos factores sugiere que la innovación no debe ser el dominio exclusivo de una élite económica, sino que puede ser democratizada. En un sistema donde los empleados son también propietarios parciales de la empresa, el incentivo para innovar y mejorar los procesos de trabajo podría ser intrínsecamente más fuerte.

10. Libre mercado y regulación eficiente

La relación entre el libre mercado y la intervención estatal es una de las dicotomías más discutidas y controversiales en el ámbito de la economía y la filosofía política liberal. La pregunta sobre qué papel debe desempeñar el Estado en la regulación de la actividad económica ha suscitado apasionados debates y generado una amplia gama de teorías y perspectivas. En el centro de esta discusión yace un complejo equilibrio entre dos imperativos: por un lado, el deseo de mantener mercados eficientes y competitivos que maximicen el bienestar general, y por otro, la necesidad de implementar mecanismos de regulación que corrijan supuestas fallas de mercado.

El concepto de “libre mercado” se basa en la idea de que los individuos deberían tener la libertad para producir, comprar y vender bienes y servicios sin la intervención del Estado. Los defensores argumentan que este sistema permite la asignación más eficiente de recursos, dado que es el resultado de millones de decisiones individuales tomadas por actores que buscan maximizar su utilidad o beneficio. Sin embargo, el libre mercado no es una panacea, tiene sus limitaciones y fallas, tales como la posibilidad de monopolios, la explotación laboral, la corrupción y los abusos de algunos de sus participantes.

Por otro lado, la regulación estatal busca corregir estas y otras deficiencias del mercado. Sin embargo, la intervención del Estado también puede tener efectos secundarios no deseados, como la distorsión de incentivos, la generación de ineficiencias y, en casos extremos, la asfixia de la iniciativa individual y empresarial. Adicionalmente, la capacidad del Estado para regular de manera efectiva es objeto de escrutinio, especialmente cuando se considera la complejidad y la rapidez con la que evoluciona la actividad económica en un mundo cada vez más globalizado e interconectado.

Por lo tanto, encontrar un equilibrio óptimo entre la libertad de mercado y la regulación estatal es una tarea compleja que implica considerar una multitud de factores, desde imperativos éticos y sociales hasta consideraciones prácticas relacionadas con la eficiencia económica y la viabilidad política. Es en este contexto dinámico y multifacético donde los pensadores liberales han hecho contribuciones significativas, aportando perspectivas que buscan reconciliar estos dos aspectos aparentemente contradictorios de la organización económica y social.

Liberalismo, libre mercado y regulación estatal

Adam Smith, aunque ferviente defensor del libre mercado, nunca abogó por un *laissez-faire* económico absoluto y admitía ciertas circunstancias en las cuales la intervención estatal sería justificable (Smith, 1776). Smith argumenta que hay situaciones excepcionales que requieren la regulación por parte del Estado para garantizar el funcionamiento eficiente y equitativo del mercado. Estas intervenciones

se conciben hoy en día como soluciones a las supuestas “fallas del mercado”. Sin embargo, el alcance y la forma de dicha intervención son temas de continuo debate dentro de la corriente liberal.

Una de las áreas en las que Smith aboga por la intervención estatal es en la provisión de bienes públicos como la defensa nacional, la infraestructura pública y la justicia (Smith, 1776), por ejemplo. Estos bienes son inherentemente no excluyentes y no rivales, lo que significa que el mercado por sí solo tendría problemas para suministrarlos de manera eficiente. En estos casos, Smith argumenta que la intervención estatal es no sólo deseable sino necesaria.

Smith también critica fuertemente los monopolios y las prácticas monopólicas que son perjudiciales para el bienestar general (Smith, 1776). Los monopolios pueden fijar precios más altos y ofrecer productos o servicios de menor calidad, lo cual es contrario a los principios de eficiencia del mercado. En tales circunstancias, él considera que la intervención del Estado podría ser necesaria para restablecer un ambiente competitivo, lo que va en beneficio de los consumidores en términos de precio y calidad.

Aunque el término “información asimétrica” es un desarrollo más moderno, Smith también reconoció que ciertos mercados podrían funcionar de manera ineficiente si una de las partes tenía una ventaja de información significativa sobre la otra. Esto puede llevar a una distribución ineficiente de los recursos, razón por la que Smith consideraría justificable una intervención estatal para nivelar el campo de juego.

Smith también observó que en el ámbito financiero podría haber necesidad de regulación estatal para prevenir imprudencias que podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero en su conjunto (Smith, 1776). Ejemplos de estas intervenciones podrían ser los requisitos mínimos de capital o las normas de liquidez que hoy se exigen a las entidades financieras.

Friedrich Hayek fue un firme defensor del sistema de mercado, pero su posición sobre la regulación estatal es más matizada de lo que a menudo se entiende. Hayek es conocido por su concepto del “orden espontáneo”, que sostiene que los sistemas económicos complejos se desarrollan de manera natural y eficiente sin la intervención centralizada. Uno de sus argumentos más famosos es el “problema

del conocimiento en la sociedad” (Hayek, 1945). Según Hayek, la información en una economía está demasiado dispersa y es demasiado compleja para que un ente central la maneje eficientemente. Esto forma la base de su argumento en contra de la planificación centralizada y a favor de los mercados libres.

No obstante, aunque Hayek era un firme defensor del libre mercado, no era un anarquista. En su obras y escritos nos ha dejado mucha evidencia donde argumenta a favor de un “estado de derecho” sólido que establece las reglas básicas del juego (Hayek, 1944). Esta es una forma de regulación, pero es una que se aplica por igual a todos y que se destina a garantizar que los mercados funcionen de manera justa y eficiente.

Entonces, aunque Hayek era escéptico sobre la intervención estatal en los mercados, no la descartaba por completo. Reconocía que podrían existir casos excepcionales, como externalidades negativas⁷ y bienes públicos, en los que la intervención estatal podría justificarse. Sin embargo, advertía contra la tendencia a usar estos casos excepcionales para justificar una intervención más amplia y sistemática en la economía.

Al igual que Hayek, Ludwig von Mises era un defensor apasionado de los mercados libres, y no descartaba por completo un papel para el Estado. Sin embargo, insistía en que cualquier intervención estatal debía ajustarse a los principios del estado de derecho y limitarse a establecer y mantener un marco legal básico que permitiera el funcionamiento efectivo de una economía de mercado.

7 Las externalidades negativas son costos que afectan a una parte que no ha optado por incurrir en dicho costo. En otras palabras, son los efectos secundarios adversos de una actividad o decisión económica que impacta en terceros que no participaron directamente en la actividad o decisión. Ejemplos comunes de externalidades negativas incluyen la contaminación del agua y del aire, el ruido y la congestión del tráfico. Estas externalidades ocurren cuando los costos sociales de una actividad son más altos que los costos privados asumidos por el individuo o la empresa que realiza la actividad (Pigou, 1920). Arthur Cecil Pigou sugirió que el Gobierno podría corregir estas ineficiencias a través de impuestos o subsidios, una idea que más tarde se conocería como “impuestos pigouvianos”, en su honor.

En contraposición al anarquismo de mercado, Mises argumentaba que un conjunto mínimo de leyes y reglamentos era esencial para la operación efectiva de una economía de mercado. Este marco legal tendría como objetivo principal la protección de la propiedad privada y la implementación de contratos, elementos fundamentales para cualquier sistema de mercado.

Para Mises, el Estado debe servir como un “árbitro imparcial” que asegure que las transacciones de mercado se lleven a cabo sin coerción (Mises, 1927). Es decir, de ser así, el Estado cumple una función reguladora, pero lo hace de manera que favorece la libertad individual y la eficiencia del mercado.

Mises también destacaba la importancia del estado de derecho como un sistema en el cual las leyes son claras, públicas, estables y justas, y se aplican de manera igualitaria. En este contexto, la “regla de la ley” se contrapone a la “regla del hombre”, donde las decisiones se toman de manera arbitraria o discrecional (Mises, 1949).

El estado de derecho crea un ambiente en el que los agentes económicos pueden hacer planes a largo plazo, firmar contratos y participar en actividades de intercambio con la seguridad de que sus derechos de propiedad y libertades contractuales serán respetados. En este sentido, el estado de derecho sirve como el pilar sobre el que se construye una economía de mercado eficiente.

Contrariamente, en los sistemas en los que prevalece la “regla del hombre”, el poder estatal se ejerce de manera arbitraria y a menudo impredecible. Mises advirtió que esto es especialmente cierto en sistemas socialistas o comunistas, donde el Gobierno tiene un control casi total sobre la economía. En tales sistemas, los funcionarios del Estado tienen una gran discreción para tomar decisiones económicas, lo que lleva a ineficiencias y violaciones de la libertad individual.

Milton Friedman, otro ardiente defensor de los mercados libres, también reconoció ciertas circunstancias en las que la intervención del Estado podría justificarse. Para Friedman, el libre mercado no sólo es un mecanismo económico eficiente, sino también una expresión de libertad individual.

Sin embargo, Friedman reconocía que hay casos en los que el mercado falla, como en la presencia de externalidades, bienes

públicos, monopolios naturales y la contaminación de la naturaleza, por ejemplo. En tales casos, argumentaba que la intervención del Estado podría ser necesaria para corregir estas deficiencias (Friedman & Friedman, 1980).

Friedman reconoce que las externalidades son una de las principales razones para la intervención gubernamental en los mercados. Por ejemplo, en casos de contaminación, el mercado por sí solo no puede internalizar el costo social, y aquí es donde el Gobierno podría intervenir para asegurar que los costos sean asumidos por quienes los generan. Friedman discute este concepto, sugiriendo que impuestos o regulaciones podrían ser necesarios para abordar este tipo de externalidades (Friedman & Friedman, 1980).

Otro caso donde Friedman ve una justificación para la intervención del Estado es en la provisión de bienes públicos. Estos son bienes que son no excluyentes y no rivales, como la defensa nacional.⁸ En su visión, dado que el mercado no puede proveer eficientemente estos bienes, el Estado tiene un rol legítimo en su provisión.

Friedman también acepta la intervención del Estado en casos de monopolios naturales, donde la competencia es ineficiente o prácticamente imposible debido a las economías de escala. Aunque prefiere soluciones de mercado siempre que sea posible, reconoce que hay

8 El concepto de bienes públicos como “no excluyentes” y “no rivales” es una contribución importante de la economía del bienestar y está estrechamente asociado con el economista Paul A. Samuelson, quien estableció las bases teóricas para entender cómo los bienes públicos se diferencian de los bienes privados. Samuelson introdujo el concepto para explicar por qué ciertos bienes y servicios no pueden ser proveídos de manera eficiente a través de mecanismos de mercado y, por tanto, necesitan alguna forma de intervención pública. La noción de bienes que son no excluyentes se refiere a bienes para los cuales es costoso o imposible evitar que personas que no han pagado por ellos tengan acceso a los beneficios que proporcionan. Por otro lado, no rivales significa que el consumo del bien por una persona no disminuye la cantidad disponible para el consumo de otros. Esto significa que una persona no puede ser excluida de usar el bien, y el uso del bien por una persona no reduce su disponibilidad para otros. Ejemplos clásicos incluyen la defensa nacional, la iluminación pública y el aire limpio. Dado que los productores privados no tienen un incentivo claro para proporcionar estos bienes, la provisión a menudo recae en el Estado.

casos en los que la regulación gubernamental podría ser la menos mala de las opciones disponibles.

El mito del capitalismo salvaje

El término “capitalismo salvaje” a menudo se utiliza de manera crítica para ilustrar una versión de capitalismo sin controles éticos, sociales o medioambientales. En este modelo, descrito por críticos como Noam Chomsky, predomina la ley del más fuerte, permitiendo que los más ricos y poderosos exploten a los más vulnerables sin consecuencias legales. Este paradigma se asocia a menudo con desigualdades extremas, explotación laboral y degradación del medio ambiente (Chomsky, 2002).

Es esencial, sin embargo, distinguir este concepto del pensamiento liberal que valora la libertad individual, los derechos de propiedad y el estado de derecho. Contrario a la noción de un capitalismo desregulado, los liberales clásicos no respaldan un sistema económico desprovisto de cualquier forma de regulación ética o legal.

De hecho, el liberalismo admite ciertos niveles de intervención estatal en la economía, siempre y cuando se busque un campo de juego nivelado y se protejan los derechos y las libertades individuales para el buen funcionamiento del sistema.

La ética, la moral y una regulación adecuada son vistas por muchos liberales como componentes esenciales para asegurar que el sistema capitalista funcione de manera justa y equitativa. Pensadores liberales como Adam Smith y John Locke han enfatizado la importancia de la ética en el capitalismo. Smith subrayó la relevancia de la mano invisible, pero también destacó la necesidad de una moralidad en la actividad económica (Smith, 1776).

Aunque los mercados libres son un pilar del liberalismo, esto no significa respaldar la conducta deshonesto. Locke, por ejemplo, sostenía que aquellos que actúan en interés propio de manera corrupta violan los derechos fundamentales de otros y, por lo tanto, su conducta es ilegítima (Locke, 1689).

En última instancia, como señala, un pilar fundamental del liberalismo es el imperio de la ley (Nozick, 1974). En un estado liberal,

todas las personas, incluidos los gobernantes, están sujetas a la ley, y un marco legal transparente y justo previene la manifestación de un “capitalismo salvaje”. De hecho, el capitalismo, para ser sostenible y ético, debe estar alineado con los principios liberales clásicos.

Capitalismo popular, libre mercado y regulación estatal

El capitalismo popular sugiere que una mayor inclusión de individuos en la propiedad de activos como acciones, bienes raíces y empresas puede resultar en un sistema económico más robusto para todos. Entonces, ampliar la base de la propiedad para incluir a la mayor cantidad posible de personas en el sistema capitalista, el libre mercado y la regulación estatal mínima emergen como dos componentes cruciales para el funcionamiento efectivo del capitalismo popular.

En el núcleo del capitalismo popular se encuentra el concepto del libre mercado. Este sistema, en el que las fuerzas de la oferta y la demanda operan con mínima interferencia gubernamental, se considera el mecanismo más eficiente para la asignación de recursos. Las normas del libre mercado fomentan la competencia, lo que a su vez cataliza la innovación y el emprendimiento. La competencia y la innovación no sólo impulsan la eficiencia económica, sino que también proporcionan un entorno en el que nuevas entidades pueden entrar al mercado, contribuyendo así a una distribución más equilibrada de la riqueza.

Aunque el capitalismo popular favorece un enfoque de mercado con mínima intervención estatal, también se reconoce que ciertas condiciones requieren un grado de regulación para asegurar un funcionamiento óptimo del sistema. Estos casos incluyen externalidades negativas como la contaminación ambiental, bienes públicos como infraestructura y defensa, y monopolios naturales en sectores como los servicios públicos. En estos contextos, una intervención estatal limitada se convierte en un elemento esencial para mantener el funcionamiento eficiente y competitivo del mercado.

En el capitalismo popular, se necesita un equilibrio cuidadoso entre la eficiencia del mercado y la intervención gubernamental limitada. Un exceso de regulación podría disuadir la inversión y obstaculizar

la innovación, lo que podría debilitar el sistema económico que el modelo busca fortalecer. Por otro lado, la falta de alguna forma de regulación puede dar lugar a desequilibrios económicos, abusos de poder y concentración de riqueza, lo que contradice el objetivo de ampliar la base de propiedad y participación económica en el sistema.

11. Protección del medio ambiente y gestión sostenible de los recursos naturales

La protección del medio ambiente y la gestión sostenible de recursos naturales es un componente esencial para el desarrollo a largo plazo de las naciones. Garantizar que estos recursos estén disponibles para las generaciones futuras sin comprometer la capacidad del medio ambiente es una preocupación fundamental.

Los recursos naturales son una forma de “capital natural” que, si se maneja bien, puede generar un flujo constante de ingresos y bienestar para una nación. Según el Informe del Banco Mundial, *El patrimonio y la riqueza de las naciones*, el capital natural puede representar una parte significativa de la riqueza total de un país. Desaprovechar este capital mediante una explotación no sostenible, dañando el medio ambiente, puede llevar a una disminución en el valor total de la riqueza de una nación. Por lo tanto, proteger los recursos naturales y gestionarlos de manera sostenible es crucial para garantizar beneficios a largo plazo.

El liberalismo, la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales

El tema del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales ha sido una preocupación creciente en las últimas décadas, impulsando una revisión de diversas escuelas de pensamiento económico para abordar estos desafíos. En este contexto, resulta especialmente interesante examinar las intersecciones y diferencias entre el pensamiento liberal. Aunque a lo largo del tiempo los pensadores liberales tienen

su origen y evolución particular, y aunque los temas medioambientales y los recursos humanos no eran temas de discusión en los siglos pasados, todos comparten ciertas premisas básicas sobre el funcionamiento de los mercados y la naturaleza de la acción humana, lo que permite una discusión enriquecedora en el contexto del medio ambiente y los recursos naturales.

El pensamiento liberal clásico, representado por figuras como Adam Smith y John Stuart Mill, establece un marco inicial donde los derechos de propiedad y la libertad de mercado son fundamentales. Mill, por ejemplo, introdujo la idea del “estado estacionario”, un escenario donde la economía alcanza un nivel de estabilidad y sostenibilidad, poniendo de relieve que el crecimiento perpetuo no es ni factible ni deseable en un mundo de recursos finitos (Mill, 1848).

En un estado estacionario, según Mill, la economía alcanza un nivel de estabilidad donde ya no hay crecimiento neto en la producción o la acumulación de capital. Esto no significa que no haya actividad económica; más bien, significa que la actividad se mantiene a un nivel constante, sostenible a lo largo del tiempo. En otras palabras, en un estado estacionario, los recursos se extraen y utilizan a tasas que pueden ser sostenidas indefinidamente.

Mill argumentó que un estado estacionario podría ser incluso deseable desde un punto de vista social y ético. Según él, una vez alcanzado un cierto nivel de bienestar material, los esfuerzos para mejorar la calidad de vida deberían centrarse más en aspectos no materiales, como la educación, el arte y las relaciones sociales. Este enfoque se alinea con su filosofía utilitaria, que busca maximizar el bienestar general, no sólo la riqueza material.

Muchos economistas y ecologistas contemporáneos, como Herman Daly, han retomado la idea para argumentar que una economía de estado estacionario sería más sostenible a largo plazo dado que vivimos en un planeta con recursos finitos. En este tipo de economía, la tasa de extracción de recursos renovables no superaría la tasa a la que esos recursos se regeneran, y la tasa de emisión de residuos no superaría la capacidad del medio ambiente para asimilarlos.

La escuela austriaca de economía, por su parte, con figuras prominentes como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, es conocida por su

énfasis en el individualismo metodológico, la importancia del sistema de precios y la desconfianza hacia la intervención gubernamental en los mercados. Estas ideas también tienen implicaciones en su enfoque hacia el medio ambiente y la gestión de recursos naturales.

Para la escuela austriaca, el sistema de precios en un mercado libre actúa como un mecanismo de transmisión de información extremadamente eficiente. Cuando los recursos se vuelven escasos, sus precios tienden a aumentar. Este aumento de precio sirve como una señal para los consumidores y los productores: para los primeros, se convierte en un incentivo para reducir el consumo; para los segundos, en un incentivo para encontrar formas más eficientes de producción o alternativas más sostenibles. De este modo, la escuela austriaca ve el mercado como un regulador natural de la utilización de recursos.

Como Milton Friedman, los austriacos subrayan la importancia de derechos de propiedad claramente definidos como un medio para resolver o al menos mitigar problemas ambientales. La lógica aquí es que los propietarios tienen un incentivo para cuidar bien de sus propiedades, incluidos los recursos naturales, porque cualquier depreciación afectaría directamente su bienestar económico.

Uno de los puntos centrales de la escuela austriaca es su crítica a la intervención gubernamental en la economía, y esto se extiende a la gestión de recursos naturales. Los austriacos argumentan que los gobiernos carecen de información detallada y actualizada que los mercados pueden proporcionar a través del sistema de precios. Como resultado, las políticas de intervención estatal, como las regulaciones ambientales, a menudo son vistas como ineficientes o incluso contraproducentes.

Si bien los austriacos reconocen que pueden existir externalidades que el mercado por sí solo no puede resolver, a menudo sugieren enfoques como la extensión de derechos de propiedad o la resolución de disputas a través de tribunales como formas más eficientes de abordar estos problemas, en lugar de la regulación gubernamental.

Cabe señalar que, aunque la escuela austriaca ofrece una estructura coherente para pensar en la sostenibilidad y los recursos naturales, también ha sido criticada. Los críticos argumentan que su enfoque en el mercado libre y la propiedad privada no es suficiente

para abordar la magnitud y la complejidad de los desafíos ambientales globales, que a menudo requieren algún nivel de acción colectiva o intervención estatal.

Milton Friedman, aunque no perteneciente a la escuela austriaca, comparte ciertos principios liberales y tiene su propia interpretación de cómo abordar los problemas ambientales. Al igual que los austriacos, Friedman ve el mercado como un mecanismo eficiente para la asignación de recursos y sugiere que la propiedad privada puede incentivar la conservación. Sin embargo, también reconoce que hay casos en los que la intervención del Gobierno podría ser necesaria para corregir externalidades, como la contaminación.

Como Friedman argumentaba que la propiedad privada es un elemento crucial para la asignación eficiente de recursos, podríamos deducir que eso se extiende a los recursos naturales. Bajo este esquema, la propiedad privada incentiva a los individuos a conservar recursos para maximizar su valor a lo largo del tiempo (Friedman, 1962).

Aunque Friedman fue, en general, escéptico respecto a la intervención del Gobierno en la economía, reconoció que hay situaciones en las que la intervención podría ser necesaria para corregir fallas de mercado, como las externalidades negativas. Él decía que el Gobierno podría tener un papel en la regulación de externalidades como la contaminación (Friedman & Friedman 1980).

En línea con su enfoque basado en el mercado, Friedman sugirió que una forma de abordar externalidades como la contaminación podría ser a través de tasas y permisos de contaminación, en lugar de regulaciones estrictas. Estas ideas están en consonancia con su visión general de que el Gobierno debe interferir lo menos posible en la economía y permitir que las fuerzas del mercado operen con la máxima eficiencia.

Si bien las ideas de Friedman sobre el medio ambiente son coherentes con su enfoque liberal general, también han sido objeto de críticas. Los críticos argumentan que su enfoque basado en el mercado no es suficiente para abordar problemas ambientales a gran escala que requieren una acción colectiva más coordinada.

Es importante tener en cuenta que las perspectivas de Friedman sobre estos temas se basan en un conjunto de suposiciones y

principios que no todos comparten, especialmente en el contexto del cambio climático y la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, sus ideas ofrecen un marco dentro del cual se puede discutir la relación entre economía y medio ambiente, en particular el papel de los mercados y del Gobierno en la gestión de recursos naturales.

12. Conclusión

Este ensayo ha proporcionado un análisis exhaustivo y riguroso sobre el papel fundamental que desempeñan la libertad individual, el libre mercado y el capitalismo popular en la promoción de la innovación, la responsabilidad social y la prosperidad económica general. La investigación ha abordado conceptos y teorías clave extraídas tanto del pensamiento económico liberal clásico como de la escuela austriaca y otros. Se ha planteado una discusión crítica en torno a la estabilidad macroeconómica, la formalización y la diversificación económicas, subrayando cómo estos elementos son indispensables para un desarrollo sostenible y democrático.

Un aspecto crucial que se ha examinado con profundidad es la estructura tributaria, enfatizando la necesidad de que esta sea justa y eficiente para garantizar una distribución equitativa de la riqueza y el estímulo al crecimiento económico. Además, se ha señalado la importancia de una libertad individual bien definida y de un libre mercado bien regulado, fundamentos que contribuyen a un sistema financiero robusto. Este sistema, a su vez, debe contar con políticas fiscales responsables que eviten el endeudamiento excesivo y fomenten la inversión en áreas clave como la investigación y el desarrollo.

En cuanto a la política económica, se ha hecho hincapié en la importancia de la apertura comercial y la competitividad internacional, elementos que permiten el acceso a mercados más grandes y estimulan la eficiencia y la innovación. No obstante, se ha aclarado que este tipo de crecimiento debe ir acompañado de una gestión sostenible de los recursos naturales, para evitar el agotamiento de estos y los consecuentes efectos negativos sobre el medio ambiente.

El ensayo también ha subrayado la necesidad imperante de equilibrar el desarrollo económico con aspectos sociales y medioambientales. Se ha destacado que la libertad social y la participación ciudadana en la toma de decisiones no son meros complementos, sino que son componentes fundamentales para la realización de un modelo de desarrollo que sea integral, sustentable y democrático. Esta perspectiva multidimensional se presenta como crucial para garantizar un futuro que no sólo sea próspero desde el punto de vista económico, sino también socialmente aceptable y medioambientalmente sostenible.

En resumen, este ensayo ha aportado una visión detallada y matizada sobre cómo la combinación de la libertad individual, el libre mercado y el capitalismo popular, bajo un marco regulador y socialmente consciente de hombres libres, puede servir como un modelo robusto para el desarrollo económico que aspire a ser integral, sustentable y democrático. Este enfoque multidimensional es esencial para la construcción de una sociedad que garantice un bienestar duradero y para todas las personas.

Bibliografía

- Ayyagari, M.; Demirgüç-Kunt, A.; Maksimovic, V.
2011 Small vs. Young Firms across the World: Contribution to Employment, Job Creation, and Growth. *Policy Research Working Paper*; no. WPS 5631.
- Banco Mundial
2018 The Changing Wealth of Nations.
Banco Mundial
2021 *La riqueza cambiante de las naciones*.
- Becker, G. S.
1964 Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press.
- Boettke, P. J.
2018 *F. A. Hayek: Economía, economía política y filosofía social*. Palgrave Macmillan.

- Buchanan, J. M.
1979 *¿Qué deberían hacer los economistas?* Liberty Press.
- Caldwell, B.
2004 *Hayek's Challenge: An Intellectual Biography of F. A. Hayek.* University of Chicago Press.
- Chomsky, Noam
2002 "Beneficios sin responsabilidad".
- Coleman, J. S.
1966 *Equality of Educational Opportunity.* ED 012275, U.S. Department of Health, Education, and Welfare.
- Crafts, N. F. R.
1985 *British Economic Growth During the Industrial Revolution.* Oxford: Oxford University Press.
- Crafts, N. F. R.; Harley, C. K.
1992 Output Growth and the British Industrial Revolution: A Restatement of the Crafts-Harley View. *Economic History Review*, 45, 4.
- Domar, E. D.
1946 Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment. The Econometric Society.
- Dunn, J.
2023 "Capitalismo popular: Un llamado para una Bolivia de propietarios, no de proletarios". *Brújula Digital*, agosto. Web. <https://brujuladigital.net/opinion/capitalismo-popular-un-llamado-para-una-bolivia-de-propietarios-no-de-proletarios>
- Ebenstein, A.
2001 *Friedrich Hayek: A Biography.* University of Chicago Press.
- Evensky, J.
2005 *Adam Smith's Moral Philosophy: A Historical and Contemporary Perspective on Markets, Law, Ethics, and Culture.* Cambridge University Press.
- Fleischacker, S.
2004 *On Adam Smith's Wealth of Nations: A Philosophical Companion.* Princeton University Press.
- Frank, A. G.
1967 *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina.* Siglo Veintiuno Editores.

- Frank, A. G.
1978 *World Accumulation, 1492-1789*. Algora Publishing.
- Friedman, M.
1962 *Capitalismo y libertad*. Universidad de Chicago Press. Deusto (2002).
- Friedman, M.
1992 *Money Mischief: Episodes in Monetary History*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Friedman, M.; Friedman, R. D.
1980 *Libertad de elegir*. Ediciones Grijalbo.
- Gray, J.
1984 *Hayek on Liberty*. Routledge & Kegan Paul.
- Gwartney, J.; Lawson, R.; Hall, J.
2017 *Libertad económica del mundo: Informe anual 2017*. Fraser Institute.
- Hamowy, R. (Ed.).
2005 *The Political Sociology of Freedom: Adam Ferguson and F. A. Hayek*. Edward Elgar Publishing.
- Harley, C. K.
1982 British Industrialization before 1841: Evidence of Slower Growth during the Industrial Revolution. *Journal of Economic History*, 42, 2.
- Harrod, R. F.
1939 *An Essay in Dynamic Theory*. *The Economic Journal*. Blackwell Publishing for the Royal Economic Society.
- Hayek, F. A.
1944 *Camino de servidumbre*. Unión Editorial (2008).
- Hayek, F. A.
1945 “El uso del conocimiento en la sociedad”. Traducido del *American Economic Review* XXXV, no. 4.
- Hayek, F. A.
1960 *Los fundamentos de la libertad*. Alianza Editorial (2022).
- Hayek, F. A.
1973/1982 *Derecho, legislación y libertad: Una nueva formulación de los principios liberales de justicia y economía política*. Unión Editorial.

- Hayek, F. A.
1978 *La desnacionalización del dinero*.
- Hayek, F. A.
1988 *La fatal arrogancia: Los errores del socialismo*. Unión Editorial.
- Hazlitt, H.
1946 *Economía en una lección*. Madrid: Students for Liberty.
- Hazlitt, H.
1959 *Los errores de la Nueva Economía: Crítica a la teoría general de Keynes*. Unión Editorial (2021).
- Hazlitt, H.
1964 *Los fundamentos de la moral*. Editor digital: Leviatán (2014).
- Hazlitt, H.
1972 *The Foundations of Morality*. The Foundation for Economic Education.
- Hazlitt, H.
1978 *Cómo tener fuerza de voluntad*. Instituto Mises (2019).
- Kelso, L.; Adler, M.
1958 *El manifiesto capitalista*. Guillermo Kraft Ltda (1961).
- Kelso, L.; Kelso, P. H.
1967 *Two-Factor Theory: The Economics of Reality*. Vintage.
- Kennedy, G.
2005 *Adam Smith's Lost Legacy*. Palgrave Macmillan.
- Lane, R. W.
1943 *The Discovery of Freedom: Man's Struggle Against Authority*. The John Day Company.
- Locke, J.
1689 *Two Treatises of Government*. Awnsham Churchill.
- Lusardi, A.; Mitchell, O. S.
2014 "La importancia económica de la educación financiera: Teoría y evidencia". *Revista de literatura económica*, 52(1): 5-44.
- Maddison, A.
2001 *The World Economy: A Millennial Perspective*. Development Centre of The Organization for Economic Co-Operation and Development.

- Mill, J.S.
1848 *Principles of Political Economy*. Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/Cambridge (2004).
- Mises, L.
1922 *El socialismo: Un análisis económico y sociológico*. Universidad Francisco Marroquín. Unión Editorial (2007).
- Mises, L.
1927 *Liberalismo: La tradición clásica*. Unión Editorial (2011).
- Mises, L.
1949 *Acción humana: Un tratado sobre economía*. Unión editorial (2011).
- Nock, A. J.
1935 *Nuestro enemigo, el Estado*. Mises Hispano (2009).
- Nozick, R.
1974 *Anarchy, State and Utopia*. Blackwell Publishers Ltd.
- Paterson, I.
1943 “The God of the Machine”.
- Perry, G. E.; Maloney, W. F.; Arias, O. S.; Fajnzylber, P.; Mason, A. D.; Saavedra-Chanduvi, J.
2007 *Informalidad: Salida y exclusión*. Banco Mundial y Mayol Ediciones S.A.
- Pigou, A. C.
1920 “The Economics of Welfare”.
- Prebisch, R.
1950 *El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas*. Departamento de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas (CEPAL).
- Popper, K.
1945 La sociedad abierta y sus enemigos.
- Ratinoff, L.
1967 Educación y desarrollo en el pensamiento económico: Primeras fases del industrialismo. Estudios demográficos y urbanos. <https://doi.org/10.24201/edu.v11i02.1575>
- Romer, P.
1990 Endogenous Technological Change. *The Journal of Political Economy*, Vol. 98, No. 5.

- Rostow, W. W.
1960 *Las etapas del crecimiento económico: Un manifiesto no comunista*. México: Fondo de Cultura Económica. (1961).
- Rothbard, P.
1962 “Man, Economy, and State”.
- Rothbard, M. N.
1972 *Educación: Gratuita y obligatoria*. Instituto Mises. Creative Commons (2019).
- Rothbard, M. N.
1970 *Poder y mercado: Gobierno y economía*. Sheed Andrews and McMeel.
- Rothbard, M. N.
1974 *La gran depresión*. Iván Carrino (trad.). Instituto Mises/Unión Editorial (2000).
- Rothbard, M. N.
1983 *El misterio de la banca*. Instituto Ludwig von Mises (2008).
s. a.
- 2021 *Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para la Comunidad de Madrid 2020-2021*. Madrid: Comunidad de Madrid.
- Sachs, J. D.; Warner, A. M.
1995 *Abundancia de recursos naturales y crecimiento económico*. Centro para el Desarrollo Internacional, Universidad de Harvard.
- Samuelson, P. A.
1954 The Pure Theory of Public Expenditure. *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 36, No. 4.
- Sen, Amartya
1999 “Development as Freedom” (Desarrollo como libertad)
- Slemrod, J.; Bakija, J. M.
2017 *Taxing Ourselves: A Citizen’s Guide to the Debate over Taxes*. The MIT Press.
- Schumpeter, J. A.
1942 *Capitalismo, Socialismo y Democracia*. Editorial Orbis.
- Schumpeter, J. A.
1911 *La Teoría del Desarrollo Económico*. Editorial Porrúa.

- Smith, A.
1759 *Teoría de los sentimientos morales*. Madrid: Alianza editorial.
(1997).
- Smith, A.
1776 *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.
London: W. Strahan and T. Cadell.
- Soto, H. de
1986 *El otro sendero*. Lima: Instituto Libertad y Democracia.
- Soto, H. de
2000 *El misterio del capital. Por qué el capitalismo triunfa en Occidente
y fracasa en el resto del mundo*. Bantam Press/Random House.
- Sowell, T.
1993 *Inside American Education*. Free Press.
- Sowell, T.
1995/2004 *A Conflict of Visions: Ideological Origins of Political
Struggles*. Basic Books (2002).
- Sowell, T.
2000 *Basic Economics: A Citizen's Guide to the Economy*. Basic Books.
- Sowell, T.
2009 *Applied Economics: Thinking Beyond Stage On*. Basic Books.
- Sowell, T.
2011 *Economía básica: Un manual de economía escrito desde el sentido
común*. Titivillus (2018).
- Sowell, T.
2015 *Wealth, Poverty and Politics: An International Perspective*. Basic
Books.
- West, E. G.
1990 *Adam Smith and Modern Economics: From Market Behaviour to
Public Choice*. Edward Elgar.

